



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**  
**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

**LA CRISIS DEL SINDICALISMO OBRERO DE BOLIVIA ANTE LA  
REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA.**

CONSIDERACIONES ACERCA DEL MERCADO LABORAL DE EL ALTO Y SU  
CLASE OBRERA EN CLAVE AMPLIADA

**T E S I S**

PARA OBTENER EL GRADO DE  
MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

**P R E S E N T A**

BRUNO FELIPE DE SOUZA E MIRANDA

**Tutor:** Dr. Massimo Modonesi

**Sinodales:**

Dra. Fabiola Escárzaga Nichte

Dr. Adrián Sotelo Valencia

Dr. Lucio Oliver Costilla

Dr. Hugo José Suárez



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>Capítulo 1: Nociones ampliadas del trabajo en los umbrales del siglo XXI.....</b>	<b>8</b>
1.1. La dimensión ontológica y empírica del trabajo.....	8
1.2. Dónde ubicar la clase obrera y el trabajador productivo/improductivo.....	21
<b>Capítulo 2: Crisis del sindicalismo obrero altiplánico en Bolivia.....</b>	<b>31</b>
2.1. Dilemas históricos de la alianza sindical obrero-campesina.....	31
2.1.1. Primeras experiencias organizativas y sexenio 1946-52.....	31
2.1.2. Jornadas revolucionarias en el campo y la ciudad.....	37
2.1.3. Emergencia obrera y campesina: la Asamblea Popular.....	41
2.1.4. El katarismo-indianismo como respuesta del indio en la ciudad.....	44
2.1.5. Proceso de “apertura democrática”.....	48
2.1.6. La lucha de los gremiales (minoristas y artesanos).....	51
2.2. La reestructuración productiva decretada por el Estado.....	61
2.3. Aspectos organizativo-políticos de la crisis sindical obrera.....	69
2.4. Del proletariado contemporáneo en el altiplano boliviano.....	80
<b>Capítulo 3: El mundo del trabajo alteño.....</b>	<b>93</b>
3.1. La ciudad de El Alto: refugio laboral aymara.....	93
3.2. ¿Qué se entiende por sector informal?.....	103
3.3. El mercado laboral de El Alto.....	118
3.4. La Comuna Alteña de 2003 vista desde el mundo del trabajo.....	143
<b>Consideraciones finales.....</b>	<b>152</b>
<b>Listado de Cuadros, Gráficos, Figuras.....</b>	<b>163</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>164</b>
<b>Documentos.....</b>	<b>172</b>
<b>Entrevistas.....</b>	<b>172</b>

## Introducción

En el marco del altiplano Boliviano, región occidental del país que abarca ciudades como Potosí, Oruro, La Paz y El Alto, se puede afirmar que el aymara y quéchua de la ciudad tienen en común, además de la lógica comunitaria traída del campo, la condición de trabajador urbano precario. Lo anterior es fruto del ajuste estructural aplicado en el país a mediados de la década de los ochenta, que incluyó privatizaciones y flexibilización de las relaciones laborales, por las cuales el obrero, antes estable en minas y fábricas, ha sido en gran parte expulsado de su local de trabajo; y como consecuencia de esto se ha engrosado el contingente de trabajadores callejeros o asalariados inestables. Junto a ello, la combatividad histórica del sindicalismo obrero de Bolivia, en especial la Central Obrera Boliviana (COB), ha sufrido su más intenso impacto desde su fundación en 1952.

El escenario político-sindical de los últimos veinticinco años en ese país ha estado marcado por el retroceso organizativo y la ausencia de políticas sindicales hacia la incorporación del proletario urbano fruto de la ola neoliberal, referida aquí como reestructuración productiva, a causa del cambio ocurrido en la base técnico-productiva del mundo del trabajo. Además de los factores objetivos, no son menos relevantes los elementos que han conformado el propio actuar de la COB y sus afiliadas, que a lo largo de más de tres décadas ha resultado en corporativismo y alejamiento de una parcela de trabajadores no-fabriles que ya alcanza, según las cifras oficiales, más la mitad de la población económicamente activa de Bolivia. De esa forma, ¿cuáles son los elementos resultantes de la reestructuración productiva que deben ser tomados en cuenta para comprender la crisis sindical obrera? ¿Cuál es la actual configuración del proletariado indígena del altiplano de Bolivia?

En el presente trabajo se pretende desarrollar cierta Sociología del Trabajo que no se limita a la objetividad de la macroeconomía ni a los datos estadísticos, sino que, al mismo tiempo se dedica a escudriñar los rasgos organizativos del sindicalismo obrero que han consolidado su combatividad en el periodo 1952-1985, a la par de implicar sus debilidades ante la reformulación del patrón de acumulación capitalista, la cual, en vez de concentrar a los obreros, los dispersa territorialmente. Se le considera al año de 1985 un parteaguas en lo que se refiere a la esfera de acción y participación política de la COB;

posterior a las privatizaciones y miles de despidos continuó el fin de una forma de organización de los trabajadores y de mirar al Estado fruto del nacionalismo revolucionario, cuyo puesto ha sido ocupado por transnacionales en sectores de la economía como el minero.

La crisis del trabajo estatal y estable en Bolivia dio fin a los beneficios laborales conquistados por el propio movimiento obrero a partir de la década de los treinta. Sin embargo, los estudios que se abordarán a continuación revelan que el número de asalariados en el altiplano ha incrementado en lugar de desaparecer; lo cual se trata de relaciones salariales precarias, eventuales si se quiere, a veces verbales. Por consiguiente, el fenómeno repercute en la crisis de las formas hegemónicas de organización obrera - el sindicato desde luego - conformadas precisamente en base a condiciones laborales de antaño.

La intensidad y las condiciones de trabajo que marcaron las últimas décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX en la región actualmente son reactualizadas como modo de desarrollo de la acumulación capitalista flexible. El capital no solamente hace uso de la precariedad del trabajo, sino que la vuelve necesaria. Sectores productivos tradicionales de las clases trabajadoras bolivianas ingresaron a la llamada informalidad, por lo que la confrontación explícita entre el trabajo y el capital se ha vuelto menos visible. Formas de subsunción formal del trabajo al capital – vinculadas con la extracción de plusvalía absoluta y expresadas en la extensión casi ilimitada de jornadas laborales - son hoy por hoy combinadas con formas de subsunción real en la gran industria. Nos preguntamos: ¿qué se debe tomar en cuenta para comprender el proceso de subsunción formal y real ante el descentramiento fabril de los últimos años? Esa es una de las cuestiones no resueltas por parte de la acción sindical obrera en el occidente de Bolivia.

Una de las respuestas a la debilidad sindical obrera puede encontrarse en la falta de comprensión de la combinación mencionada anteriormente. La “ceguera sindical” hacia los asalariados precarios y la vigencia de la prioridad exacerbada del sector minero en el interior de la COB son pruebas de la burocratización/institucionalización en el primer caso, y la inercia organizativa en el segundo. A pesar de que se pretende en el presente trabajo poner énfasis en la masa de trabajadores que se ubican fuera de la gran industria, por ningún motivo se ignora el hecho de que internamente al universo fabril que queda,

igualmente hay obreros tercerizados y/o parciales, al lado de la reducida parcela de obreros privilegiados con planes de carrera laborales. Se considera que la fragmentación causada por la modalidad contractual y el tiempo parcial en la industria también debe ser blanco de organizaciones clasistas. Lo que importa aquí, sin embargo, es la reflexión, desde el acervo conceptual de la crítica de la economía política, de la crisis del sindicalismo obrero bajo un contexto en el cual predomina la doble o triple jornada laboral en las esferas no formalizadas de las pequeñas manufacturas, los servicios y el comercio.

Más allá de la reflexión sobre la forma-sindicato de por sí, es necesario reflexionar sobre el trabajo como tal, las formas de generación y apropiación de plusvalía en un espacio donde la clase obrera y el trabajo productivo ya no se ubican únicamente en las minas o bajo el techo fabril. ¿Quién conforma la clase obrera bajo el capitalismo flexible? ¿Estarán bien definidos los límites entre trabajo productivo e improductivo actualmente? Si las respuestas a las preguntas anteriores no corresponden a las mismas de las décadas pasadas, ¿qué decir de la centralidad obrera? De eso trataremos en el primer capítulo, tomando en cuenta tanto autores de la sociología del trabajo de EEUU como de Brasil y México. En los dos últimos casos, creemos se ha abierto una interlocución pertinente en los últimos años acerca del carácter dual del trabajo que amerita una revisión.

En el segundo capítulo se hace un recorrido desde fines del siglo XIX, pasando por la formación de las primeras industrias en la primera mitad del siglo XX y el florecimiento de organizaciones mutuales, por oficio y específicamente sindicalistas por centro de trabajo ya en los albores de la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia. Trataremos de destacar la historia del movimiento obrero (y en menor grado del campesino) hasta llegar a la crisis del sindicalismo a mediados de los años ochenta. En este mismo capítulo, se infiere acerca de los elementos estructurales que implicaron dicha crisis, así como de aspectos organizativos debatidos desde ese entonces por autores bolivianos. El último apartado está dedicado especialmente al análisis, igualmente por autores bolivianos, del proletariado contemporáneo en Bolivia.

Posterior al plano teórico (primer capítulo) e histórico-descriptivo (segundo capítulo), se expone el plano empírico. Para ello, nos localizamos en la ciudad de El Alto, ubicada a 4.100 metros del nivel del mar y refugio del trabajador precarizado aymara y quéchua en los últimos treinta años. El crecimiento acelerado de El Alto y su independencia

municipal de La Paz pueden ser considerados frutos de la “relocalización” (despido) de los miles de mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), ente estatal que abarcaba el grueso de los trabajadores mineros. Además de las extremas condiciones climáticas y fisiográficas de El Alto, la pobreza y la combatividad política de sus pobladores ha estado presente desde fines de la dictadura en 1979. Analizaremos el mercado laboral alteño en lo que se refiere a sus principales categorías ocupacionales, ramas productivas y redes de subcontratación por sexo y edad, destacando por último sus rasgos generales. El periodo analizado comprende el fin de la década de los setenta a los años del ciclo rebelde boliviano, especialmente 2001, año en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia realizó el último censo en la ciudad. En algunos casos, hay datos de 2003 del Primer Censo de Establecimientos Económicos de la Industria Manufacturera de El Alto. De esa manera, se pretende cubrir el periodo anterior y posterior al ajuste estructural.

Aunado a de los factores ya mencionados, El Alto ha sido escenario de las principales luchas sociales del llamado ciclo rebelde boliviano, entre los años 2000 y 2005, debido a la disputa por recursos naturales como son el gas y el agua, en especial la llamada Guerra del Gas de 2003. Lo novedoso de esto es que los sindicatos obreros no han logrado organizar al “nuevo proletariado”; más bien lo hicieron organizaciones vecinales y el sindicalismo campesino-aymara. Ello se debe a que las recientes movilizaciones ya no se presentan bajo la hegemonía del sector minero de antaño, sino de organizaciones que de alguna manera recuperan lógicas comunitarias en la urbe; se trata, sin embargo, de organizaciones de trabajadores indígenas subproletarizados en última instancia, ya sean pequeños productores, comerciantes, vendedores ambulantes, prestadores de servicios, ex-mineros o exfabriles, además de campesinos.

Se cree que el elemento clasista sigue tensionando los movimientos de base comunitaria e indígena de El Alto lo cual demanda otra perspectiva de lo obrero en clave ampliada, más allá del multiculturalismo neoliberal o de la teoría de los nuevos movimientos sociales. Por lo tanto, lo que se observa entonces es que las recientes luchas reflejan las nuevas configuraciones de clase en Bolivia, justamente las que el sindicalismo obrero no siempre ha podido o sabido acompañar. En ese caso, ¿cómo se puede hablar de El Alto en cuanto ciudad proletaria? ¿Cómo analizar la Guerra del Gas de octubre de 2003

desde el mundo del trabajo? Si las movilizaciones aymaras también pueden ser vistas como movilizaciones de trabajadores precarizados, ¿por qué la acción sindical de la COB y sus afiliadas tradicionales se han alejado de la dirección del movimiento? ¿Por qué sus llamados no fueron escuchados por quienes han participado directamente en la lucha callejera de El Alto? Estos cuestionamientos tratarán de ser abordados en el tercer y último capítulo.

Dicho todo lo anterior, el presente trabajo tratará de establecer vínculos con y explicar la crisis sindical obrera boliviana a partir de: a) la reestructuración productiva en términos nacionales, b) la historia del movimiento obrero y cobista a lo largo del siglo XX y c) el trabajo precario más allá de las fronteras de la gran industria, tomando en cuenta la ciudad de El Alto en particular. Complementariamente, se polemizará y replanteará la noción de “sector informal” difundido no sólo en Bolivia, sino en toda la región latinoamericana. Es importante destacar que este trabajo es continuidad del trabajo de investigación de licenciatura titulada *Comunitarismo, autonomía indígena y movimiento autónomo: las luchas de El Alto y Chiapas*, realizada por el autor entre 2006 y 2007 en la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Asimismo, la estancia de investigación en El Alto y La Paz durante cierto periodo del segundo semestre de 2009 pudo proporcionar acceso a bibliografía amplia y entrevistas que han sido utilizadas a lo largo de todo el texto sin distinción.

## Capítulo 1: Nociones ampliadas del trabajo en los umbrales del siglo XXI

### 1.1. La dimensión ontológica y empírica del trabajo

Ante la crisis sindical y la emergencia de movimientos sociopolíticos en torno a temas como son los recursos naturales o la identidad étnica, creemos ser necesario traer a colación la discusión acerca del trabajo, en especial sobre la vigencia de la centralidad del trabajo en las sociedades capitalistas contemporáneas en general. Para proceder con ello, es necesario distinguir las dimensiones ontológica y empírica del trabajo. De esta manera, el análisis ontológico de la centralidad del trabajo no debe ser confundido con el debate acerca de la centralidad política del obrero o el sujeto histórico obrero del marxismo. Una vez bosquejados esos puntos, se tratará de dialogar con autores que discuten lo que se debe entender por obrero, trabajo productivo e improductivo hoy en día. Posteriormente, cuando se haga referencia del obrero en el altiplano de Bolivia, se recuperarán dichos conceptos para aclarar el contexto histórico en el país sudamericano en lo que se refiere al mundo del trabajo.

Aquí se trata de rescatar el debate en el viraje de siglo impartido por Ricardo Antunes y sus lecturas de sociólogos europeos sobre el fin de la sociedad del trabajo y/o el fin del trabajo. Antunes entabla un diálogo crítico con la obra *Adiós al proletariado*, de André Gorz, de 1982, además de llevar en cuenta otros interlocutores sobre la temática.<sup>1</sup> En dicho debate, con reflejos en Brasil y Argentina en un primer momento, y en México posteriormente, el autor recupera la categoría trabajo en cuanto centro del proceso de humanización del hombre, el que permite la transición del ser biológico al ser social mediante la transformación de la naturaleza, orgánica e inorgánica.

El debate iniciado por Friederich Engels en *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre*, de 1876, y posteriormente desarrollado ontológicamente por György Lúkacs, es recuperado por Antunes en la medida en que trata el trabajo como originario, como el acto que moldea el ser social; se considera que todas las

---

<sup>1</sup> Es el caso de los críticos que sostienen la crisis de la sociedad del trabajo, a saber, Claus Offe, Jürgen Habermas, Jeremy Rifkin y Robert Kurz, desde distintos abordajes. Igualmente se considera la discusión de Adrián Sotelo, por un lado, y del grupo de investigadores de la UAM-I, por el otro para complementar el debate. La sociología del trabajo de Harry Braverman también será considerada.

demás categorías se desarrollan cuando el ser social ya está constituido por medio del trabajo.

Además de esto, el trabajo es considerado la forma originaria de la intersubjetividad, de la praxis social; lo cual suscita el lenguaje en la relación con el otro, en las acciones interactivas. Con base en Antunes,

la aparición de formas más complejas de la vida humana, las posiciones teleológicas *secundarias* que se constituyen como un momento de interacción entre los seres sociales, de lo cual aparece como ejemplo, la *praxis política*, la *religión*, la *ética*, la *filosofía*, el *arte*, etcétera, que están dotadas de mayor autonomía en relación a las posiciones teleológicas *primarias*, encuentran su fundamento *ontológico-genético* a partir de la esfera del trabajo” (Antunes, 2005, p. 135).

Al analizar el trabajo en otra dimensión, éste “se constituye – como fuente *originaria, primaria*, de la realización del ser social – forma originaria de la actividad humana, fundamento ontológico básico de la omnilateralidad humana” (Antunes, 2005, p. 161). En otras palabras, se trata de develar al trabajo como el soporte para que el hombre pueda desarrollarse integralmente, tanto en sus necesidades como en sus capacidades y potencialidades. Es por medio del trabajo que tanto la naturaleza se transforma como el propio ser que trabaja se autotransforma.

Esto es posible gracias al carácter teleológico del trabajo; es decir, la posibilidad de ideación previa al resultado, que exige del hombre la constante averiguación y crítica en vista del resultado a ser concretado. En el estudio mencionado de Engels, el autor afirma que entre más lejano de los animales, los hombres son más capaces de actuar sobre la naturaleza de forma intencional y previamente planeada, con el fin de alcanzar objetivos proyectados anteriormente. Es así como el hombre alcanza dominio consciente sobre sí mismo y modifica su autorepresentación.

El trabajo - como actividad primera por la cual el hombre transforma la naturaleza en su entorno, se socializa, interactúa con los demás y desarrolla las “posiciones teleológicas secundarias” - es considerado la categoría central de análisis en este debate, así como también categoría transversal en otras áreas de las ciencias sociales. La recuperación de su dimensión ontológica cruza, por lo tanto, las formaciones socio-históricas de colectividades humanas y no se restringe sólo al periodo de industrialización capitalista

posterior al siglo XVIII. El trabajo, visto de esta forma, es categoría de análisis transhistórica.

La lectura de Antunes de la obra citada de André Gorz trata de desarmar conceptualmente la tesis del fin de la centralidad del trabajo o la sociedad del trabajo, sustentada por el segundo. Gorz se basa en la expulsión de trabajadores productivos de los centros industriales europeos a partir de la descentralización productiva de las últimas décadas para argumentar el fin de la sociedad del trabajo. La reducción numérica del obrero-fabril y la crisis del movimiento obrero tradicional europeo son utilizados por Gorz como fenómenos para anunciar la tendencia a la desaparición de la clase obrera, y por ende, del sujeto histórico visto por el marxismo capaz de derrocar la totalización del capital.

Según Gorz, en tiempos de trabajo precario y flexible, la lucha del trabajo contra el capital estaría a cargo del sujeto autónomo que gestiona su propia producción, ya no bajo la égida de un sindicato obrero tradicional. Los trabajadores precarios en el comercio o los servicios que hoy habitan las supuestas sociedades postindustriales pertenecen, conforme a Gorz, a la “no-clase de los no-productores”. En palabras de Gorz: “sólo la *no-clase de los no-productores* [...] encarna a la vez el más allá del productivismo, el rechazo de la ética de la acumulación y la disolución de todas las clases” (Gorz, 1989, p. 81).

De la Garza sostiene que las tesis de Gorz expresan el cuestionamiento de la centralidad del trabajo en la formación de las relaciones sociales en general: “Gorz reivindica la sociedad del no trabajo y llama a luchar por ella no al proletariado sino a lo que denomina la “no clase” (de la Garza, 2001, p. 17). Con base en lo anterior, la pertenencia de clase se vuelve algo meramente contingente en Gorz, algo que puede o no estar presente, un dato accesorio más. A ese diálogo se ha sumado Sotelo igualmente desde México. Tanto Antunes como Sotelo señalan una confusión entre la observación empírica y la objetividad del análisis marxista en Gorz.

Al respecto, Sotelo nos recuerda que entre los autores del fin del trabajo – Gorz incluido – suele haber confusión entre “la dimensión ontológica del trabajo con su configuración empírica en tanto modo de empleo por el capital” (Sotelo, 2010, p. 84). Dicho de otra forma, Gorz se deja seducir por el impacto destructivo de las reformas laborales que promovieron la flexibilización del trabajo y se enfoca en lo fenomenológico, dejando a un lado el aspecto ontológico primario del trabajo inmanente a toda actividad humana. Sotelo apunta

para algo que en Gorz no queda claro: el sujeto social. Al afirmar que la lucha anticapitalista y socialista en última instancia ya no tiene en la figura del obrero-fabril su sostén, Gorz desdibuja el sujeto de la dinámica de lucha entre el capital y el trabajo. No está claro en términos teóricos e históricos quienes personifican la “no –clase de los no-productores”.<sup>2</sup>

Al parecer, Gorz parte del resultado de la modalidad de los procesos contemporáneos de trabajo, considera que el exobrero fabril se vuelve trabajador improductivo, y parece ignorar que éste no deja de ser obrero, sino que, por el contrario, se vuelve desocupado. Se considera más bien que éste ha ido incorporándose al trabajo en las oficinas, los servicios o el comercio, y estos sectores a su vez han ido incorporándose a la gran industria. Al fin, la respuesta de Gorz se queda en la fragmentación del sujeto.

Al mismo tiempo, con base en Marx, Antunes señala en Gorz la no distinción entre las dos dimensiones constitutivas del trabajo: el trabajo concreto y el trabajo abstracto; entre la dimensión negativa del trabajo (abstracto), que esclaviza al hombre, y la positiva (concreto), que le permite al trabajador liberarse.<sup>3</sup> Por un lado, el trabajo concreto o útil es aquél que crea valores de uso directamente en el contacto del ser humano con la naturaleza; tiene, por lo tanto, un carácter transhistórico y ha permeado las sociedades humanas anteriores al capitalismo. Es la actividad humana necesaria para su propia reproducción en cuanto a especie. Esa faceta del trabajo está íntimamente relacionada con su dimensión ontológica.

Por otro lado, el trabajo abstracto es aquél que se hizo tendencialmente totalizante/totalizador bajo las relaciones específicamente capitalistas. Es aquella faceta del trabajo que produce valor, presente en cualquier sociedad actual; no obstante, en su mayor o menor grado de industrialización. El trabajo abstracto solamente fue posible por un proceso de largo aliento denominado por Marx acumulación originaria. Se trató, a grandes rasgos, del proceso histórico que propició la vigencia de las relaciones capitalistas de trabajo a partir de la división entre productor y medios de producción que permeó toda la formación de la moderna sociedad burguesa. Los medios para dicha separación, para la conversión del productor en asalariado fueron no sólo de carácter macrohistórico – como es

---

<sup>2</sup> Diálogo con Adrián Sotelo, feb-jun. 2009.

<sup>3</sup> El abordaje que destaca la doble cara del trabajo, recuperado no sólo por Antunes, sino por cierta tradición consejista-autónoma durante el siglo XX dentro del marxismo – la cual Antunes no suscribe pero se acerca -, ha sido dejado a un lado por los manuales bolcheviques y las organizaciones obreras que de una u otra forma se orientaban por éstos.

la decadencia del sistema feudal -, sino a través de la violencia. Dice Marx que “la historia de esta expropiación de los trabajadores ha sido grabada en los anales de la humanidad con trazos de sangre y fuego” (Marx, 1979, p. 894). De todos los despojos, Marx destaca el del campesino de sus tierras, considerando las peculiaridades de cada región del globo terráqueo.

El trabajo abstracto subsume, subyuga el trabajo propiamente útil, lo que no quiere decir que lo domina por completo. En sociedades como la boliviana, históricamente marcada por la sociabilidad andina rural creadora y reproductora de valores de uso, la pugna entre las dos caras del trabajo es permanente e ineludible. El propio grado de industrialización inferior en relación a los países vecinos refleja, de cierta manera, la presencia de otras formas sociales que permanecen todavía; a pesar del asedio y la tendencia homogeneizante del trabajo abstracto.

Por consiguiente, para Gorz la crisis del trabajo contemporáneo, entendido como trabajo productivo típicamente fabril, aquél que valoriza directamente al valor, es leída como la crisis de la sociedad basada en el trabajo en general y en el trabajo asalariado en específico. Gorz se limita al trabajo asalariado, fetichizado, propio de la época del capitalismo manufacturero; el sociólogo francés cae en la trampa y se confunde al defender el fin de la sociedad del trabajo por la reducción del trabajador asalario formal, con seguridad social y derechos garantizados. Ignora, a su vez, el incremento del trabajo asalariado – a pesar de ser flexible y precario - en otros sectores fuera de los muros de la gran industria.

Ese hueco en la obra de Gorz no toma en cuenta que el trabajo concreto, el que genera valores de uso destinado a la producción de cosas útiles por el mismo productor o intercambiables a través del trueque por otras cosas también socialmente útiles, se diferencia del trabajo abstracto; es decir, del trabajo enajenado que roba tiempo de vida y energía al trabajador y se los transfiere al capitalista. La dimensión abstracta del trabajo nace y se desarrolla a partir de su parte concreta. Según Antunes, “el olvido de esta doble dimensión presente en el trabajo lleva, equivocadamente, a que la crisis de la sociedad del trabajo *abstracto* sea entendida como crisis de la sociedad del trabajo *concreto*” (Antunes, 2001, p. 90).

Bajo el capital, al vender el valor de uso de su fuerza de trabajo al capitalista – expresada en su fuerza física y mental – el trabajador genera el plusvalor; su fuerza de trabajo es pues capital variable. En cambio lo hace para obtener el salario, que expresa justamente el valor de cambio de su fuerza de trabajo. Es así que en la separación entre producto y productor, la subjetividad del trabajador se vuelve algo extraña en sí misma; el trabajador tiene su subjetividad auténtica coartada.

En lugar del fin del trabajo, se estaría ante la reestructuración del mundo del trabajo – o **reestructuración productiva** -, entendida como la reformulación de las bases técnicas y materiales sobre las cuales se ha asentado el trabajo para permitir la continuidad de la valorización del valor; entonces se trata más bien de la reestructuración del modo de producción y de un cambio en el patrón de acumulación. Las reformas laborales de los años noventa y 2000 en América Latina han sido precisamente el reflejo del cambio en el patrón de acumulación del capitalismo contemporáneo. Hoy por hoy, el capital hace uso de la precariedad y la flexibilidad del trabajo y además lo necesita en su nueva dinámica acumulativa. Así es que la reducción numérica del obrero tradicional estable y la proliferación del trabajo temporal, parcial y sin derechos laborales en tiempos de acumulación flexible, deben ser entendidos como parte de la nueva configuración del mundo del trabajo que implica la vigencia de la ley del valor.

Con la crisis estructural del capital, iniciada en los setenta, y el debacle de los precios del petróleo, aliados a la derrota de proyectos alternativos por parte del movimiento obrero-guerrillero, especialmente en América Latina, se abrió pauta para que el propio capital se reorganizara, junto con su ciclo productivo, sin alterar su sustento histórico: se modificó el patrón de acumulación, no el modo de producción, trasladándose del modelo taylorista-fordista – que en nuestra región se han presentado históricamente híbridos - hacia formas novedosas de acumulación flexible más o menos cercanas al toyotismo, sin que se extinguieran formas históricas no específicamente capitalistas vinculadas con el campo.

En el universo del trabajador, Antunes nos señala la disminución numérica del obrero fabril tradicional (desproletarización fabril) seguida del aumento del trabajador asalariado en el sector de servicios y la creciente precarización laboral de la mujer y el joven, como vuelta de tuerca del proceso que denomina subproletarización. Al mismo tiempo, lo anterior nos advierte que no nos debe llevar a aceptar las tesis de la sociedad

posindustrial, pues el sector de servicios, formal o informal, es dependiente de la producción industrial y de la posibilidad de valorización del valor. En este sentido, el autor se pregunta:

¿la llamada “crisis de la sociedad del trabajo” debe ser entendida como el fin de la posibilidad de la revolución del trabajo? ¿Dejó de ser el *trabajo* un elemento *estructurante* de la nueva forma de socialización humana? ¿Ya no es más protoforma de la actividad humana, necesaria para efectuar el intercambio material entre el hombre y la naturaleza? (Antunes, 2001, p. 22).

Mientras Gorz trata de destacar de alguna forma “la crisis de la medición del tiempo de trabajo” que “engendra inevitablemente la crisis de la medición del valor” (Antunes, 2001, p. 36) en conformidad con el decrecimiento del trabajo productivo-industrial, Antunes hace hincapié en la vigencia de la ley del valor de Marx dentro de la nueva configuración del mundo del trabajo.<sup>4</sup> Plantea que el trabajo precario y diversificado contemporáneo es justamente la base del desarrollo de la sociedad del capital y su ley del valor. Se trataría más bien, no de la anulación de la validez de dicha ley, sino de nuevos mecanismos de extracción del plustrabajo, del nuevo metabolismo del capital en cuanto a proceso de absorción de tiempo de vida y energía del trabajador se refiere

El grupo de investigadores de la UAM-I, encabezado por el sociólogo Enrique de la Garza Toledo, ha desarrollado nuevas perspectivas en sus análisis en el interior de la sociología del trabajo desde América Latina y ha sostenido otro punto de vista con respecto a la centralidad del trabajo. De la Garza recupera elementos de la historia reciente en la región latinoamericana, como son la reestructuración productiva en los años ochenta, la crisis del marxismo y del dependientismo, para dar especial atención al subjetivismo del actor social dentro de lo que él llama los “nuevos estudios laborales”.

El autor traza una línea bien definida que destaca los aportes de Harry Braverman y Antonio Negri<sup>5</sup> en los años setenta, la teoría regulacionista de Benjamin Coriat<sup>6</sup> en los

---

<sup>4</sup> Al contrario de Antunes, destacamos que Sotelo alcanza a abordar el tema de la crisis creciente de la valorización del valor a causa de las dificultades de la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario. Desde otro punto de vista que no es el de Gorz, el autor mexicano sostiene que ello implica una crisis también creciente de la medición del valor por el tiempo.

<sup>5</sup> En especial, los de influencia de los análisis obreristas de Braverman y Negri ante la reactivación de los conflictos obrero-patronales en el marco de los límites del keynesianismo.

<sup>6</sup> A groso modo, en el regulacionismo lo que importa son las instituciones flexibles utilizadas para regular producción y consumo.

ochenta en sustitución al dependentismo de los setenta, y luego los estudios sobre el toyotismo, los cuales abarcan los “nuevos conceptos de producción”, la “teoría de la especialización flexible” y el “*industrial governance*”, éste último relacionado con las cadenas productivas en los noventa. De la Garza es otro autor que atestigua que

en el mundo empírico capitalista lo que queda es todavía una mayoría asalariada, aunque con una importante extensión del trabajo desregulado y por cuenta propia. Sólo para una minoría la desregulación ha significado mayor libertad. La sociedad del no trabajo vale para una pequeña cantidad de personas en el mundo; la mayoría ahora tiene que trabajar más para subsistir. La verdadera sociedad del no trabajo es la del desempleo y subempleo (de la Garza, 2003, p. 27).

Dicho de otra forma, para el autor, las sociedades humanas siguen siendo básicamente sociedades de trabajadores asalariados. El autor enfatiza el crecimiento del sector informal desde los años ochenta y nos recuerda que la promesa de una clase obrera polivalente y calificada – idea que han fomentado los encargados de implementar los ajustes estructurales - no ha sido cumplida. Con respecto al autoempleo en América Latina, el autor apunta su extensión al tiempo de vincularla con la precariedad del trabajo, “más que de la búsqueda de satisfacciones y enriquecimiento de las tareas o flexibilidad creativa” (de la Garza, 2003, p. 761). En el mismo sentido, el sector de servicios se ha incrementado como nunca antes; son precisamente los sectores de servicios precarios los que predominan en América Latina, no los sectores modernos como ocurre en Europa Occidental, EEUU y Japón.

De acuerdo con de la Garza, las tesis del fin de trabajo no reflejan ni siquiera lo empírico en nuestra región, dado el crecimiento del trabajo asalariado no estable. Es en este punto donde se encuentra su rasgo eurocéntrico, una vez que dichas tesis reflejan la caída del trabajo industrial en EEUU y Europa unilateralmente, fenómeno que en América Latina se disfrazó con la dispersión de manufacturas descentralizadas respecto de la gran industria. De esta forma,

la polémica del fin del trabajo al menos parece mal planteada; en todo caso sería la reducción del trabajo formal, estable, y su sustitución por otras formas de trabajo consideradas anómalas en los países desarrollados, pero que en el Tercer Mundo tienen una larga historia de normalidad (de la Garza, 2003, p. 767).

Sin embargo, la postura del autor presenta divergencias con respecto a los de Antunes y Sotelo, justamente en lo que se refiere a la centralidad del trabajo. En primer lugar, es necesario aclarar que de la Garza no profundiza la dimensión ontológica del trabajo en cuanto a la actividad primaria de humanización del ser biológico se refiere. Al respecto, el autor defiende el concepto multidimensional del trabajo, que incluye la actividad de transformación de la naturaleza, creación y circulación de valor, dominación y consenso, mercado de trabajo, instituciones de regulación laboral, movimiento obrero y sujeto social (de la Garza, 2003, p. 32-33).

Aunque no esté completamente convencido de las tesis eurocéntricas del fin del trabajo - que sostienen la fragmentación de los “mundos de la vida” y la creciente importancia de los “mundos extralaborales” en la definición de identidades colectivas - y aunque reconozca la relevancia del aumento de las jornadas de trabajo en el universo del trabajador asalariado, de la Garza no defiende la centralidad del trabajo. Más bien apuesta por articulaciones parciales que suelen crearse en función de ciertas prácticas. Retomando cierta teoría de los movimientos sociales, el mismo autor sostiene que la acción colectiva y el sentido que le dan las mujeres y los hombres son también influidos por “estructuras parciales de mundos de vida diversos de los actores” (de la Garza, 2001, p. 20).

Dada la reestructuración productiva y el desplazamiento de la fuerza de trabajo desde la fábrica tradicional al hogar, desde el trabajo antes estable y de tiempo continuo a otro inestable y discontinuo, de la Garza sostiene que el mundo del trabajo ha perdido importancia y se ha confundido con otros ámbitos de la vida, especialmente los vinculados con la reproducción social de los trabajadores (lazos familiares, identidades urbanas, identidades étnicas, ocio, educación, artes, etc.).

El autor mexicano reacciona en contra del estructuralismo que hegemonizó cierto discurso marxista y que todavía viene arrastrándose desde los años setenta, el autor se dedica a escudriñar la formación de lo subjetivo en el actor social. Es así como para el autor, “preguntarse cuál de los mundos de vida es el más determinante para la constitución de subjetividades e identidades puede ser un falso problema cuando no se tiene una concepción estructuralista de la subjetividad” (de la Garza, 2003, p. 764).

Reconocemos la peculiaridad y la extensión del trabajo familiar en las grandes urbes latinoamericanas. Sin embargo, el autor parece olvidarse que muchos de esos ámbitos

de reproducción social de los cuales se refiere están condicionados, y en gran parte determinados por el trabajo, como es el ocio – véase la atracción que ejercen las plazas comerciales en muchos de nuestros países, además de la industria cultural que nos ofrece productos y servicios listos para el consumo - y la propia formación educacional, orientada hacia las ciencias duras, al productivismo industrial y a la gestión del capital.

De la Garza recupera las posturas adoptadas en décadas pasadas respecto a la centralidad del trabajo en la sociología. Nos recuerda que en los años setenta, el tema era abiertamente aceptado para que en los años ochenta hubiera una división entre quienes defienden el fin del trabajo sin investigación empírica y quienes desde la sociología del trabajo se enfocan en los efectos de la reestructuración productiva y los mercados de trabajo (de la Garza, 2001, p.26). Su rechazo al reconocer la centralidad del trabajo – en su rol transhistórico – aparentemente está relacionado con la crisis de las organizaciones sindicales tradicionales que cristalizaban la identidad obrera y con la evidente derrota histórica sufrida por las clases trabajadoras. Dice de la Garza que la pérdida de la centralidad del trabajo

no la ha substituido la simple fragmentación posmoderna sino otra centralidad: la del capital y la del empresario como sujeto.... La crisis del trabajo es una realidad, no como fin del trabajo sino como pérdida de legitimidad en una guerra que duró veinte años y de la cual la clase obrera y sus proyectos históricos fueron derrotados. (de la Garza, 2001, p. 26).

En este caso, nuevamente nuevo tenemos la confusión entre lo ontológico-primario y lo empírico o fenomenológico. Si tenemos, por un lado, nuevos elementos de sociabilidad revelados justamente por la crítica a una suerte de marxismo vulgar que, con tal de promover lo obrero, despreciaba otros elementos constitutivos de la subjetividad; entonces, no podemos, por otro lado, simplemente dar la espalda a los elementos de la barbarie perpetrada por el capital todavía presentes y radicalizados.

En términos sociológicos, las nuevas subjetividades reivindicadas por de la Garza llenarían el hueco no tomado en cuenta por la praxis política del marxismo estructuralista que hegemonizó las organizaciones obreras en buena parte del siglo XX. Entretanto, su análisis da cuenta de lo exclusivamente local, de la micropolítica. El esfuerzo por construir mediaciones entre lo estructural y lo subjetivo sigue sin avances en de la Garza. En resumen, “eso impone una dificultad lógica a la ciencia social, que necesita un sujeto dialécticamente unificado, con la doble condición que le encierra, criatura y creador” (de

Sousa, 1993, p. 14). Dicho de otra forma, la unilateralidad criticada por de la Garza sigue siendo reproducida, pero a partir de la dimensión sociológica subjetiva privilegiada por el autor.

En dicho debate, todavía hay espacio para las controversias en torno al trabajo inmaterial, es decir, el trabajo que es desarrollado intelectualmente por el saber científico, el que también está presente en las distintas ramas de las tecnologías de información (TI), tanto en el proyecto de fabricación de hardware como en el desarrollo de software, en agencias de publicidad y propaganda, en grupos mediáticos que controlan canales de televisión, radio e internet, operadores de bolsas de valores y el mundo financiero en general, las y los trabajadores de *callcenters* y otros sectores menos influyentes macroeconómicamente.

En lugar de restarle importancia a la producción material de bienes y servicios, Antunes es un autor que asocia la subjetividad presente en el trabajo inmaterial al proceso de valorización del valor. La medición del tiempo de trabajo sigue siendo la referencia del capital; en este caso, se trata de trabajo complejizado que es parte de la lógica de acumulación y es parte de la materialidad. En relación a la inmaterialidad, el autor aclara que “en el proceso de trabajo, donde el saber científico y el saber laboral se mezclan aún más directamente, la potencia creadora del trabajo vivo asume tanto la forma (todavía dominante) del trabajo material, como la *modalidad tendencial* del trabajo inmaterial” (Antunes, 2008b, p. 36).

Tanto Antunes como Sotelo convergen en que no hay ciclo propio del trabajo inmaterial; éste es un desdoblamiento del trabajo material. Es así que en el trabajo inmaterial, “la dimensión subjetiva del trabajo es parte integrante de las propiedades productivas y materiales del valor de uso de la fuerza de trabajo” (Sotelo, 2010, p. 87). Para Sotelo, trabajo manual no es lo mismo que trabajo material; por el contrario, el trabajo manual más el trabajo cognoscitivo componen el trabajo material. En otras palabras, el trabajo manual desde luego implica trabajo inmaterial. Éste nunca ha estado ausente en realidad; el símbolo y su base material son la forma única en que se manifiesta lo material.

En la misma senda, el clásico estudio de Braverman *Trabajo y capital monopolista* de los años setenta ya nos alertaba para la condición similar entre el trabajo de los oficinistas, o el proletario de cuello blanco, y el del obrero-fabril-manual. En este sentido,

el autor señalaba que los estudios de los movimientos en el local del trabajo han ido homogeneizándose tanto en la fábrica como en la oficina o los laboratorios (Braverman, 1984, p. 366).<sup>7</sup>

Otros tantos ejemplos podríamos mencionar en que, sin tratarse del obrero con casco, igualmente se trata del consumo de fuerza de trabajo que integra el ciclo del capital productivo. Siguiendo el mismo razonamiento, y concordando con Antunes y Sotelo, sostenemos que la producción no se vincula solamente con la industria manufacturera, una vez que la articulación entre las esferas de producción, circulación, intercambio y consumo también se han complejizado. En la actualidad, queda cuestionarnos en dónde se produce plusvalor y hasta dónde se extiende el trabajo productivo y empieza el trabajo improductivo. Las respuestas deben ser buscadas, creemos, en las transformaciones estructurales y subjetivas recientes a la luz de una noción ampliada del trabajo. Dice Antunes:

las tesis que defienden el *fin de la centralidad del trabajo* y su sustitución por la *esfera comunicacional* o de la *intersubjetividad*, encuentran su contrapunto cuando se parte de una *concepción abarcativa y ampliada del trabajo*, que lo contempla tanto en su dimensión *colectiva* como en la *subjetiva*, tanto en la esfera del trabajo *productivo* como *improductivo* (Antunes, 2005, p. 178).

Pensar en el trabajo en clave ampliada nos permite abarcar sectores no directamente productivos que coadyuvan a la extensión de formas de trabajo inmaterial y que, sin embargo, se comunican con esferas productivas en el mundo del trabajo contemporáneo, tanto en los países centrales como en la periferia.

Sotelo, a su vez, nos propone otra lectura para entender la crisis de la sociedad del trabajo abstracto. Según el autor mexicano, la crisis es entendida como una crisis creciente de la posibilidad de valorizar al capital y de determinar el valor de las mercancías por el mero tiempo de trabajo. Esto sucede a causa del incremento del trabajo constante – maquinaria y tecnología - además de la dificultad que ha tenido el capital para reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario en el cual se basa el salario; dichas reducciones han sido cada vez menos expresivas, lo que quiere decir que los aumentos en la extracción de plusvalor han sido cada vez menores.

---

<sup>7</sup> De acuerdo a de la Garza, el estudio de Braverman promovió cierta ruptura en la sociología industrial y las relaciones industriales de los sesenta justamente por relevar el optimismo que se tenía en ese entonces respecto de la automatización como liberadora del trabajo humano. Sin embargo, el autor califica el trabajo de Braverman como sobrecargado de estructuralismo y ausente de subjetividad, voluntad y acción colectiva (de la Garza, 2003, p. 723).

Es una de las contradicciones de la ley del valor-trabajo que se acentúa hoy por hoy ante el aumento decreciente de la tasa de plusvalor. Ésta aumenta, pero cada vez menos, aunque se emplee ciencia y tecnología. La salida ha sido, según Sotelo, el aumento de la superexplotación del trabajo en los países centrales, especialmente en Europa y EEUU. Con la expansión de la precariedad del trabajo en los países centrales, “la superexplotación de la fuerza de trabajo se vuelve prácticamente una categoría universal, necesaria para contrarrestar la crisis y, al mismo tiempo, garantizar la reproducción del sistema del modo de producción capitalista global” (Sotelo, 2010, p. 82).

Sotelo reconoce la reducción numérica del proletariado fabril acompañada del ensanchamiento del trabajador asalariado “informal”, es decir, precario y flexible. Por lo mismo, actualmente se vive una crisis del trabajo abstracto por las cada vez más difíciles maneras de autovalorización del capital. La tecnología de la información en ese sentido ha sido herramienta para estirar todavía más esa posibilidad. Dice Sotelo que

los problemas financieros, inmobiliarios y de insolvencia de los créditos —que son tan reales como reales son las caídas de las tasas de ganancia para los empresarios y la pérdida de empleos productivos— son sólo manifestaciones de las dificultades, obstáculos y problemas que ocurren en la dimensión productiva y en la valorización del capital (Sotelo, 2010, p. 133).

El capital en la esfera de la circulación es considerado antivalor, o sea, no produce valor, como en los sectores crediticios, etc., que se encuentran fuera del ámbito de la subsunción real al capital, aunque cada vez más incorporados. El autor plantea que la hegemonía financiera provocó que en los años noventa hubiera aumento de la tasa de ganancia relacionada con el capital ficticio; y, al mismo tiempo, disminución de la tasa de acumulación; es decir, ha habido aumento de la riqueza sin generación del valor. Menos capital productivo y más capital ficticio significa menos generación de valor y restricción de los salarios para dar seguimiento a la acumulación. Además de la hegemonía del capital ficticio, este proceso se presenta en el marco de elementos como el desempleo estructural - debido a la automatización y los despidos masivos de obreros-fabriles -, y de la superexplotación del trabajo – que articula los mecanismos de extracción de plusvalor absoluto y relativo agregado a la disminución de los salarios reales.

En tiempos de crisis del tiempo de trabajo, el capital ha tenido que apropiarse de otros ámbitos de la vida, como son el propio pensamiento y los recursos naturales. El

tránsito del capital que busca rentabilidad a otras esferas donde pueda valorizarse se justifica por la búsqueda de la tasa extraordinaria de ganancia, justamente uno de los factores que contrarrestan la tendencia a la caída de ésta. Por medio de una lectura de los *Grundrisse* de Marx, Sotelo sostiene como subhipótesis que, ante la crisis del tiempo socialmente necesario, se puede hablar de la desmedida del valor. Dice Sotelo:

la categoría “tiempo de trabajo”, que había sido el eje alrededor del cual se calculaban todos los valores y precios de las mercancías, en el capitalismo entra, primero, en tensión, y más tarde en crisis [...]De tal manera que la proyección científica de Marx (válida hoy para el siglo XXI y para la explicación *esencial* de la crisis contemporánea del capital) es que en el capitalismo se agudiza —como está ocurriendo hoy— la contradicción-lucha entre el tiempo de trabajo y lo que podemos llamar *desmedida del valor* (Sotelo, 2010, p. 115).

Al tratar la inmaterialidad tendencial del trabajo que se presenta actualmente – más visible en los países centrales desde luego – de la Garza plantea que gran parte de la inversión en el mundo todavía es productiva. Además de eso, el autor agrega que las necesidades de hombres y mujeres no pueden huir de su sustrato material. En los sectores de computación e informática, lejos de la recalificación del trabajo, lo que hemos visto y experimentado es nuevamente la informalización en bases precarias. Con base en el autor, “la producción inmaterial es aquella que no existe separada de la propia actividad de producir y que de manera ideal comprime las fases económicas tradicionales de producción, circulación y consumo en un solo acto” (de la Garza, 2001, p. 13). En dicho caso, la naturaleza ya no es tan importante para la producción de servicios; no obstante, la ausencia en muchos casos de un producto material, el sector de servicios no se aparta de la producción misma.

Dice de la Garza respecto del trabajo inmaterial:

el concepto de trabajo intelectual resulta extremadamente abstracto frente a las complejidades del aspecto subjetivo del trabajo. De tal forma que cabría hablar mejor de trabajo en sus fases objetiva y subjetiva con un producto objetivado, que muchas veces como en la producción inmaterial, no es posible separar ni siquiera en dimensiones objetiva y subjetiva, ni del acto mismo de creación. La objetivación se da de manera automática en otro sujeto, el cliente o usuario, y no en un objeto separado de los dos (de la Garza, 2001, p. 13-14).

Al tomar en cuenta los enfoques adoptados por Antunes y Sotelo en relación al trabajo ampliado y su ubicación histórico-concreta ante la “nueva morfología del trabajo”,

analizaremos a su momento el mercado de trabajo de la ciudad de El Alto en el altiplano boliviano para entender mejor cual fue el contexto laboral que sirvió de trasfondo para la crisis sindical obrera, en especial la crisis de la Central Obrera Boliviana (COB). Para ello, trataremos de imbricar los aportes ya trabajados con otros de autores propiamente bolivianos.

## **1.2. Dónde ubicar la clase obrera y el trabajador productivo/improductivo**

Uno de los puntos de partida viable en este debate es entender la clase obrera como aquella clase que no puede acceder a los medios del trabajo y que, por lo tanto, es forzada a vender su propia fuerza de trabajo como mercancía para reproducirse a sí misma y a los suyos. La clase obrera incorpora, pues, el trabajo vivo. La definición de proletario según Marx en nota de pie del tercer volumen del tomo I de *El Capital* se resume al “asalariado que produce y valoriza al “*capital*” y al que se arroja a la calle no bien se vuelve superfluo para las necesidades de valorización” (Marx, 1981, p. 761). Tendríamos, según Marx, la clase obrera en cuanto a noción más abarcadora y el proletario en cuanto productores directos de plusvalía, subsumidos realmente al capital.

Sin embargo, tanto la una como la otra no deben ser trabajadas en abstracto, sino en términos histórico-concretos. Al anticipar y, en parte vivir los cambios, Braverman en los años setenta ya nos invitaba a asumir los cambios sufridos en la estructura de la clase y a tomar la definición general y consensuada de Marx solamente como una referencia para el análisis de la clase obrera en las sociedades contemporáneas. El autor nos cuestiona si la reducción numérica del obrero-fabril-tradicional de las últimas décadas realmente implica la reducción de la clase obrera (Braverman, 1984, p. 38).

Para seguir con el debate, nuevamente recuperamos la noción ampliada de trabajo. Dicha noción está intrínsecamente vinculada con lo que Antunes denomina clase-que-vive-del-trabajo. A grandes rasgos, se trata de la configuración de la o las clases trabajadoras en el contexto posreestructuración productiva. El autor nos propone la noción de clase-que-vive-del-trabajo para ampliar y superar la idea de proletariado industrial en el estudio de las formas de trabajo. Según el propio autor, “la expresión clase-que-vive-del-trabajo pretende dar contemporaneidad y amplitud al ser social que trabaja, la clase trabajadora de hoy, aprehender su carácter efectivo, su carácter procesual y su forma concreta” (Antunes, 2005,

p. 91). Se trata, pues, de tomar en cuenta la totalización del trabajo social versus la totalización del capital social.

La clase-que-vive-del-trabajo incorpora todos los hombres y mujeres que no tienen otra salida más que vender su propia fuerza de trabajo; incorpora todas las manifestaciones del trabajo vivo, con los trabajadores productivos como núcleo central, según el autor. Según Antunes, el término “no se restringe, por lo tanto, al trabajo manual directo, sino que incorpora *la totalidad del trabajo social*, la totalidad del *trabajo colectivo asalariado*” (Antunes, 2005, p. 30-31). Significa que también abarca al trabajador visto como improductivo en los servicios, comercio, bancos, turismo, servicios públicos, etc. De esta noción, el autor excluye a los gestores del capital, especuladores, los pequeños empresarios urbanos y pequeños propietarios rurales.<sup>8</sup>

La combinación del fordismo con procesos productivos descentralizados y flexibilizados – además de procesos de trabajo vinculados con el campo en el caso de América Latina - ha dado lugar al proletariado que ya no se encuentra en el piso de fábrica, pero que todavía sigue articulado directa o indirectamente con la gran industria. De ahí la pertinencia de las proposiciones de Antunes referentes a la fragmentación productiva de la ciudad del El Alto en Bolivia cuyo mercado laboral guarda características similares con lo que aquí se describe.

Para el autor, los trabajadores temporarios, parciales, subcontratados, los trabajadores de la llamada “economía informal” – los trabajadores asalariados no registrados, cuentapropistas prestadores de servicios (de limpieza, reparación, etc.) - y los desempleados, pueden ser denominados en conjunto subproletariado moderno, precisamente el que ya alcanza tanto en los países avanzados como en los países latino-americanos más del 50% de la población trabajadora en muchos casos. En otros momentos, el autor hace mención al “nuevo proletariado fabril y de servicios”. En todo caso, estaría hablando acerca del proletariado precarizado en términos de sus condiciones de trabajo y de la ausencia de los derechos laborales conquistados a fierro y fuego en décadas anteriores (Antunes, 2001, p. 65, 74).

---

<sup>8</sup> Dice Antunes a respecto: “los pequeños empresarios urbanos y rurales, *propietarios* de los medios de producción, están en nuestro entendimiento excluidos del concepto ampliado, que aquí desarrollamos, de clase trabajadora, porque no venden su trabajo *directamente* a cambio de un salario, aunque puedan y frecuentemente sean aliados importantes de la clase trabajadora asalariada” (Antunes, 2005, p. 235).

En el mismo sentido, Sotelo a su vez trata de recuperar la noción de trabajador colectivo del capítulo VI inédito de Marx como aquella que reúne funciones diversas en el proceso de trabajo y no se limita sólo al obrero tradicional. Con Antunes, Sotelo defiende una lectura ampliada del proletariado, la clase o las clases trabajadoras, formadas “por los desprendimientos y pauperizaciones de todas las clases sociales de la sociedad burguesa” o como “sinónimo de clase de los trabajadores asalariados” (Sotelo, 2010, p. 104).

Más allá de eso, la idea de trabajador colectivo nos permite agrupar incluso los que desarrollan su trabajo en la inmaterialidad. El autor trabaja dicha noción para poder articular el trabajo colectivo con el individual, entendiendo el proceso de trabajo como un enmarañado que abarca el obrero-manual-directo y los demás trabajadores directa e indirectamente vinculados con el proceso productivo. Aborda el trabajo intelectual como parte del proceso productivo, vinculándolo a la producción de bienes materiales; de esta manera, el trabajador intelectual es considerado trabajador productivo.

Para aclararlo, retomamos directamente a Marx:

como con el desarrollo de la subsunción real del trabajo en el capital o del modo de producción específicamente capitalista, no es el obrero individual sino cada vez más una capacidad de trabajo socialmente combinada, lo que se convierte en el agente real del proceso laboral en su conjunto [...] éste trabaja más con las manos, aquél más la cabeza, el uno como director (manager), ingeniero (engineer), técnico, etc., el otro como capataz (overlooker), el de más allá como obrero manual directo e incluso como simple peón (Marx, 1981, p. 78).

El abanico de trabajadores productivos crece, toma en consideración al obrero manual, el intelectual, dentro o fuera de los muros de las fábricas, ya sea en pequeños talleres productivos, familiares o no. Todos ellos, subsumidos formal o realmente al capital y dependientes de los ritmos de la valorización del valor de la gran industria. Esta relectura de Marx, haciendo hincapié en el alcance del concepto de clase trabajadora, al mismo tiempo nos abre puertas y ventanas para dar cuenta de la nueva configuración del proceso de trabajo bajo el patrón de acumulación flexible.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Por cierto, no es la lectura que ha predominado en las organizaciones sindicales tuteladas o no por el Estado en toda región latinoamericana - incluyendo la COB de Bolivia de las décadas de los ochenta, noventa y 2000, que aquí nos interesa profundizar. A este respecto, las centrales sindicales obreras bolivianas han estado abriéndose a la percepción de otros sujetos sociales a causa de la emergencia de los movimientos indígenas que emprenden la lucha por sus territorios y los recursos naturales en su suelo y subsuelo. En todo caso, el sindicalismo obrero y/o campesino en el altiplano boliviano todavía mantiene sus ojos tapados hacia el

Ahora bien, con base en los mismos autores trabajados hasta el momento, habría que distinguir qué se entiende por trabajo productivo e improductivo y ubicarlo históricamente. Para ello, empezaremos con el capítulo IV inédito de Marx. El autor alemán considera como trabajador productivo todo aquel que produce o genera plusvalía directamente, es decir, el trabajador productivo es aquel cuya fuerza de trabajo es consumida por el capitalista en el proceso de producción directamente, en aras de valorizar el valor. En sus palabras, “el producto específico del proceso capitalista de producción, plusvalía, no se genera si no es por el intercambio con el trabajo productivo” (Marx, 1981, p. 83). Además de eso, agrega el que todo trabajador o trabajo productivo es asalariado, pero no todo asalariado es productivo.

Siguiendo el razonamiento de Marx a fines del XIX, los trabajadores del sector de servicios no serían considerados trabajadores productivos, aunque fueran asalariados y pudieran ser explotados directamente por un capitalista. Dice Marx que la fuerza de trabajo en ese caso es consumida en cuanto valor de uso, no como generadora de plustrabajo. Se la utiliza de forma improductiva.

Cuando se compra el trabajo para consumirlo como valor de uso, como servicio para ponerlo como factor vivo en lugar del valor del capital variable e incorporarlo al proceso capitalista de producción, el trabajo no es trabajo productivo y el trabajador asalariado no es trabajador productivo (Marx, 1981, p. 80).

El autor ya citado define el servicio como una expresión del valor de uso particular de la fuerza de trabajo, una vez que no es utilizado como cosa, sino como actividad. De esa forma, cuando el capitalista - o el propio obrero - compra servicios, no está valorizando al capital. A lo sumo, está incrementando la ganancia del capitalista en cuestión. Dicha aclaración es pertinente, pues, para Marx, el trabajador productivo, siendo asalariado, no puede ser visto como prestador de servicios; su fuerza de trabajo no es consumida en cuanto valor de uso, sino como generadora de plustrabajo, consumida en cuanto valor que valoriza al capital (Marx, 1981, p. 81).

Sin embargo, si entendemos los conceptos marxistas posibles de ubicación y contextualización histórica, llegamos a que, a diferencia de la naciente gran industria a fines del XVIII en Inglaterra y de su posterior desarrollo a fines del XIX, la corporación

---

proletario indígena precario y al indígena desempleado de grandes centros urbanos indígenas como es el caso de El Alto.

moderna ha ido incorporando en muchos casos el sector de servicios. Es lo que nos plantea Braverman respecto del tema:

algunas divisiones realizan manufacturas, otras comercio, otras actividades bancarias, otras minería, y otras procesos de “servicio”. Todas viven juntas pacíficamente, y en el resultado final escrito en el balance de la compañía desaparecen enteramente las formas de trabajo en formas de valor (Braverman, 1984, p. 420).

El mismo autor señala que en esos casos, el trabajador de los servicios vende su fuerza de trabajo y tiempo de vida a un capitalista que posteriormente los revende en el mercado. Se trata, pues, de la incorporación del sector de servicios a la lógica capitalista. Agrega Braverman:

cuando las recamareras en los hoteles y moteles, o las afanadoras en hospitales y otras instituciones, hacen las camas realizan una operación de ensamblaje de muchas fábricas y el resultado es una mercancía tangible y vendible [...] ¿acaso ese hecho hace su trabajo diferente en principio y menos tangible en forma, que el de los obreros de las fábricas que hacen la limpieza final, el pulido, el empaque y así por el estilo? (Braverman, 1984, p. 416).

Braverman plantea que el trabajo directamente productivo no debe ser contrapuesto a la producción de servicios, una vez que tanto el uno como el otro producen valores de cambio y plusvalía al capitalista. Sin embargo, ello no quiere decir que ambos sean productivos; más bien se trata de no contraponerlos en la medida en que la organización de las corporaciones transnacionales contemporáneas tiene carácter totalizador.<sup>10</sup> Ya en la década de los años setenta, en especial en los países centrales, se veía como los servicios se volvían cada vez más la forma de producción del capitalismo contemporáneo, rebasando incluso a la producción manufacturera.

De esta forma, la distinción entre trabajo productivo e improductivo no se refiere tanto a su forma concreta, sino a su forma socio-histórica. En nuestros tiempos, el capital ha ido convirtiendo al trabajo improductivo un elemento necesario en su dinámica de autovalorización. Dicho con palabras del autor, “la masa de trabajo improductivo ha sido virtualmente destruida *fuera* de la compañía y recreada sobre una base distinta *dentro* de ella” (Braverman, 1984, p. 476).

---

<sup>10</sup> El autor considera el trabajo de agricultores, artistas, comerciantes, profesionales y sirvientes como trabajos improductivos.

Al darle continuidad al razonamiento, tenemos que el trabajo productivo dentro de una corporación debe ser tomado en cuenta colectivamente, como un todo, más si nos atenemos a la creciente departamentalización de sus sectores, desde la publicidad a la promoción, del mercadeo a la especulación. Cuando se refiere a la articulación entre trabajo productivo e improductivo, Braverman nos recuerda que la vida del trabajador improductivo se asemeja cada vez más a la del trabajador productivo.

El autor concluye con las siguientes palabras:

aunque el trabajo productivo y el improductivo son técnicamente distintos, aunque los trabajadores productivos han tenido a decrecer en proporción al crecimiento de su productividad, en tanto que el trabajador no productivo se ha incrementado *precisamente como resultado de un incremento en los excedentes arrojados por el trabajo productivo* [...] ellos forman una masa coherente de empleados que, en el presente y a diferencia de la situación en los días de Marx, tienen todo en común (Braverman, 1984, p. 484).

La constante incorporación del trabajo improductivo y su consecuente transformación en trabajo productivo – si tomamos en cuenta su función creciente en la generación de plusvalía – es el proceso histórico destacado por Braverman como parte del desarrollo de las sociedades capitalistas contemporáneas.

Al respecto, Antunes defiende tanto la centralidad del trabajo en sus dimensiones ontológica y empírica como la centralidad del trabajador productivo, entendido como el que crea valores de cambio, que genera plusvalía, especialmente el trabajador industrial o, en su caso, el obrero a domicilio. A pesar de lo anterior y en concordancia con Braverman, el autor nos alerta: el asalariamiento de los trabajadores de los distintos sectores de servicios tiene su lógica cada vez más cercana a la del mundo productivo. El sociólogo señala como característica del trabajo a inicios del siglo XXI la interpenetración entre el trabajo productivo e improductivo:

al contrario de la sustitución del trabajo por la ciencia, o todavía de la sustitución de la producción de valores por la esfera comunicacional o de la sustitución de la producción por la información, lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo es una mayor *interrelación*, mayor *interpenetración*, entre las actividades productivas y las improductivas, entre las actividades fabriles y de servicios, entre actividades laborativas y las actividades de concepción, que se expanden en el contexto de la reestructuración productiva del capital (Antunes, p. 19, 2001).

De esta forma, es marcada la dependencia del capital de los sectores improductivos, ya que se han vuelto funcionales a los productivos. Antunes afirma que los trabajadores improductivos “viven situaciones *objetivas y subjetivas* que tienen similitud con las vivenciadas por el trabajo productivo” (Antunes, 2005, p. 234).

Sotelo, a su momento, señala la primera definición de Marx sobre el trabajo productivo en el capítulo V de *El Capital*, la cual sostiene que el trabajo mismo que resulta en producto es de por sí productivo. La investigación de Sotelo apunta a que posteriormente Marx reduce la conceptualización y define como trabajo productivo solamente aquel que genera plusvalor y autovaloriza el capital, asociándolo a la subsunción real al capital, al modo específicamente capitalista (Sotelo, 2010, p. 91).

Cuando recupera el ensayo de Ruy Mauro Marini titulado *El concepto de trabajo productivo*, Sotelo igualmente nos recuerda que el trabajo productivo e improductivo deben ser tratados en cuanto conceptos históricos ubicados concretamente y contextualizados siempre, tal como lo plantea Braverman. Asimismo, tanto el uno como el otro participan de la valorización del valor, integrándose, “de modo que el trabajo improductivo es parte de las condiciones de explotación del productivo” (Sotelo, 2010, p. 19). El autor mexicano nuevamente trabaja la noción de trabajador colectivo de Marx. En palabras de Sotelo,

todo trabajador que no intervenga como miembro del trabajador colectivo en estas funciones deberá entonces considerarse como un trabajador improductivo, mientras que el trabajador que sí participa en él será un trabajador productivo; un obrero productivo que pertenece, por tanto, a la clase obrera (Sotelo, 2010, p. 93).

En sintonía con Antunes, Sotelo se refiere a la necesidad de abarcar tanto el obrero productivo y manual de fábrica como el trabajador intelectual ubicado en la prestación de servicios que piensa la propaganda del producto, siempre y cuando el último coadyuve a la valorización del valor dentro del mismo proceso productivo. La noción de trabajador colectivo implica, por lo tanto, la extensión de la noción de trabajador productivo inicial enmarcado en los muros de las fábricas.

En lo que se refiere al trabajador en el comercio, podríamos empezar afirmando que este sector no genera riquezas sino que lo que permite es la circulación para que el capital se realice; son, por lo tanto, considerados sectores improductivos de plusvalía. Según dicha lectura, el capitalista comercial es un capitalista diferenciado y en términos de creación de valor, tanto el comercio informal como el sector bancario son improductivos; ya en

términos de generación de ganancia, ambos son productivos. Sin embargo, todo lo anterior no quiere decir que no haya explotación en dicho sector de la economía.

Braverman sostiene dicha lectura del trabajador en el comercio al plantear que

el trabajo improductivo contratado por el capitalista para ayudar a la realización o apropiación de la plusvalía, semeja, en la concepción de Marx, al trabajo productivo en todos los aspectos salvo uno: no produce valor y plusvalía y por tanto crece no como una causa sino más bien como resultado de la expansión de la plusvalía (Braverman, 1984, p. 483).

A diferencia de la lectura anterior y en conformidad con la relectura propuesta por Antunes y Sotelo, a los obreros comerciales, que no producen plusvalor directamente sino ganancia, se les extrae tiempo de vida y energía no remuneradas que al fin y al cabo, incrementan la parte que es sustraída al plusvalor productivo por parte del capitalista comercial. Sin dejar de considerar el proletariado industrial el núcleo duro de la clase trabajadora, Sotelo concluye con el tomo III de *El Capital* donde el trabajo del obrero comercial también es productivo siempre y cuando tomemos en cuenta la noción de trabajador colectivo. Sotelo nos cuestiona:

si ambos tipos de trabajador [proletarios industriales y asalariados en general] venden el valor de uso de su mercancía fuerza de trabajo, como se compra y se vende cualquier otra mercancía —lo que Marx denomina las metamorfosis de las mercancías—, y son explotados por el capital, ¿acaso no tienen el potencial de producir plusvalor?” (Sotelo, 2010, p. 109).

De esta manera y adoptando la noción de trabajador colectivo, podemos sostener con más solidez que la trabajadora y el trabajador asalariado en los servicios, el comercio, en el trabajo intelectual o inmaterial, además del pequeño productor y, desde luego, el tradicional obrero fabril, son partes integrantes y productivas de la clase obrera luego de la reestructuración neoliberal. En tiempos de acumulación flexible, dispersión productiva y incremento del trabajo exclusivamente inmaterial, la lectura ampliada del trabajo anterior

nos permite redefinir una serie de categorías de trabajadores que han surgido en las últimas décadas a la luz de los cambios operados en las estructuras capitalistas del proceso de trabajo, del empleo y de las remuneraciones tanto salariales como no salariales de los trabajadores. Sin embargo, ello no hace más que afirmar la importancia del trabajo y de sus sujetos sociales, así como constatar cómo es que el capital y sus sujetos: los empresarios, se esmeran por hacer que unidades de trabajo improductivo se vuelvan productoras de plusvalor y de ganancias (Sotelo, 2010, p. 112).

Ubicada de esta forma la clase obrera, y a pesar de las diferencias tenues entre los autores abordados, habría que considerar qué dicen con respecto a la centralidad obrera, que a su vez tiene implicaciones no sólo teóricas sino también esencialmente políticas.

Antunes sostiene que se trata “de una crisis de la sociedad del trabajo abstracto cuya superación tiene en la clase trabajadora, a pesar de fragmentada, heterogeneizada y complejizada, su polo central” (Antunes, 2001, p. 91). El autor prioriza las revueltas y rebeliones *en y del* trabajo, desde luego articuladas entre lo que denomina subproletariado moderno - compuesto de tercerizados, parciales, eventuales y precarizados - y los trabajadores directamente productivos. En palabras del autor, las luchas centralmente capaces de una efectiva emancipación humana son las que tienen como sujeto colectivo la clase trabajadora. Si tomamos en cuenta que vivimos “en una sociedad que produce mercancías, valores de cambio, las revueltas del trabajo tienen un estatuto de centralidad” (Antunes, 2001, p. 98).

Tanto Antunes como Sotelo priorizan las luchas que se desarrollan *en* el trabajo - es decir, luchas que tengan que ver directamente y que sucedan en el mundo del trabajo, como son las luchas sindicales, gremiales y cooperativistas condensadas en organizaciones obreras. En palabras de Sotelo,

un proyecto de transformación social en estas condiciones no puede ser obra exclusiva del proletariado industrial —que en el mundo actual tiende a disminuir por las mutaciones operadas tanto en las estructuras de acumulación y reproducción del capital como en las de las clases sociales—, sino de todas las clases explotadas de la sociedad burguesa y neoliberal de nuestros días, aunque eso sí, con la clase obrera industrial (tradicional y moderna) como *núcleo central*, en alianza con los diversos movimientos sociales con los que se pueda avanzar” (Sotelo, 2010, p. 102-103).

De esa forma, ambos autores destacan el proletariado industrial, tanto el tradicional como el moderno precarizado, con vistas a la organización y la lucha anticapitalista. Se excluye a los asalariados en general, ya sea el pequeño productor independiente, el comerciante o el prestador de servicios cuentapropista. Cuando se trata del campo propiamente político, estos autores no poseen la misma perspectiva ampliada con la cual tratan a la clase obrera; es decir, a la ampliación de la noción de clase obrera no le corresponde la ampliación de la centralidad obrera. Contrario a lo que se podía esperar, tanto Antunes como Sotelo mantienen el vanguardismo del obrero industrial al considerarlo

el núcleo central y orientador de la lucha. En su momento, veremos qué implicaciones tiene lo anterior en relación a la historia del movimiento obrero en Bolivia.

Más allá de la centralidad política que estos dos autores le asignan al obrero industrial, se trata, en este caso, de luchas del trabajo abstracto (alienado, enajenado o fetichizado) contra el capital, justamente las que se encuentran hoy por hoy vinculadas con la crisis sindical obrera. En Bolivia, las luchas protagonizadas por el trabajo abstracto, básicamente sindicales, ya sean mineras o fabriles, posreestructuración productiva, han sido limitadas tanto por factores macroeconómicos externos a las organizaciones obreras como por factores internos relacionados con su capacidad organizativa y aglutinadora. De esto hablaremos en el capítulo siguiente.

## Capítulo 2: Crisis del sindicalismo obrero altiplánico en Bolivia

### 2.1. Dilemas históricos de la alianza sindical obrero-campesina

#### 2.1.1. Primeras experiencias organizativas y sexenio 1946-52

A finales del siglo XIX, Bolivia vivenció la época del tránsito de la explotación de la plata, a causa de su agotamiento, al estaño, que se mantuvo hasta mediados del siglo XX y permitió la inserción subordinada del país a la economía mundial. Ante la eliminación de la *mita*<sup>11</sup> en el contexto de la guerra de independencia, la fuerza de trabajo pasaría a reclutar a los pocos “trabajadores libres” de los distritos mineros o de campesinos indios periódicamente.

Además de la escasez de trabajadores, Rodríguez nos revela que la industria minera enfrentó dificultades a lo largo de todo el siglo XIX a causa de cuestiones vinculadas con el comportamiento de los trabajadores: tenían periodicidad propia, ya que la mina era todavía una actividad laboral complementaria, y no habían interiorizado el ascetismo del trabajo tan característico del trabajador fabril urbano, necesario desde luego para el impulso industrial capitalista. El sistema de *kajcheo*<sup>12</sup>, que fomentaba el robo de minerales por los propios mineros, había sido practicado en las décadas anteriores. Durante ese periodo, se trató de “modalidades preindustriales de resistencia” (Rodríguez, 1991, p. 51).

A mediados del XIX, un nuevo grupo de capitalistas modernizadores y menos tolerantes a la inestabilidad laboral pasó a adoptar multas y perseguir a los “ladrones” con el objetivo de ordenar el tiempo de trabajo y el propio mercado laboral en términos propiamente capitalistas. La maquinaria erosionó la tradicional división del trabajo de las minas<sup>13</sup> a lo largo de la colonia y dio como resultado un mayor control sobre el proceso

---

<sup>11</sup> La *mita* fue una suerte de tributo en forma de trabajo temporal, gratuito y obligatorio, ejecutado en las minas y en el campo, reeditado a partir del imperio incaico y utilizada a lo largo del periodo colonial en los Andes.

<sup>12</sup> Sistema por el cual los trabajadores arrendaban tierras de sus propietarios para trabajar en sus minas utilizando medios de trabajo propios. Los resultados solían ser divididos entre el trabajador y el propietario sin la mediación del salario.

<sup>13</sup> La división del trabajo en el socavón y alrededores de las minas ha sido compuesta por los transportadores manuales de minerales (*apiris/cumiris*), seleccionadores de minerales (*mortiris/palliris*) y refinadores (*repasiris*).

productivo. Además, los empresarios mineros pasaron a implementar cuerpos policíacos, redujeron el permiso para el consumo de bebidas alcohólicas y para la celebración de días festivos. Se apreciaba el trabajador sobrio y dedicado, todo ello en detrimento de la economía étnica<sup>14</sup> todavía practicada por el minero egreso del campo.

Sustentadas por la explotación en las haciendas y en las minas – que se alimentaban de campesinos indígenas del altiplano – la oligarquía del ciclo argentífero, destacadamente las familias Arce, Aramayo y Pacheco, del departamento de Chuquisaca, mineros y hacendados a la vez, se asociaron con capitalistas chilenos e ingleses para impulsar el ciclo productivo de la plata a través, por ejemplo, de la construcción de los ferrocarriles, como es el caso del ferrocarril Antofagasta-Uyuni en 1899.

El auge de la plata en la década de 1880 tuvo vida corta. Diez años después, con la caída de los precios internacionales del mineral, la oligarquía minero-latifundista de Bolivia pasó a privilegiar el estaño. Con esto, el país dio inicio a un nuevo patrón de acumulación<sup>15</sup> ya en términos capitalistas, dada la implementación de maquinaria en el proceso productivo y el reclutamiento masivo<sup>16</sup> y disciplinado de fuerza de trabajo indígena del campo. En este sentido, Pericón (1989) alerta el hecho de que el excedente agrícola ha sido utilizado por la naciente minería capitalista al transformar los *mitayos* en proletarios mineros, al trasladarlos de las haciendas a las villas mineras.

La débil industrialización en los años 20 sería impulsada por la Primera Guerra Mundial y por la Guerra del Chaco, generando aumento de la demanda de productos bolivianos. Ante la caída de los precios generales de los minerales y la crisis mundial desatada entre 1918 y 1930, el empresario minero Simón Patiño llegó al punto de intervenir directamente en el mercado internacional del estaño limitando la producción de Bolivia y

---

<sup>14</sup> Aquí superficialmente entendida como el conjunto de prácticas de cultivo e intercambio recíproco en el campo, ceremonias y demás eventos sociales andinos distintos a la economía del tiempo específicamente industrial capitalista.

<sup>15</sup> Aquí entendemos patrón de acumulación como una modalidad de acumulación capitalista históricamente determinada; como la forma que asume la valorización del valor dentro de una determinada etapa histórica de su proceso (Valenzuela, 1990, p. 61). El economista boliviano Grebe también señala la relación del patrón acumulativo con el contexto histórico-concreto, tomando en cuenta las transformaciones de la base técnico-material. Él plantea que bajo formas sociales específicamente capitalistas, el excedente adquiere la forma de plusvalía. La inversión de plusvalía en más fuerza de trabajo y medios de producción a su vez promueve la acumulación en términos de la reproducción ampliada del capital. Podemos decir que en el capitalismo es justamente así como el excedente es revertido al proceso productivo, es decir, bajo la forma de acumulación.

<sup>16</sup> Mientras que en las minas de plata de la familia Arce se llegó a reunir hasta 1.500 mineros, en las minas de estaño de los empresarios Patiño, Hochschild y Aramayo, se concentraron hasta 30 mil mineros décadas más tarde.

otros países productores por medio del organismo conocido como Asociación Internacional de Países Productores de Estaño. No obstante la presencia mundial de Patiño y cierto desarrollo de la industria del estaño, Bolivia no pudo evitar la declaración de moratoria unilateral para suspender el pago de su deuda externa (Pericón, 1989, p. 55; Grebe, 1999, p. 56). En virtud de dicha crisis, de la década de los años treinta en adelante, se intensificaría la disputa entre el Estado y los grupos empresariales mineros por el reparto del excedente estañífero; a partir de los años cuarenta, el país sufriría políticas de fomento industrial según orientaciones cepalinas.

En el mundo del trabajador, la lucha en contra de la precariedad de las condiciones de trabajo del sector minero era acompañada de las demandas de otros sectores urbanos a través de las organizaciones de ayuda mutua, ligas y federaciones de artesanos, ferrocarriles y gráficos. Sus luchas giraban en torno al tema salarial, la salubridad y la construcción de *pulperías*<sup>17</sup>. Las organizaciones mutualistas auxiliaban y protegían los mineros y sus respectivas familias. No se trataba todavía de entidades sindicales clasistas, sino de organizaciones de base territorial o comunidades laborales. Si las últimas décadas del XIX estuvieron caracterizadas por el obrero-artesano de empresa en el ámbito urbano, en los albores del siglo XX dio lugar a la creciente organización del obrero de oficio de gran empresa (García, 2001, p. 72).

En el sector minero, la Liga Obrera del Trabajo de Amparo y Protección Mutua de Catavi y las Federaciones Mineras de Llallagua y La Salvadora durante la década de 1920 han sido las experiencias más claras de lo que serían los futuros sindicatos conformados exclusivamente por trabajadores mineros. El mes de mayo de 1912, grupos de artesanos descontentos con el liberalismo que permeaba otras organizaciones de trabajadores fundaron la Federación Obrera Internacional (FOI), pronto convertida en la Federación Obrera del Trabajo (FOT) en 1918. Dicha organización, por primera vez, difundió postulados marxistas entre sus miembros al tiempo que fomentaba el alejamiento de trabajadores ácratas cercanos al anarquismo (Rodríguez, 2010, p. 29-31). El anarcosindicalismo boliviano a su vez fue promovido básicamente por la Federación Obrera Local (FOL), de 1927. Al adoptar la doctrina libertaria y el sistema federativo, capaz de sustituir

---

<sup>17</sup> Almacenes pequeños para la venta de alimentos y bebidas alcohólicas.

las dirigencias en momentos más críticos de represión estatal-militar, la función propagandística de la FOL se acercaba al de una “universidad obrera”.

La FOL había abierto las puertas para la posterior organización sindical en Bolivia por medio de un movimiento obrero-artesanal organizado en gremios. Aunque la doctrina libertaria haya tenido ecos en Bolivia entre fines de la década de 1910 hasta la Guerra del Chaco (1932-35), ha tenido su auge en el sexenio 1926-32, simultaneo a la lucha por la jornada de ocho horas, después de la cual la mayoría de sus militantes murió en el Chaco o bien se incorporó al sindicalismo paraestatal. Otra parte ha sido perseguida por el propio Estado (Lehm; Rivera, 1988, p. 59-61). Las mismas autoras revelan que ante el debacle de los gremios masculinos (carpinteros, sastres, pintores, albañiles, etc.), los gremios femeninos empezaron a articularse.

La fundación del Sindicato de Oficios Varios por mujeres vinculadas a los anarquistas de la FOL articulaba a culinarias (domesticas), lavanderas, lecheras, floristas, fruteras y vendedoras de mercados (recoveras). Estos sindicatos femeninos se mantendrían activos aún después de conflicto del Chaco. La adhesión de otros sindicatos hizo surgir a la Federación Obrera Femenina (FOF) en 1939, lo que sería el principal bastión del sindicalismo libertario en el país hasta 1946.

Es en dicho contexto que nacen los mayores atritos entre el sindicalismo libertario y el bolchevique, aunque hayan mantenido una aparente unidad en los primeros tres años de congresos de trabajadores bolivianos. En la III Convención Obrera de Oruro, se decide por mantener la independencia en relación con partidos políticos y ello genera divergencias respecto del grado de autonomía sindical entre la FOL y la FOT. La IV Convención Obrera de 1930 fue igualmente hegemonizada por el sindicalismo libertario y en el evento la delegación de Oruro llegó a proponer la gremialización del Estado en base a un parlamento organizado por delegaciones de gremios de productores. En el Programa Mínimo de la Federación de Oruro, se afirmaba que

el parlamento a base de representaciones gremiales trataría con profundo conocimiento de causa, los problemas que son materia de legislación. Otra de las grandes ventajas de la representación gremial consiste en que del seno del parlamento, desaparecería de inmediato toda tendencia partidista, puesto que tendría un carácter exclusivamente funcional, administrativo. En suma, el parlamento gremial sería una junta nacional de técnicos, alejados por completo de la política partidista (Lehm; Rivera, 1988, p. 51).

La disputa por la hegemonía en el seno obrero duraría todo el periodo bélico del Chaco (1932-35). En todo caso, la FOL y la FOT fueron las principales centrales obreras hasta 1936. Mientras la FOL seguía orientación libertaria objetivando la eliminación del Estado para la organización de consejos federados, la FOT poseía orientación bolchevique destinada a hacerse uso del aparato estatal para organizar la producción.

En 1936 se conformó la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB), de carácter fabril, vinculada al stalinismo del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR). Los gobiernos del periodo 1936-46, conocido como el periodo del “socialismo militar”, perseguían sistemáticamente el tutelaje del incipiente y alentador movimiento obrero de la década. Ese mismo año, el gobierno de David Toro (1936-37) decretó la sindicalización obligatoria, seguida por el Código del Trabajo promulgado durante el gobierno de Germán Busch en 1939. Ambos elementos legalizaban las huelgas y establecían la prima vacacional. En el gobierno de Gualberto Villarroel (1943-46), fueron aprobadas medidas laborales que incluían la creación de un Foro Sindical.

El primer intento de organizar una entidad sindical única se dio en agosto de 1939 en Oruro, ante la presencia de la CSTB y la Federación Obrera Sindical (FOS) orureña, dando origen a la efímera Confederación Nacional de Trabajadores Mineros, duramente reprimida por el gobierno del general Peñaranda (Rodríguez, 1991). Cuando se aprovechó la movilización huelguista ya iniciada, grupos de izquierda que habían participado de la Guerra del Chaco volvieron al altiplano boliviano y en poco tiempo reorganizaron sindicatos en regiones combativas como son La Paz y Oruro, así como en Potosí, desatando un nuevo clima laboral de protestas y huelgas.

Mientras tanto, a mediados de la década de los años cuarenta, Bolivia aportaba con más de un 40% de la producción mundial de estaño. Sin embargo, el trabajador minero de Patiño Mines, el más grande conglomerado minero de ese entonces, cobraba menos de un dólar al día (Lora, 1980; Andrade, 2007). En 1942, fruto de una movilización del Sindicato de Oficios Varios de Catavi por el aumento de un 100% de los salarios – decurrente del alta internacional del precio del estaño -, el entonces gobierno de Peñaranda ejecutó a decenas de hombres y mujeres en una lucha que tuvo el apoyo de las minas de Siglo XX y

Llallagua. El evento, conocido como la “Masacre de Catavi”, se volvió un hito histórico y evidenció a los mineros el real funcionamiento del poder oligárquico boliviano.

Dos años más tarde, se creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la FSTMB, durante el acalorado Congreso de Huanuni. La fundación de la FSTMB ha sido fruto del acumulo histórico de organización y combatividad de las Federaciones y Ligas Obreras anarco-sindicalistas de los años veinte y de los sindicatos mineros de los años treinta. Con la FSTMB, la organización sindical por local de trabajo finalmente logró consolidarse. Asimismo, la Federación le otorgó una dimensión nacional al clasismo minero en Bolivia.<sup>18</sup> Dos años después, los trabajadores alrededor de la FSTMB intentaron conformar la Central Obrera Nacional (CON), juntamente con la Federación de Harineros, Gráficos y la Unión Sindical de Fabricas y Oficinas de Oruro. Nuevamente de poca duración, y en cierta manera, dicha central fue anticipadora de la COB en cierta manera. En 1949, se conformó el Comité de Coordinación de Trabajadores de Bolivia, al cual se le impidió despegar por las condiciones políticas previas a 1952.

En 1945, bajo el gobierno de Villarroel, ocurrió el Primer Congreso Nacional Indígena, en el cual se eliminó oficialmente el *pongueaje*<sup>19</sup>, obligando a los trabajadores indios de las haciendas a construir escuelas rurales y además reglamentando la relación laboral en el campo. Un año después fue fundada la Federación Agraria Departamental (FAD), cuyos ejes de lucha giraban en torno a la sindicalización en el campo. La FAD desde luego se articuló a la resucitada FOL y la FOF a favor de los colonos y comunarios; en ese entonces componían la columna vertebral del anarcosindicalismo.

A fines de la década de los años cuarenta, la Federación de Mineros se encontraba lejos del tutelaje del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)<sup>20</sup>, en parte debido al trabajo militante del POR por la independencia de clase. Es así que en 1946, ante amenazas de cierre de minas, la FSTMB volvió pública la Tesis de Pulacayo, documento histórico del movimiento obrero que rompió con la idea de la existencia del feudalismo en Bolivia a

---

<sup>18</sup> Posteriormente, la FSTMB sería mantenida bajo influencia del Partido Obrero Revolucionario (POR) de Juan Lechín, mientras la CSTB estaría controlada por el Partido Izquierda Revolucionaria (PIR) y en menor grado por el Partido Socialista Obrero de Bolivia (PSOB), de Tristán Marof.

<sup>19</sup> Parte de la estructura de las haciendas bolivianas anclada en el trabajo indígena forzado y gratuito al latifundista.

<sup>20</sup> El Movimiento Nacionalista Revolucionario fue creado por la pequeña burguesía urbana de Bolivia, primos pobres de la oligarquía latifundista en crisis, y por excombatientes de la Guerra del Chaco. Ha sido, por lo tanto, un partido cercano a militares nacionalistas.

través de una lectura que incorporaba este país al desarrollo desigual y combinado de la economía mundial, subordinado desde luego al imperialismo estadounidense. Redactado por Guillermo Lora y ampliamente criticado por stalinistas por incluir la construcción de milicias armadas para el control obrero de las minas, dicho documento está basado en el Programa de Transición de la IV Internacional de León Trotsky, según el cual las tareas nacionalistas y democráticas deberían ser un paso hacia la revolución socialista.

Entre otros elementos, la Tesis de Pulacayo indicaba que la revolución proletaria debía tener como método la acción directa, expresada en la ocupación de las minas y el control obrero colectivo (Lora, 1987, p. 171, 174). Por otro lado, la III Internacional priorizaba la conformación de alianzas con fracciones de la burguesía nacional, además de la unión nacional en contra del fascismo. El stalinista PIR se mantuvo lejos de la agitación minera de ese entonces, dejándole espacio tanto para el POR como para el MNR en su acercamiento a los mineros (Andrade, 2007, p. 49).

Respecto a la movilización campesina, que actuaba paralelamente al movimiento obrero, sin dejar de ser influenciado por éste, sabemos que los primeros sindicatos han sido formados en los valles de Cochabamba en los años treinta a través de liderazgos aymaras y quechuas en las ciudades de Ucureña, Cliza y Quillacollo. Entre las razones de la influencia obrera está el temprano contacto de los campesinos indios con profesionales urbanos, básicamente profesores. A causa de la continuidad extraoficial del *pongueaje*, las protestas y sublevaciones en el campo perduraron toda la década de 1940 en distintas regiones, hasta llegar a 1952.

Si a lo largo de los años cuarenta, la clase obrera boliviana se basó en organizaciones de matiz artesanal, los años posteriores tendrían la presencia del eje minero verticalista. Es importante sintonizar la ascensión sindical obrera y campesina durante el sexenio 1946-52 con la decadencia de la oligarquía del estaño, conocida como la *rosca*. Esta crisis inició después de la Guerra del Chaco y culminó con la Revolución Nacional de 1952.

### 2.1.2. Jornadas revolucionarias en el campo y la ciudad

Para el año de 1952, se acumularon agravios en los centros mineros; y, por consiguiente, la organización minera para la lucha provocó el derrumbe de los barones del estaño. De abril en adelante, Bolivia no solamente vería derrocada su clase oligárquica y su sustitución por cuadros del MNR, sino también la creación de una nueva matriz histórica, entendida como “el conjunto de relaciones sociales básicas, funciones y percepciones que se conformaron como resultantes de la insurrección obrera y popular victoriosa y que determinaron las orientaciones de la sociedad de las décadas siguientes” (Lazarte, 1989, p. 261).

Los tres días de jornadas minero-populares en las calles de La Paz y Oruro tuvieron como protagonistas artesanos, trabajadores desocupados, pequeños comerciantes urbanos y estudiantes alrededor del movimiento constituido por mineros y fabriles. Pasados los enfrentamientos callejeros, las principales demandas coincidían en la nacionalización de las minas y ferrocarriles, la reforma agraria y la formación de milicias populares armadas en sustitución del ejército. A lo largo de esas jornadas, las Fuerzas Armadas se fragmentaron y parte de ellas desertó debido a que centenas de fusiles fueron entregados a los obreros fabriles de La Paz y mineros de Milluni por el entonces Ministro del Interior. En Oruro, los mineros de la mina San José tomaron la ciudad e impidieron el avance de las tropas que se dirigían a La Paz.

Son los mismos sindicados obreros y campesinos y sus milicias armadas los que posteriormente sostuvieron material y políticamente el MNR en el cogobierno armado. A pesar de haber tenido la fortaleza para imponer sus decisiones sobre el poder ejecutivo, la recién formada Central Obrera Boliviana (COB)<sup>21</sup> tuvo su etapa de mayor expresión real de poder hasta octubre del mismo año, mes en que ocurrió la nacionalización de las minas. De octubre en adelante, se inició un periodo de acomodación y burocratización de la central. El movimientismo, con el importante apoyo del lechinismo<sup>22</sup>, fue ocupando puestos-clave dentro de la COB y de sus organizaciones afiliadas a lo largo de los años posteriores.

---

<sup>21</sup> Ante la fundación de la COB en 1952, tiene lugar la disolución de las corrientes anarquistas aglutinadas en la FOL y los stalinistas en torno a la CSTB.

<sup>22</sup> Juan Lechín fue una figura política que transitaba, no sin ambigüedades, entre organizaciones obreras, ciertas facciones del MNR y la propia cúpula gubernamental. Fue vice-presidente en 1960.

Zavaleta (1998) es un autor que sostiene que el propio movimiento obrero actuaba de forma ambigua, algunas veces parte del movimiento democrático que había apoyado el retorno de Victor Paz Estenssoro al palacio presidencial, y otras veces con programa propio, expresado en la Tesis de Pulacayo. Aún así, lejos del tradicionalismo sindical, la COB ha agrupado en su seno asalariados y campesinos, funcionarios públicos, universitarios, pequeños comerciantes e inquilinos, artesanos y contrabandistas, es decir, “ocupó desde su nacimiento en 1952 un lugar más amplio que el de una central sindical, actuando como centro político de sindicatos, organizaciones obreras y populares” (Andrade, 2007, p. 144).

Elástica y soberana, Lora afirma que la nueva central

adquirió rápidamente características soviéticas no solo por abarcar la nación oprimida (conjunto de clases sociales con intereses diversos), sino porque de inmediato tomó en sus manos la solución de los problemas nacionales y los que correspondían a los trabajadores y se puso a ejecutar sus acuerdos (Lora, 1980, p. 179).

En uno de los primeros conflictos en el cogobierno, el POR se posicionó en contra de la participación de los ministros obreros. Las crisis de gabinete fueron comunes hasta que en el año de 1957, se llevó a cabo la renuncia de ministros obreros durante el gobierno de Siles Suazo, acusado de anular la presencia proletaria. A partir de entonces, el cogobierno se convertiría en algo más bien simbólico. Por otro lado, el control de los ministros por las bases de la COB fue motivo de innumerables conflictos. Los ministros elaboraban los informes solicitados por la COB de manera cada vez más periódica y en general presentaban dificultades en orientarse por las resoluciones aprobadas en los congresos obreros.

El desigual cogobierno MNR-COB implicaba cierto control obrero en la gestión minera. En este contexto, control obrero significaba acceder “al conocimiento de las técnicas de administración de empresas y a la fiscalización de los actos de la tecnocracia y la burocracia”. Sus limitaciones se agravaban aún más si tomamos en cuenta que “la nacionalización se produjo cuando las principales vetas se encontraban agotadas y había necesidad de trabajar minerales de baja ley” (Andrade, 2007, p. 196-197). En otras palabras, la administración de las minas quedaba en manos del Estado boliviano, conducido

en los primeros cuatro años por el MNR y en segundo plano la COB, con reducidas perspectivas en términos de autogestión obrera y también de productividad.<sup>23</sup>

Simultáneamente, en el campo, las primeras ocupaciones y asaltos a haciendas ocurrieron en el valle de Cochabamba y se desplegaron por otras regiones del país. El pánico de los latifundistas crecía en la medida en que también recrudecían los esfuerzos en la formación de sindicatos campesinos, una vez que el ejército seguía disuelto y las milicias campesinas todavía detenían sus propias armas. Además del sindicalismo cochabambino, el de Achacahi, en el altiplano, dotado de una compleja imbricación entre el sindicalismo tradicional verticalizado y la fuerte presencia comunitaria andina, igualmente mostró combatividad.

Mezcla de la tradición autogestionaria rural de los Andes y el sindicalismo occidental, los sindicatos de la región altiplánica todavía en la actualidad conforman órganos de poder local que regulan todos los ámbitos de la vida cotidiana. En el sindicalismo de base, aún se mantiene la lógica del *ayllu*<sup>24</sup> (Hurtado, 1986, p. 23). Ya en palabras de Lora (1987), eran auténticos soviets del campo. Respecto de lo anterior, es importante destacar que los primeros sindicatos campesinos se conformaron justamente en la zona de menor permanencia del *ayllu*, es decir, la zona quéchua. En zonas aymaras, como son el norte de Potosí, Oruro y La Paz, se dio la imbricación entre sindicato y comunidad mencionada anteriormente por la menor integración al sistema de hacienda.

La reforma agraria convirtió al sindicato en la forma de organización política en el campo. Expropió a cerca de 1.100 haciendas, redistribuyendo las tierras a los colonos y comunarios indistintamente. De manera general, se procedió a la lógica de la parcelización de las tierras. A lo largo de las siguientes décadas, lo anterior causó la proliferación del minifundio en el altiplano boliviano. El hecho de que por un lado, el proceso de Reforma Agraria haya eliminado el servilismo en las haciendas, por otro, trató de transformar al campesino aymara o quéchua en ciudadano con derechos liberales, articulándolos al mercado interno. La prioridad no ha sido la pervivencia de la sociabilidad andina; la visión

---

<sup>23</sup> En términos industriales, Montero nos recuerda que la nacionalización de las minas post-52 permitió cierto grado de diversificación productiva anclado en el modelo de sustitución de importaciones, sin tanto éxito, pero impactante en la industria manufacturera, que creció a tasas de más de 10% entre 1962-68, hasta declinar y volverse negativa a inicios de los años ochenta (Montero, 2003, p. 22).

<sup>24</sup> El *ayllu* puede ser entendido como la organización matriz de los pueblos andinos, de familias ampliadas asentadas en tierras comunitarias que, en algunos casos, pueden no ser contiguas.

desarrollista del MNR más bien “dio casi por descartada la existencia del *ayllu* y la “comunidad originaria”, que fue vista como “primitiva” y “arcaica”” (Ticona, 2000, p. 26-27)<sup>25</sup>. Asimismo, en dicho proceso, “se les entrega las tierras a los campesinos, pero quedan ahí. Para empezar, reciben tierras improductivas. No tienen dirección técnica, no tienen mercado, no tienen apoyo técnico del Estado. Así nace la Reforma Agraria en Bolivia”<sup>26</sup>.

La participación masiva del campesinado indígena en la etapa revolucionaria inicial dio lugar pocos años después del clientelismo político generado entre el MNR y determinados dirigentes sindicales por medio de tierras devueltas en la Reforma Agraria y alimentos subsidiados. Rivera (1984) y Ticona (2000) clasifican al periodo entre 1952 y 1958 como de “subordinación activa”, conducida por el sindicalismo cochabambino, y el periodo entre 1959 y 1968 es caracterizado por los autores por la naturalización de la nueva estructura sindical paraestatal. Los vínculos dependientes entre el MNR y los sindicatos campesinos funcionarían por doce años, hasta el golpe del general René Barrientos en 1964. En los momentos previos a los regímenes militares, el estado MNRista pasó a ejercer control sobre el campesinado aymara y quéchua a través de organismos como la Comisión de Reforma Agraria y el Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA), proceso culminado con la creación de la tutelada Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB).

El primer encuentro entre obreros y campesinos indios ocurrió en 1953, motivado por la Reforma Agraria, aunque bajo tutela del MNR. En el I Congreso de la COB, realizado solamente en 1954, dos años después de su fundación, la participación campesina registrada fue irrisoria. Los organismos obreros de ese entonces afirmaban con todas las letras que el campesinado no podía cumplir un rol político autónomo y contundente por el retraso económico del campo boliviano y por su condición de propietario de pequeñas parcelas de tierras, las *sayañas*<sup>27</sup>. Por lo tanto, el campesino debería necesariamente subordinarse a la dirección proletaria-minera. Dos años después, cuando los mineros rompieron con el MNR, los campesinos, cooptados por el Estado, aceptaron la “protección” del Pacto Militar-Campesino.

---

<sup>25</sup> Paradójicamente, ha sido la misma Reforma Agraria la que permitió la difusión de la educación rural y en cierto modo la formación de la intelectualidad aymara que se organizaría en torno a núcleos kataristas e indianistas posteriormente.

<sup>26</sup> Entrevista a Macario Tola, La Paz, oct. 2009.

<sup>27</sup> *Sayaña* es el término aymara para referirse a la parcela familiar en el campo.

### **2.1.3. Emergencia obrera y campesina: la Asamblea Popular**

Con la Revolución Nacional de 1952, el Estado-minero se encargó de generar y asignar el consumo del excedente, además de la oferta de empleo productivo. La creación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en octubre de 1952, para explotar y comercializar los minerales, sucedió en el marco de la indemnización a los grandes empresarios mineros, además de la concesión que se les permitió a otras zonas de explotación. Así, la COMIBOL pronto se volvería el nuevo polo minero.

El plan económico impuesto por el imperialismo estadounidense por medio del MNR a partir de 1956 fue una muestra de que el movimientismo se encontraba más preocupado por el asedio al poder del proletariado que por el colonialismo reeditado. El nacionalismo revolucionario se había transfigurado en desarrollismo interno, subyugado externamente. Ante el servilismo y el fracaso de la experiencia de cogobierno, la COB finalmente rompió con el MNR en 1962, provocando el aislamiento del lechinismo en el gabinete gubernamental aunado al acercamiento de los sindicatos campesinos al oficialismo, alentado, es importante aclararlo, por un discurso abiertamente anticomunista en el campo (Rivera, 1984; Zavaleta, 1998).

Una vez concretado el golpe militar de 1964, que dio inicio a la secuencia de gobiernos dictatoriales en Bolivia (1964-82), el gobierno trató de sellar la ruptura con el movimiento obrero al mismo tiempo que subordinó al sindicalismo campesino. A la firma del Pacto Militar-Campesino le siguió el desarme de las milicias campesinas y la transformación de los cuarteles regionales y locales en coordinaciones con los propios sindicatos rurales. El pacto fue utilizado por los militares para conseguir una base de apoyo político a cambio de un programa de ayuda infraestructural denominada Acción Cívica. Se trató sobre todo de la construcción de una amplia base social que sirvió de arma en contra de la movilización minera. En este sentido, el voto campesino fue considerado reserva electoral. El barrientismo fue capaz de establecer un círculo de alianzas políticas entre el campesinado indígena, la clase media urbana y la burguesía. Y por esto fue conocido y autoproclamado “General del Pueblo”.

Tanto en la ciudad como en el campo y las minas, el desmonte de las milicias armadas fue estratégico para mantener la gobernabilidad del MNR. Por lo tanto, el gobierno

actuó primeramente contra el proletariado urbano aglutinado en la COB. El poder jerárquico de la COB fue entonces transferido a los Comandos de Zona y el ejército fue reorganizado a través del cambio del arsenal balístico y el rescate de armamento en poder de civiles (Hurtado, 1986; Lora, 1987).

Sin embargo, en 1965, reivindicando mejorías salariales, el retorno de Lechín del exilio y la suspensión del estado de sitio, la COB declaró huelga y contó con piquetes de choque. Barrientos accionó a las FFAA y realizó bombardeos aéreos contra La Paz y parte de lo que hoy es El Alto, suspendió la prensa y ocupó militarmente las minas de Catavi, Siglo XX y Huanuni con el apoyo de centenas de campesinos del Valle de Cochabamba. Trescientos muertos fue el saldo del conflicto, además de las centenas de mineros que se exiliaron en Argentina. De esta forma, el Plan Económico Triangular, dictado desde EEUU pudo avanzar.<sup>28</sup>

Por otro lado, el pacto con los campesinos fue deteriorándose ante el desastroso manejo político de los militares. En primer lugar, Barrientos intentó implementar el Proyecto de Impuesto Único en 1968, fomentado además por las oficinas de USAID en el país, por medio del cual los campesinos indios pasarían a pagar por la propiedad de la tierra, incorporándose al sistema tributario nacional como contribuyentes. La respuesta vino con la formación del Bloco Campesino Independiente (BIC) en el departamento de La Paz, vinculado con la COB y con partidos marxistas, además de la formación de la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), de orientación maoísta. El pacto se debilitó aún más en 1974, bajo el gobierno de Hugo Bánzer, ante la masacre de campesinos en Cochabamba, conocida como la “Masacre del Valle”, que fue motivada por la subida de los precios de los bienes manufacturados. Contradictoriamente, el evento permitió la apertura de nuevos horizontes de autonomía sindical campesina.

A partir de ese periodo, la COB pasaría a enfrentar un duro periodo de desarticulación. Sus dirigentes fueron perseguidos y exiliados, y los distritos mineros fueron declarados zonas militares. La reacción minera vino en forma de organización clandestina y en la decisión de armarse para enfrentar la dictadura. Durante los años de 1970-1971, cuando los gobiernos militares de Alfredo Ovando y Juan José Torres permitieron un espacio mayor a las organizaciones obreras, el XIV Congreso de la FSTMB

---

<sup>28</sup> Dos años después tuvo lugar otra masacre mientras mineros celebraban los festejos de San Juan.

y el IV Congreso de la COB fueron marcados por el abandono de la perspectiva de cogobierno, hacia un reaceramiento a la Tesis de Pulacayo y mayor autonomía de clase, en una lucha antiimperialista abierta por el socialismo.

El general Rogelio Miranda intentaría un nuevo golpe sobre el gobierno de Ovando, pero fue frenado por la huelga general decretada por la COB. Se estableció entonces el Comando Político de la COB y el Pueblo para debatir el apoyo al posible gobierno del general Juan José Torres. Anterior a las incertidumbres puestas sobre la mesa, el POR, hasta ese entonces influyente en el movimiento obrero cobista, redactó las bases de constitución de lo que se conocería por Asamblea Popular (AP), convocado por la central sindical como el máximo organismo de poder de la clase obrera y las masas bolivianas.

Contraria al parlamentarismo burgués, sus principales medidas en 1970 estuvieron relacionadas con el control obrero con derecho a veto y la conformación de ministerios y milicias obreras. Torres aceptó los puntos establecidos por el Mandato de las Fuerzas Populares, incluyendo el reconocimiento del Comando Político, la universidad, los partidos políticos y el pueblo como miembros del Parlamento Obrero Popular (Lazarte, 1989). El periodo de la AP fue intensamente marcado por movilizaciones y acciones directas por parte de sindicalistas y estudiantes en las principales ciudades del país, incluyendo la ocupación y apropiación del Palacio Legislativo, donde se estableció la sede de la mayor experiencia obrero-popular desde las jornadas de abril de 1952.<sup>29</sup>

El debate acerca de los alcances y límites de la Asamblea Popular merecen análisis propio. Aquí nos interesa señalar que al interior del trotskismo, el POR fue acusado de claudicar ante la supuesta dirección contradictoria tanto del Comando Político como de la propia AP, representada por el Partido Comunista de Bolivia – que pensaba componer el “ala izquierda” del gabinete de Torres – y el Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista (PRIN), recién formado por Juan Lechín, electo presidente de la Asamblea. El PRIN a su vez aludía a la transformación de la AP en Asamblea Constituyente.

---

<sup>29</sup> Andrade (2007) nos indica que la elección de los delegados de la AP ha sido marcada por la hegemonía obrera y fabril, y con severas restricciones al sindicalismo campesino.

#### **2.1.4. El katarismo-indianismo como respuesta del indio en la ciudad**

Pese a la subordinación forzada, parte del campesinado aymara se vinculó al katarismo y al indianismo, movimiento rural y urbano fomentado por sectores medios de La Paz que inició una relectura del pasado colonial y el rol cumplido por las rebeliones indias. Dicha lectura ha sido realizada en centros culturales de La Paz y ha reivindicado la figura de Tupak Katari, líder aymara del siglo XVIII. Podemos considerar al katarismo y el indianismo como productos de la reacción a la discriminación de residentes aymaras en la ciudad.

De hecho, “son estos migrantes los que en la ciudad realizaron una toma de conciencia pro-india, proceso contrario a quienes en las ciudades se “mestizaron” renunciando a su origen campesino e indio” (Mamani; Cruz, 2011, p. 142). La relectura del pasado incluye a la historia reciente relacionada principalmente con la Revolución del 1952 y con la Reforma Agraria. Tanto los sectores kataristas como indianistas en conjunto rechazan el carácter occidental del 1952 una vez que no liberó al indio del trabajo explotado y la opresión racial. Asimismo, denunciaron a la Reforma Agraria, que no pudo liberar al indio del campo.

Según Hurtado (1986), esos mismos jóvenes sufrieron influencia tanto de ciertos dirigentes del MNR que discursaban acerca de la integración del indio como de Fausto Reinaga, proficuo intelectual indianista. A partir de entonces, respaldados por el trabajo comunitario de base, ocuparían la sede de la Federación Departamental de Trabajadores de La Paz (FDTCLP), elegirían como nuevo secretario ejecutivo a Jenaro Flores, agregarían el nombre Tupak Katari a la entidad (FDTCLP-TK) y pasarían a tener alcance político regional en contraposición a la entidad oficialista CNTCB, hegemonizada por el barrientismo. En las Tesis Políticas productos del IV Congreso de la FDTCLP-TK el 1986, se afirmaba que

los campesinos y los obreros hicimos nuestro el ideal de liberación y conseguimos el triunfo de la Revolución del 52, derrotando al ejército en las calles, en el campo de batalla; pero, ¿para quién hemos derramado nuestra sangre? Sencilla y llanamente para el propio grupo o casta dominante, para los nuevos patrones y ricos nepotistas y oligárquicos que se disfrazan de MNRismo” (FDTCLP-TK , 1986, p. 173)

El mismo documento afirma que a partir de ese entonces, al MNRismo se le olvidó el origen étnico-cultural de los aymaras del campo, que pasaron a ser llamados hipócritamente de “hermanos campesinos”. En respuesta al fracaso de la Revolución Nacional en lo que se refiere a la superación de la discriminación hacia el aymara en la ciudad, la federación katarista convoca a

formar nosotros mismos, desde la base, desde cada comunidad, una Organización Revolucionaria capaz de dirigir nuestra lucha hacia la Revolución. Esta organización debe ser totalmente distinta a aquellas izquierdas burguesas que hablan de Revolución, pero que nunca han hecho nada para llegar a esa Revolución; distinta de aquellos partidos que desde hace 50, 30 o 10 años sólo se han servido de nosotros para escalar y conquistas privilegios personales; distinta de aquellos partidos que han manipulado nuestra heroica experiencia y tan solo buscan algunas migajas de los ricos en los parlamentos o en los ministerios; distinta de aquellos partiditos que creen que un grupito de intelectuales pueden reemplazar nuestra lucha con su lucha a 500 kilómetros de nuestras comunidades (FDTCLP-TK , 1986, p. 227).

Dos otros documentos fundacionales del indianismo y el katarismo a fines de los años sesenta e inicios de los años setenta reflejan la articulación política de aymaras urbanos en torno a la crítica del pasado lejano y reciente desde la mirada india anticolonialista. El Manifiesto del Partido Indio de Bolivia (PIB), firmado por Fausto Reinaga en 1969, hace referencia a las ideologías que no parten del indio, incluyendo al nacionalismo revolucionario y al comunismo, y afirma que la única ideología que realmente expresa los intereses indios es la del indianismo revolucionario o radical. Este documento es considerado por Reinaga como manifiesto de una raza y una nación oprimida y explotada por el cholaje blanco-mestizo, entendido como las clases blancas-mestizas que han gobernado el país política y económicamente desde la invasión española. Respecto del binomio 52-53, Reinaga aclara que

los mineros de Catavi, Siglo XX, Huanuni, Milluni, Colquiri, Oruro y los fabriles de La Paz, que en la Revolución del 9 de abril de 1952, habían destrozado al ejército de Bolivia, eran indios de cepa; indios al cien por ciento. Indios que habían emigrado a la mina y a la fábrica, después de sufrir el despojo de sus tierras (Reinaga, 1970, p. 51).

Igualmente plantea que la Reforma Agraria de 1953 fue producto de la movilización india en busca de la colectivización de la tierra. Al parcelizarla y convertir

cada familia en una suerte de pequeños propietarios de su *sayaña*, la Reforma Agraria habría acotado el “espíritu socialista del indio (Reinaga, 1970, p. 53).

A su vez, el documento conocido como Manifiesto de Tiwanacu, de 1973, es una prueba de la búsqueda de autonomía organizativa por parte del katarismo. Divulgado en la clandestinidad, sirvió para la formación de cuadros sindicales kataristas durante la dictadura de Bánzer, considerada la más cruenta en Bolivia. Silvia Rivera afirma que el Manifiesto “constituye la mejor síntesis hasta el momento de las múltiples corrientes reivindicativas que conforman el katarismo (Rivera, 1984, p. 112). Ya Ticona revela que

el katarismo e indianismo vienen a ser un fruto no previsto de la revolución de 52 desde dos perspectivas: es producto de sus conquistas parciales (educación, participación política de los indígenas y campesinos) y producto también del carácter inconcluso de estas conquistas. Las primeras abrieron horizontes y despertaron nuevas expectativas. Su carácter de inconclusas, generó una frustración que hizo resurgir la “memoria larga”, de un plurisecular enfrentamiento con el Estado (Ticona, 2000, p. 46).

En dicho documento, los kataristas revelan la doble faceta de su situación india. Además de la opresión en cuanto pueblo, nación aymara, enfatizada por el indianismo de Reinaga, los kataristas resaltan la explotación clasista. Se refieren a si mismos como indio y campesinos. En cuanto al llamado a la guerra indio-campesina y obrera, Felipe Quispe, líder katarista, defiende:

los nuevos Aymaras no estamos enfermos con un crudo “racismo indio”, no planteamos la lucha de razas de ninguna manera, entiéndanlo bien; aquí nadie está labrando un movimiento racial, nuestros planteamientos no tienen nada de irracional y mucho menos tienen “rasgos medulares del pensamiento fascista” europeo, como algunos intrusos doctorcillos esgrimen para tratar de desprestigiar, ensuciar y tergiversar el verdadero “TUPAKATARISMO-COMUNITARIO”, que llama a la lucha de las Naciones Originarias al lado de las banderas de la lucha de clases (Quispe, 2007, p. 149).

El katarismo de Quispe expresa la condición aymara urbana del indio que nunca rompió el vínculo con el campo, pero que fue absorbido por la economía de mercado a través de su proletarización forzada, independiente del grado de su subsunción al capital en la ciudad. Es cierto que tanto el katarismo de Quispe como el indianismo de Reinaga rechazan el bolchevismo en Bolivia, practicado por partidos obreros como el POR, PIR o

MIR, además del sindicalismo obrero de la COB, especialmente el indianismo. Y ante el bolchevismo, proponen el socialismo indio que echa raíces en la sociabilidad andina de la reciprocidad, redistribución y complementariedad, no el ejercicio del poder “por el mismo cholaje blanco-mestizo disfrazado de “marxista-comunista””, que “lo más que anhela para el indio es **su asimilación, su integración** en la sociedad occidental” (Reinaga, 1970, p. 67). Esto no quiere decir que no contemplen al indio-obrero. Reinaga dice que en Bolivia, la clase obrera constituye la vanguardia india de su liberación, pero nunca separada del indio. No obstante el faccionalismo entre las distintas corrientes kataristas-indianistas, “se puede decir que el katarismo es un ala y ojo del indianismo y, a la vez, el indianismo es la otra ala y ojo del katarismo” (Mamani; Cruz, 2011, p. 162).

Durante la vigencia del Pacto Militar-Campesino, e impulsadas por cierta propaganda anticomunista por parte de la Iglesia Católica y por el propio MNR, milicias campesinas invadieron minas para dar batalla a mineros a mando de los gobiernos de turno. En el auge de su anticomunismo, fracciones indianistas de alguna manera al interior del sindicalismo campesino llegaron incluso a declarar la inminencia de una guerra contra el proletariado.<sup>30</sup> Denunciaban el “racismo obrero” y el “internacionalismo blanco de la COB”.

Por otro lado, el sindicalismo minero alertaba que la postura indianista no se importaba con la lucha clasista y al fin y al cabo se tornaban aliados de la burguesía. No obstante la emergencia del katarismo, la alianza obrero-camponesa ganaría nuevos tonos solamente años después. Prueba del desencuentro histórico es que a inicios de los años setenta, mientras los sindicalistas kataristas luchaban al interior de la CNTCB contra el Pacto Militar-Campesino<sup>31</sup> y por mejores precios agrícolas, los mineros aglutinados en la AP concentraban sus fuerzas en la gestión obrera de la COMIBOL.

### **2.1.5. Proceso de “apertura democrática”**

Aún ante el empuje del movimiento obrero y campesino aymara y quéchua vivida en el país, el golpe de Bánzer en 1971, orquestado desde Santa Cruz, apoyado por la Falange

---

<sup>30</sup>Internamente al indianismo y en cierta medida al katarismo, han existido expresiones partidarias sin expresividad masiva, a saber, el Partido Indio de Bolivia (PIB), el Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) y el Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK), entre otros.

<sup>31</sup> En el VI Congreso de la CNTCB realizado en Potosí, los kataristas finalmente lograron la expulsión de los barrientistas del organismo.

Socialista Boliviana (FSB)<sup>32</sup> y por el ala derechista del MNR, representó un golpe duro contra el sindicalismo en general y minero en particular. Hubo resistencia armada por parte del Comando Político de la COB, pero ésta no estaba a la altura militar de las FFAA.

Ante el golpe de Bánzer, tanto la COB como la Federación de Mineros, organizaciones universitarias y otras entidades sindicales urbanas fueron puestas en la ilegalidad. El banzerismo llegó incluso a imponer sus propios cuadros y obligó a otras organizaciones a que cambiaran de nombre. En relación con los exmiembros de la AP, éstos fueron perseguidos, exiliados, presos y torturados (Lora, 1980). Exiliado en Santiago de Chile, la izquierda minera, campesina y partidaria formaría el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) como prolongación de la línea antiimperialista y revolucionaria de la AP.

En 1974, el autogolpe le permitió al banzerismo un nuevo periodo. Había un contexto de presión externa del presidente de EEUU Jimmy Carter respecto de los derechos humanos contra los regímenes dictatoriales en la región. De esta manera, la oposición al banzerismo ganó fuerzas y todas las perspectivas socialistas se disolvieron en reivindicaciones democratizantes. Tanto la izquierda sindical como la partidaria, excepción hecha al FRA, dejaron a un lado la oposición socialismo versus fascismo a favor del binomio democracia versus fascismo.

Como parte de la creciente movilización y el inicio de una nueva época de alianzas políticas, la huelga de hambre de 1977, que unió a indios obreros y campesinos, logró presionar al banzerismo a la aplicación de la amnistía irrestricta y el libre funcionamiento de los sindicatos. Hurtado destaca que la “huelga de hambre constituyó para los kataristas el inicio de un importante proceso de aprendizaje político junto al proletariado minero y otros sectores explotados” (Hurtado, 1986, p. 79).

A su vez, los kataristas movilizados publicaron el II Manifiesto de Tiwanacu, documento en el cual asentaron las bases para la articulación hacia la apertura democrática y el fin de la dictadura, por lo que el katarismo pasaría a protagonizar la resistencia al gorilismo a fines de los años setenta. En el mismo documento, así como en el V Congreso de la Confederación Campesina Tupak Katari de 1978, la COB es reconocida por primera

---

<sup>32</sup> Fundada en el contexto de la Guerra del Chaco por Oscar Únzaga de la Vega, la FSB es una organización política ultranacionalista de tintes fascistas. Caracterizada históricamente por su anticomunismo, se ha posicionado contra los sectores mineros a lo largo del siglo XX.

vez como la forma más representativa de alianza de los trabajadores del campo, la ciudad y las minas (Hurtado, 1986, p. 83). Es así como el contenido étnico-cultural empezó a ser permeado por el clasista.

En el año siguiente tuvo lugar el Congreso de Unidad Campesina, convocado por la propia COB, del cual nació la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organismo que a la postre se transformaría en la cabeza de un fuerte movimiento social en defensa de los recursos naturales y sus intereses a inicios del XXI. En la Tesis Política del VI Congreso de la CNTCB-TK de marzo de 1978, los kataristas afirmaban:

dejar de ser pobres, sí; pero sin perder nuestra identidad cultural, sin avergonzarnos de lo que somos. No creemos en la lucha de razas. Si el racismo fue el primer paso de nuestra ideología, debemos ahora superarlo porque somos explotados, no porque somos aymaras, quéchuas, cambas, etc., pero fundamentalmente porque hay pocos ricos que nos explotan a aymaras y no aymaras, a quéchuas y no quéchuas, a cambas y no cambas. Tenemos que cambiar esta sociedad de explotación para que nuestros valores aymaras, quéchuas, cambas, etc., puedan ejercitarse y desarrollarse libremente (Hurtado, 1986, p. 98).

En las siguientes elecciones, el campesinado votaría en contra del MNR por primera vez. Lazarte (1989) señala que después de la unidad campesina, el periodo posterior fue caracterizado por la creciente unidad obrero-campesina en las protestas contra la dictadura militar y contra los ajustes estructurales, además de la creciente autonomía de la CSUTCB. Según el mismo autor, cuando la dimensión étnica ya se había establecido y madurado en sus demandas y prácticas políticas, los campesinos se acercaron a la COB, a pesar de cuestionar el vanguardismo obrero.

Integrados al menos oficialmente a la COB, los miembros de la CSUTCB enfrentaron dificultades para lograr el reconocimiento de su fuerte y amplia base social, que desde luego implicaba más representación en la cúpula de la central sindical. Mientras el sector campesino insistía en la necesidad de cambios estructurales dentro de la COB, el sector minero y fabril afirmaba que la disminución de la clase obrera fruto de la reestructuración productiva sería apenas coyuntural y temporaria.

Cuando en 1979 se decretó otra huelga general contra el golpe del coronel Natusch Busch, que desconoció las elecciones anteriores, el campesinado indio adhirió de forma

masiva, utilizando sus propios métodos: bloqueo de caminos, cerco a pueblos y ocupación de territorios no urbanos, sellando la alianza obrero-campesina y anulando finalmente el Pacto Militar-Campesino. Sin embargo, optaron por la salida democrática que, en ese contexto, se expresaba en la Unión Democrática Popular (UDP) (Zavaleta, 1987, p. 237). Debilitado ante la masiva propaganda del oficialismo en el campo, el katarismo fue forzado a aliarse con la UDP de Siles Suazo, un frente democrático-burgués compuesto por el PC boliviano, partidos social-demócratas y populistas.<sup>33</sup>

Posteriormente, la COB convocaría el Comité Antifascista como contraparte del golpe que ocasionó 200 muertes, considerado el enfrentamiento popular más cruel desde 1952. El golpe de Natusch Busch aceleró la radicalización de las masas obreras y campesinas. Sin embargo, ambos organismos se debilitaron cuando solicitaron la suspensión de los bloqueos y no supieron aprovechar la oportunidad para consolidar la célebre alianza obrero-campesina. El proceso terminaría con la negación de la COB ante la propuesta de un gobierno triangular con las Fuerzas Armadas.

La participación de la CSUTCB en el paro contra el golpe de Busch ha sido la primera movilización de dimensión nacional exitosamente convocada por la confederación campesina. Los reflejos del poder de convocatoria de la CSUTCB continuarían en 1980 y 1981 en resistencia a los golpes siguientes y por el fin de la dictadura. En el último trimestre de 1982, el parlamento boliviano en La Paz abrió sus puertas nuevamente para que asumiera Hernán Siles Suazo como presidente constitucional. A inicios de la misma década, la COB tuvo sus instalaciones asaltadas y demolidas y sus dirigentes continuaron siendo asesinados, torturados o exiliados. Las décadas de 1980 y 1990 estuvieron marcadas por el debilitamiento sindical y el protagonismo parlamentario de los partidos liberales-burgueses. Otro sector que en conjunto con mineros, fabriles y campesinos ha estado presente a lo largo del desarrollo del Estado de 1952 es el llamado sector gremial.

---

<sup>33</sup> En 1983, durante el gobierno democrático de Siles Suazo y la UDP, la COB ha sido una vez más convocada a hacer parte de un proceso de participación popular que contaba con la presencia de la CSUTCB. La condición era la ejecución de los puntos presentes en el Plano de Emergencia Económico Social. Dicho proyecto fue convertido en humo por parte del gobierno de turno.

### **2.1.6. La lucha de los gremiales (minoristas y artesanos)**

Compuesto esencialmente de comerciantes minoristas, vivanderos y pequeños artesanos, el sector gremial han estado presentes históricamente en el Altiplano, desde las ferias rurales regionales de antaño y el abastecimiento de distritos mineros en la colonia, hasta las actuales calles urbanas de Oruro, Potosí, La Paz y El Alto. Nos toca ahora discurrir acerca de su histórico organizativo. Su visibilidad ha aumentado vertiginosamente ante flujos migratorios sin interrupción y el ya comentado ajuste neoiberal de mediados de los 80's. El sector puede ser considerado, por lo tanto, “un producto histórico de vieja data que refleja la forma de articulación de las actividades económicas de las poblaciones nativas con los modos de producción de configuración externa” (Rojas, 1995b, p. 9).

Por un lado son visibles a los ojos de cualquiera que transita por las calles de ciudades como las mencionadas arriba; por el otro, no siempre han sido considerados por los gobiernos de turno. Son los artesanos y los comerciantes minoristas quienes detienen históricos de organización y lucha; los primeros tienen su histórico organizativo desde inicios del siglo XX bajo la doctrina libertaria y en ese entonces animaron a los minoristas, quienes conformaron organizaciones para luchar por su espacio de venta.

En el trabajo que aborda el potencial democrático<sup>34</sup> del llamado “sector informal urbano” desde una perspectiva histórica, Rojas comenta que los “actuales artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos<sup>35</sup> nacidos en La Paz como en El Alto, son descendientes de padres migrantes, lo que confiere al sector un rasgo peculiar en términos de contenido ideológico, cultural y social” (Rojas, 1995, p. 109). Mientras que dentro de los artesanos hay distintas formas organizativas – mutuales, gremios y centros artesanales -, en los minoristas predomina la asociación (o sindicato) en cuanto a organización de base en las ferias abiertas y los mercados y tambos cerrados, éstos regidos muchas veces por el maestrerío<sup>36</sup>. La asociación suele estar regulada geográficamente por cuadras por tipo de productos o, en casos más complejos, “adoptan criterios de reclutamiento basados en relaciones informales de parentesco o paisanaje” (Rivera, 1996, p. 209). En ambos sectores,

---

<sup>34</sup> Según Rojas, se entiende por potencial democrático a “la capacidad de participación e influencia de un actor social en el proceso de construcción y consolidación de la democracia” (Rojas, 1995, p. 104).

<sup>35</sup> Las y los vivanderos son trabajadoras y trabajadores que venden comida elaborada en las calles (hot-dogs, hamburguesas, etc.).

<sup>36</sup> División jerárquica y arbitraria en mercados y tambos, dividida en Maestra Mayor y Menor, Alcaldes Mayor y Menor, Secretarías de Hacienda y Actas, Portaestandarte y regidores.

artesanos y minoristas, hay organizaciones intermedias o federaciones, confederaciones o uniones nacionales.

En lo que se refiere a los artesanos, sus primeras organizaciones fechan de 1852, como sastres y carpinteros. Se constituyeron en pequeños órganos de poder y bajo el gobierno de Manuel Belzú (1848-1855) ganaron más espacio en la sociedad de ese entonces. En 1860, organizaron la Junta Central de Artesanos de La Paz, que daría lugar a la primera Federación Obrera de La Paz en 1908. En palabras de Rojas, “el movimiento obrero boliviano tuvo en las organizaciones artesanales, sus primeras formas de expresión política y de lucha” (Rojas, 1989, p. 5). El artesanado se organizaba en el proceso productivo en forma de maestranza, de acuerdo a los escalones: Maestro Mayor, Oficiales, Operarios y Aprendices.

Durante el periodo liberal entre 1900 y 1920, nuevas organizaciones son formadas bajo los principios del mutualismo y el anarquismo, además de experimentar nuevas formas organizativas específicamente obreras. Entre historiadores del movimiento obrero en Bolivia, ya es reconocida la lucha por la jornada de ocho horas emprendida por la FOL, compuesta esencialmente de artesanos, pero cuya demanda se relacionaba directamente a los obreros-fabriles. Difundido hasta entonces entre artesanos y pequeños comerciantes en La Paz, Oruro, Cochabamba y Sucre y mientras estuvo vigente, el anarquismo coadyuvó a que los trabajadores afiliados a la FOL actuaran como protagonistas en términos político-laborales.

Bajo el manto libertario, las organizaciones gremiales desarrollaban actividades y talleres político-pedagógicos, función dejada a un lado en nombre del pragmatismo centrado en defensa de los puestos de venta del sindicalismo posrevolucionario. En este sentido, y en conformidad con Rivera, las actuales asociaciones de minoristas pueden ser vistas como una “versión empobrecida de los sindicatos de gremio que proliferaron en los años 20 y 30” (Rivera, 1996, p. 210). Ante la pérdida de hegemonía para el movimiento obrero-fabril de corte bolchevique, la experiencia gremial de la FOL se debilitó hasta su división efectiva en 1983.

La Revolución de 1952 influyó en las organizaciones de las clases trabajadoras en general. Los gremios y asociaciones ya existentes no fueron excepción. En 1953 fue conformada la Federación Sindical de Trabajadores Gremiales de La Paz, integrada por

minoristas y vivanderos y bajo fuerte control del MNR. Los estudiosos de la historia del movimiento obrero-artesanal destacan la fundación de la Confederación de Gremiales de Bolivia en 1955, incorporando a los comerciantes minoristas un año después y extendiéndose a Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia. Dicho organismo, también monitoreado por el MNR, dio inicio a un largo periodo todavía no finalizado de clientelismo entre gremiales y gobiernos de turno. Esa ha sido una de las expresiones del tránsito desde el gremialismo/mutualismo anterior a la organización político-partidaria.<sup>37</sup> En el binomio 1976-77, la Confederación aglutinó en su entorno los sectores gremiales y pasó a denominarse Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia (CSTGACMVB).

Con respecto al universo del comercio minorista, Rojas apunta el año de 1919 como fecha de las primeras organizaciones, paralelas a la formación de sindicatos ferroviarios y mineros. En otro estudio sobre los minoristas paceños, Pereira señala la importancia del movimiento de minoristas en el contexto de la caída de Villarroel y el ascenso de Paz Estenssoro. Algunas fracciones del movimiento incluso se integraron al MNR (Pereira, 2009, p. 28). Aunque presentes desde hace varias décadas, el comercio minorista a su vez acompaña el proceso de urbanización de las ciudades bolivianas a partir de los años 60 y 70, época en que empieza a ser notorio. En los años ochenta, invadió las banquetas y le quitaron espacio y visibilidad a los mercados cerrados de antaño, básicamente en zonas céntricas.

En el espacio abierto ocupado fueron organizadas las primeras ferias en los moldes de las ferias rurales, al tiempo en que empiezan los conflictos con la Alcaldía y la Policía Nacional, además de los vecinos y peatones. En el caso de los minoristas de puesto fijo, el conflicto abarcó también a los ambulantes. Si tomamos en cuenta el periodo de los años ochenta en adelante, los trabajadores comerciantes se han concentrado en unidades familiares y semiempresariales. Y aunque hoy en día no sea algo novedoso, el comercio sin

---

<sup>37</sup> Es importante mencionar que la recién fundada Confederación de Gremiales no respetó la autonomía anterior de las mujeres comerciantes y vivanderas que conformaban la Federación Obrera Femenina, así como también desconoció su importancia en la fundación del sindicalismo del comercio minorista. Con ello, gran parte de los sindicatos de recoveras y viajeras del altiplano se fragmentó y se alejaron de la federación femenina. Como ya fue mencionado en el capítulo 2, el proceso de la Revolución de 1952 fue perjudicial sobre todo a las organizaciones obreras libertarias, una vez que fueron forzosamente integradas a la COB.

duda se desarrolla bajo condiciones distintas de las de décadas pasadas, aparte de haber convertido ciudades como El Alto en importantes centros urbanos comerciales (Rojas; Fernández, 1992, p. 10-13).

Ante el acaparamiento del MNR y de la lucha por autonomía organizativa, los primeros congresos de la Confederación de 1955 fueron realizados solamente en 1967, 1969 y 1973. Rojas (1995) señala la creación en 1968 de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales del Comercio Minorista de Bolivia, paralela a la Confederación anterior, cuando el comercio en las calles empezaba a marcar presencia. La Confederación de 1955, que agrupaba minoristas y artesanos, participaría de la Asamblea Popular a inicios de los años setenta en un intento de acercamiento al movimiento obrero boliviano. Posteriormente, bajo dictadura militar, el gobierno banzerista prohibió las actividades del organismo.

Durante el periodo dictatorial, la postura política de los gremiales fue ambigua. El dirigente Julio Patiño afirma que:

el sector gremial estaba tradicionalmente en manos de la derecha. Mientras se bombardeaban los centros mineros, los gremiales daban apoyo a los gobiernos de facto, mientras se lanzaban medidas en contra de la economía nacional los gremiales salían en apoyo del gobierno de turno (Baldivia, 1987, p. 65).

Por otro lado, el mismo periodo estuvo marcado por la presencia de “coordinadores laborales” en las organizaciones obreras y también gremiales, lo que generó el rechazo de la Confederación hacia el régimen y la incorporó al bloque de organizaciones que luchaban por el retorno democrático en el país, integrándose al movimiento obrero y popular a fines de los años setenta e inicios de los años ochenta. Además del movimiento cobista y fabril, los gremiales, minoristas y vivanderos tuvieron su participación en el proceso de “reapertura democrática”, lo que les sirvió en el sentido de lograr cierto grado de autonomía del movimientismo y de la estructura partidaria.

En dicho periodo, las dos organizaciones matrices decidieron por bien aglutinarse alrededor de la COB. No obstante el acercamiento, la central obrera todavía mantuvo vigente el vanguardismo minero y la clasificación clasista, ignorando la representatividad masiva de las organizaciones de minoristas y artesanos. La relación entre la COB y la Confederación de Gremiales (la de 1955) ha sido repelente. Aunque afiliada, la

Confederación no ha sido tomada en cuenta en la historia de la COB, cuya hegemonía minera trató de ignorar las peticiones y representatividad gremial a lo largo del tiempo.

Aún después de la dictadura, la COB trató de ignorar y pasar por alto la relevancia de los gremiales, anclada en sus referencias clasistas y privilegiando la lucha de los trabajadores asalariados. Ya la relación con la Federación de Mineros y centrales sindicales campesinas ha sido casi nula. Dice Rojas:

pese a la crisis del sindicalismo y la pérdida de la centralidad política de la COB, la posición de esta entidad matriz respecto al rol, participación y “peso” del sector cambió escasamente. Tanto el discurso político como los pliegos petitorios presentados al gobierno no observaban la importancia del sector (Rojas, 1995, p. 148).

Según Rojas, el comportamiento organizativo de los gremiales en el periodo puede ser caracterizado como movimiento social por la lucha por intereses y objetivos comunes, entre ellos “el tratamiento tributario justo, la otorgación de puestos de venta fijos, la organización de espacios feriales, el goce de seguridad social, la dotación de viviendas, el respeto a la artesanía popular y tradicional [y] la otorgación de créditos de fomento” (Rojas, 1995, p. 130), demandas que evidencian un sector que negocia y demanda al Estado, pero posee rasgos distintivos del movimiento sindical-fabril.

Dado el crecimiento del comercio callejero en los años ochenta, su hegemonía dentro de la Confederación y las críticas a su tradición organizativa, los artesanos decidieron conformar otro organismo aparte de los comerciantes y vivanderos. En 1983, durante el VI Congreso de la Confederación de Gremiales en Cochabamba, fundaron la Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia, afiliándose a la COB. “La lucha por el impuesto único, la protección de los recursos naturales, la creación de una Caja de Seguridad Social Artesanal y fundamentalmente, la elaboración de un proyecto de legislación artesanal; fueron los principales objetivos de la naciente confederación” (Rojas, 1989, p. 12), además del reclamo por la dignidad artesanal.

Como respuesta a la crisis promovida por los despidos masivos, en 1989 durante un Congreso de Unidad, los artesanos reunidos tanto en la Confederación de Gremiales como en la Confederación de Trabajadores Artesanos conformaron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSUTAB). Hacia mediados de los años noventa, un 90% de las organizaciones artesanales estaban afiliadas a la CSUTAB. La

unificación permitió la renovación de los directivos y le dio nuevo oxígeno al artesanado del país. Diferentemente de las organizaciones obreras y artesanales, las agrupaciones minoristas afilian al comerciante, sus cónyuges y/o trabajadores familiares no remunerados. Hacia 1991, las afiliadas mujeres ocupaban más de tres cuartas partes del total de miembros en cada asociación (Rojas; Fernández, 1992, p. 16).

Mientras que las asociaciones de base del comercio minorista se proliferaron y poblaron las calles y ferias urbanas diarias, de fin de semana y dos días semanales, muchos trabajadores artesanales migraron a los servicios. Rojas puntualiza la ausencia de autonomía financiera/material a causa de los pocos afiliados que aportan y la falta de representatividad entre los afiliados como elementos que intensificaron la crisis organizativa, proponiendo el fortalecimiento de los vínculos con el movimiento popular y la COB, Centrales Obreras Departamentales (CODs) y Centrales Obreras Regionales (CORs).

Contrariamente, a inicios de los años noventa, el mismo autor consideraba que la confederación de minoristas se encontraba cohesionada en torno a objetivos comunes, poseía autonomía material relativamente estable y dirigencia activa. Los minoristas organizados poseían capacidad de convocatoria y movilización, condición que les permitía obstruir el flujo de capital en importantes centros urbanos del país. Según datos levantados por investigadores del CEDLA, hacia 1989, el 93% del comercio en general, incluyendo el comercio al por mayor, era representado por el comercio minorista, “dato que demuestra la lógica particular de distribución y circulación de los productos en el país” (Rojas; Fernández, 1992, p. 2).

El principal tema de articulación, movilización y negociación con el Estado fueron los impuestos, anclados en la lucha de la Confederación de Gremiales en contra la doble tributación. En 1990, el organismo logra la aprobación del DS 22555, que establece el Régimen Simplificado y libera de doble tributación a las unidades económicas con montos de inversión inferiores a 1000 bolivianos, fijando nuevas escalas en el cobro de impuestos. Otros elementos que suelen conformar una asociación incluyen la defensa del espacio de venta contra la Alcaldía, la obtención, defensa, control y mejoramiento del entorno de puestos de venta callejeros, la consolidación de proyectos sociales y organizativos relacionados con sede propia, estatuto orgánico, viviendas para los afiliados, atención

médica, guarderías, obtención de créditos entre otros (Rojas; Fernández, 1992, p. 25). En menor grado están los conflictos generados con los maestreros de mercados y los vecinos circundantes.

La actividad política diaria en las calles por la solución de problemas interpersonales y/o con la Alcaldía le da vida a las asociaciones. Entre más conflictos, más organización y más construcción de identidad; hay cierta subjetividad colectiva generada en el seno de las asociaciones por el sentido autogestivo de defensa que adquieren sus miembros. Nuestros investigadores señalan que

estos elementos podrían también avizorar la potencialidad de estas organizaciones en el futuro de mediano y largo plazo, como sujetos colectivos aún prevalentes y con significativa participación, considerando las tendencias económicas actuales de ajuste en el país que no contemplan políticas de reinserción de grandes contingentes de desocupados a la actividad productiva (Rojas; Fernández, 1992, p. 86).

En todas las organizaciones matrices y más aún en las organizaciones de base, el flujo de dirigentes es alto, lo que dificulta la cristalización de una capa directiva alejada de sus afiliados. Además, hay sanciones a los directivos, que incluyen “llamadas de atención”, multas, suspensión temporal o expulsión definitiva. Entre sus formas de lucha están las marchas, bloqueo de calles, mítines, huelgas de hambre y la declaración de estado de emergencia a nivel federativo o confederativo.

A lo largo de los años noventa, la movilización minorista siguió llamando la atención de estudiosos por las peculiaridades de su forma organizativa, expresadas en una suerte de sindicalismo flexible con mayor capacidad de renovación de dirigentes. No obstante la presencia de exobreros, las inúmeras organizaciones que han florecido las últimas dos décadas y media han asumido características propias de las mujeres y jóvenes. En el mismo sentido, la atención dada por partidos a esas facciones de la clase trabajadora, no tanto por su peso económico, sino por su peso electoral en la sociedad boliviana posdictaduras, ha sido creciente.

Respaldado por el clientelismo forjado con partidos de corte populista de los años noventa en el altiplano de Bolivia – esencialmente UDP, Condepa<sup>38</sup> y Unión Cívica

---

<sup>38</sup> En el ámbito de La Paz, las relaciones de la Federación de Gremiales paceña con el gobierno de Condepa – Conciencia de la Patria - en 1994, de la alcaldesa Mónica Medina de Palenque, resultó en acuerdos históricos, que incluyeron la inamovilidad de puestos de venta y legalización de la ocupación del espacio urbano a comerciantes establecidos hasta 1994.

Solidaridad (UCS), además del MNR –, la Confederación de Gremiales logró marchas multitudinarias e intensificó la lucha por los puestos de venta de sus afiliados. En el presente, “las organizaciones gremiales adquieren un protagonismo importante dentro de la Central Obrera Boliviana (COB), que permitió una mayor legitimación al movimiento gremial, debido a la creciente movilización social y de su capacidad de convocatoria, incluso mucho más que la propia COB” (Pereira, 2009, p. 34).

A finales de los años noventa, la asociación entre partidos y gremiales se debilitó. En 2004, la Confederación de Gremiales de Bolivia fundó su propio partido político, el Movimiento Popular 12 de Febrero, compuesta de choferes y gremiales, anunciando candidaturas para Potosí, Oruro y El Alto. En todo caso, como informa el cuestionario de Pereira (2009), el potencial aglutinador de asociaciones y gremios de minoristas en La Paz - y en menor grado en El Alto - se expresa en su porcentaje de afiliados (Cuadro 1).

La década de 1980 fue precisamente el periodo de mayor conformación de organizaciones informales por la adopción de la estrategia de generación de autoempleo. En el periodo del gobierno de la UDP (1982-85) fueron conformadas cerca de 120 organizaciones gremiales en El Alto y La Paz, que heredaron la organicidad sindical, sin dejar de promover nuevos modelos organizativos (Rojas; Baldivia, 1995, p. 134).

**Cuadro 1 - Pertenencia a un sindicato según la ciudad de residencia**

<b>Pertenece a un gremio</b>	<b>El Alto</b>	<b>La Paz</b>	<b>Total</b>
Sí	46,2	72,0	63,8
No	53,8	28,0	36,2
Total	100,0	100,0	100,0

**Fuente: Pereira (2009)**

Por lo tanto, lo anterior significa que hay mucho más organizaciones que las formadas por asalariados y campesinos. Hacia inicios de los años noventa, eran cerca de 360 las organizaciones de comerciantes minoristas en La Paz y El Alto, según fuentes de la Alcaldía y de las propias federaciones; casi 60 mil comerciantes minoristas estaban afiliados solamente en La Paz (Rojas; Fernández, 1992, p. 15).

En investigación realizada específicamente con asociaciones de minoristas ambulantes de El Alto, Luna revela sus trayectorias sociales y laborales, éstas últimas entendidas como “la biografía de los acontecimientos relacionados al trabajo del sujeto

comerciante” (Luna, 2007, p. 15). El estudio menciona la primera asociación de ambulantes, fundada en 1987: la Asociación 30 de Enero, con más de 300 afiliados actualmente, y la Asociación 20 de Julio, de 1993, con 120 afiliados actualmente.<sup>39</sup> Hacia 2007, el autor señala la existencia de 14 asociaciones de comerciantes ambulantes en El Alto compuestas básicamente de extrabajadores “relocalizados” (despedidos) y migrantes del área rural (Luna, 2007, p. 30). El comercio minorista alteño, ya sea ambulante, viajero, de puesto fijo o de tienda, se incrementó exponencialmente en la Ceja en los años ochenta, zona alteña central que juntamente con los barrios Ciudad Satélite y 16 de Julio, concentra el comercio de la ciudad en general.

En palabras de Rojas:

hacia fines de los 90’s, tanto los minoristas como los artesanos tenían una influencia importante del sindicalismo, de la forma-sindicato propia del trabajador asalariado-obrero. Sin embargo, a partir de los 2000, se ha notado un alejamiento entre esas organizaciones. Así es que se han formado asociaciones de microempresarios, que antes eran artesanos, carpinteros, mecánicos, etc. Esto también por influencia de las microfinancieras, que para objeto de préstamo, de crédito, han ido creando condiciones de tal modo que algunos grupos de pequeños productores se conocen grupos de microempresarios.<sup>40</sup>

Hoy por hoy, la Federación de Gremiales de El Alto es la organización con más convocatoria en la ciudad y la columna dorsal de la Central Obrera Regional (COR-El Alto). Además, suele actuar de forma independiente. Está formada por el Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos de El Alto (*COCEDAL*), Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (*FUTECRA*), Federación de Mercados y organizaciones de desocupados. Según Juana Cabrera, dirigente gremial de la COR-El Alto, hacia 2009 eran cerca de 400 las organizaciones afiliadas a los Gremiales. Se destacan las organizaciones gremiales de la Ceja de El Alto, a saber, la Tiwanacu, 10 de Agosto, Ceja El-Alto (la organización más antigua que en ese entonces cumplía 50 años), 2 de Marzo, 16 de Julio, que aglutinan de 600 a 1000 afiliados cada una y trabajan comercializando ropas y autorepuestos.

---

<sup>39</sup> El autor igualmente menciona la Asociación de Comerciantes de Puestos Fijos Tiahuanacu, fundada en 1984 en la ciudad de El Alto.

<sup>40</sup> Entrevista a Bruno Rojas, La Paz, oct. 2009.

Buscan mantener su autonomía ante la COB, aunque siempre acatan las convocatorias de la central obrera matriz. Cabrera destaca el Decreto 21060 como elemento que les hizo crecer hasta alcanzar la mayoría en términos numéricos en la ciudad. Si en los años ochenta, el gobierno populista de Condepa les creaba problemas, ahora afirma que eso es cosa del pasado, que han roto la dictadura sindical y la del municipio. Según ella, los gremiales alteños son más respetados y no sufren tantos abusos como en La Paz.<sup>41</sup>

En relación a las fortalezas y debilidades del sector organizado, otro estudioso de El Alto sostiene que

los llamados informales y pequeños productores en El Alto han recorrido a la forma-sindicato, pero han participado de forma muy activa en los movimientos sociales junto con estudiantes y amas de casa. Pero, ¿cuánto ha servido la forma-sindicato a esos sectores? Casi nada. ¿Cuánto les sirve la forma asociativa, que es la forma-sindical convertida en asociación? Muy poco. Les sirve como instrumento de negociación con el gobierno, pero no les dan salida. Pienso en los ropavejeros y los pequeños productores. Porque no son sindicato y no son movimiento social. No les dan salida política. Hay un sentido gremial por su propia condición gremial. La forma asociativa-gremial ha sido la mejor en el plano de la apertura de mercados. El ropavejero participa en su asociación pero se convierte en movimiento social cuando tiene que hacer una movilización frente al gobierno. Y rápidamente suman adeptos. Para abrir la compra estatal al sector, han sido esos gremios, consejos, comités, asociaciones, son los que han permitido mejores condiciones de reivindicación. Son mecanismos más eficaces. Pero no son por esencia combativos.<sup>42</sup>

Eso demuestra el pragmatismo en el cual están envueltos los gremiales, no obstante su alta capacidad de convocatoria y su “vocación asociativa”. De la misma forma, han estado enmarcado en demandas locales sin interlocución efectiva en el ámbito regional y nacional. El exguerrillero Macario Tola explora el tema en términos similares:

el problema es que la fuerza, la capacidad organizativa ya no está en las minas, ya no está en la COB, está ahora en el sector campesino y el sector informal. La diferencia en Bolivia es que el sector minero ha difundido sus formas de organización. Esa es la ventaja en Bolivia, nadie está desorganizado. Lo único que falta es que piensen en un solo objetivo. No piensen de manera sectaria. En todo caso, la fuerza gremial es la fuerza movilizadora, pero no la fuerza que puede definir cualquier proceso de cambio. El sector informal tiene la capacidad organizadora, pero no tiene la capacidad ideológico-política. El sector campesino y obrero sí lo tienen.

---

<sup>41</sup> Entrevista a Juana Cabrera, El Alto, oct. 2009.

<sup>42</sup> Entrevista a Mauricio Antezana, La Paz, oct. 2009.

Les falta definir qué es el capital, qué es el Estado, qué es la comunidad. El campesino y el obrero lo saben. El gremial no tiene esta visión todavía.<sup>43</sup>

Analizada la lucha sindical en el campo y la ciudad a lo largo del siglo XX, nos toca profundizar en los pormenores de la reestructuración productiva y analizar su impacto estructural en la organización sindical de trabajadores. Posteriormente, en el siguiente apartado, se hará referencia a los aspectos organizativos que impactaron el sindicalismo obrero altiplánico. Esto sucede a mediados de los años ochenta y hacia la década de 2000 en la que se afecta directamente la composición y forma de las luchas del ciclo rebelde boliviano.

## **2.2. La reestructuración productiva decretada por el Estado: impactos socio-económicos en el mundo del trabajo**

En este apartado trataremos de describir y analizar el impacto de la reestructuración productiva sucedida en Bolivia en los años ochenta a partir de los ajustes estructurales decretados por el Estado. El propósito es comprender el cambio en la base técnico-material del proceso productivo operado tanto en la minería como en la industria y que luego actuaría como trasfondo de la crisis sindical, especialmente sobre el desmantelamiento político de la COB.

Empezamos por la crisis del estaño. En el periodo que inició en 1952 y recurrió toda la fase dictatorial, el excedente minero en manos del Estado fue utilizado tanto para la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)<sup>44</sup> como para el desarrollo de la agroindustria en el Oriente del país, especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde a partir de mediados de los años sesenta tienen presencia los mercados de azúcar y algodón. Sin embargo, fue durante la dictadura banzerista (1971-1978) que la agroindustria ganó su mayor impulso. Entre 1971 y 1974, Bolivia también vivió un periodo de bonanzas en las exportaciones por las altas de los precios internacionales del café y la madera, además de las ventas de gas a Argentina, que más tarde se extenderían a Brasil.

---

<sup>43</sup> Entrevista a Macario Tola, La Paz, oct. 2009.

<sup>44</sup> La YPFB fue creada en el contexto del decreto de nacionalización del petróleo y de todos los bienes de la Standard Oil Co. of Bolivia durante el gobierno de David Toro en los años treinta.

(Grebe, 1983, p. 107-108). Por lo tanto, durante este patrón de acumulación, hubo igualmente oportunidad de desarrollo de una burguesía minera en el altiplano, asociada al capital financiero y comercial.<sup>45</sup>

A la postre, el gas se convertiría en la única fuente estable de generación de excedente para Bolivia, cruzando toda la etapa neoliberal y motivando las luchas enmarcadas en el octubre de 2003 durante la llamada “Guerra del Gas”. Las causas apuntaladas como factores de crisis en los minerales pueden ser resumidas en: a) la falta de capacidad productiva y de modernización de la COMIBOL a partir de los años cincuenta, aunadas a b) la disponibilidad decreciente de minerales, c) la ausencia de más prospecciones de yacimientos y d) la importancia que obtuvieron los mineros de superficie en relación a los de interior-mina. (Grebe, 1983; Toranzo, 1989; Villegas; Aguirre, 1989; Villegas, 1999).

En los mismos términos, el autor sostiene que el patrón de acumulación de la Revolución Nacional de 1952 engendró una economía sin vocación productiva, por lo que la crisis de la minería repercutió en la crisis de la economía del país como un todo. Para Grebe (1983), se aplicó durante dicho periodo en Bolivia un modelo de excedente sin acumulación. Estos autores insisten en que, en lugar de desarrollar la industria productiva, la base extractiva minera intensificó la estructura históricamente heterogénea e improductiva de Bolivia, compuesta de una lógica propiamente capitalista (industrial y agroindustrial) y otra lógica familiar-comunitaria propia del campo, pero que ante el flujo migratorio constante a las ciudades, se ha explayado al comercio ambulante, los servicios y las micromanufacturas que pululan los centros urbanos del eje del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Antes y después del 52, el ciclo productivo del estaño estuvo marcado por una serie de hechos históricos. El periodo anterior fue marcado por la nacionalización de la Standard Oil en 1937, la fundación de la Corporación Boliviana de Fomento en 1942 y de la ya comentada COMIBOL en 1952. En el periodo posterior a 1952, la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil en 1969 fue determinante para establecerse el monopolio estatal en lo que se refiere a los hidrocarburos.

<sup>46</sup> No obstante los matices, los autores trabajados han mantenido un enfoque productivista y, en el peor de los casos, economicista; es decir, han privilegiado el tema de la industrialización de Bolivia, la generación y apropiación del excedente sin considerar adecuadamente el rol cumplido por las luchas sociales en el país, ya sean sindicales o no. El enfoque productivista, tanto de Grebe como de Villegas no logran superar cierta visión neodesarrollista basada en el extractivismo industrial. Esto implica en que pocas veces se cuestiona la industrialización capitalista de por sí. Tampoco se le da importancia a las condiciones objetivas y subjetivas en que sucede la proletarianización indígena y las organizaciones conformadas para contrarrestarlas en el campo y la ciudad. Son justamente estos límites que presenta todo enfoque meramente macroeconómico. Además de esto, metodológicamente, está la insistencia en el concepto de excedente. En sus estudios sobre el tema,

El patrón de acumulación privatizador se inició oficialmente a partir de 1985 por una serie de decretos. El más conocido es el Decreto Supremo 21060, que tuvo como primer propósito la estabilización de la inflación a través del traspaso de la regulación económica al mercado. Bajo el mando de Gonzalo Sánchez de Losada (Goni) en el Ministerio de Planeación, el 21060, de 29 de agosto de 1985, estableció que las empresas del sector público y privado pudieran convenir o rescindir libremente contratos de acuerdo a la Ley General del Trabajo, además de prohibir el incremento de personal en el sector público. En el trasfondo, el estilo de desarrollo adoptado mediante reestructuración productiva pretendió elevar gradualmente la rentabilidad del capital, patrocinado y fomentado por el gobierno de EEUU, el Consenso de Washington, la banca privada y organismos financieros multilaterales.

En Bolivia, el paquete económico neoliberal propuesto en 1985, relacionado con lo que se llamó Nueva Política Económica (NPE) redefinió las fronteras entre lo público y lo privado. Las principales medidas incluyen:

**-la libre contratación de personal**, que también abarca la rescisión de contratos por parte de la empresa. Ante eso, los empleos asalariados pasan al descubierto, es decir, ya no tienen la seguridad que le daba el derecho laboral previo, quedan al margen de la responsabilidad tanto del capital como del Estado;

**-la consolidación de los bonos al salario básico**: eso da lugar a que en el sector industrial formal, parte del salario sea pagado como bono de productividad. De esa forma, la inestabilidad del mercado y los riesgos del empresario capitalista son todos transferidos al trabajador. Eso va de la mano de la flexibilización del trabajo que ocurre tanto en la periferia como en los países centrales;

**-el congelamiento salarial**, complementado por la eliminación de las subvenciones a los productos de la canasta familiar. Los cortes en el llamado “salario indirecto”, expresado en las subvenciones a las *pulperías*, afectan igualmente al trabajador. Asimismo, el incremento de tarifas y de precios de servicios públicos se reflejan en la baja

---

Grebe sostiene que “toda la discusión puede articularse en torno a la categoría del excedente. No utilizo la categoría de plusvalía, puesto que, precisamente, el atraso del capitalismo en América Latina consiste en que no todo lo que apropián las clases **no trabajadoras** posee los atributos de la plusvalía. La extracción de plusvalía es una función del capital y se desarrolla a lo largo de épocas típicas del modo de producción capitalista” (CEDLA, 1988, p.87). Ello parece más bien estar vinculado a cierta herencia zavaletiana que utiliza el concepto de excedente como mediación entre el estado y la sociedad civil al analizar lo nacional-popular en Bolivia.

salarial. Lo anterior golpea indirectamente a los trabajadores precarios no asalariados y/o cuentapropistas, una vez que una disminución de salarios reales afecta el mercado de bienes ofrecidos por pequeños productores en la ciudad, además de debilitar el comercio minorista;

**-la descentralización de los procesos productivos de las grandes empresas y la ampliación generalizada del trabajo precario, flexible e inestable:** los derechos laborales duramente conquistados como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, descanso sabatino, salario dominical, quinquenios y desahucio pasan a ser beneficio de unos pocos, básicamente del funcionalismo público. La dispersión productiva promovió la dispersión de la fuerza de trabajo y los medios de producción, con lo cual la base técnico-material del trabajo contemporáneo es profundamente cambiada. Ni siquiera el contrato suele existir; en estos casos, los acuerdos son meramente verbales. El fenómeno del trabajo precario o lo que se llegó a llamarse “sector informal urbano” es anterior a la NPE y al neoliberalismo en Bolivia. Sin embargo, una vez que las políticas fondo-monetaristas han sido aprobadas, se intensificó;

**-la liberación de los precios de todos los bienes y servicios además de la libre importación de bienes:** el contrabando en las fronteras bolivianas es considerado una actividad tradicional. Sin embargo, fue por primera vez legitimado ante la reestructuración productiva. Al incentivo del contrabando le siguió la ausencia de incentivo a la producción para el mercado interno, especialmente la producción relacionada con textiles;

**-la relocalización/despidos de mineros de la COMIBOL, fabriles y manufactureros en general:** los números varían, pero dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Se calcula entre 30 y 40 mil mineros despedidos en total, de los cuales 27 mil eran de la COMIBOL, cerca de 3 mil mineros de la minería mediana (reducción a la mitad) y 10 mil puestos de trabajo de la minería chica. Esto provocó la desaparición de la COMIBOL y el consecuente vaciamiento de las villas obreras: con el 21060, los que quedaron en el campamento minero, se quedaron no como mineros asalariados, sino como cooperativos. Respecto de los fabriles, sucede lo mismo: entre 30 y 40 mil fabriles despedidos entre 1985 y 1986 por el decreto de la libre contratación (sin contar los cerca de 28 mil despedidos antes del decreto, entre 1981 y 1984). En pocas palabras, se desarticulan los fabriles, ferroviarios, petroleros y mineros.

El mismo decreto 21060 además permite el incremento de capital a las empresas, sin que se cuestione el origen de esos recursos. Aunque el más comentado, el 21060 no ha sido el único decreto. A él le siguieron otros relacionados con la industria, el comercio y el turismo con carácter amortiguador de los efectos perversos en el mercado laboral nacional.<sup>47</sup> En el sector de hidrocarburos, podemos destacar el DS 24806, que legitimó la propiedad de las transnacionales en boca de pozo para la explotación y comercialización del gas natural.<sup>48</sup>

Larrazábal define a la NPE como “una respuesta, desde la perspectiva de las clases dominantes, a la crisis del patrón de acumulación basado en la producción primario exportadora” (Larrazábal, 1990, p. 149). En total, fueron siete los paquetes aprobados por Hernán Siles Zuazo (1982-1985). Ninguno de ellos contuvo las altas de los precios en los servicios básicos y la baja de los salarios. De ahí su renuncia un año antes del término de su mandato. De los cuatro gobiernos del periodo, a saber, Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamorra (1989-1993), Goni (1993-1997) y Hugo Bánzer (1997-2002), le tocó al gobierno de Goni profundizar la reestructuración a través de la aplicación de las reformas estructurales de segunda generación, destinadas sobre todo a la privatización de empresas públicas y la capitalización de las consideradas más estratégicas. Entre dichas reformas, está el proceso de municipalización política de Bolivia, la reforma de la seguridad social, la continuación de la reforma educativa y la ley de reforma agraria.

La Ley de Capitalización de Empresas Públicas, impulsada por Goni en su primer mandato sentó las bases para colocar en manos de transnacionales el gas natural de Bolivia. Dicha ley pasó a dar tratamiento preferencial al capital internacional. Villegas nos recuerda que

---

<sup>47</sup> Aquí listamos algunos de ellos decretados entre 1985 y 1991: el DS 21316, de 03.07.86, establece la creación del Comité Nacional del Empleo, con vistas a encarar los problemas oriundos del subempleo, desempleo e informalidad, que no llegó a concretarse. Ese decreto igualmente daba cuenta de la pronta reubicación de los relocalizados en el sector formal a través de un programa de capacitación; el DS 21456, que establece la creación del Fondo Nacional de Emergencia para la generación de empleo temporal en sectores de alta rentabilidad social, atenuación de indemnizaciones de despidos, planes de crédito productivo, con vistas a los “relocalizados”; el DS 22407, de 11.01.90, que entre otros elementos, debería ser aplicado en la ejecución de programas de reactivación productiva en el sector artesanal para pequeñas y medianas industrias. Ese decreto aunado a la Ley 1182, de 17.09.90, establece que los aumentos salariales tienen que ser establecidos entre las partes por empresa.

<sup>48</sup> Dicho decreto fue dictado dos días antes que el primer gobierno de Goni terminara, el 4 de agosto de 1997.

como la Inversión Extranjera Directa tenía poca presencia en sectores relacionados a los recursos naturales, se aprobaron disposiciones legales para levantar las restricciones existentes y, de esa manera, se dio acceso y nuevas oportunidades de inversión al capital extranjero, en especial en los sectores de minería, hidrocarburos y agricultura. Similar fenómeno aconteció con actividades vinculadas a los servicios (Villegas, 1999, p. 81).

El mismo autor señala que a diferencia de la privatización, el proceso de capitalización en Bolivia se orientó exclusivamente a proyectos de inversión destinados inicialmente a mejorar el nivel de empleo. Sin embargo, la capitalización promovió la concentración de capital en los grupos empresariales internacionales cuyas tasas de ganancia han sido considerablemente elevadas durante el periodo sin que el mercado interno sostuviera el crecimiento previsto. Entre las empresas capitalizadas, se destacan: ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado), ENTEL (Empresa Nacional de telecomunicaciones Bolivia), LAB (Lloyd Aéreo Boliviano) y ENDE (Empresa Nacional de Electricidad Bolivia) (Cuadro 2).

Respecto del proceso de capitalización en los años noventa, el economista boliviano Grebe agrega que

la capitalización ha sido una medida de reforma fiscal, no una política de industrialización. Si hubiera sido completa, en todos los contratos con las empresas capitalizadas se habría incorporado medidas para articular los compromisos de inversión con las capacidades productivas del aparato interno. No se lo hizo (Grebe, 1999, p. 68).

**Cuadro 2 – Empresas públicas capitalizadas**

<b>Empresa capitalizada</b>	<b>Socio estratégico</b>
ENDE – Corani	Dominion Energy
ENDE – Guaracachi	Energy Initiatives
ENDE – Valle Hermoso	Constellation Energy
ENTEL	ETI Euro Telecom
LAB	VASP
ENFE – Red occidental	Cruz Blanca
ENFE – Red oriental	Cruz Blanca
Empresa Petrolera Chaco	AMOCO Bolivia Petroleum Co.
Empresa Petrolera Andina	YPF S.A. – Pérez Compac – Pluspetrol Bolivia
Transportadora Boliviana de Hidrocarburos	ENRON Transportadora (Bolivia) S.A. – Shell Overseas Holding Ltd.

Extraído de Grebe (1999)

Los efectos más inmediatos en el mundo del trabajo, fruto de la reestructuración productiva comentada anteriormente, parecen concentrarse en la precarización del trabajo y el empleo. Eso se refleja a partir de 1985 hasta los días actuales en la ampliación de las jornadas de trabajo, el incremento del trabajo a tiempo parcial e inestable, el aumento del trabajo domiciliario y el pago a destajo. Como requisito del capitalismo contemporáneo, y reactivando el modo de consumo de la fuerza de trabajo de fines del siglo XVII en Europa y fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en países de América Latina, la elevación de las jornadas laborales es acompañada de la intensificación del uso de la fuerza de trabajo: la articulación de plusvalía absoluta y relativa es optimizada ante la descentralización productiva y la dispersión del obrero a domicilio.

Aquí, vale destacar la lectura del 21060 desde el katarismo en su contenido anti-obrero, anti-campesino y anti-indígena. En el mismo documento de la federación katarista departamental de La Paz comentado en apartado anterior, se dice que

en ese decreto se resumen los objetivos a corto y mediano plazo de las clases gobernantes; por un lado, el decreto 21060, a nivel económico establece el aumento de la cantidad de esfuerzo y trabajo que los burgueses se apropian de nosotros y de nuestros hermanos obreros sin pagarnos. La reducción y el congelamiento de salarios, la aniquilación de la pulpería barata, etc., son disposiciones que han aumentado la sobre-explotación: ellos siguen trabajando lo mismo que antes solo que sus sueldos solo les alcanzan para comprar la mitad de lo que compraban antes, y esa cantidad de esfuerzo no pagado, va a parar a manos del gobierno y de los empresarios” (FDTCLP – TK, 1986, p. 204).

En todo caso, la precarización del trabajo tras las privatizaciones y los masivos despidos de mineros, fabriles y manufactureros de empresas medianas y pequeñas ha estado desde entonces concentrada en el llamado sector familiar y, en el peor de los casos, en el desempleo abierto. Internamente al proletariado, ha crecido como nunca antes en la historia de Bolivia el empleo femenino urbano, que viene desde los años cincuenta, década en que el salario masculino se supone debería sustentar toda la familia, pasando por los setenta, cuando el trabajo femenino asalariado asciende básicamente en los servicios y comercio, y los noventa, cuando ocurre su incorporación masiva al trabajo productivo precario e informal.

Respecto del trabajo femenino precario, Montero señala que

las mujeres obreras son las más vulnerables a esta forma de contratación, puesto que el 38% se emplea a través de contratistas, una situación que se explica por su inserción predominante en actividades de la confección en pequeños talleres manufactureros, formalmente independientes pero subordinados a una empresa o capital (Montero, 2003, p. 12).

Es así que la consolidación de la ofensiva neoliberal hacia la estructura de la organización minera forzó a sus miembros a reubicarse en búsqueda de trabajo inestable en El Alto, el cultivo de coca en el Chapare o la migración laboral internacional.<sup>49</sup> Es ya de conocimiento público el caso de los exmineros que permanecieron en los distritos mineros y formaron cooperativas chicas, mientras la mayoría se insertó en actividades artesanales-manufactureras o más bien en el comercio minorista en ciudades como El Alto.

Finalmente, los factores exógenos que incidieron en el debilitamiento sindical pueden ser resumidos en: a) la transnacionalización del proceso productivo – reflejada en su descentralización y la privatización de diversas empresas estatales como parte del patrón de acumulación flexible, b) el desmantelamiento de la COMIBOL fruto de los despidos y el vaciamiento de los campamentos mineros, c) la libre contratación directamente visible en el ascenso del trabajo precario, informal e inestable en los centros urbanos del país.

Una vez tomadas en cuenta las condiciones objetivas y/o macroeconómicas, nos toca analizar el impacto de factores subjetivos y organizativos en la crisis sindical que venían expresándose desde antes de la reestructuración productiva ante la crisis del marxismo y en general de la perspectiva del sindicalismo obrero revolucionario.

### **2.3. Aspectos organizativo-políticos de la crisis sindical obrera**

Para llevar a cabo la reestructuración productiva, el Estado tuvo que vencer la resistencia sindical. Más bien, la misma reestructuración productiva llevó al debilitamiento sindical. El blanco fue sin lugar a dudas la COB y su eje minero representado por la FSTMB. Las

---

<sup>49</sup> Los jóvenes, cuando no engrosan la fila de los desocupados, migran a España, Argentina, Brasil o EEUU, los cuatro grandes destinos de los y las bolivianas en este último viraje de siglo en busca de empleo. La transnacionalización de la economía boliviana, expresada principalmente en el sector de hidrocarburos, fue acompañada de la transnacionalización de sus trabajadores. Se estima que cerca de 23% del total de la población boliviana – casi 10 millones de personas – se encuentre fuera del país en condición de migrante laboral (Miranda, Oliveira, 2011).

protestas obreras luego de los decretos neoliberales se concentraron en huelgas generales indefinidas y marchas. La huelga de septiembre de 1985 ha resultado en cerca de dos mil huelguistas encarcelados por parte del gobierno de Paz Estenssoro. Al contrario de una insurrección obrera, los años posteriores a 1985 fueron marcados por el fracaso y nuevamente la represión contra la Marcha por la Vida, en el mes de agosto de 1986, detenida en los alrededores de Calamarca por las Fuerzas Armadas durante el segundo Estado de Sitio decretado, además de la incapacidad de la central obrera de reformular su accionar para interpelar a los grupos transnacionales que se instalarían con más contundencia en Bolivia a partir de entonces.

En los años noventa, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, la COB protagonizó protestas en contra de la política de privatización y los contratos de riesgo compartido con la COMIBOL, YPFB, ENTEL y otras, pero permitió o acordó con la privatización de otras empresas de menor porte.<sup>50</sup> A lo largo de esa década, la COB actuó en la defensiva. Estructuralmente desarmada, su dirigencia optó por gestionar la burocracia de un ente de dimensiones nacionales, y la conciliación en lugar de la confrontación. Según Arze (2000), se trata del sindicalismo de estilo modernizante, también observado en los países vecinos, duramente afectado políticamente por los ajustes neoliberales de los años noventa.

El primer efecto negativo visible en el sindicalismo obrero es la baja en la tasa de sindicalización. Luego del despido masivo de trabajadores de grandes y medianas empresas, buena parte de las empresas que abrieron sus puertas posteriormente ya no contaban con sindicatos propios en virtud de la libre contratación. Ésta hizo que el contrato colectivo de trabajo y las demás banderas tradicionales de lucha sindical perdieran el sentido. De esta forma, el sindicato se debilitó y se desarticuló. Además de eso, los obreros que pudieron continuar trabajando ya no engrosaron las filas sindicales como antes por el temor al despido.

Las micro y pequeñas empresas dispersas por todo el territorio de las ciudades del eje boliviano post-1985 a su vez ya no disponen de un mínimo de 20 trabajadores para que

---

<sup>50</sup>Es igualmente en ese entonces que las marchas y protestas pasaron a ganar tintes identitarios, marcadamente indígenas. Así lo comprueba la Marcha por el Territorio y la Dignidad, en 1990 y la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía, en 1994, en la cual se anuncia la demanda por una Asamblea Constituyente por primera vez.

se pueda formar un sindicato, según lo que expresa el derecho laboral del país. En general, son unidades que cuentan con uno hasta cuatro trabajadores. En este caso, dos elementos juegan contra la sindicalización, a saber, la desconcentración de las actividades, dispersión e incomunicación de los talleres y el carácter familiar de las relaciones laborales en las cuales el padre, el tío o el padrino muchas veces se vuelven los propios patrones.

La fractura en la COB ha sido clave. Los centros mineros más combativos como Siglo XX, Catavi, Huanuni y Colquiri fueron prácticamente diezmados. Con ello, la resistencia histórica por parte de los sindicatos mineros se desorientó, es decir, antes tenían como interlocutor/opositor al Estado, pero a partir de 1985 tuvieron que enfrentarse directamente con grupos transnacionales y sólo indirectamente con el gobierno. La relación íntima entre sindicato-Estado y su reproducción han sido frutos del contexto de su fundación en el nacionalismo revolucionario a partir de 1952, con pocos momentos de autonomía sindical posterior. Ya sin campamentos mineros estatales que concentraban miles de trabajadores, actualmente la COB convive internamente con mineros de empresas privadas que forman grupos reducidos; muchos de ellos fueron conformados en los años setenta y ochenta y no cuentan, por lo tanto, con la misma experiencia del sindicalismo revolucionario de antaño (García, 1999; Arze, 2000).

Asimismo, como segundo punto, la mayoría de los mineros que se incorporaron post-1985 son jóvenes y se encuentran dispuestos a someterse a las nuevas condiciones de trabajo precario, flexible e inestable. Estos jóvenes mineros tratan de adaptarse a una suerte de cultura minera individualista que premia la productividad y privilegia la negociación individual con el patrón-empedor. A partir de entonces el sindicato ya no ha tenido la misma legitimidad y reconocimiento por parte del Estado para intermediar cuestiones sociales y laborales de sus afiliados. El individualismo abarca incluso la dinámica de los pliegos petitorios, que ya no conllevan la unificación sindical, sino que cada sindicato trata de negociar por sí mismo.

Así es que los años ochenta y noventa pasaron a ser definitivamente marcados por el aplastamiento sindical y de su referencia anterior como organismo de reivindicación obrero-popular para dar lugar a los partidos políticos como representantes ciudadanos máximos en el Parlamento boliviano. Aunque presente en el magisterio urbano y rural y en el sector de la salud pública durante los años noventa, la COB ya no ha tenido la tutela de

los nuevos trabajadores mineros, que no se encuentran bajo filiación sindical, sino bajo formas temporarias de trabajo en minas privatizadas o cooperadas. Los años posteriores fueron marcados por la incorporación masiva de organizaciones gremiales y del comercio minorista a la central sindical, fruto de la invasión de las calles de las ciudades bolivianas.

El tercer punto relacionado con la crisis organizativa sindical ha sido mencionado anteriormente. A partir de 1985, no solamente el trabajo en el comercio, sino en la pequeña producción se informalizó y se precarizó, así como la industria capitalista se descentralizó echando mano de las cadenas de subcontratación. Tras las medidas neoliberales, el sector minorista creció de manera vertiginosa, al mismo tiempo que se proliferaron las organizaciones gremiales. Éstas conforman distintos rubros de venta (ropas, vivanderos, verduleros, comerciantes de plásticos, etc.) cada cual con su asociación o sindicato, conformando una suerte de “red callejera heterogénea” (Pereira, 2007, p. 32). Rojas y Fernández (1992) indican la participación de las asociaciones minoristas y de gremiales en las movilizaciones del periodo 1985-1991. Entre los motivos de movilización levantados, el principal está relacionado con la carga tributaria que suele imponer la Alcaldía Municipal. En todo caso, la necesidad de abarcar a estos sectores a través de la formulación de un nuevo discurso y práctica política es, por lo tanto, una de las tareas de la militancia cobista en el viraje de siglo.

En el sector familiar manufacturero, la distancia sindical tampoco ha sido superada a lo largo de los años posteriores a los ajustes estructurales. En un estudio sobre los talleres productivos alteños, Andia nos revela que

los/las dirigentes conciben y actúan dentro de las relaciones obrero patronales del sector formal, de la época del auge de capitalismo estatal. Existe una desubicación ideológica en el análisis de coyuntura respecto a los efectos y consecuencias del neoliberalismo, asimismo de los cambios sustanciales que se han dado en las relaciones empleador/a empleados/as al interior del sector informal bajo la modalidad de la flexibilidad laboral (Andia, 2004, p. 122).

Todo indica que la ceguera sindical apuntada por la autora tiene uno de sus fundamentos en la burocratización de la central sindical desde que volvió a la legalidad a fines de la dictadura banzerista. Aliada a su burocratización, el “sindicalismo de cúpulas” practicado por la COB no permitió que acompañara las modificaciones sentidas en el mundo del trabajo vivo, en su base técnico-productiva y en su subjetividad. Se podría decir

simplistamente que el debilitamiento sindical es fruto de la reestructuración productiva y que la COB no tuvo una lectura adecuada de la coyuntura política presentada en ese entonces. Por ello, no ha podido reaccionar a la altura del momento que vivía. Más allá de eso, y no menos importante, están sus limitaciones políticas y organizativas internas.

Es importante enfatizar que desde su fundación en 1952, la COB ha permanecido abierta a la afiliación de organizaciones no específicamente obreras, es decir, que además de mineros y fabriles de medianas y grandes industrias, la COB ha acaparado trabajadores gremiales, comerciantes, panaderos, choferes, profesores y prestadores de servicios en general, aunque la centralidad minera es ineludible, como lo ha sido desde su fundación. Dice el mismo Lazarte: “resultante de una insurrección popular victoriosa, la COB ha sido una estructura aglutinadora de los sectores subalternos movilizados como “pueblo” y expresó la fuerza colectiva recién adquirida y manifestada en las milicias obreras armadas” (Lazarte, 1989, p. 250). La centralidad minera ha podido servir más bien de dirección ideológica y ha sido una importante referencia en momentos de fragmentación y represión política.

Sin embargo, los casi veinte años de neoliberalismo anteriores al ciclo rebelde boliviano (2000-2005) no han visto políticas sindicales de representación del obrero a domicilio, los talleres productivos (familiares o no), los que finalmente también se enfrentan al gran capital, pero no lo ven tan de cerca, sino a través de subcontratistas o empresas intermedias. Respecto de eso, Bruno Rojas nos aclara el panorama sindical:

no ha sido discutido casi nada en el seno de las organizaciones obreras de El Alto respecto de la necesaria organización del sector informal productivo que se encuentra disperso. Lo que queda claro es que los trabajadores del sector informal sí se han organizado, si observamos el comercio ambulante, el comercio minorista, existe una federación organizado propiamente en base al espacio físico, que puede asumir dimensiones enormes, como es el caso de la Feria 16 de Julio, por ejemplo. Es diferente obviamente de un sindicato, de una organización laboral”; “en términos de organizaciones obreras, todavía son pocas. Los fabriles de industrias han ido concretando algunas organizaciones. El sector de la mediana y pequeña industria de El Alto todavía no posee sindicatos constituidos. Según datos recogidos el año pasado, de las 700 empresas de La Paz y El Alto, solo 65 tenían sindicatos. Hay comités en algunos casos, pero no son sindicatos. El otro sector de los trabajadores a domicilio, o trabajadoras, porque son predominantes las mujeres, a partir de los años noventa y 2000, a raíz de grandes empresas exportadoras, ha habido empresas satélites, talleres artesanales y particularmente trabajadoras a domicilio para poder cubrir la demanda de EUA y de

algunos países europeos. Esas trabajadoras a domicilio no están organizadas. En algunos casos aparecen invisibilizadas en organizaciones del comercio minorista. Son mujeres que trabajan para una asociación o para una empresa, pero también por su cuenta en la feria. Está la Central de Mujeres de Bolivia, que aglutina algunas asociaciones de trabajadoras a domicilio, pero de manera todavía no específica. Las reglas no son muy claras, se confunden con el comercio minorista, con los microempresarios, con artesanos, pero no aparecen como trabajadoras a domicilio, trabajadoras asalariadas, subordinadas a empresas grandes o al capital comercial que la subsume como tal.<sup>51</sup>

No creemos sea lealmente histórico imputar a la COB cierto corporativismo tan tradicional en el sindicalismo brasileño o argentino. La distancia sindical de las microempresas familiares y de las cadenas de subcontratación informales es más bien producto de la falta de vivencia y conocimiento de causa del universo de la industria dispersa a domicilio. La dirigencia de la COB o de las Centrales Obreras Departamentales, en especial la de El Alto, muchas veces ni siquiera la pueden ubicar territorialmente en la ciudad. Volvemos a las consideraciones de Rojas:

la ceguera sindical hacia el sector informal es relativa. Yo prefiero marcar como conjunto de causas principales las condiciones materiales, objetivas, el ajuste estructural. Por otro lado, es cierto que la burocracia sindical del 1985 en adelante tiene serias limitaciones en cuanto a entender los cambios que se vienen dando en el mercado de trabajo. Todavía no se entiende bien la potencialidad política del sector informal. Eso todavía es muy débil. Si bien la COB ha logrado afiliar organizaciones de ese tipo, a su vez también ha ido mostrando su debilidad. Los informales tienen otra dinámica, otras características, no se adecuan a las medidas de la COB, por ejemplo el paro de 24 horas, que no conciben con las condiciones de trabajo que tienen los informales en general. Ha habido experiencias como la COR-El Alto, que ha tenido un grado mayor de comprensión, de acogida, aunque de manera limitada. Han habido propuestas políticas desde las organizaciones informales, sobre todo el comercio minorista, que han planteado crear centrales paralelas a las sindicales. En el caso de La Paz, la Confederación de Gremiales ha planteado formar una Central de Trabajadores Independientes. No prosperó, pero sí está presente, digamos, en la cabeza de algunos dirigentes.<sup>52</sup>

Como cuarto punto, destacamos el debilitamiento de la COB y el despliegue de un ciclo de más de diez años de protestas de cuño identitario-indígena, con auge en el periodo 2000-2005. Sin el protagonismo característico de la COB, en las luchas sociales alrededor

---

<sup>51</sup> Entrevista a Bruno Rojas, La Paz, oct. 2009.

<sup>52</sup> Idem.

de la defensa/nacionalización de los recursos naturales, se destacaron otras organizaciones, como pueden ser la CSUTCB, ente sindical campesino penetrado por el katarismo, la FEJUVE, ente que guarda rasgos con el sindicalismo tradicional y que mantiene un carácter local-vecinal o la Coordinadora del Agua generada en la lucha cochabambina del 2000. Todas estas organizaciones mencionadas han contado con fuerte control por parte de sus bases. Sin centralización organizativa y guardando fuertes rasgos de la sociabilidad andina, las comunidades de base y las juntas de vecinos fueron el motor de las luchas sociales de 2000 en Cochabamba, 2000-2001 en Omasuyos y 2003-2005 en El Alto. Su radicalismo estuvo anclado además en el territorio, es decir, las relaciones que se establecían allí tenían más relación con el espacio de lucha ocupado que con relaciones de producción directamente, aunque haya habido presencia obrera en las luchas de carácter urbano.

En este nuevo escenario, la COB se ha situado al lado de organizaciones no específicamente obreras ya sin el antiguo monopolio de la protesta en Bolivia. Tampoco es el eje de los conflictos en el país. Organizaciones barriales, gremiales o campesinas han rebasado la convocatoria del sindicalismo minero y han mantenido pliegos paralelos a la central sindical. Sin embargo, la COB no dejó de estar presente en las luchas mencionadas.

Agregado a todas las problemáticas anteriores, se encuentra un elemento de carácter doctrinario en la conformación del sindicalismo revolucionario en Bolivia. La izquierda marxista que fomentó la COB y toda lucha sindical post-1952 ha despreciado políticamente a aymaras y quéchuas en el altiplano boliviano. Los mineros no se sentían indios, sino obreros. Y el obrero (urbano o minero) siempre estuvo más cercano al mestizo que al cholo<sup>53</sup>. Ni hablar de los fabriles urbanos, para quienes tener un empleo formal en la ciudad significa ascenso social en relación con los que se quedaron trabajando en el campo.

En el mismo sentido, las organizaciones stalinistas y trotskistas en el seno de la COB y de los partidos obreros han predicado un marxismo vulgar según el cual al indio lo habría que integrar de manera subordinada. Se ha creído que el campesino aymara o quéchua todavía no está en condiciones de incorporarse a la lucha revolucionaria debido a que mantienen tierras comunitarias o *sayañas* en el altiplano. Los campesinos estuvieron

---

<sup>53</sup> Según los estudios de Albó a fines de la década de 1970, aunque se trata de migrantes residentes en la ciudad en ambos los casos, el cholo se distingue del mestizo por ser más cercano al indio altiplánico en términos de la permanencia de rasgos culturales andinos en el comportamiento del cotidiano, el comercio y la vestimenta.

presentes en la central desde su fundación, en general relegados a posiciones internas sin expresión política. A pesar de que la Reforma Agraria les ha permitido cierto acercamiento, obreros y campesinos se alejaron a lo largo de los gobiernos movimientistas y más aún durante la dictadura.

Dicha lectura obrera del indio campesino altiplánico ha sido fomentada en gran parte por la absorción de las tesis de la III y IV Internacional propagadas por partidos obreros, entre ellos el POR, PIR y PCB a lo largo del siglo XX. Arze nos señala que parte del trotskismo que participó decisivamente en la fundación del sindicalismo revolucionario en Bolivia, sigue manteniendo cierta lectura según la cual la crisis sindical es fruto del marxismo practicado por organizaciones stalinistas que han privilegiado la alianza con fracciones burguesas con el objetivo de fortalecer la democracia y permitir el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. Además de esto, acusan a las organizaciones stalinistas, en especial el PCB, de permitir la incrustación del MNR en el aparato estatal durante varios años.

En general, el sindicalismo bolchevique en Bolivia se defiende con el argumento de que a las movilizaciones les hace falta direcciones adecuadas en momentos auges de lucha. Respecto al tema, Juan de la Cruz Villca, dirigente campesino y Segundo Secretario de la COB en 1992, advierte:

en la práctica boliviana, si comparamos a un campesino y a un obrero asalariado, ¿cuál está mejor económicamente? Un obrero puede tener su radio, su tele, se sirve un té, se viste bien, etc. y un campesino del Norte de Potosí está harapiento y apenas se autoabastece (Ticona, 2000, p. 180).

A las consideraciones de Villca, podríamos agregar otro elemento que nos ayuda a desmitificar lo indio y a entender la precariedad productiva contemporánea en el campo boliviano. Es necesario recordar que el avance del latifundio liberal en la segunda mitad del siglo XIX no respetó fronteras ni pactos interétnicos. Esto hizo con que los *ayllus* nunca más fueran los mismos. Los flujos migratorios internos en Bolivia han sido crecientes desde mediados del siglo XX, parcialmente a causa del sistema de parcelización de las tierras seguido por la Reforma Agraria de 1953 y también por el agotamiento de la tierra y los grandes periodos de sequía, como la de 1983 provocada por el fenómeno climático “El Niño”.

A lo largo de las décadas siguientes, lo anterior permitió el avance del minifundio en el altiplano del país y promovió la expulsión de campesinos altiplánicos. La ola neoliberal aceleró el fenómeno migratorio sin precedencia. En la actualidad, la condición del campesino aymara o quéchua que permanece en el campo ya no obedece a la geografía de ayllus de antaño y su economía hoy por hoy se encuentra parcialmente integrada al mercado. En el caso de la región cochabambina, zona quéchua, la mercantilización de la tierra es todavía anterior y más contundente que en el departamento de La Paz, Oruro o Potosí.

Aunque la consigna de un “gobierno obrero-campesino” fuera proclamada por la COB y por el sindicalismo obrero en general durante el siglo XX, en ocasiones el sectarismo obrero menospreciaba al campesino aymara o quéchua; y en otras, las organizaciones campesinas de cúpula se aliaban con gobiernos dictatoriales para apoyar el anticomunismo. Cuando la alianza obrero-campesina pudo consolidarse a fines de los años setenta, la lucha ya no era revolucionaria, sino democrática. Más allá de una lectura marxista mecánica que vincula automáticamente la clase con su posición en el proceso productivo<sup>54</sup>, es igualmente necesario tomar en cuenta la práctica histórica de determinadas colectividades y su modo de ser (Zavaleta, 1998, p. 11). En este caso, se trata de agrupaciones altiplánicas en resistencia histórica en contra del colonialismo interno.

Por otro lado, en el seno del campesinado indio, el katarismo no poseía todavía un proyecto político autónomo y de clase a fines de los años setenta; más bien ha convivido, complacientemente o no, con el retroceso político representado por el racismo en las concepciones de determinadas fracciones indianistas surgidas a fines de los años sesenta, precisamente las que niegan la lógica totalizadora del sistema a favor de una lucha de razas exclusivamente. Ello ha servido de insumo político a distintos gobiernos liberales-burgueses, especialmente durante el régimen militar en Bolivia.

En épocas en que la identidad se ha vuelto moda política y literaria apoyada materialmente por ONG's, creemos importante rescatar la idea de que el capital tolera luchas de carácter exclusivamente étnico porque es capaz de absorberlas y finalmente

---

<sup>54</sup> Lazarte (1989) nos alerta que, según la estructura de la COB, la representación de cada sector es correspondiente al lugar que ocupa en la economía nacional, grado de concentración por local de trabajo, grado de conciencia social y número de afiliados. Ello explica en gran parte la hegemonía minera y el desprecio hacia el campesino indio del altiplano.

utilizarlas en su favor. Creemos que las luchas de contenido étnico y anticolonial deben articularse con luchas antiimperialistas y socialistas, ya que sin la destrucción de las bases sistémicas materiales, la cosmovisión andina no podrá sino reproducirse de forma subsumida por la lógica de la valorización del valor.

Asimismo, creemos que la alianza obrero-campesina es un pilar de cualquier estrategia que se quiera revolucionaria en contextos históricos dependientes como Bolivia, en el cual la lucha que se autoproclama socialista o anticapitalista obligatoriamente debe tomar en cuenta la sociabilidad andina, querámoslo o no. Es necesario entonces convertir el elemento étnico en elemento revolucionario. En el altiplano boliviano, lo étnico es ineludible. La ceguera sindical que predominó en los años cincuenta, sesenta y setenta con respecto a la sociabilidad andina y a lo indio para pensar la revolución, culminó con otra ceguera, en el seno mismo del movimiento obrero, ahora hacia los trabajadores productivos precarios, hacia el obrero a domicilio. La negación de lo aymara o quéchua se suma actualmente a la desconsideración del mismo aymara o quéchua urbanizado y proletarizado, disperso en cientos de manufacturas en ciudades como El Alto.

Algunos autores bolivianos se han dedicado a la temática desde ese entonces. En el clásico estudio de Lazarte (1989) acerca de la historia de la COB, tenemos que la central ha actuado desde su fundación como un ente sindical por rama productiva, actividad o empresa, en rechazo a la forma de organización anclada en la especialización por oficio, aunque contara con el importante respaldo histórico del anarco-sindicalismo altiplánico de inicios del siglo XX. Así es como la COB ha estado orientada muchas veces a temas políticos de alcance nacional en detrimento de lo corporativo o de lo gremial. Paradójicamente a lo anterior, otro rasgo peculiar está en que la COB históricamente ha cumplido muchas de las funciones ejercidas por partidos políticos en términos de representación civil. Lazarte plantea que la “confusión entre partidos y sindicatos” es anterior a la fundación de la COB y en parte atribuible a la tendencia de los mismos anarcosindicalistas a la autoorganización sin intervención partidaria.

Anteriormente a los años ochenta, la central sindical incluso subordinó a los partidos políticos, ya sean obreros o no, durante momentos de revolución, insurrección y reapertura democrática (véase los periodos 1952-56, 1970-71, 1979 y 1983), además de forzarlos a acatar decisiones previas tomadas en sus congresos. Muchos dirigentes, con

Juan Lechín a la cabeza, han transitado entre partidos obreros y la central sindical. Siempre que la línea del partido divergía de la línea sindical, los partidos se retiraban de la escena política o más bien se subordinaban. En pocas palabras, “el sindicato [se ha] convertido el medio de existencia de muchos partidos” (Lazarte, 1989, p. 233). La Revolución del 52 consolidó dicha peculiaridad, pero la cuestión del poder no ha podido ser resuelta del todo por la central sindical en ese entonces.

En concordancia con lo anterior, Zavaleta sostiene que los obreros no pudieron poner en práctica todo su poder político, lo que no quiere decir desde luego que no hayan actuado como clase de poder. En el mismo sentido, afirma que

la clase obrera es todavía incapaz de su propio proyecto o alcance hegemónico, pero no hay un solo proyecto democrático que pueda plantearse al margen de la clase obrera. Conscientes o no del modo de hacerlo, de un modo más intenso o gradual según las épocas, ambas puntas tienen su propia concepción de país y su destino, se atribuyen una suerte de soberanía o irresistibilidad y proclaman por tanto su derecho a reformar la realidad a su propia imagen (Zavaleta, 2009, p. 248-249).

Toranzo nos recuerda el vigor político cobista, cuyos miembros se educaron políticamente en las calles por medio de la confrontación directa y la vocación a la insurrección y la rebelión. Prueba de ello es el desapego por la propia vida y el desprendimiento de la propiedad de bienes dada la condición miserable de vida de los mineros como elementos pilares de su combatividad. Anteriormente, el sindicato subordinaba el partido; sin embargo, a partir de los años ochenta, la penetración de la prebenda partidista en la COB la deslegitimó ante la sociedad. Toranzo defiende la idea de que

en el periodo 1982-85 se desató el prebendalismo en el uso del poder, la irresponsabilidad en el manejo de las empresas estatales, la desmesura en las peticiones reivindicativas. Pareciera que la izquierda actuaba desconociendo lo que sucedía en el campo de la economía mundial en crisis [...] creyendo que su escenario era aún el que correspondía a una minería vigorosa, cuando en realidad ésta estaba en pleno hundimiento (Toranzo, 1989, p. 193).

En otro texto, coelaborado con Mansilla (1991), Toranzo va más lejos y sostiene la pérdida de autoridad social y ética del sindicato. Otros, como Larrazábal (1990), asocian la crisis del sindicalismo con la crisis de la centralidad obrera y la consecuente pérdida del

potencial revolucionario sindical. García a su vez cuestiona la forma-sindicato de por sí como obstáculo a las movilizaciones. Ante la complejización del mundo del trabajo actual y de los cambios en la subordinación del trabajo vivo al capital, García defiende la necesidad del rompimiento definitivo con la autoenajenación del trabajo que está implícita en la forma de accionar del sindicalismo boliviano a lo largo del siglo pasado. Las nuevas bases técnico-materiales, así como la nueva subjetividad del nuevo proletario indígena, exigen otra organicidad, según el autor.

Ya en el viraje de siglo, García desarrolló un abordaje que destaca el *habitus* conservador que permea la lucha minera durante el siglo XX, fruto de las influencias del PCB y POR, los cuales reproducían la sumisión a los aparatos de Estado y no pocas veces al parlamentarismo. Las consecuencias pueden ser vistas en la actual dificultad o ausencia, de proyectos obreros autónomos, La capacidad de la clase empresarial de refuncionalizar la lucha en su favor y el manejo adecuado de las demandas salariales apuntan para los horizontes siempre limitados de la lucha sindical, destaca el autor. Las exigencias sindicales históricamente estuvieron atrapadas al ámbito de circulación, abdicando de la gestión o producción de las condiciones materiales de vida en sociedad. Por lo tanto, la lucha sindical pudo ser considerada lucha redistributiva. De la misma manera, García apunta para una forma de organización de los trabajadores que casi nunca detuvo autonomía absoluta frente al Estado en la medida que siempre lo tuvo como principal ejecutor de demandas. El autor afirma que los momentos posteriores a abril de 1952 traducen la autoenajenación del trabajo de forma transparente vinculado con el hábito de obedecer.

Dice García:

el minero no sintió la necesidad de politizar la producción, la técnica, la gestión organizativa, porque ya estaba politizada la negociación salarial que lo vinculaba con el centro de poder político y tampoco se sintió con la necesidad de imaginar una nueva forma de economía en el Estado pues el Estado era ya la economía que lo englobaba y le aseguraba estabilidad laboral (García, 2001, p. 117).

Diferentemente del sindicalismo modernizante de conciliación, así como del sindicalismo tradicional practicado por el bolchevismo, Arze clasifica la postura de García y del Grupo Comuna, en general, de “sindicalismo crítico”. Al expresar cierta frustración con el proceso de emancipación del trabajo fruto de la Revolución de Abril de 1952, sus

autores aseveran que el tipo de sindicalismo obrero centralizado y monopólico desarrollado en Bolivia se autoreproduce por medio de su contraparte, el Estado-empresario, también concentrado y monopólico (Arze, 2000, p. 62). Con el objetivo de deshacer el embrollo, según dicho enfoque, son necesarias formas de organización creativas que no incurran en los mismos errores de antaño.

Respecto a la tipología del sindicalismo que desarrolla (conciliación, tradicional y crítico), Arze aclara que

una de ellas ve en los cambios económicos el elemento determinante y hasta el imperativo para el cambio de las características fundamentales del sindicalismo boliviano, de modo que éste se convierta en una institución adherida al Estado y co-responsable de la fijación de lineamientos de política; otra sostiene que dichos cambios sólo han ratificado la tendencia esencial del sistema capitalista, expresada en la agudización de la explotación de la fuerza de trabajo y que, por tanto, los objetivos fundacionales del sindicalismo revolucionario permanecen en pie, justificando la permanencia de su estructura basada en la centralidad obrera; finalmente, la tercera corriente sostiene que los cambios han configurado un nuevo escenario de la subordinación del trabajo al capital, por lo que el proceso de la emancipación deberá adquirir necesariamente rasgos novedosos, que pueden afectar inclusive la importancia del sindicato como organización de los trabajadores” (Arze, 2000, p. 64).

Por último, Arze reconoce las nuevas características de la fuerza de trabajo y la nueva subjetividad del proletario joven, pero sostiene que el nuevo escenario todavía no invalida al sindicato en cuanto forma de organización obrera, una vez que tampoco defiende un proceso de desproletarización en Bolivia. Pasaremos enseguida a las consideraciones acerca del proletariado boliviano contemporáneo engendrado por la crisis sindical obrera comentada hasta el momento.

#### **2.4. Del proletariado contemporáneo en el altiplano boliviano**

La extensión de los conceptos marxistas referentes no solo a la clase obrera en general sino al trabajador productivo en específico nos lleva a replantear la cuestión en torno a la centralidad obrera en los días actuales. ¿Centralidad del trabajo y centralidad obrera significan e implican lo mismo en términos teóricos y políticos? ¿Deben ser tratadas de la misma forma? Ante la emergencia de movimientos indígenas en Bolivia y la debacle del sindicalismo obrero tradicional en nuestros países, ¿cuál es la vigencia de la centralidad obrera?

En nuestro recorrido, hemos retomado las concepciones ampliadas en torno a la personificación del trabajo vivo, en consonancia con el proceso constante de fagocitación por el cual sectores considerados improductivos en tiempos pasados, pasan a interpenetrarse con el trabajo productivo en los días actuales. Si a la centralidad del trabajo la vinculamos anteriormente con su dimensión ontológica en cuanto moldeadora del ser social, entonces para discutir la noción de centralidad obrera operaremos el tránsito de lo ontológico a lo político, una vez que se trata de un concepto que tiene implicaciones políticas directas y ha sido herramienta largamente utilizada por organizaciones obreras a lo largo del siglo XX; ha guiado la praxis política de un sinnúmero de organizaciones en América Latina y en el mundo, especialmente los de influencia bolchevique y/o leninista.

En general, independientemente del grado de industrialización de cada país, la noción de centralidad obrera ha servido para legitimar y celebrar el vanguardismo del obrero manual de fábrica, varón, de casco y uniforme; se trata de una interpretación del sujeto histórico del marxismo difundida abiertamente por partidos y sindicatos obreros en términos mundiales. Especialmente en países cuya presencia campesina, ya sea indígena o no, es considerable, el discurso de la centralidad obrera ha ocultado que el trabajo abstracto ha tenido que sobrepasar otras sociabilidades que no son absorbidas por completo. Ello ha devenido en la no consideración del campesino por el sindicalismo obrero, ya sea minero o fabril. De la misma forma, los partidos y sindicatos obreros han ignorado lo étnico y en el peor de los casos, los propios sindicatos campesinos han aplastado el carácter indígena que les es intrínseco.

Las principales críticas internas a la centralidad obrera han sido originadas en el seno del anarquismo y del marxismo consejista-autónomo. El blanco de las críticas ha sido no solo el reduccionismo operado en la lectura de lo obrero por el bolchevismo, desconociendo campesinos, comerciantes minoristas, prestadores de servicios y artesanos en general, sino también la lectura productivista impartida por dichas organizaciones según la cual la mayor o menor potencialidad revolucionaria está necesariamente vinculada con la posición objetiva de tal o cual sector en el proceso de producción de plusvalía.

En este sentido, dicha lectura en América Latina ha mostrado su incoherencia respecto de la propia historia de lucha de las clases trabajadoras de tal o cual país de la región. Aunque muchas veces protagonizada propiamente por el obrero de la gran industria

(urbana o minera), las revueltas y revoluciones consideradas proletarias en la región durante el siglo XX han estado pobladas de trabajadoras y trabajadores del campo, indígenas o no, además de los sectores urbano-familiares (véase la Revolución Nacional de Bolivia en 1952 y el llamado ciclo rebelde 2000-2005 en el mismo país).

Para tal tarea, dedicaremos líneas breves para retomar la perspectiva de René Zavaleta Mercado acerca de la centralidad proletaria en Bolivia para así poder tener una referencia sociológica local y posteriormente articularla con las nociones ampliadas de lo obrero abordadas en el primer capítulo. Los escritos zavaletianos acerca del proletariado boliviano (minero) de fines de la década de 1970 en el marco de la crisis del Estado de 1952, la lucha por la democratización y el fin del periodo militar, especialmente en *Las masas en noviembre*, dan cuenta de la complejidad de las clases trabajadoras en ese país.

En sus análisis sobre la crisis de 1979, marcada por el golpe de Estado del general Natusch Busch, Zavaleta rompe con la ortodoxia bolchevique anteriormente aplicada en Bolivia - tanto por organizaciones stalinistas como trotskistas - por medio de la ampliación de la noción de centralidad proletaria. No lo hace tomando en cuenta la expansión de las fronteras de la subsunción real del trabajo al capital, como ha sido destacado en el primer capítulo, sino a partir de la propia historicidad de la clase obrera y sus métodos políticos, lo que denomina acumulación en el seno de la clase. Ha sido justamente la acumulación histórica de la clase obrera de 1952 en adelante la que hizo que sectores campesinos y asalariados no directamente productivos se acercaran a la convocatoria de huelga general en 1979. Así es que la huelga obrera inicial se pudo convertir en huelga de masas.

La alianza obrero-campesina lograda en 1979 ya mencionada en ese trabajo también implicó la imbricación de métodos de lucha mineros y rurales. En torno a la interpelación minera, se han articulado los kataristas aglutinados en la CSUTCB, justamente los que aportaron formas de lucha coloniales, enmarcadas en el cerco y el bloqueo territorial. Zavaleta lo considera y de esa manera logra escapar de la teleología presente en cierto marxismo; por consiguiente, propone en su lugar la revisión de la centralidad proletaria a partir de las historias locales de cada fracción de las clases trabajadoras presentes en la lucha por la democratización de ese periodo. Ampliado el núcleo combativo obrero, Zavaleta plantea la noción de autodeterminación de las masas, que puede ser vista como la versión ampliada de la centralidad proletaria. En palabras

sencillas, se trata de la masa formada en torno a la interpelación proletaria (minera esencialmente).

En un estudio que analiza desde el marxismo como Zavaleta ha producido conocimiento histórico-político imbricando historias locales de Bolivia y la ley del valor, Tapia desmenuza los conceptos zavaletianos en cuestión. En relación a la constitución de la masa en torno a lo obrero, dice el autor que

es algo que rebasa a la organización y movimiento de la clase obrera, pero que ha sido preparado durante largos años por el despliegue y desarrollo de la centralidad obrera en la historia del país (Tapia, 2002b, p. 262).

En el caso específico de la lucha antidictatorial de 1979, la autodeterminación de las masas estuvo circunscrita a la democratización de la sociedad como un todo. En noviembre de ese año se desplegó la intersubjetividad a partir de lo obrero que adquirió la forma de la masa. Por lo tanto, y asumiendo los aportes de Tapia (2002b), no se trata de la negación de la clase, sino de su desarrollo antiestatista cargado de autodeterminación. En dicha masa confluyen no solamente obreros y campesinos, sino los comerciantes minoristas y pequeños artesanos que abundan las calles de La Paz y El Alto.

Casi diez años después, en un artículo titulado *Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia*, el mismo Zavaleta plantea la noción de irradiación, entendida nuevamente como la influencia o impacto ejercido por el tipo y la fuerza de la organización minera sobre otras fracciones de las clases trabajadoras de Bolivia. Tal es el caso del entorno de los distritos mineros, donde los comerciantes, amas de casa y campesinos vecinos han sido los primeros a recibir la “ola radioactiva minera”, abarcando todo el conjunto de las clases obreras, incluso trabajadores asalariados no directamente productivos. Ejemplos históricos de la irradiación minera son la propia Revolución de 1952, además de la conformación del Bloque Independiente Campesino en 1968 durante el gobierno de Barrientos y la huelga de 1979 aquí abordada.

La acumulación en el seno de la clase, juntamente con la noción de irradiación hacen que históricamente en Bolivia el sindicato rebase el partido político. Según Zavaleta, “esto es el resultado de los términos de la constitución del minero como entidad clasista. Es una clase “sindicalista” porque esta es la forma superior de organización incorporada o

adquirida por la acumulación de clase” (Zavaleta, 1987, p. 232). La ampliación de la noción de centralidad proletaria se interrelaciona con un tipo de sindicato en cuanto organización social más extensa. Nuevamente con Zavaleta: “es el trabajador de la mina en estado de autodeterminación pura más su irradiación o iluminación, lo que incluye a campesinos, comerciantes, mineros independientes (mineros pequeño-burgueses) y asalariados no productivos” (Zavaleta, 1987, p. 232-33). Fue precisamente la noción de irradiación minera la base para que nuestro autor considerara a la COB la síntesis de la sociedad civil boliviana.

La importancia del proletariado en relación con su colocación productiva es algo que objetivamente no se puede rehusar. Sin embargo, en la historia de países como Bolivia, y en conformidad con Zavaleta, es igualmente necesario tomar en cuenta el modo de ser y actuar de la clase obrera. Después de la muerte del autor, a mediados de la década de 1980, sucedieron los ya tan comentados ajustes estructurales en el país por medio de los cuales el sindicalismo minero ha sido fuertemente afrontado y con él la capacidad de irradiación minera.

Es precisamente por esta razón que se debe recordar la importancia de la fracción del proletariado de ascendencia minera, que cumple un rol fundamental en la radicalización característica de ciudades como El Alto, la cual ya no corresponde a los mineros de las históricas y combativas minas de Catavi, Siglo XX y Llallagua, sino al proletariado urbano precarizado e informal. En el contexto de las tres últimas décadas del altiplano boliviano, podemos afirmar que la composición socioeconómica de las luchas enmarcadas en el ciclo rebelde de Bolivia es fruto directo de la descentralización fabril, y de la desarticulación de las centrales sindicales mineras, además del flujo histórico incesante de migración laboral india hacia las ciudades del eje (Santa Cruz – Cochabamba – La Paz – El Alto).

Aún antes de la reestructuración productiva, durante los años auge de movilización, la clase obrera nunca había sido mayoritaria en términos cuantitativos. Ha sido más bien minoritaria en comparación con campesinos y cuentapropistas. Sin embargo, su importancia en lo que se refiere a la economía nacional en torno al estaño les permitía paralizar probablemente el más importante sector productivo de Bolivia. La caída del precio internacional del estaño aunada a los factores de la reestructuración productiva hicieron que el sindicalismo minero y la propia actividad minera se dispersara.

Ahora bien, ¿se podrá afirmar que la reducción numérica del proletariado minero y fabril conlleva la desproletarización de Bolivia? ¿El rol histórico cumplido por el movimiento obrero en Bolivia debe simplemente ser relegado a según o tercer plano en nombre de los llamados “nuevos movimientos sociales”? Con respecto a la actual configuración del proletariado altiplánico en Bolivia, y, en última instancia, de la lucha de clases en el país, los analistas locales han tenido pocas convergencias.

Precisamente en la década de ochenta, cuando se proliferó el llamado “sector informal urbano”, Toranzo fue un autor boliviano que sostuvo la idea de desproletarización boliviana. Este fenómeno sería acentuado por la relocalización y despidos masivos de mineros y fabriles, agregado al aumento del desempleo abierto y del subempleo. Según este autor, la tercerización de la economía no sólo despolitiza a la sociedad sino que hace desaparecer la conciencia obrera “en formas ideológicas pertinentes a desempleados, pequeños comerciantes, ambulantes, artesanos, etc.” (Toranzo, 1989, p. 130).

Según el autor, la llamada desproletarización más el crecimiento del trabajo informal y precario expresado en la proliferación inaudita de comerciantes, gremiales, subocupados, migrantes, etc., inviabilizaría el sujeto colectivo del cambio social. La COB, a su vez, compuesta de agrupaciones demasiado variadas en su seno luego de la crisis sindical, tendría su núcleo proletario debilitado - entiéndase el minero o fabril vinculados de manera directa a la valorización del valor. Larrazábal comparte la misma tesis y parte de la misma premisa, a saber, la reducción objetiva del obrero asalariado y sindicalizado. Manejando la misma noción cerrada de proletario que Toranzo, reconoce que “la base proletaria, con la ampliación de los sindicatos y organizaciones de los sectores medios, de los comerciantes minoristas, de los gremios artesanales y otros sectores no tenía ya primacía numérica, aunque se respetó siempre su rol conductor, y hoy la tiene menos” (Larrazábal, 1990, p. 154).

Para el autor, ante la crisis del patrón de acumulación del 52, el Estado ya no se preocupa en generar empleos productivos, lo que en última instancia resulta en la “invención” de estrategias de sobrevivencia en el campo y la ciudad. En este caso, la informalidad es la forma asumida por la desproletarización. De ahí que sostiene la difuminación de la identidad y el eje obrero. Dice el autor:

ante quienes piensen que la inserción de los desproletarizados al mundo de la “informalidad” garantiza que por el efecto “irradiación” opere en los gremios en los cuales se adscribe un incremento del potencial revolucionario, debe considerarse que la mentalidad, las creencias y los modos de actuar, permanecerán por algún tiempo y ello puede contribuir a mejorar las formas organizativas y las orientaciones generales de comerciantes minoristas y artesanos; sin embargo, aquellas cambiarán inexorablemente al asimilarse otras prácticas correspondientes al sector al cual ahora pertenecen (Larrazábal, 1990, p. 157).

Sin embargo, Larrazábal no deja de reconocer que el trabajador informal y precario puede nuclear el movimiento obrero en el futuro y transformarse en la base rearticuladora de la acumulación de capital. Contrariamente a la noción ampliada que trabajamos en el primer capítulo, Larrazábal no incluye a los talleristas en la clase obrera, mucho menos los empleados de oficina. Creemos que lo anterior le limita la perspectiva de análisis una vez que no contempla lo que llama “desproletarización”; es decir, la salida de mineros y fabriles a la calle, es fruto de la reconversión del gran capital en sus formas de apropiarse de plustrabajo; la reconversión o transformación capitalista es menester si se quiere seguir reproduciéndose la valorización del valor.

Diez años más tarde, a fines de la década de 1990, García abre una investigación que se centra en el mundo de la fábrica, aunque discorra sobre su nueva configuración descentralizada, es decir, en su relación directa con la pequeña y mediana empresas, además de abordar la construcción de la identidad obrera material y subjetiva de los trabajadores. Al revisar las tesis anteriores sobre el proletariado en Bolivia luego del ajuste estructural, García admite la reducción numérica del obrero fabril asalariado, de contrato permanente y derechos laborales garantizados, al tiempo que revela el crecimiento del número de obreros dedicados a la industria manufacturera a partir de la implementación de las políticas neoliberales: de 117.103 en 1986 a 150 mil en 1991, a 231 mil en 1995 y finalmente a más de 393 mil en 1997, en las ciudades capitales del país (García, 1999, p. 101-102). Con esto, estaríamos ante del crecimiento de un nuevo tipo de trabajador asalariado fragmentado y no-organizado, distinto así del minero-fabril de décadas anteriores.

El autor sostiene que el nuevo desarrollo industrial, y no la desindustrialización ni la desproletarización, ha impulsado el aumento del trabajo asalariado y los cambios en el consumo de trabajo vivo. En términos estadísticos, García revela que la encuesta del INE

de 1983 a 1987 da cuenta de que las empresas de 5 a 14 trabajadores han sufrido recortes de un 55% y las de 15 a 29, un recorte de 42%, mientras que las microempresas de 1 a 4 trabajadores han aumentado su número de 22.000 a 25.000, recibiendo y propiciando el reacomodo de los demás. Dice el autor:

el número de trabajadores asalariados, de hombres y mujeres que venden su fuerza de trabajo bajo la forma de esfuerzo laboral o de producto elaborado, es hoy muchísimo más elevado que hace una década. Y sin embargo todo el sentido común opera a la inversa: como si ya no hubieran proletarios, como si no hubiese trabajo asalariado, como si la producción industrial fuese irrelevante (García, 1999, p. 104).

La investigación coordinada por García puede ser considerada un parteaguas en la discusión sobre la nueva configuración de las clases trabajadoras en el país; se trata de trabajadores que se encuentran ante otra base material y organizativa del trabajo. El autor se refiere a una suerte de proletario nómada, en general joven o mujer, que entremezcla varios trabajos al día, sea en el comercio como asalariado, en el taller doméstico junto a su familia o en el trabajo ocasional del campo. El estudio además revela que el proletario urbano altiplánico ya no es el aymara o quéchua recién emigrado del campo, sino mayormente jóvenes de segunda o tercera generación que han sido aculturados según los padrones urbanos. Se trata de lo que el autor denomina “obrero híbrido”, justamente el que no está completamente integrado a la racionalidad específicamente capitalista por mantener lazos familiares-comunitarios en su cotidiano de trabajo.

Las formas de concentración de la fuerza de trabajo son tipificadas por el autor en:

- obrero a domicilio, aquel que trabaja por cuenta propia, con la familia o el empleador que también es trabajador manufacturero;
- empresa unipersonal, en el caso de los prestadores de servicios;
- trabajador eventual, el trabajador a prueba, que se despide o no;
- contrato por obra;
- contrato permanente para obreros, aunque sin el permiso de sindicalizarse y
- contrato permanente de los empleados, que abarca los obreros cualificados e intelectualizados.

García resume a los trabajadores del complejo manufacturero a los productores directos, ya sea los ubicados en microempresas familiares, en empresas medianas o en la gran industria, desposeídos formal o realmente de los medios de trabajo. Los manufactureros artesanales e industriales serían pues las dos divisiones internas al proletariado fabril, explotados por el capital individualmente y socialmente.

En otra obra, *La condición obrera*, de 2001, el mismo García se dedica a escudriñar la minería mediana privada, justamente el sector minero más impulsado luego de la reestructuración productiva en Bolivia. Ha sido el polo principal del desarrollo de la industria minera desde los años ochenta y es considerado el sector que, juntamente con el proletariado urbano, constituye la base sobre la cual edificar nuevas identidades obreras.<sup>55</sup>

García parte de la crítica del trotskismo de Guillermo Lora ampliamente difundido en Bolivia, en el cual las clases sociales son definidas esencialmente por su lugar en el proceso productivo y el indio campesino pasa a integrar la pequeña burguesía. En cambio, García considera las construcciones objetivas, simbólicas y culturales de clase, más allá de los deseos de volver a presenciar la combativa y compacta clase minera tal y cual se presentó en el contexto revolucionario de 1952. El actual minero de empresa privada es el obrero de especialización flexible, fragmentado y polifacético, eficiente y competitivo. Es por lo tanto “un tipo de obrero portador de unos andamiajes materiales muy distintos al que caracterizó al obrero de la Patiño o la COMIBOL” (García, 2001, p. 76).

Por otro lado, el autor se interesa por los esquemas cognitivos que han forjado la clase obrera en cuanto tal y que se expresan en sus debilidades y potencialidades. Dichos esquemas cognitivos son buscados por García en el concepto de proceso de trabajo inmediato (PTI), entendido como la base técnico-organizativa del trabajo industrial. De esa forma, sostiene que la dominación sufrida por el proletariado boliviano aún después de los sucesos de abril de 1952 debe ser buscada en la disposición política del sindicato obrero ante el Estado, la forma en que se consolidó el sindicato obrero ante el Estado como el

---

<sup>55</sup>Según García, la minería mediana se ha consolidado como la segunda mayor fuente de ingresos después del sector fabril-industrial; supera, además, la producción de la extinta COMIBOL desde 1993. Es importante mencionar que la minería mediana atrae importantes flujos de inversión y dispone de una organización del trabajo anclada en tecnología, mientras que la minería chica o cooperativizada cuenta con operaciones de pequeña escala y prácticas rudimentarias. Los segmentos de la minería chica y cooperativizada, “conformados por más de 400 unidades de explotación, han aumentado su presencia en operaciones mineras en directa relación con la reducción del empleo en la minería estatal y en la minería mediana” (Montero, 2003, p. 18).

interlocutor privilegiado, en fin, los límites reivindicativos salariales que no ponían en tela de juicio al propio Estado.

En todo caso, el autor considera al obrero manufacturero, dentro o fuera de la planta industrial, como uno de los sectores del proletariado urbano, que además cuenta con los mineros de minería mediana y agroindustriales. Juntos, forman el proletariado boliviano contemporáneo, étnicamente marcado por su ascendencia aymara o quéchua, si tomamos en cuenta el altiplano del país en específico. Concluye el autor:

a esta ampliación de la importancia numérica y económica del trabajo asalariado, del obrero productivo, a la modificación de los tipos de gestión y consumo de la fuerza de trabajo que crean una nueva estructura material de la condición obrera y a la erosión de las formas de auto-organización y conciencia laboral que empiezan a ser sustituidas por nuevas formas de unificación para el capital (o desunificación del trabajo), de despolitización y conciencia fragmentada, pero también por nuevas *potenciales* maneras de autounificación y de producción simbólica de la condición obrera, le hemos de llamar **reproletarización social** (García, p. 105, 1999).

En contraposición de las tesis neoliberales anteriores que defendían el proceso de desproletarización, García igualmente desmiente la noción de que Bolivia es un país de comerciantes e importadores. De las nuevas formas de subordinación del trabajo al capital devenidas de la fragmentación industrial resultaría un nuevo proletariado. Dicha perspectiva es compartida por Montero (2003), quien nos recuerda que el proceso de reducción numérica del obrero debe ser matizado, una vez que los cambios en la organización del trabajo suelen no ser visibles precisamente por su complejidad. Ejemplos contemporáneos son: el trabajo a domicilio, las cadenas de subcontratación, las empresas unipersonales y los trabajadores eventuales, modelos de asalariamiento que reducen el desempleo abierto pero incrementan el subempleo.

En la misma dirección, Arze afirma que lejos de un proceso de desproletarización, es necesario tener en mente que la socialización del trabajo congrega diferentes tipos de trabajo en distintas ramas, subsumiéndolos dentro de una jerarquía que se destina a valorizar al capital de la gran industria a través de una compleja red de transferencia de valor, además de la presencia del trabajo informal y precario que suele ocultar la dimensión real del universo de trabajadores asalariados (Arze, 2000, p. 71).

Orellana a su vez es otro autor boliviano que se integra a la discusión acerca del proletariado boliviano en el viraje de siglo desde una posición crítica tanto a Toranzo como

a García. En conformidad con Orellana, donde Toranzo vislumbra “microempresarios desproletarizados”, García a su vez encuentra obreros en lugar de meros cuentapropistas. Orellana se aleja de la noción ampliada de la clase trabajadora y sostiene que tanto el primer como el segundo enfoque implican cierto liberalismo que “desarma ideológicamente a los trabajadores bolivianos”, además de que “la categoría marxista de proletariado es banalizada y convertida en una especie de bolsa elástica donde se introducen los sectores sociales más diversos, ignorando sus diferencias específicas” (Orellana, 2003, p. 31).

Su crítica se destina principalmente a las obras de García publicadas a fines de los años noventa e inicios del siglo XXI, a saber, las ya comentadas *Reproletarización*, de 1999, y *La condición obrera*, de 2001. Orellana parte de la crítica de lo que llama “clase obrera imaginaria”, presentada por García Linera, según la cual los obreros son definidos como mercaderes, propietarios, buscando vincularlos a la lógica pequeña burguesa. El autor además crítica la concepción subjetiva de clase social de García, su solipsismo, que “reduce la riqueza de la práctica política y social del proletariado boliviano” (Orellana, 2003, p. 32) y deriva en cierto anarcosindicalismo que da la espalda a la necesidad de la toma del poder por medio de organizaciones con estatuto y programa definidos. La supuesta concepción intersubjetiva con la cual García sostiene la formación de las clases sociales en Bolivia es el blanco de Orellana, a parte de la noción de que la lucha preceda a la clase, es decir, que la clase social resulte de la fuerza subjetiva del trabajador.

Respecto de la obra de 1999, Orellana afirma que el solipsismo de su concepción de clase social (de García) deviene del idealismo con que interpreta a Marx. Para Orellana la lucha y resistencia obreras no se encuentran en la propia subjetividad revolucionaria de los mineros y fabriles bolivianos, en “una elección subjetiva contingentemente asumida”, sino más bien son motivadas por penalidades económicas. Nuestro autor se atiene a la idea de que son las grietas abiertas por la reproducción del capitalismo las que permiten la acción revolucionaria de la clase obrera. Al mismo tiempo, sostiene que la crítica de García a la acción sindical obrera en Bolivia no toma en cuenta la naturaleza del sindicato y del partido político: el primero, orientado a luchas reivindicativas por mejores condiciones de trabajo y el segundo orientado a la toma del poder político. Aquí se explicita la distinción entre cierto autonomismo en García y el bolchevismo expresado en Orellana.

Ya en la *Condición obrera*, Orellana nos alerta para el viraje metodológico de García al privilegiar la estructura objetivo por encima del obrero. García ahí identifica al obrero como aquel que vende trabajo útil para otros, lo que es criticado por Orellana, ya que

en consecuencia, es obrero todo aquel que vende su fuerza de trabajo: no sólo el obrero de fábrica con contrato permanente; sino también los obreros eventuales, los jornaleros a tiempo parcial, pero también los campesinos, pequeños comerciantes, analistas individuales, vendedores de pantalones, hasta recolectores de basura; “mercaderes” que venden su fuerza de trabajo bajo la forma de un producto ofrecido al mercado (Orellana, 2003, p. 52).

Esta es la primera divergencia entre los autores. Mientras García adopta la noción ampliada de trabajador productivo, Orellana prefiere cerrarse al productor directo o indirecto sin tomar en cuenta el comercio o los servicios. El segundo y principal punto de desacuerdo está en la crítica de Orellana a la deducción que realiza García desde el proceso de trabajo inmediato para indicar los límites y posibilidades de la praxis política del proletariado boliviano luego de 1952. En otras palabras, García toma las relaciones de poder propiciadas por la organización técnica y material de la industria boliviana del siglo XX como punto de partida de cierto habitus conservador del sindicalismo de ese país. Orellana a su vez rechaza la idea de que el resultado de una lucha política esté predeterminado por las relaciones de poder establecidas entre el trabajo vivo y el capitalista; en su lugar, sostiene que la lucha política es contradictoria en sí misma. Así es como queda explícita la crítica de Orellana a las “oscilaciones metodológicas entre subjetivismo romántico e idealismo objetivo estructuralista” (Orellana, 2003, p. 33) presente en García.

Más allá de la divergencia en cuanto a la conformación de las clases trabajadoras en Bolivia, Orellana asume que la forma predominante de la clase obrera en el país presenta hoy por hoy “retazos de obreros regulares concentrados en un mismo espacio geográfico, subsumidos realmente por el capital, y grandes masas de obreros a destajo subsumidos formalmente, que circundan las minas y los centros industriales de producción” (Orellana, 2003, p. 240). Esto, producto del desarrollo desigual y combinado del capitalismo en Bolivia. Así como en García, Orellana reconoce la imbricación de obreros subsumidos formal y realmente al capital, pero elimina de su concepción de proletariado los trabajadores del comercio y los servicios.

Partimos ahora a lo empírico. Pudimos recolectar en el trabajo de campo en La Paz y El Alto suficiente material como para ofrecer una noción del mercado laboral de El Alto. ¿Por qué El Alto? ¿Qué tiene que ver la metrópoli aymara con lo comentado hasta aquí? Ahora bien, comencemos por mencionar que El Alto cuenta con más de un millón de habitantes y su crecimiento vertiginoso es resultado directo de las políticas neoliberales de los años ochenta. Además de eso, es una ciudad netamente proletaria y emblemática en cuanto a reestructuración productiva se refiere; los alteños han sido los protagonistas de las luchas de 2003 y 2005 por el gas y el agua dentro de lo que se conoció como el ciclo rebelde boliviano, cuya relevancia ha determinado el curso político nacional de los últimos años, incluyendo la ascensión presidencial de Evo Morales en el 2006. Creemos que el sindicalismo obrero altiplánico debe voltearse hacia los trabajadores y trabajadoras si es que pretende desentrañar su dinámica laboral y volver a respirar aires combativos y autónomos.

## **Capítulo 3: El mundo del trabajo alteño**

### **3.1. La ciudad de El Alto: refugio laboral aymara**

Rojas y Rossell (2002) afirman que el proceso de formación de El Alto comprende tres largas fases o etapas: como zona rural, como zona urbana de La Paz y, por fin, como ciudad independiente. En la primera etapa, durante los primeros años del Siglo XX, El Alto figuraba como una gran zona rural de propiedad de pocos, compartiendo el espacio con establecimientos públicos y privados.

Otros estudios recurrentemente citados, el de Sandoval y Sostres (1989) y los dos volúmenes de Antezana (1988, 1993), ratifican que los antiguos propietarios de las tierras de El Alto, entre ellos Julio Tellez Reyes, a inicios de los años 40, empezaron a lotear los terrenos, sustituyendo el rol del hacendado como dueño de las tierras y así fungiendo como nueva capa explotadora urbana de los migrantes campesinos aymaras. Entre los alteños es sabido que parte de la burguesía alteña es compuesta de los primeros loteadores que tramitaban y han tramitado los terrenos de la urbe.

Con base en Fernández (2007), la historia demográfica de la ciudad registra sus primeros asentamientos agrarios a inicios del siglo XX rodeados por villorrios vinculados a los tres sistemas ferroviarios, luego las carreteras a Viacha, Oruro y al Lago Titicaca, además del aeropuerto. Los primeros nombres dados a la ciudad por las familias campesinas llegadas a la localidad han sido Alaj Pacha (tierra en el cielo), Cruz Pata (cruz de arriba) y Alto Pata Marka (pueblo de arriba). Hacia 1942 fue fundada Villa Dolores al sur, el barrio más antiguo de El Alto. Dos años después sería fundado el barrio 16 de Julio al norte, que abarca lo que hoy es Villa Los Andes y Villa Ballivián. En 1948 se fundó Alto Lima al norte y en 1957 Villa Bolívar al sur.

Los mismos estudios destacan flujos migratorios crecientes a partir de 1952, dándole a El Alto un carácter urbanístico incipiente para después ser añadida marginalmente a La Paz. Aunque el ajuste estructural de mediados de los años ochenta haya incrementado el proceso migratorio hacia El Alto, convirtiéndola en refugio de miles de exmineros y exfabriles despedidos, se pueden ubicar flujos migratorios intensos a partir de la Revolución Nacional y la Reforma Agraria. Antezana (1988) confiere destaque especial entre los años 1970 y 1985, periodo concentrador de importantes flujos

migratorios. En 1985, bajo la ley 651, la ciudad obtuvo la titularidad de Cuarta Sección de la Provincia de Murillo, en el departamento de La Paz, consistiéndose oficialmente en municipio independiente de La Paz el 26 de septiembre 1988, bajo la Ley 1014.

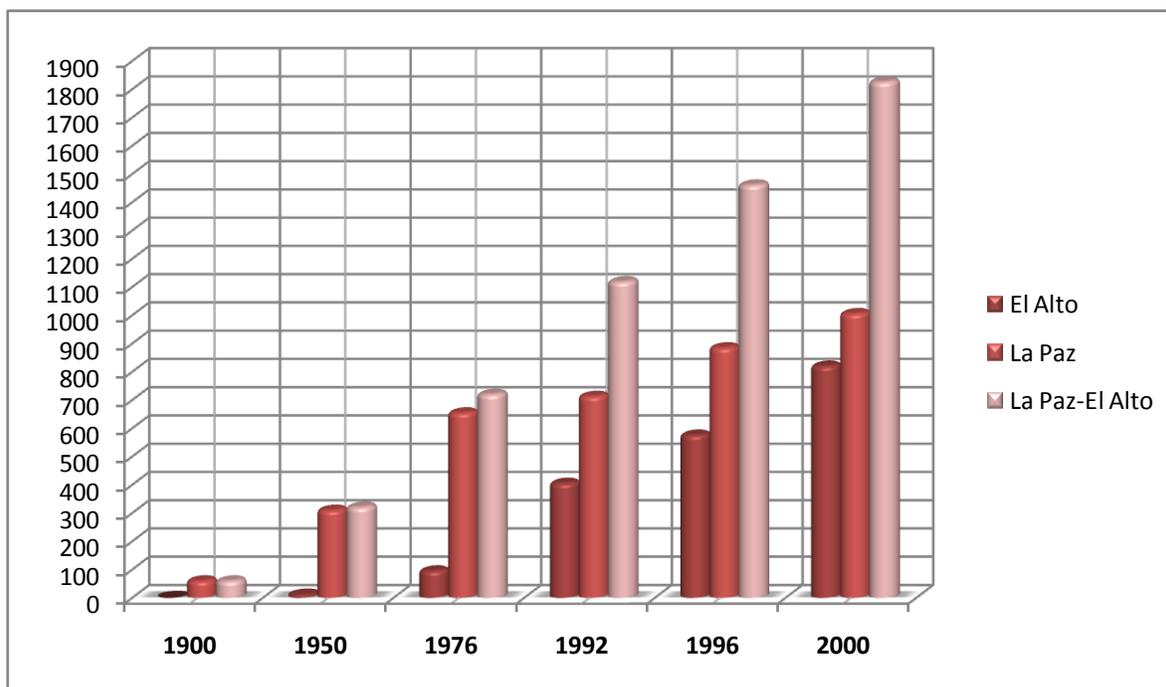
Los primeros estudios socioeconómicos sobre El Alto en específico surgen precisamente por su elevación a rango de ciudad por el Congreso Nacional. Los datos estadísticos oficiales y resultantes de programas de investigación independientes sobre El Alto son abundantes. No sólo el INE se ha encargado de publicar datos socioeconómicos y lingüísticos, sino también innumerables ONG's y fundaciones conocidas dentro de la definición de "cooperación internacional" que alguna vez poblaron y han poblado la metrópoli aymara. En vista de eso, aquí recopilaremos diversas fuentes para poder explicitar los rasgos generales de esta ciudad, tomando en cuenta no solamente el año de 1988, sino datos de la década anterior en la que todavía se consideraba un barrio marginal de La Paz, y también incluyendo los años posteriores hasta inicios del siglo XXI.

En términos oficiales, El Alto ya se posiciona como la tercera ciudad más poblada del país, desplazando Cochabamba y sólo atrás de Santa Cruz y La Paz. Ya en términos extraoficiales, desde 2007 El Alto es el segundo municipio más poblado de Bolivia luego de Santa Cruz. Su tasa de crecimiento es la más alta desde hace treinta años. Para otros, la población, hacia 2000, casi llegaba al primer millón (Gráfico 1). Dotada mayoritariamente de población nativa descendiente de comunidades aymaras y quéchuas del campo que no cesan el flujo migratorio interno, El Alto es considerada la **metrópoli aymara** por excelencia y la que reúne gran parte de la fuerza de trabajo que se desplaza a La Paz diariamente. Según Albó, "si La Paz sigue siendo el corazón político del país, El Alto sigue siendo el pulmón de La Paz" (Albó, 2006, p. 70).

Es sabido que los migrantes aymara del campo, especialmente del departamento de La Paz, estando en El Alto, todavía mantienen contacto y visitan las tierras a que tienen derecho hereditario en el medio rural, ya sea para trabajarlas y poder seguir teniendo derechos sobre su pedazo de tierra, ya sea para suavizar periodos de emergencia y escasez en la ciudad, o entonces para participar de las instancias decisorias que definen las autoridades comunitarias. Los aportes enviados por los migrantes en la ciudad, en forma de trabajo comunitario o dinero, son absorbidos por la comunidad altiplánica de origen y retribuidos en forma de derechos y prestigio. Ya en la ciudad, el migrante residente vende

su fuerza de trabajo o sus productos en general en el comercio familiar y detiene, en cambio, salario, bienes o servicios (Gráfico 2).

**Gráfico 1 - Crecimiento poblacional de El Alto y La Paz en el siglo XX**  
(en miles)



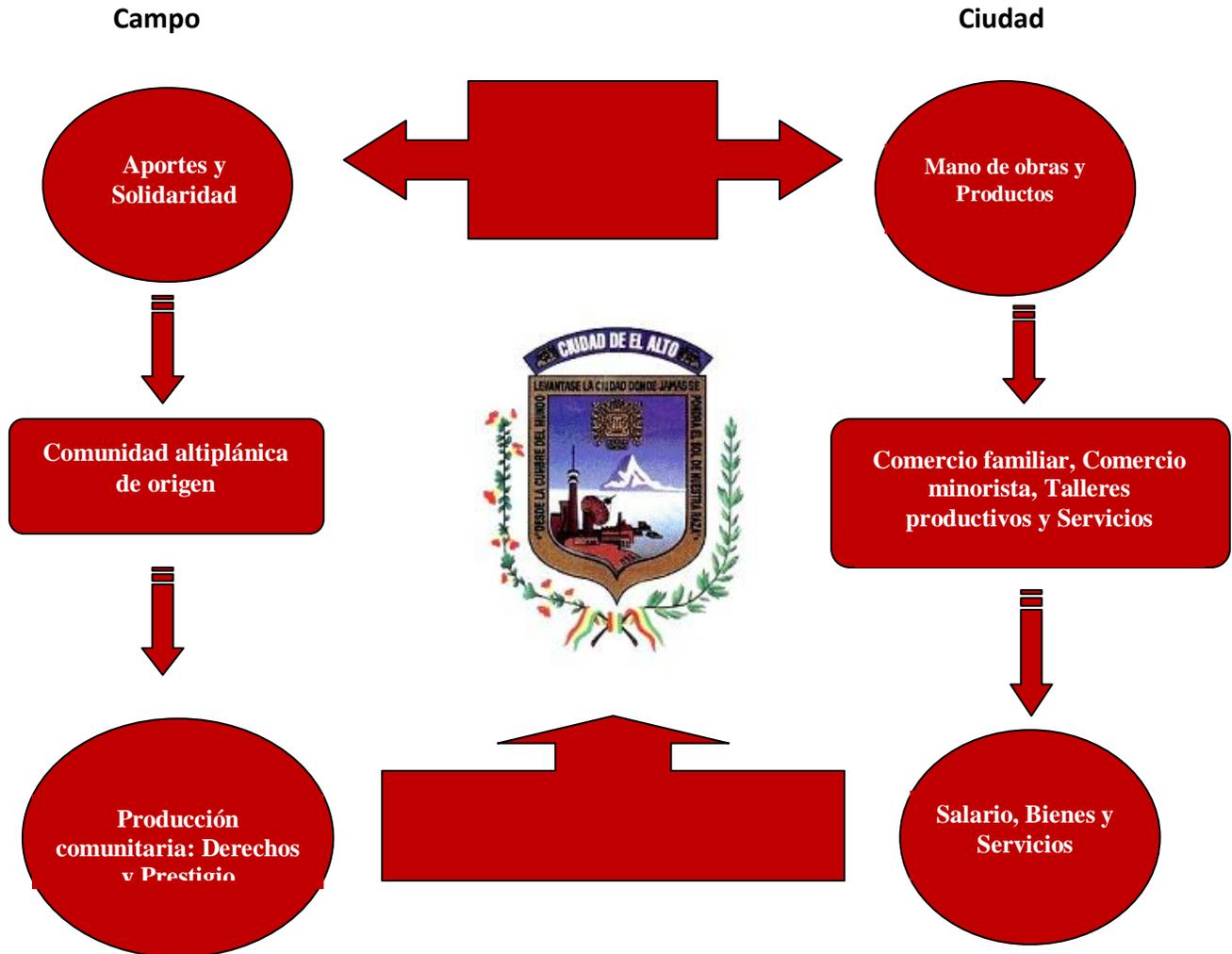
Fuente: OXFAM; Red Hábitat (2000)  
Adaptación del autor

Por ello, retomando de nuevo a Albó (2006), es correcto afirmar que muchos municipios rurales del altiplano aymara tienen su segunda sede en la ciudad de El Alto. La ciudad sirve de puente entre lo andino urbano y lo andino rural. En palabras de Sandoval, “no hay tendencias de que El Alto se convierta en una ciudad plenamente occidental, aunque la ciudad sea fuente de generación de valores de consumo”.<sup>56</sup> Dicho de otra manera, “en El Alto uno puede ser tan urbano como comunitario, dependiendo como se mueven esos factores. No son extremos, sino intermedios. Es una ciudad que no tiene naturaleza republicana, cuya población busca una suerte de neogénesis, no solamente cultural, sino económica”<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Entrevista a Godofredo Sandoval, La Paz, oct. 2009.

<sup>57</sup> Entrevista a José Luis Chuquimia, El Alto, oct. 2009.

**Gráfico 2 – El flujo andino rural y urbano en El Alto**



**Fuente: Diagnóstico PDM 2007-2011- GMEA  
Adaptación del autor**

En una serie de estudios en tres volúmenes ya clásicos sobre el proceso migratorio aymara a La Paz (o *Chukiyawu* en aymara), realizada a fines de los años setenta e inicios de los ochenta, cuando El Alto todavía era apéndice paceño, Albó y otros autores afirmaban que la mayor motivación migratoria era de carácter económico-laboral, a su vez provocada por la falta de tierras para sembrar, por la baja productividad del campo, por el agotamiento del suelo o por insuficiencia de tierras para alimentar a toda familia y/o comunidad. En segundo lugar, estaba el seguimiento de familiares que habían migrado anteriormente, así como la posibilidad de acceso a educación formal en castellano y la búsqueda de mayor

status social (Albó et al., 1981, 1982, 1983).<sup>58</sup> El primer objetivo del alteño es construir su vivienda. Tanto es así que el nivel de propiedad de vivienda es alto en la ciudad, aunque el nivel de pobreza sea generalizado.

Después de la Reforma Agraria, los pueblos – cabeceras de otras comunidades aledañas – se vaciaron, ya que el esquema de explotación del campo se alteró sustantivamente. Se fue extinguiendo el *pongueaje* y el *mitanaje*, así como otros tipos de servidumbre en el campo de los cuales se nutrían los vecinos de pueblos. Es importante destacar que los campesinos aymaras que servían a los hacendados no eran los únicos trabajadores del campo. A la servidumbre de las haciendas se sumaban las comunidades altiplánicas organizadas en *ayllus*, no directamente sometidas a las haciendas, ya que cultivaban sus propias tierras y trababan intercambios para proveerse de lo que no se producía localmente. Estos campesinos aymara también han sido afectados negativamente por la parcelización de sus tierras y la proliferación del minifundio en el altiplano ya abordados anteriormente.

En el plan de Reforma Agraria trazado en 1953, muchas veces se desconsideró la división geográfica de *ayllus* y no se tomó en cuenta el cultivo en distintos pisos ecológicos entre el altiplano y valles tropicales de Bolivia. Albó y otros (1981) revelan que los campesinos oriundos de Omasuyos, Ingavi, Pacajes y Aroma, todas ellas provincias expulsoras de campesinos aymaras del departamento de La Paz, provienen con más frecuencia de comunidades originarias que de exhaciendas. En pocas palabras, la joven ciudad de El Alto es el resultado de la suma de la población que trabajaba en las haciendas de la zona en manos de pocos hacendados a inicios del siglo XX, más los migrantes que, especialmente a partir de los cambios propiciados tanto por la Revolución como por los ajustes estructurales de los años ochenta, llevaron a la ciudad su fuerza de trabajo.

Por lo tanto, en El Alto hay enclaves de excampesinos – tanto de exhaciendas como comunarios - sobre todo en regiones menos urbanizadas de El Alto Norte, conformados actualmente por los barrios 16 de Julio, Río Seco, Villa Ingenio y Ballivián y dónde la sociabilidad andina todavía persiste, así como hay enclaves de exmineros, sobre

---

<sup>58</sup> En un estudio más reciente sobre la problemática migratoria y generacional en El Alto, Fernández (2001) afirma que el mejoramiento de las condiciones de vida de los alteños migrantes recién llegados suele durar de tres a cuatro generaciones a través de la educación de generaciones más jóvenes, la penetración en la política local o la inserción laboral.

todo en El Alto Sur, conformado actualmente por los barrios Santiago II, Senkata, Kenko y Ventilla. Un estudio de El Alto nos confirma: “en El Alto sur, tú tienes territorios, tienes espacios de población que viene de otras regiones, por ejemplo, de regiones mineras, de ciudades mineras. Las regiones predominantemente aymaras están en El Alto norte”<sup>59</sup>.

En términos generales y guardando las especificidades de cada zona, la ciudad puede ser dividida en:

- zona Central, que alberga centenas de tiendas de abarrotes, muebles, productos agrícolas y alimentos, y los establecimientos administrativo-burocráticos, compuesta de población clasemediera proveniente de La Paz y ciudades como Oruro y Potosí;
- zona Sur, la más joven de las tres zonas, compuesta de la clase media depauperada y exmineros, y
- zona Norte, de concentración manufacturera, artesanal y comercial, reducto de migrantes campesinos aymaras.

Hoy en día, son diez los distritos que oficialmente componen la ciudad, aunque es difícil especular la cantidad de nuevas “ocupaciones clandestinas” en una ciudad en la cual son creados de tres a cuatro barrios mensualmente. Laruta (2006) apunta que según el INE, la ciudad de El Alto contaba con más de 535 Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) reconocidas y otras 20 en proceso de legalización urbanística. La inserción laboral de inmigrantes campesinos aymaras y quéchuas en El Alto también ha sido tema de estudios anteriores. Aquí lo que nos interesa es esquematizar los ciclos laborales de mujeres, varones y jóvenes migrantes que atienden a un patrón más o menos constante a partir de fines de los años setenta.

Una vez tomada la decisión de migrar a la urbe, el hombre y la mujer del campo no se convierten automáticamente en fabriles en el caso de ser ésta la meta, sino en artesanos o en comerciantes minoristas, o entonces pasan a engrosar el desempleo abierto. “El campesino no acaba de dejar plenamente su condición campesina y a lo más se hace al mismo tiempo semi-proletario. Vive una condición más o menos anfibia y sumamente inestable” (Albó et al., 1981, p. 6). Por consiguiente, a inicios de los años ochenta, anterior

---

<sup>59</sup> Entrevista a Godofredo Sandoval, La Paz, oct. 2009.

a la migración masiva que continuaría en el año de 1985, más de la mitad de los varones llegados del departamento de La Paz se ocupaban como artesanos no calificados mientras que las mujeres se concentraban en el servicio doméstico y el comercio (Albó et al., 1981; van Lindert, Verkoren, 1983).

Aunque predomine la dispersión ocupacional de residentes excampesinos de mismo origen en la ciudad, el ciclo laboral del varón adulto empezaba en la rama de la construcción civil, como albañil, hasta que sus redes sociales compuestas de parientes, paisanos, compadres y/o padrinos le aseguraran otra fuente de ingreso más estable.<sup>60</sup> En el caso de la mujer joven residente excampesina, el ciclo laboral iniciaba en casa de familias urbanas ocupándose como domésticas, recibiendo a cambio alimentación y vivienda, pasando posteriormente al comercio y artesanía/confección. Los estudios de ese entonces también apuntaban la presencia marcada de mujeres en el comercio, en comparación con el hombre, en la ladera Oeste de La Paz, El Alto Sur y Norte, así como mencionaban la presencia de hogares y empresas matriarcales, donde la mujer asume el rol protagónico y el hombre un rol secundario, casi parasitario. La mujer en el comercio y como jefa de hogar son fenómenos que siguen vigentes en la sociedad alteña del siglo XXI.

En un estudio del CEDLA sobre el llamado “sector informal urbano” a fines de los años ochenta, Ardaya aclaraba que las actividades en el comercio ambulante son la segunda alternativa para la mujer que deja de trabajar en el servicio doméstico remunerado. “Para el caso de las migrantes, el trabajo doméstico ha permitido una resocialización en el mundo urbano y, para las nativas, significó la puerta de entrada al mercado de trabajo” (CEDLA, 1988, p. 201). Rivera (1996), a su vez, señala que el trabajo doméstico transitorio es típico de las solteras, mientras que el trabajo por cuenta propia es típico de las casadas. En el caso de la andina ya asentada en la urbe, su vida laboral suele saltar el empleo doméstico y empezar como ayudante en el negocio de la familia nuclear o extendida. El excedente en estos casos es extraído por medio de la sobreexplotación del trabajo familiar (hijos, marido, primos, paisanos y compadres). La autora afirma que el éxito migratorio femenino, muchas veces anclado en las redes consanguíneas horizontales de la tradición rural andina, que se

---

<sup>60</sup> Las redes sociales que se prestan a recibir los migrantes del campo en El Alto sirven de colchón amortiguador del impacto que provoca la llegada a la urbe. Son redes extensas y abarcan desde parientes hasta paisanos o compadres. A principio, las redes de parientes son más acogedoras que las de padrinos y compadres, ya que éstos últimos suelen ser elegidos según su poder adquisitivo a lo largo del tiempo de residencia en la ciudad.

extiende en la ciudad hacia redes de paisanaje o gremiales, convierte a la mujer en jefa de hogar en muchos de los casos.

Finalmente, en el caso del joven varón residente, su ciclo suele empezar en un taller como aprendiz, periodo en el cual aprende un oficio de manera no remunerada y/o superexplotada hasta que pueda constituirse maestro y montar su propio negocio como cuentapropista. Muchos jóvenes varones exrurales pasan por las Fuerzas Armadas y en el cuartel tienen su rito de paso, del cual salen prestigiados en sus comunidades. En palabras de Cotle y Ruiz (1993), el cuartel funciona en este caso como filtro étnico. Además del adolescente, es marcada la presencia del trabajo infantil, ya sea ocupándose como sirvientes, ayudantes de transportistas, comerciantes callejeros, ayudantes de sastre o panaderos antes de los diez años de edad. Algunos niños se cubren con pasamontañas para esconder su edad y conseguir trabajo, en especial los lustrabotas en El Alto y también en La Paz.

En términos de rama de actividad, los autores para ese entonces afirmaban que la mayoría de los empleados privados de origen campesino trabaja como garzones, mensajeros y otros, lo que nos lleva a pensar que el asentado en la ciudad ha recurrido mayoritariamente a ocupaciones temporales o inestables al llegar, y en momentos de emergencia posteriores, a menudo deciden cambiar de empleo y/o de ocupaciones. Es curioso observar que aún antes del proceso de ajustes estructurales y reestructuración productiva, los migrantes asentados en El Alto (y La Paz) se constituían como trabajadores precarizados e inestables.

De hecho, datos levantados por van Lindert y Verkoren a inicios de los ochenta permiten afirmar que la migración masiva y la ocupación en actividades consideradas informales y precarias es anterior al Decreto Supremo 21060 de 1985. Sus datos revelan que en la zona 16 de Julio, una de las más pobladas y antiguas de El Alto, más de un 60% de la PEA ya trabajaba como artesanos o pequeños talleristas productores y casi un 50% de las mujeres trabajaba en el comercio. Los mismos autores alertaban para el bajo número de trabajadores fabriles al tiempo que afirmaban que la “gran mayoría trabaja en pequeñas empresas bajo relaciones de producción que son frecuentemente semicapitalistas” (van Lindert; Verkoren, 1983, p. 50). Sin embargo, los mismos datos revelan una contratendencia, ya que los migrantes entrevistados se ocupaban en ese entonces

principalmente en la artesanía y construcción en detrimento del sector de servicios y en el comercio, fenómeno que sufriría una inversión en el periodo posterior al ajuste estructural.

En general, el ciclo campesino en la ciudad inició con trabajos precarios o con la desocupación, transitando por actividades eventuales relativamente estables hasta conseguir espacio en empresas familiares, como cuentapropistas o, en caso de éxito, tener sus propios ayudantes u obreros. En este caso, “no es el Estado, sino los mismo residentes los que, de esta manera, va creando sus propios puestos de trabajo” (Albó et al., 1982, p.135). Entre las ocupaciones típicamente pasajeras se encuentran los albañiles, cargadores, vendedores ambulantes, ayudantes de colectivo; como ocupaciones más estables de tipo campesino tenemos los artesanos (en ese sector de trabajo también se incluye la rama metal-mecánica, a saber, mecánicos, electricistas, llanteros, chapistas, joyeros y otros orfebres) y comerciantes minoristas; y entre las ocupaciones estables de tipo “moderno” están los fabriles, empleados públicos y privados.

Los estudios de Albó y otros también revelan que los residentes aymaras que en la ciudad se vuelven fabriles lo ven como ascensión social, considerándose de clase media justamente por ser clase obrera. Lo mismo sucede en el caso de mujeres que en la ciudad logran ocuparse como domésticas. Por otro lado, el que se establece como comerciante, no lo ve de la misma forma, “es decir, el éxito al estilo campesino sigue teniendo menos logro que el éxito al estilo urbano” (Albó et al., 1983, p. 147-48). En un diagnóstico socio-económico del importante distrito 5 a fines de los años noventa, Rossell señala lo mismo, aunque nos advierte sobre la condición minera:

a pesar de los múltiples problemas que enfrentan los inmigrantes en el distrito 5 de El Alto (hacinamiento, carencia de servicios básicos, loteamientos, etc.), reconocen que en muchos casos el traslado ha permitido una mejoría en su calidad de vida; les permite tener colegio para los hijos, una mínima oportunidad para ganarse la vida en la ciudad, etc. Las opiniones son distintas entre los inmigrantes de origen minero: ellos afirman que vivían mejor antes, en los campamentos mineros, donde contaban con mejores servicios (pulpería, servicios básicos, etc.) (Rossell, 1999, p. 18-19).

Condicionados por el mercado laboral y por el bajo desarrollo industrial urbano relativo de Bolivia, los migrantes residentes en El Alto se han visto forzados a autogenerar sus fuentes de ingresos. No existe otro sector más apropiado para tal emprendimiento que el comercio, los servicios o el pequeño taller productivo, con base en la solidez familiar y

comunitaria traída del medio rural que se manifiesta en el cotidiano urbano. Es así que, de parcelarios en el campo a informales, precarios e inestables en la ciudad, las familias aymaras y quéchuas se urbanizan e interiorizan el afán de satisfacer las expectativas que traen del medio rural, que incluyen incorporar a sus hijos a la escuela, obtener actividad ocupacional estable y, no raramente, ascender en la escala social. Dotados de nuevos patrones de consumo, Anze destaca el anhelo del migrante residente: volverse propietario de un terreno con o sin casa construida para que valga la pena el traslado a la ciudad (Anze, 1995). A pesar de los obstáculos impuestos por el medio urbano, no se excluye la reproducción de la sociabilidad andina rural, ya que El Alto se revela como una suerte de “colchón cultural andino” (Cotle, Beatriz Ruiz, 1993, p. 179). Por mientras, conviene señalar que elementos basados en la reciprocidad del campo subsisten en la ciudad, aunque subsumidos por la lógica de acumulación familiar burguesa.

En 1989, Escóbar y Larrazábal, investigadores del CEDLA, señalaban que hacia mediados de los años setenta, casi la mitad de la PEA urbana boliviana era conformada por trabajadores informales, precarios e inestables (si contamos el sector doméstico, se trataría de más de la mitad). En el mismo año, en las grandes ciudades bolivianas del eje, un 57% de la población hacía parte de los sectores semiempresariales y familiares, principalmente en el comercio y en los servicios. En la misma época, Sandoval y Sostres anunciaban que los trabajadores no asalariados en los que incluyen los cuentapropistas y ayudantes no remunerados constituían ya en ese entonces un 50% e la PEA de El Alto; y del grupo de cuentapropistas, un 58% era compuesto por mujeres en el comercio.

Para el año de 1993, Antezana nos revelaba que más de un 40% de la PEA alteña era compuesta de trabajadores por cuenta propia (TCPs), “lo que significa que en cuanto a estructura económica y de empleo se refiere, El Alto sería una ciudad “informalizada”” (Antezana, 1993, p. 56). Estos números confirman lo que se ha podido ver en las calles de Bolivia desde hace, por lo menos, dos décadas y media. Desde ese entonces, el tema invoca gran trascendencia en el país; no sólo por la dimensión numérico-empírica de los datos mencionados, sino porque las actividades llamadas informales en el comercio y servicios generan más ingresos que otras actividades formales (como el magisterio) y, hoy por hoy, constituyen el mayor empleador en El Alto. Ante esto, nos toca analizar lo que ha sido discutido sobre el llamado “sector informal” en Bolivia y los distintos enfoques

desarrollados para que posteriormente analicemos directamente al mercado laboral alteño con más profundidad.

### **3.2. ¿Qué se entiende por sector informal?**

A fines de los años ochenta, como fruto del impacto del ajuste estructural y la reestructuración productiva en el llamado “sector informal urbano”, se empezaron a realizar en Bolivia los primeros estudios enfocados en la temática, con un rezago de al menos una década y media respecto de los estudios sobre la informalidad en Latinoamérica. Con el congelamiento de los salarios fruto de la Nueva Política Económica (NPE) adoptada en 1985, hubo traslado de trabajadores desde el sector formal al informal, es decir, desde el trabajo estable en las minas o las fabricas al trabajo inestable en las calles. Además, la implantación de la libre importación ocasionó el cierre de muchas unidades productivas y comerciales por la dificultad de competir con productos extranjeros. Lejos de un estallido social, el proletariado minero y fabril reaccionó ante dichas medidas conformando estrategias de vida permanentes en la llamada informalidad.

Se sabe que la informalidad boliviana ha sido impulsada por los flujos migratorios masivos campo-ciudad, así como por el crecimiento vegetativo de la propia población urbana. Aunado a eso, el bajo nivel de industrialización boliviana, comparativamente al de sus vecinos mayores, y las dimensiones modestas de su mercado se han adaptado con considerable facilidad a la proliferación de pequeñas y microunidades en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto. La peculiaridad boliviana está en su hibridez, su heterogeneidad, tanto en lo que se refiere a formas de organización del trabajo como procesos productivos; en el desarrollo de varias ramas de actividad a lo largo de casi treinta años, la informalidad y la precariedad del trabajo no han sido marginales, sino centrales.

De este modo, este creciente sector ha servido no solamente como válvula de escape al desempleo abierto, sino que ha absorbido trabajo femenino y joven, además de cumplir un rol importante en la redistribución de ingresos en el caso de las mercancías contrabandeadas que son vendidas a un menor valor que las producidas nacionalmente. En Bolivia, el CEDLA y el ILDIS reunieron grupos de investigadores en ese entonces para llegar a varias conclusiones sobre el tema en el país, pero sin dejar de asentar consensos; ya otros autores aportaron individualmente.

El primer enfoque ubicado por estos estudios en los años sesenta del siglo pasado es el vinculado con el desarrollismo, que destaca que hay colectivos al margen de la modernización. En este caso, se consideró una posible integración del sector informal al formal, alcanzada con tasas de crecimiento económico positivas. Cortés (2003) profundiza los aspectos de lo que se puede denominar **teoría de la modernización**. Según dicho autor, en América Latina el Centro para el Desarrollo Económico y Social de *América Latina* (DESAL) es el organismo que se ha encargado de difundir el enfoque, que escinde en dos polos a la sociedad: la tradicional-rural y la moderno-urbana.

El desarrollo de la **teoría de la dependencia** (no necesariamente marxista) contesta críticamente la postura anterior, postulando que la marginalidad es resultado del desarrollo típico de las sociedades latinoamericanas, como parte de su estructura. Del individuo marginal, se pasa a las actividades económicas marginales, que generan a su vez el ejército industrial de reserva. Al tomar en cuenta el capítulo XXIII de *El Capital* y manejando términos como “ejército industrial de reserva” y “superpoblación relativa”, se destacan los nombres de José Nun, Aníbal Quijano y Fernando Henrique Cardoso.

En el marco de una serie de estudios empíricos promovidos por el Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los setenta, se incluye un estudio en Ghana realizado por Keith Hart en el cual se definió al sector no formal a partir de los ingresos percibidos. En conformidad con este enfoque, se busca empleo debido a la ausencia de oportunidades en el llamado sector formal y por la falta de capacitación propia. Posteriormente, anclados en los conceptos de Hart sobre lo formal/informal, en un estudio en Kenia en el 1972, se atribuye los términos formal/no formal, según las características de la empresa. Las peculiaridades del sector pasan entonces a ser el fácil ingreso: la utilización de materiales nacionales, la propiedad familiar de las empresas y sus pequeñas dimensiones (Varios, 1988, p. 27-28). En el informe de Kenia, Rendón y Salas plantean que

se argumenta a favor del uso de los términos formal e informal como una alternativa a la distinción convencional entre sector tradicional y sector moderno”, imagen que ya “no correspondía a la realidad de Kenia, pues los dos sectores son modernos y ambos son una consecuencia del proceso de urbanización (Rendón y Salas, 2003, p. 554).

El Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (**PREALC**), programa vinculado con la OIT, logró establecer una denominación general en los estudios

sobre la temática, acuñando la terminación **SIU** para determinar el **sector informal urbano**, sustituyendo la noción de marginalidad urbana. El término es actualmente adoptado por una gama de autores con distintos enfoques, lo que ha provocado disensos e incluso el abandono del término. Sin embargo, en estos estudios se pasó a considerar el empleo, las unidades productivas y el acceso al mercado como elementos generales para identificación del sector informal. Desde el empleo, se identifican a las empresas con cuatro empleados como máximo.

En ese entonces, la referencia eran “las personas ocupadas en el servicio doméstico, los trabajadores ocasionales, los trabajadores por cuenta propia y los patronos, empleados y obreros y trabajadores familiares” (Varios, 1988, p. 30). La unidad productiva se refiere a empresas en las cuales no hay división clara entre propietarios del capital y del trabajo y donde el salario es una de las formas de remuneración posible, además de la baja intensidad de tecnología aplicada. Por último, el acceso al mercado se refiere a los trabajadores/as ubicados/as en el estrato base más competitivo del mercado laboral.

Victor Tokman, exdirector del PREALC y uno de los pioneros en el tema, sostiene que la propuesta consiste en hacer más eficaz la intervención del Estado para apoyar al sector informal y mejorar por esta vía los ingresos de los grupos más pobres de la población. Con respecto al comercio ambulante, rama importante de la informalidad, el autor sostiene que “su carácter permanente está determinado por la existencia de un excedente estructural de fuerza de trabajo que sólo disminuirá cuando se generen empleos productivos suficientes” (Tokman, 1987, p. 15). El estudio colectivo del CEDLA de 1988 sobre la temática destaca la perspectiva latinoamericana de análisis de la informalidad realizada por el PREALC. En relación al cambio de perspectivas sobre la informalidad en ese entonces, Larrazábal sostiene que

la perspectiva de la fuerza de trabajo excedente y la recuperación de la idea de estrategias de sobrevivencia son, junto a la asociación del concepto de informalidad con la unidad productiva y no con los individuos, piezas claves que permiten un avance cualitativamente importante (Varios, 1988, p. 33).

De acuerdo a su interpretación del enfoque del SIU, el concepto de marginalidad, que sirvió en el pasado como herramienta de “autopercepción de las masas”, hoy en día ya no se aplica debido a que los informales no se identifican como marginales ante la

sociedad, sino como parte esencial y funcional de ella. A su vez, Mansilla y Toranzo apuntan que la investigación empírica del PREALC tuvo influencia de una suerte de marxismo estructuralista y cierta teoría de la dependencia latinoamericana, según la cual

la economía informal emerge como el resultado del carácter heterónimo y dependiente del desarrollo latinoamericano, de la naturaleza contradictoria de su estructura social, de una evolución que produce necesariamente enormes disparidades de ingreso y desigualdades sociales y, por ende, de un proceso capitalista de modernización que demostrará su calidad inferior y su dinámica insuficiente (Mansilla, Toranzo, 1991, p. 19).

Con base en Mansilla, se parte de un concepto de modernidad de los países centrales y se reproduce internamente en cada país latinoamericano la relación centro-periferia, ya que a partir de esa perspectiva se opone lo informal-tradicional a lo formal-moderno, además de proponer la integración del primero al segundo mediada por la acción estatal, repitiéndose las debilidades de la dualidad propuesta por la teoría de la modernización anterior. Otras dos críticas vertidas sobre el enfoque del PREALC señalan que quienes se adhieren a la informalidad, no lo hacen simplemente como estrategia de sobrevivencia, sino como estrategia de vida permanente. Siendo alternativas permanentes, reflejarían ya no un fenómeno coyuntural, sino más bien estructural.

Esto significa que una elevada proporción de los trabajadores integrados a los sectores semiempresarial y familiar no constituye, necesariamente, fuerza laboral de “reserva” para el capital, y, por lo tanto, no cumple la función “depresora” de los salarios que suele atribuirse al conjunto de la población excedente (Escóbar, 1990, p. 15).

Ésta también es la postura adoptada por el **Foro Económico** promovido por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), de Bolivia, en 1986. Conforme a los miembros del Foro, como estrategia de vida, los informales no estarían dispuestos a ingresar y/o retornar a la formalidad, aunque haya empleos. Además, según ellos, el enfoque del SIU no incorpora a los miembros del sector formal que se benefician de la ausencia estatal en la informalidad. El Foro del ILDIS igualmente sostiene que en el enfoque del PREALC/SIU también se ignora la presencia de actividades ilegales como el

narcotráfico.<sup>61</sup> De acuerdo a la perspectiva macroeconómica adoptada por los miembros del Foro Económico, “se entiende como economía informal al conjunto de actividades legales e ilegales que no se registran en las cuentas nacionales” (Varios, 1986, p. 10). La informalidad es aquí subdividida en dos niveles: positivo - producción de bienes y servicios destinados a sectores de bajos ingresos que, además, suaviza los efectos de crisis económicas - y negativos - cuyo mayor ejemplo es el tráfico de cocaína en Bolivia. La debilidad del Foro está en que se centra en el “desarrollo dinámico” y se deja influenciar por la escuela económica neoclásica, lo que limita sus planteamientos en cuanto a la articulación de la llamada informalidad con el gran capital nacional e internacional.

En Bolivia, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (**CEDLA**) trató de desarrollar su propio enfoque, basado en los parámetros del PREALC a fines de los años ochenta. Según dicho enfoque, se trata de averiguar la articulación de formas productivas distintas desde la unidad productiva como unidad analítica, priorizando cuatro momentos distintos: relaciones laborales, formas de organización de la producción, articulación de formas productivas y circulación de mercancías. En el primer caso, se refiere a relaciones de contratación, cooperación o familiares; en el segundo momento, se caracterizan formas de organización empresarial, semiempresarial y precapitalista (mercantil o familiar), distinguidas entre sí por la división en el momento de producción entre el empresario y los/as empleadas; en el tercero, se desarrolla el proceso de subsunción del trabajo al capital en la intersección de la cadena productiva que vincula la empresa familiar al gran capital; y el cuarto momento interconecta a las tres formas de organización del trabajo en el momento de realización de la mercancía. El enfoque del CEDLA dio origen a las siguientes subdivisiones dentro de lo que se considera sector formal e informal:

- a) el **sector empresarial**, en el cual la propiedad de los medios de producción es privada, hay relaciones asalariadas y clara división entre el capital y el trabajo;

---

<sup>61</sup> Es importante mencionar que internamente al PREALC o a la teoría de la dependencia hay matices sobre la informalidad que aquí no conviene profundizar. Para tal tarea, así como para el debate sobre el sector informal urbano en ámbito latinoamericano e internacional en detalles, consultar: Cortés, Fernando. La metamorfosis de los marginales: la polémica sobre el sector informal en América Latina, en: de la Garza Toledo, Enrique (coord.) Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. México, DF: FCE, Colmex, FLACSO, UAM, 2003.

- b) el **sector estatal**, con las mismas características anteriores exceptuándose la propiedad de los medios de producción que es estatal;
- c) el **sector semiempresarial**, en el cual la propiedad de los medios de producción es privada, hay relaciones asalariadas de forma parcial, pero no una distinción clara entre propietarios del capital y del trabajo, ya que el titular de la unidad económica y sus familiares participan activamente del proceso productivo;
- d) el **sector familiar**, que incluye la participación del titular además de familiares no remunerados;
- e) el **sector doméstico**, que agrupa a las/los trabajadoras/os.

De esta manera, el sector formal estaría constituido por el sector estatal y empresarial y el sector informal estaría compuesto de los subsectores semiempresarial y familiar. El sector doméstico no ha sido incluido por no conformar unidades económicas. En el estudio conjunto del CEDLA de 1988, Larrazábal menciona críticamente el enfoque **neoclásico**, que no considera las limitaciones estructurales existentes que impiden la consolidación de sus presupuestos respecto de los precios y oferta/demanda de trabajo. En el mismo estudio colectivo del CEDLA, Kritz plantea que según el enfoque neoclásico, hubiera sido necesario eliminar el salario fijo, volviéndolo reflejo de la disponibilidad del factor trabajo, para que las empresas pudieran convocar toda la fuerza de trabajo disponible y desapareciera el SIU.

En suelo peruano, también a fines de los años ochenta, Hernando de Soto publicó *El Otro Sendero*, obra conocida que se ha vuelto referencia en la temática desde un enfoque **neoliberal**. De Soto analiza las iniciativas de pobladores limeños, gran parte de ellos exrurales, en lo que se refiere a la ocupación de terrenos urbanos y la posterior construcción de calles, instalación eléctrica y de alcantarillado, abastecimiento de agua, así como la construcción de mercados propios, implementación de servicios de transporte público y administración de justicia comunitaria. Según el autor, el libro aborda el tema de los migrantes que han devenido informales. Las similitudes con El Alto no son mera coincidencia. El peruano sostiene que el florecimiento de las actividades informales

propiciaría la irrupción de una real economía de mercado en base a la actividad productiva económicamente eficiente en manos de los propios productores y sin la mediación burocrática estatal. Al hacer referencia al modelo europeo, de Soto señala que

los países que redujeron sus costos de transacción y adoptaron reglas que permitieron usar las energías creativas de sus ciudadanos [...] lograron transitar hacia distintos sistemas de economía de mercado con un mínimo de violencia y un máximo de bienestar [...] el tiempo perdido antes en cultivar contactos y tramitar pudo ser dedicado ahora a la producción (de Soto, 1987, p. 273-74).

A lo que el autor denomina “mercantilismo”, a saber, la presencia del Estado que todavía cumple el rol redistributivo en la economía, es considerado un elemento que impide desatar la real potencia creadora de los migrantes informales. En pocas palabras, se trata de un régimen económico que privilegia un grupo selecto y que puede ser superado por la “nueva clase empresarial”, a cargo de los informales emprendedores. Acerca de este enfoque y contextualizándolo en Bolivia, Mansilla sostiene que

es improbable que en el complejo contexto de la sociedad boliviana actual se pueda crear, mediante una especie de lógica darwiniana, un capitalismo liberal genuino e innovador frente al mercantilismo prebendalista y clientelista, el cual, paradójicamente, goza de popularidad y arraigo (Mansilla, Toranzo, 1991, p. 24-25).

También desde Perú, Palma nos recuerda que la propuesta derechista moderna que encarna de Soto también conlleva la anulación del Estado en los mercados de trabajo y salarios, incluyendo la anulación de sindicatos y conquistas sociales, implicaciones que no fueron tomadas en cuenta por él. Complementando la crítica de Mansilla y Palma, diríamos que en Bolivia, a partir de 1985, lo que ha estado ocurriendo es exactamente la descentralización productiva a través de la subcontratación de talleres informales y no se ha visto incremento de la riqueza entre los productores, sino la proliferación generalizada de la pobreza. Además, confundir el trabajador que se autoexplota y a sus familiares con el signo del nuevo empresario es ilusionarse y distorsionar, vía discurso liberal, el cotidiano de quienes luchan a diario por la mera subsistencia.

En el mismo año (1987), Palma desarrolló una investigación promovida por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (**DESCO**), de Perú, que tuvo por objetivo vincular las relaciones no propiamente capitalistas del sector informal con el **cambio**

**social.** Sintéticamente, la economía informal es vista como el fundamento no-capitalista de un cambio revolucionario, ya que en los sectores informales no se aplica la compra-venta de fuerza de trabajo y no hay división del trabajo clara. El dueño del negocio no deja de trabajar, actúa como si fuera un miembro más del equipo. Por ello, según Palma, “no se produce la apropiación directa de plusvalía” (Palma, 1987, p. 37).

Su obra abarca los siguientes casos: 1) la empresa familiar donde capital y trabajo se confunden, en el que el negocio puede estabilizarse pero sin acumulación de capital; 2) la pequeña empresa con patrón, pero sin contratos firmados; 3) la subcontratación a destajo en el que el trabajo puede ser realizado fuera de la empresa; 4) y los servicios personales. Además, para el autor, en las unidades informales no hay enajenación del trabajo, una vez que “cada trabajador opera con todo el objeto de trabajo”, “el producto final no se sustrae de la esfera de acción e interés de quien lo trabaja” y la remuneración “no se calcula según tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente” (Palma, 1987, p. 38). Articulando las perspectivas de Palma y de Soto, Grebe comenta que

parece existir una idea de los microempresarios que podría asimilarse con los gérmenes de una burguesía nacional que llega tarde a la historia. Desde otra óptica, se puede percibir también a este sector en términos de un segmento proletario con capacidad de autogestión (CEDLA, 1988, p. 91).

Al asumirse socialista, Palma paradójicamente yuxtapone lo popular a lo proletario. Para nuestro autor, lo popular abarca el conjunto de prácticas orientadas hacia la reproducción de la familia trabajadora, incluyendo el trabajo asalariado, el trabajo informal y las estrategias de sobrevivencia. De esta forma, Palma diluye la lucha de clases y pierde de vista conceptos como trabajo productivo e improductivo que a nosotros nos interesa en esta discusión.

Cuando vista desde el enfoque **juridicista**, la temática de la informalidad igualmente asienta ciertas conclusiones y desmitifica el sentido común. En *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, organizada por investigadores miembros del CEDLA, de 1989, Pérez asume que la economía informal “se explica a partir del tipo de organización social del trabajo en las unidades económicas informales” y no “a partir de una ruptura del ordenamiento legal” (Varios, 1989, p. 1). Pérez agrega que lo jurídico se explica a partir de lo socioeconómico y no al revés. En este sentido, Casanovas pone de manifiesto en la misma obra que “el hecho de no cumplir con cierto tipo de normas legales es uno de los

resultados del desarrollo de alguna actividad económica en el sector informal, y no una de sus causas” (Varios, 1989, p. 120).

Además de la imposibilidad material de cumplir con todas las obligaciones sociolaborales legales, diseñadas por el Estado para empresas capitalistas ya consolidadas, los titulares de las unidades económicas informales recurren a relaciones y prácticas laborales propias, pero socialmente legitimadas porque son practicadas en gran parte de las unidades. Éste es el caso del pago a destajo o por obra, además de “modalidades de compensación económica a favor de los trabajadores y sustitutivas de los beneficios y derechos consagrados por la legislación, como en el caso del uso gratuito de medios de trabajo para beneficio personal del operario” (Varios, 1989, p. 58).

Otra peculiaridad respecto a las relaciones laborales está en que la ilegalidad jurídico-laboral suele no provocar conflictos entre patrones y empleados, ya que hay una suerte de ambiente de solidaridad y reciprocidad principalmente en talleres de oficio, donde predomina la dinámica maestro-aprendiz. Conforme a dicha dinámica, “el primero tiene un ascendiente de tipo patriarcal sobre el segundo que, a su vez, debe obediencia a su maestro” (Varios, 1989, p. 237). El taller se vuelve escuela de oficios y el conocimiento es transmitido de manera consuetudinaria intra o interfamiliarmente.

Contrariamente a lo que se piensa, el despido y/o recontractación sin desahucio, la ausencia de seguridad social y vacaciones, la existencia de acuerdos de contratación verbales, sin especificación del tiempo del contrato, ausencia de definición de horarios de trabajo, ausencia del pago de horas-extras, etc., no desembocan en la conformación de sindicatos o asociaciones, sino en condescendencia entre las partes, en muchos casos. En otras palabras, se negocia la inestabilidad laboral. En este sentido, Larrazábal señala que cuando ocurre rescisión del acuerdo establecido,

se trata de una rescisión que asume la forma de un “alejamiento voluntario del trabajador”, por tiempo indeterminado, y no de un “despido”; por tanto, carente de las experiencias traumáticas, conflictos y ruptura de las relaciones obrero patronales, propias del sector empresarial (Varios, 1989, p. 237).

Así es como si cada taller dispusiera de su propio “ejército de reserva” con el cual puede contar cuando sea necesario. El mismo autor alerta: en determinados casos, las formas compensatorias incluyen la decisión, por parte del trabajador, de la jornada laboral y de la intensidad del trabajo. De ahí que las relaciones meramente legales no son suficientes

para determinar qué es formal e informal, o precario e inestable o no. En casos como éste en Bolivia, las prácticas cotidianas rebasan lo que dispone la Ley del Trabajo y con eso vuelven menos rígida la determinación del sector formal e informal desde lo jurídico. Como aspectos complementarios, tenemos que la Ley General del Trabajo en Bolivia no regula la explotación del trabajo familiar, mientras que los cuentapropistas informales se quedan excluidos del Régimen de Seguro Social Obligatorio (ello no incluye a médicos, dentistas, abogados, etc.). Asimismo, la LGT suele provocar el cierre de los establecimientos semiempresariales por no poder cumplir con las obligaciones previstas, a saber:

- descanso sabatino;
- derecho a vacaciones incluido el cobro del 100% de la remuneración;
- límite máximo de horas extraordinarias;
- fijación del salario mínimo;
- regulación del salario dominical;
- pago de aguinaldo;
- garantía de empleo en caso de enfermedad y
- pago de desahucio.

Igualmente desde Bolivia, Mansilla aborda la “economía informal en cuanto alternativa parcial, creadora de enclaves estables y con posibilidades de desarrollo genuino en el marco de una economía dual de larga duración” (Mansilla, Toranzo, 1991, p. 17). Ésta parece ser la perspectiva adoptada por el gobierno de Evo Morales y difundida por su vicepresidente Álvaro García Linera cuando se refiere al capitalismo andino-amazónico, sobre el cual se debe buscar mantener una suerte de **economía mixta**, tomando en cuenta tanto a la gran empresa, como a las empresas semiempresariales y familiares, que son los mayores empleadoras en Bolivia.

Mansilla al mismo tiempo destaca la ausencia de estudios de **corte étnico** sobre la economía informal, dado la presencia mayoritaria indígena en el país. Según el autor, la perspectiva étnica permitiría develar la sociabilidad andina que reposa en una suerte de autogestión de lo cotidiano. Es justamente lo que pretenden los trabajos del Taller de Historia Oral Andina (**THOA**), de los cuáles se destacan las aportaciones de Silvia Rivera.

Esta perspectiva trata de enfocar en la continuidad de las tradiciones andinas ancladas en la reciprocidad y el parentesco en el comercio informal urbano. Igualmente pretende enfatizar el hecho de que la economía comunitaria familiar tanto en el campo como en la ciudad es anterior al neoliberalismo y que el trabajador informal de El Alto es un migrante indio, aymara o quéchua.

El corte étnico aclara la confusión que suele haber entre formas comunitarias no específicamente capitalistas de producción y el llamado sector informal – en general vinculado con el sector del comercio familiar en la ciudad. Presente en los Andes, previa a la invasión española, la economía étnica, por decirlo de alguna manera, se ha fundido con el trabajo urbano precario fuera de las fábricas y se ha alimentado de la descentralización productiva todavía en curso. La adaptabilidad a la ciudad de ciertas prácticas de sociabilidad andina del campo basados en la reciprocidad, redistribución y complementariedad son destacados por esta perspectiva.<sup>62</sup> Dichas prácticas en general no utilizan la mediación del dinero, sino el propio trabajo concreto o la producción resultante de ello; son, por lo tanto, métodos económicos no capitalistas – aunque crecientemente subsumidos por la lógica del valor en la ciudad- pero que no por ello son sinónimos de economía informal.

En la misma época y trascendiendo el ámbito latinoamericano, otro grupo de autores capitaneados por Alejandro Portes y Manuel Castells ha desarrollado un enfoque que trata de destacar la articulación existente entre el sector informal y formal a través, por ejemplo, de las cadenas de subcontratación generadas por empresas modernas y de contratos eventuales. Así, se genera una industria a domicilio en los inúmeros estudios de caso analizados por los autores donde “los talleres domiciliarios sustituyen a las fábricas” (Alonso, 1990, p. 193). Los autores igualmente sostienen que la informalidad es resultante de la crisis del petróleo de 1973 y la reestructuración productiva que está todavía en curso, pero sin resumirse a ello. Aparte de la conexión sistémica con el sector formal, definen al sector informal como la producción desregulada bienes lícitos.

---

<sup>62</sup> Se trata de prácticas como el *ayni* (trabajo comunitario en tierras pertenecientes a otras familias, o entonces en tierras de ancianos, viudas o inválidos que es retribuido sin la mediación del dinero; se va turnando recíprocamente de terreno en terreno), la *mink'a* (el trabajo comunal en terrenos agrícolas que es retribuido en productos), el *waki* (la institución aymara de la reciprocidad expresada por ejemplo en la participación colectiva en la siembra de terrenos que son familiares; el comunario pone su pedazo de tierra, el otro pone las semillas y la cosecha es compartida).

Al tiempo que el enfoque de **articulación de modos de producción**, - visto por algunos como enfoque **neomarxista** – critica la dualidad formal/informal por considerar el último subordinado al primero, igualmente sirve de herramienta para criticar la ahistoricidad con la cual se trata la informalidad en Latinoamérica y en el mundo. Sus autores insisten que no se trata de un fenómeno nuevo; lo novedoso estaría en el crecimiento vertiginoso que le ha quitado espacio al universo formal en las últimas décadas. En palabras de los autores anteriores, la informalidad no representa una “ruptura deliberada con prácticas aceptadas, sino más bien la continuación del modelo tradicional” (Portes; Benton, 1987, p. 122). Sintéticamente, Bueno Sánchez y otras autoras, en un estudio sobre la temática, señalan que

se trataría de formas que sobreviven preservadas y recreadas por necesidad del propio sistema, de ahí la afirmación de refuncionalización de las formas no capitalistas por el capital [...] La lógica podría sintetizarse en exclusión – refuncionalización – subordinación que permite la apropiación del excedente generado en el ámbito de la informalidad en función de la valorización del valor (Bueno Sánchez et al., 1994, p. 137-38).

Esta perspectiva no privilegia los requisitos supuestamente necesarios de la oferta laboral para integrarse al universo formal – postura de la teoría de la modernización - ni las limitaciones estructurales de la demanda de trabajo – postura defendida tanto por el PREALC como por la teoría de la dependencia no-marxista -, “sino los diferentes modos de absorción y utilización laboral en las economías industrializadas” (Portes; Benton, 1987, p. 120). Se basa en que las tasas de absorción laboral son más altas que las que aparecen en estadísticas oficiales, porque también se contrata de manera informal recurriendo al trabajo precario y eventual. Por lo tanto, contrariamente al enfoque PREALC/SIU, no se trata de falta de dinamismo de este sector para absorber la fuerza laboral ni tampoco de la asociación de la informalidad con formas de producir de antaño. Cortés, quien asume el enfoque del excedente estructural planteado por Tokman, al tiempo que plantea la articulación integral entre formalidad/informalidad, concluye que en el trasfondo de la informalidad, entendida como actividad extralegal, están “la estrategia que sigue la empresa capitalista de punta para enfrentar la crisis, y el exceso estructural de fuerza de trabajo en relación con la dinámica del sector capitalista, característico de las sociedades de América Latina” (Cortés, 2003, p. 612).

El autor considera, además, que el llamado SIU estaría compuesto por empresas capitalistas pobres o empobrecidas y empresas domiciliarias conectadas con la gran industria formal, empresas artesanales de subsistencia en el comercio y servicios y empresas productivas no establecidas, “de particular importancia en aquellos países de América Latina en que se asentaron densas culturas autóctonas prehispánicas” (Cortés, 2003, p. 613), además de los obreros desempleados.

Nosotros creemos que la dualidad tradicional/moderno o rural/urbano, visible en la teoría de la modernización, también se refleja en la dualidad sector formal/informal, premisa del enfoque del Sector Informal Urbano (SIU), desarrollado por la OIT y parcialmente aplicado por el grupo de investigadores del CEDLA de Bolivia – a pesar que este organismo nos ofrece una tipificación que nos ayuda a ubicar en el universo heterogéneo de la economía del país. En todo caso, es necesario superar el dualismo sector formal-informal, ya que se trata de una sola economía capitalista articulada desde las empresas transnacionales de distintas ramas hasta la unidad familiar o el trabajador por cuenta propia. Creemos que las dicotomías utilizadas para referirse a la configuración del mundo del trabajo dan cada vez más lugar a las interrelaciones entre ellas conforme avanza la subsunción real del trabajo al capital y con ello la complejidad de las formas de valorización del valor.

Habría que analizar la articulación subordinada entre sectores más y menos maquinizados tanto en el campo como en la ciudad. Habría que cambiar de lentes y averiguar qué sectores laborales anteriormente lejos del alcance del gran capital se han vuelto indirectamente funcionales o entonces directamente fagocitados por él. Asimismo, el trabajador formal suele trabajar cada vez más en condiciones similares al trabajador dicho informal, es decir, sin regulaciones oficiales del Ministerio de Trabajo y con extrema dificultad política y geográfica de organizarse. Por otro lado, en el llamado sector informal hay relaciones salariales. Más allá de cuestiones juricistas, habría que ver que el trabajo lo ejecutan, de forma precaria, tanto los trabajadores formales como los informales. Así lo resume Lazarte en un estudio sobre la relación entre el sector informal y el movimiento obrero:

no existe sector informal; es una moda sociológica importada que se mantiene entre otras cosas porque a los organismos financieros se les ha ocurrido que hay que investigar este tema. Es peligroso habernos adherido

a esto porque entraña elaborar proyectos de control social para la población. Hay también mucha gente abocada a un esfuerzo viejo de buscar en el denominado sector informal actores sustitutivos de la clase obrera y del campesinado, tal como se pretendía organizar a los “marginales” cuando se suponía que la clase obrera había sido integrada al sistema. Hay que abandonar eso del sector informal porque no es una categoría analítica. Cuando decimos “clase social” sabemos exactamente lo que queremos decir. Cuando decimos “sector informal” no sabemos qué estamos diciendo (Baldivia, 1987, p. 38).

A partir de fines del XIX, en Bolivia en particular, se cuenta con la existencia de pequeñas empresas productivas - basadas en oficios, con pocos empleados y de carácter familiar - anteriormente a la gran empresa capitalista. Todo ello agregado al trabajo comunitario-familiar existente en el campo antes y después de la invasión de española. Esto quiere decir que lo que se identifica como “sector informal” según algunos autores, es más bien el flujo económico que mantienen familias, ampliadas o no, gremios y asociaciones de migrantes residentes en la ciudad, los que van y vienen todos los días del campo a la ciudad, como son los casos de las y los comerciantes viajeros y las y los pequeños productores de comunidades cercanas a la urbe. Parte de lo que se llama sector informal conlleva relaciones y organización del trabajo no específicamente capitalistas y otra parte se refiere a actividades urbano-capitalistas precarizadas (la imbricación entre la una y la otra también suele suceder). De la misma forma, si hablamos en términos de experiencia organizativa, habría que distinguir entre el minero relocalizado y el migrante recién llegado del campo. En este caso, la historia socioeconómica local tiene más peso que las tendencias laborales observadas por los autores aquí trabajados.

**Cuadro 3 – Abordajes de la informalidad o del trabajo precario en Bolivia**

<b>Abordajes</b>	<b>Conceptos principales</b>	<b>Planteamientos</b>
<b>Teoría de la modernización/desarrollismo</b>	marginalidad; sector tradicional y moderno	colectivos al margen de la modernización/ integración del sector informal al formal alcanzada con tasas de crecimiento económico positivas
<b>Teoría de la dependencia</b>	marginalidad; sector tradicional y moderno	la marginalidad es resultado del desarrollo típico de las sociedades latinoamericanas, parte de su estructura
<b>PREALC/OIT</b>	sector formal/informal; unidad productiva; estrategia de sobrevivencia	empresas con pocos empleados; unidades productivas sin división clara entre propietarios de los medios del capital y trabajo; bajo nivel de tecnología
<b>Foro Económico/ILDIS</b>	sector formal/informal	actividades legales e ilegales (narcotráfico) sin registro oficial
<b>CEDLA</b>	unidad productiva; sector empresarial/ estatal/ semiempresarial/familiar; sector formal/informal	heterogeneidad productiva de Bolivia ayuda a explicar el crecimiento vertiginoso del sector informal
<b>Neoclásico/ neoliberal</b>	oferta/demanda de trabajo; sector formal/informal; iniciativa privada	la claridad de la propiedad de los medios de producción revela el nivel de informalidad de las unidades productivas; las actividades informales propiciarían una real economía de mercado; eliminación del Estado como ente redistributivo en la economía
<b>DESCO/ cambio social</b>	unidad formal/informal; popular	la economía informal es vista como el fundamento no-capitalista de un cambio revolucionario una vez que no hay enajenación del trabajo en unidades informales
<b>Juridicista</b>	sector formal/informal; legalidad/ilegalidad	el no cumplimiento de normas legales es resultado de la economía informal y no su causa; hay relaciones laborales con legitimidad social y no jurídica-legal
<b>Economía mixta</b>	capitalismo andino-amazónico; integración productiva	por su dimensión productiva, habría que integrar el empresario familiar con la mediana y gran empresa
<b>Corte étnico/THOA</b>	reciprocidad; sociabilidad andina; sector formal/informal	la sociabilidad andina está presente en el cotidiano de las urbes bolivianas; la economía comunitaria familiar se funde con la informalidad, pero es anterior a ello
<b>Neomarxista/ articulación subordinada</b>	subordinación productiva; red productiva	subordinación de lo informal por lo formal; la informalidad no es un fenómeno novedoso, sino continuación y refuncionalización de lo tradicional por el gran capital

Elaboración propia

### 3.3. El mercado laboral de El Alto

El trabajo precario, y si se quiere informal en Bolivia, ha crecido al punto de acaparar más de la mitad de las clases trabajadoras en general. Si se toma en cuenta la ciudad de La Paz antes y después de la municipalización de El Alto, y se adopta la metodología del CEDLA<sup>63</sup>, observamos que, con pequeñas fluctuaciones, desde fines de los años 70's hasta fines de los 80's, la distribución de la población económicamente activa (PEA) urbana se concentra de forma creciente en la informalidad (Cuadro 4).

**Cuadro 4 - La Paz: Distribución de la PEA por sectores 1976-1989  
(en porcentaje)**

Sectores	1976 <sup>1</sup>	1980 <sup>1</sup>	1984 <sup>1</sup>	1985 <sup>2</sup>	1987 <sup>2</sup>	1989 <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Formal</b>	<b>44,0</b>	<b>42,0</b>	<b>37,0</b>	<b>40,0</b>	<b>41,0</b>	<b>37,6</b>
Estatad	21,0	24,0	21,0	26,8	23,0	17,6
Empresarial	23,0	18,0	16,0	13,2	18,0	20,0
<b>Informal</b>	<b>47,0</b>	<b>53,0</b>	<b>58,0</b>	<b>55,5</b>	<b>55,1</b>	<b>57,0</b>
Semiempresarial*	18,0	17,0	18,0	17,5	16,5	12,8
Familiar	29,0	36,0	40,0	38,0	38,6	44,2
<b>Servicio Doméstico</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>5,4</b>

Fuentes: 1-Varios (1988); 2-Escóbar (1990)

\*se incluye en el sector semiempresarial a los cooperativistas y cuentapropistas

Si nos detenemos en el cuadro anterior, se observa que el fenómeno de la informalidad o la expansión del trabajo precario es anterior a la NPE y al neoliberalismo en Bolivia. Sin embargo, una vez que las políticas fondo-monetaristas han sido aprobadas en 1985, dicho fenómeno se intensificó. Tanto es así que cuatro años después, el sector familiar rebasa un 40% en esta ciudad. Al ampliar el abanico a las ciudades bolivianas del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), Escóbar (1990) señala que el 72% de las unidades manufactureras, el 95% de las unidades en el comercio y el 94% de las unidades en los servicios tenían en ese entonces entre una y cuatro personas ocupadas.

<sup>63</sup>Aunque no estemos plenamente de acuerdo con la tipificación del CEDLA, nos basaremos en el trabajo que han desarrollado sus investigadores porque han sistematizado las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Bolivia a lo largo de por lo menos un cuarto de siglo. Sus innumerables estudios laborales en La Paz y El Alto son prácticamente los únicos ampliamente difundidos y han sido tomado en cuenta ya hace algunos años por autores bolivianos y extranjeros.

En el periodo analizado por la autora (1985-1989), seis de cada diez trabajadores conformaban los sectores semiempresarial y familiar en las mayores ciudades bolivianas. Nos señala además que las unidades semiempresariales estaban más presentes en ramas **productivo-manufactureras**, así como en los **servicios**, mientras que las unidades familiares en el **comercio**. Sin embargo, a lo largo de los años, el sector semiempresarial ha estado perdiendo su “vocación productiva” y acercándose al sector familiar. La misma autora indica que previo a 1985 el número de empleados en ambos sectores era relativamente mayor (Escóbar, 1990, p. 53).

Al considerar nuevamente a la metrópoli aymara nuevamente, tenemos que ante de las políticas de ajuste de 1985, el grueso de los migrantes residentes se concentraba en la ladera oeste de La Paz, hacia la Ceja. Hacia 1981, era posible vislumbrar el carácter productivo de la ciudad:

se está pasando al Alto la mayor parte de las nuevas industrias establecidas en la ciudad [La Paz] y muchos servicios que requieren espacio amplio, agencias importadoras, maestranzas, etc. Con toda la amplitud de espacio hace probable que, a medida que la ladera Oeste queda saturada, los inmigrantes llegados del Altiplano se vayan estableciendo cada vez más en El Alto (Albó et al., 1981, p. 91).

Pese a la relocalización industrial, a fines de los años ochenta, Sandoval y Sostres señalaban la tendencia al crecimiento del trabajador indígena no-fabril. En ese entonces, hace más de treinta años, los autores reafirmaban la existencia de, por lo menos, ocho mil empleados más, entendidos como los hombres y mujeres asalariados que trabajan en el comercio o en el sector de servicios, así como en pequeñas y microempresas familiares productivas, es decir, fuera del sector fabril/industrial a gran escala. Y denunciaban sus condiciones de trabajo: sin beneficios laborales, intensidad de más de 48 horas de trabajo semanales y bajos salarios.

Las zonas de la ciudad de El Alto han presentado características generales en lo que se refiere al tipo de empleo desde ese entonces. Se puede ubicar cuatro grandes zonas:

- 1) la periferia, en donde se concentran los cuentapropistas;
- 2) la zona sur, donde se encuentra parte de la gran industria y donde predominan los obreros y el trabajo familiar de talleres;

- 3) la zona norte y oeste del aeropuerto, donde predominan una mezcla de trabajador familiar y cuentapropista en el comercio minorista y actividades artesanales y
- 4) la zona central y el Distrito 1, donde se concentra el comercio de mediana y gran escala, la administración pública, el sector financiero y oficinas de servicios.

Según Censo Económico propio, elaborado por Antezana, hacia 1988 había más de una centena de industrias, cerca de 1500 pequeñas y medianas industrias y casi ocho mil establecimientos comerciales. Al tiempo que destacaba la importancia de unidades productivas en la ciudad, el autor mencionaba la tendencia a un proceso depresivo paralelo al crecimiento en el comercio y servicios. Cinco años después (1993) y basado en el Censo de Establecimientos Económicos de fines de 1990, Antezana señalaba que poco más de un 30% de la PEA se encontraba en el comercio, mientras que un 25% en la industria manufacturera, ambas ramas concentradas en unidades microempresariales y familiares.

Hacia 2003, había más de 4500 unidades familiares manufactureras, mientras que las grandes industrias se habían contraído a menos de cincuenta (Cuadro 5). Las industrias propiamente capitalistas, presentes en 1988, han sufrido un proceso de descentralización/fragmentación, principalmente a través de la subcontratación de talleres familiares en la ciudad de El Alto; los talleres productivos son contados a centenas y sus trabajadores se ocupan ya sea como obreros, artesanos o trabajadores por cuenta propia, guardando la precariedad e inestabilidad laboral como elementos comunes.

Al analizar los sectores productivos de los Distritos 5 y 6 de El Alto, dos de los más económicamente activos, Rossell (1999) afirma sintéticamente que los datos muestran que hay cada vez menos trabajadores asalariados – entendido por el autor como los trabajadores cubiertos con los beneficios de la Ley General del Trabajo -, más inestabilidad en el empleo y menor acceso de la población trabajadora al sistema público de salud. Por otro lado, si concebimos que las formas de asalariamiento han estado cambiando y no desapareciendo, se puede afirmar que el trabajo asalariado se ha extendido entre los varones

alteños en unidades familiares y semiempresariales. Tenemos, en estos casos, una suerte de trabajo asalariado, pero informal, precario, flexible y eventual.<sup>64</sup>

**Cuadro 5 – El Alto: tamaño de las empresas productivas según rubros de actividad (2003)**

<b>Rubro</b>	<b>Micro</b>	<b>Pequeña</b>	<b>Mediana</b>	<b>Grande</b>	<b>Total</b>
<b>Prendas de vestir, cuero, calzado</b>	1 631	84	1	3	1 719
<b>Vidrio y trabajo de metales</b>	696	54	10	2	762
<b>Muebles</b>	614	66	6	1	687
<b>Agro-alimentario</b>	492	70	10	11	583
<b>Hilos y tejidos</b>	469	48	10	10	537
<b>Productos de madera y papel</b>	190	20	2	2	214
<b>Otros</b>	196	10	1	1	208
<b>Edición y anexos</b>	112	4	1		117
<b>Servicios a vehículos</b>	80	7	2	1	90
<b>Químicos y plásticos</b>	28	20	7	3	58
<b>Maquinaria</b>	34	5	-	-	39
<b>Aparatos eléctricos e instrumentos de precisión</b>	29	2	-	-	31
<b>Total</b>	<b>4 571</b>	<b>390</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>5 045</b>

**Fuente: Primer Censo de Establecimientos Económicos de la Industria Manufacturera de El Alto (2003)**

<sup>64</sup> La extensión del trabajo asalariado no ha alcanzado a las alteñas. Éstas siguen ocupándose como no asalariadas, ya sea como cuentapropistas en el comercio o familiares no remuneradas.

Es precisamente ese trabajo el que ha dinamizado el mercado de trabajo en la actividad productiva: cada vez hay más trabajadores por cuenta propia y más trabajadores familiares en manufactura. El incremento del trabajo a domicilio, como una forma de evitar costos laborales entre los industriales, y la escasa recuperación de la economía y del sector productivo, que ha obligado a las familias a autogenerar sus propios empleos, son dos vertientes explicativas de este fenómeno. Desde el punto de vistas de las instituciones que trabajan con microempresas en El Alto, los rubros más importantes son (en orden de importancia): confección en tela, tejidos en punto (en lana acrílica y de camélidos), confección en cuero, carpintería, barracas y aserraderos, metalmecánica, fabricación de calzados y artesanía en yeso. En términos de ramas de actividad en los talleres productivos alteños, se destaca la confección de prendas de vestir y calzados. Entre ellos hay una suerte de especialización y división del trabajo: pantanoleros, chamarreros, vestoneros, chalequeros, etc. (Rojas y Rossell, 2000).

En un estudio realizado mediante entrevistas con gerentes de fábricas, titulares de talleres de confecciones, fabriles y operarios informales subcontractados, Rojas y Rossell indican que los requisitos para nuevos candidatos en unidades formales son más flexibles, “al punto de que un poco de experiencia basta para aspirar a trabajar, generalmente en el marco de un contrato eventual que estipula formas de pago predefinidas y salarios menores” (Rojas; Rossell, 2001, p. 35).

Dotada de mayor número de eventuales con contratos que varían de uno a tres meses y ante la separación del bono de producción del salario nominal, los trabajadores alteños de la rama de confecciones son forzados a conjugar el trabajo en la empresa con trabajos en talleres en jornadas nocturnas. Al hacer hincapié en la combinación de obtención de plusvalía absoluta – aumento en la jornada laboral – y plusvalía relativa – incremento en la intensidad de producción - los mismos autores sintetizan las nuevas condiciones de trabajo en unidades formales de dicha rama:

reducción del salario nominal, la anulación de los servicios de alimentación, la eliminación de bonos de puntualidad, el aumento de la jornada de trabajo, la ampliación de las tareas, la presión psicológica con relación al cumplimiento de los cupos de producción fijados, el desconocimiento de los beneficios sociales y la imposición de nuevos criterios de contrato y pago (Rojas; Rossell, 2001, p. 40).

Cuando se trata de unidades de confección informales, surge la figura de la empresa-familia o del papá-patrón, en la cual la casa se vuelve una fábrica de microdimensiones. Los titulares de estas unidades económicas recurren a la **subcontratación** de trabajadores a domicilio; en estos casos, la precarización del trabajo alcanza niveles más críticos, ya que se paga a destajo y las jornadas laborales no tienen límites. En algunas unidades, dependiendo de la demanda y de la época, son frecuentes las “veinticuatreadas”; es decir, la producción de prendas de vestir durante veinticuatro horas seguidas. El fenómeno es un lugar común en el mundo del trabajo de la ciudad:

a raíz de la exportación de ropas, han ido formándose una suerte de talleres externos, de talleres clandestinos que han ido funcionando en El Alto, Viacha o Patacamaya. Son talleres externos de 80-100 trabajadores formados por hombres, mujeres, migrantes, donde el trabajo que se ejecuta está totalmente subordinado a los requerimientos de las grandes empresas. Uno de los talleres externos con los cuales tuvimos contacto solamente lo pudimos conocer tras un despido masivo por el intento de formar un sindicato. Esos trabajadores están al margen de la ley general del trabajo, desprotegidos.<sup>65</sup>

En la subcontratación, el individuo o la empresa subcontratista cumple el rol de intermediario entre la empresa-madre y sus contratados. Muchas veces éstos ni siquiera cuentan con contrato, sino más bien se trata de relaciones verbales. Los empresarios y contratistas son los que más se benefician de este tipo de relaciones laborales indirectas sobre las cuales no le pesa legislación laboral ni funcionarios fijos (Figura 1).

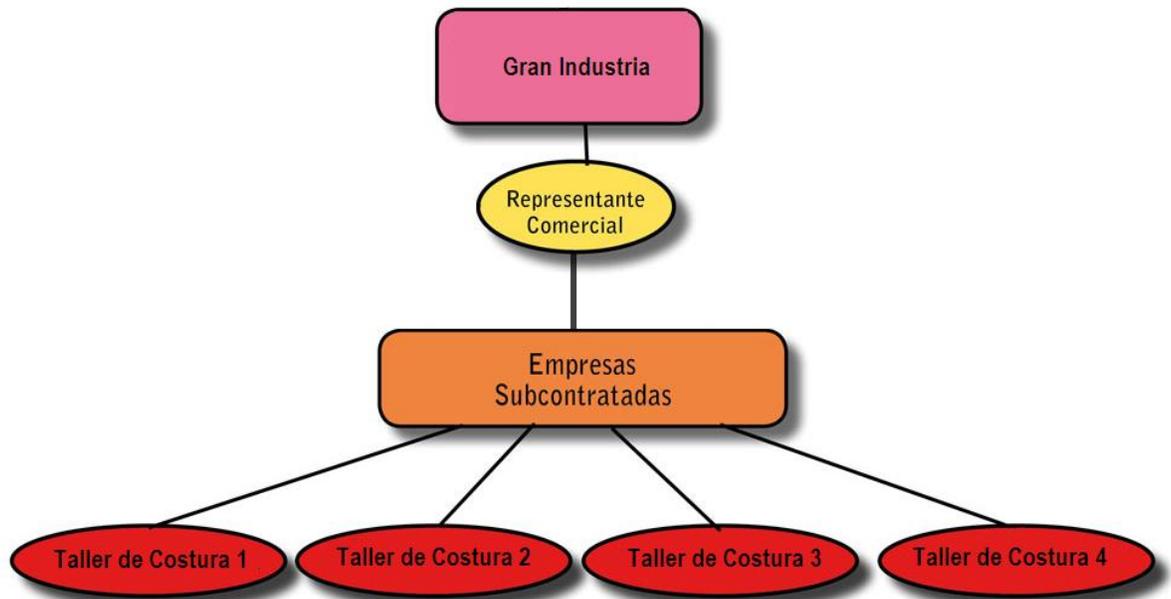
En un estudio sobre las nuevas facetas de la proletarización en La Paz y El Alto, dice García:

no es raro que estos talleres de subcontratación y las relaciones laborales que ahí se establecen, esto es, los ritmos, los tiempos y los precios de las funciones de trabajo se pueden alcanzar en base a una fuerza de trabajo totalmente pulverizada y descompactada, sean usados por los empresarios para presionar a los obreros de la industria madre para que abandonen sus resistencias a las exigencias y las disciplinas laborales impuestas, acepten reducciones en los precios por operación de trabajo, etc” (García, 1999, p. 120).

---

<sup>65</sup> Entrevista a Bruno Rojas, La Paz, oct. 2009.

**Figura 1 – El Alto - Modelo general de subcontratación (confecciones)**



**Adaptación del autor**

Con respecto a la producción de chamarras de cuero, importante rama productiva alteña, Arze señala la existencia de cerca de 550 unidades económicas en La Paz y El Alto a fines de los años noventa, más de la mitad de las cuales en El Alto, ubicadas en la zona norte, sur y oeste. En ellas, las jornadas varían de ocho a diez horas y en periodos de alta demanda puede llegar a doce horas, seis días a la semana, sin horarios establecidos. El reclutamiento ocurre a través de vínculos familiares y relaciones de padrinazgo para que en el taller se aprenda un oficio según la dinámica maestro-aprendiz no remunerado (Arze, 1997, p. 28). En lo que se refiere a la producción de chamarras de tela, en baja temporada no se contratan trabajadores a domicilio ni operarios remunerados, concentrando el trabajo en maestros y aprendices no remunerados.<sup>66</sup>

La detallada investigación realizada por Andia (2004) abarca el rubro de textiles y prendas de vestir como chamarras, jeans, etc. En la artesanía, se trata del telar realizado con fibra animal, además de analizar la rama de joyerías. En cuanto al trabajo en textiles, Andia menciona la existencia de asociación de consorcios (con cargos directivos y base) que

<sup>66</sup> En los últimos años, ha sido frecuente la emigración de trabajadores calificados de esa subrama a talleres clandestinos en Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile.

agrupan decenas de talleres que producen en gran escala para el extranjero (Perú, Argentina y Brasil) bajo esquema de pago a destajo, por prenda. Los talleres cuentan entre diez y quince personas en temporada alta y cinco en temporada baja, con la particularidad de que las familias que trabajan en sus domicilios cuentan con sus propios operarios.

Respecto de la dinámica de aprendizaje, Andia revela que

se hace imprescindible tener en cuenta que la mayor parte de las/los trabajadores en textiles y artesanía, han aprendido el oficio por herencia familiar transmitida de generación en generación, sobre todo aquellas técnicas tradicionales como el tejido, corte y confección, bordado, etc., considerados netamente femeninos, fueron transmitidos sobre todo a las mujeres. En otras situaciones, aprendieron porque les gustó el oficio, o porque esa fue la única opción de trabajo que tuvieron y empezaron de ayudantes unas veces en talleres externos y otras ayudando a su propia familia, en su mismo ámbito familiar (Andia, 2004, p. 75).

En estos casos, el contrato es verbal; en otros ha habido anuncios de trabajo temporal en radio y prensa local. En el rubro textil, se trabaja hasta 17 horas diarias en temporadas altas (y 12 horas en temporadas bajas), sin descanso por una o dos semanas seguidas y contando con la ayuda de los hijos e hijas menores. En los talleres, las comidas salen del bolsillo del propio trabajador en condiciones espaciales precarias, a veces sin higiene y seguridad (Cuadro 5). Agregado a todos los elementos anteriores, Andia destaca el maltrato de los directivos y empleadores y concluye:

por todo lo descrito acerca del transcurso de la jornada laboral tanto para hombres y mujeres, estaríamos frente a una situación de una sobreexplotación laboral al estilo de los inicios del capitalismo o de sistemas económicos más antiguos, puesto que en las tres áreas estudiadas lo normal es trabajar entre 10 y 12 horas, llegando a 17 horas en temporadas altas y a veces a más, cuando se trabaja sin cesar hasta terminar la obra, pueden estar 2 o 3 días en permanente trabajo, día y noche, sin descanso (Andia, 2004, p. 118).

Como fue dicho anteriormente, en los demás talleres artesanales, la forma predominante de aprendizaje de oficio sigue siendo el trabajo como aprendiz, lo que nos remete al contexto de fines del siglo XIX e inicios del XX en los albores de la industrialización boliviana. Actualmente, la imposibilidad de emplearse convierte a muchos en artesanos, aunque la tradición de oficio inter e intrafamiliar siga siendo importante. En la dinámica maestro-aprendiz, son necesarios cerca de diez años, tres como aprendiz y lo

demás como operario para alcanzar el grado de maestro. En general, al aprendizaje de oficio le sigue la apertura de negocio propio a “puertas cerradas” ante la imposibilidad de formalizarlo.

**Cuadro 6 – El Alto: Rasgos generales de la producción alteña en textiles, artesanía y joyería**

<b>Rubro</b>	<b>Formas de contratación</b>	<b>Jornada Laboral</b>	<b>Remuneración</b>
<b>Textil</b>	Verbal Conocimiento del oficio	Temporada normal: 10 a 12 horas Temporada Alta: hasta 17 horas Alimentación x su cuenta	Pago a destajo 1,50 a 3 Bs por pieza
<b>Artesanía</b>	Verbal Eventual Conocimiento del oficio Conocida/o de alguien del grupo	Temporada normal: 10 a 12 horas Temporada Alta: hasta terminar Alimentación x por cuenta	Pago a destajo 15 a 20 Bs por pieza
<b>Joyería</b>	Verbal Eventual Conocimiento del oficio Contratista o repartidor: garantía sobre el valor del material	Temporada normal: 10 a 12 horas Temporada Alta: 13 o más Alimentación x por cuenta	Pago a destajo 10 a 15 Bs por pieza, depende del calibre y kilo 3 a 4 Bs, por piedra tallada

**Fuente: Andia (2004)**  
**Adaptación propia.**

Escóbar y Larrazábal, ambos investigadores del CEDLA, concluyen que

el inicio de actividades se produce con inversiones mínimas de capital financiadas por el empleo de ahorros acumulados en el ejercicio de la “profesión”, bajo relaciones de dependencia en otro taller. La fuente originaria de los recursos es, por tanto, el sacrificio del consumo a partir de los salarios (Escóbar, Larrazábal, 1989, p. 266).

Aunque las actividades productivas en pequeña escala le dan a la ciudad un carácter netamente obrero, los trabajadores alteños igualmente se han concentrado en el comercio y en los servicios (Gráfico 3). En lo que se refiere al comercio, los minoristas son abundantes: comercializan abarrotes, productos agropecuarios, prendas de vestir y

alimentos elaborados. Los servicios a su vez son compuestos de trabajadores de restaurants, construcción, choferes, reparación (plomeros, electricistas), reparación automotriz (mecánicos), lavanderas e instaladores eléctricos. La distribución de las clases trabajadoras alteñas en el periodo que va de su independencia administrativa de La Paz (1988) hasta la vuelta de siglo, en sus distintas ramas de actividad, según sector del mercado de trabajo, sirve de apoyo para ratificar la reciente concentración del trabajo informal y precarizado en unidades semiempresariales e familiares productivas, del comercio y los servicios.

García (1999) nos ayuda a entender que los trabajadores de cuenta propia en el sector de servicios y comercio, directa o indirectamente, ayudan a valorizar los procesos capitalistas centralizados mediante: a) la reducción del valor de la fuerza de trabajo formalmente asalariada que consume los productos de estos, b) la reducción de costos de realización comercial de las grandes empresas y c) la elaboración de productos que integran el funcionamiento de la gran industria.

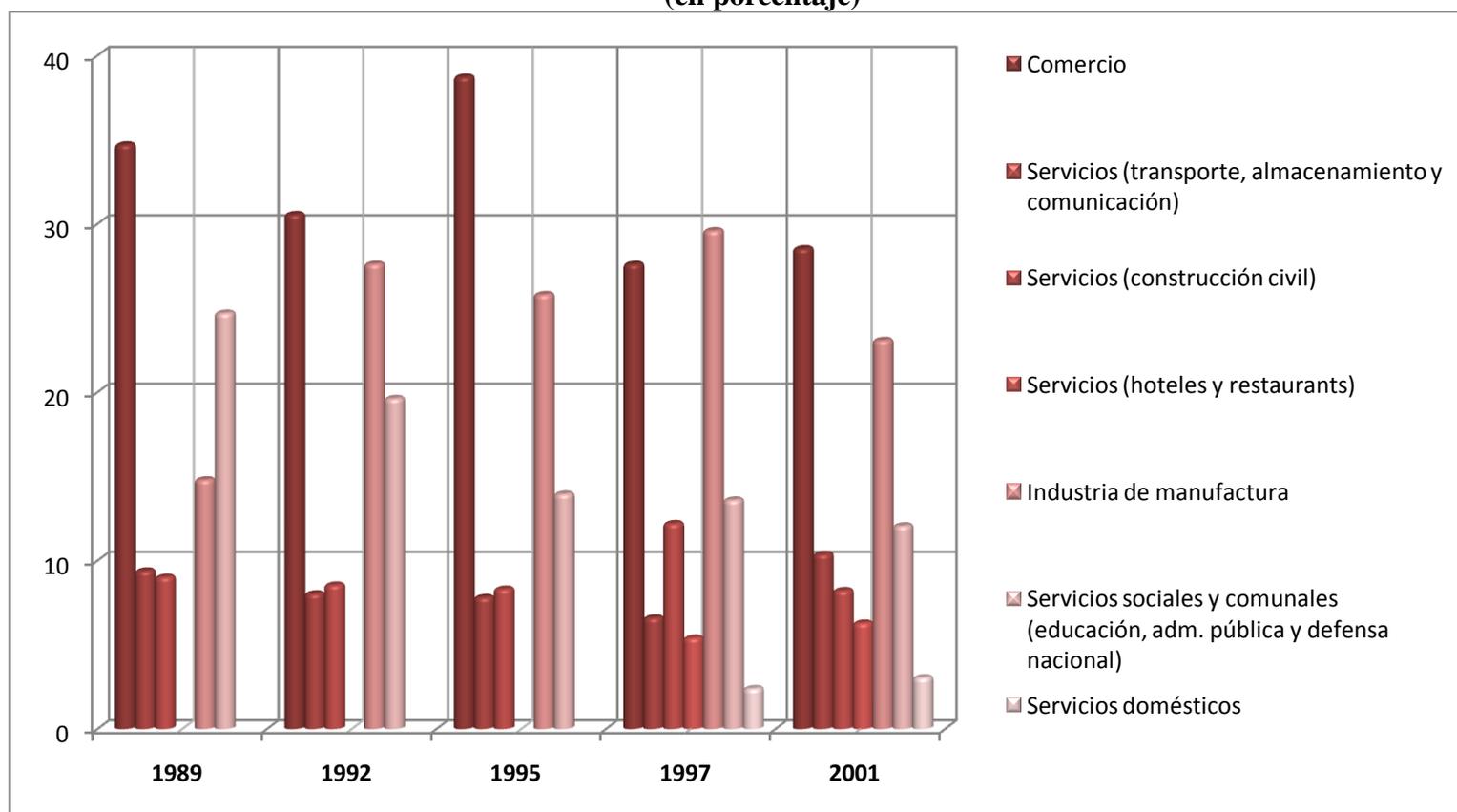
Ya en términos de especialización productiva, es posible dividirlos por sectores del mercado de trabajo (siempre en concordancia con la metodología del CEDLA): el semiempresarial se concentra en actividades manufactureras y servicios; el familiar se concentra en la producción específica de prendas de vestir y en el comercio. Al agrupar la información anterior según sectores formal/informal y agregando datos referentes a 1997, tenemos que ya en el periodo del ciclo rebelde (2000-2005), el mundo del trabajo alteño se encontraba al menos numéricamente copado por trabajadores informales y precarizados, totalizando casi un 70% de las clases trabajadoras, esencialmente en unidades familiares (Cuadro 7 y Gráfico 4).

Por lo demostrado hasta el momento, el panorama laboral alteño es fácilmente entendido por la poca presencia relativa del trabajo estable y por la proliferación de la precarización/flexibilidad del trabajo, ya sea en talleres productivos informales o en el comercio y servicios. La precariedad del trabajo lleva a que muchos trabajadores adopten el carácter **multioficio**, conjugando el empleo asalariado más la ocupación casera, la producción y la comercialización de productos, etc. Por lo tanto, el trabajador de El Alto “tiene que ser versátil. Hoy carpintero, mañana plomero, pasado mañana zapatero y luego

bombero. Tiene que ser versátil, por fuerza, por esta dependencia del mercado y por la necesidad de tener varios respiradores, sobre todo cuando son unipersonales”.<sup>67</sup>

Lo anterior evidencia las limitaciones de los datos estadísticos oficiales anunciados periódicamente por el INE respecto a la PEA. En otras palabras, el trabajador alteño suele ser obrero y comerciante en distintos periodos del mismo día, o entonces trabajar en la confección de prendas de vestir o zapatos y conjugarlo con jornadas en restaurants, etc. En esos casos, en lugar de considerar dos o más actividades, los encuestados prefieren identificarse con la que le genera más ingresos.

**Gráfico 3 – El Alto: categoría ocupacional de la PEA 1989-2001 (en porcentaje)**



Fuentes: CEDLA (1999); OXFAM; Red Hábitat (2000); Protesta Alteña, FEJUVE (2006) Adaptado por el autor

<sup>67</sup> Entrevista a Mauricio Antezana, La Paz, oct. 2009.

**Cuadro 7 – El Alto: estructura de la población ocupada por sector del mercado de trabajo,  
según rama de actividad 1989-2000  
(estructura porcentual columna)**

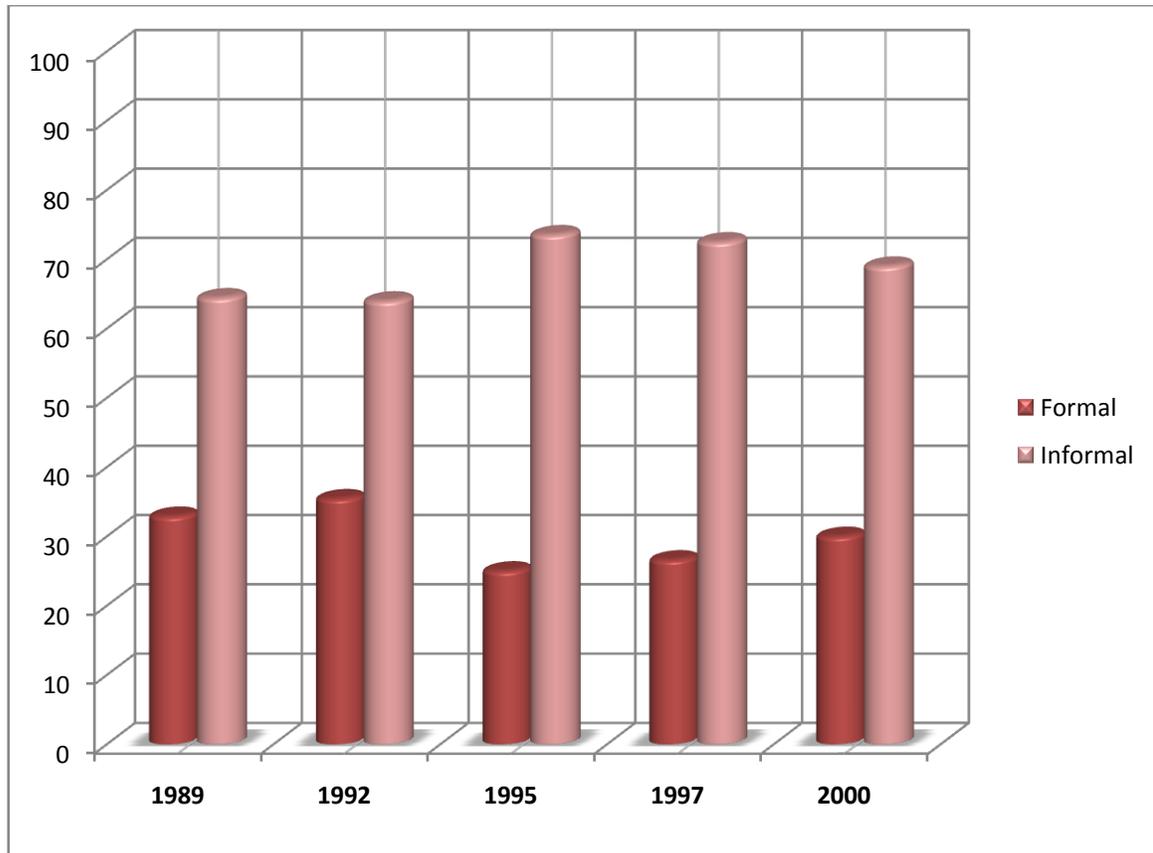
Sector del Mercado de Trabajo	TOTAL	Rama de Actividad					
		Industria Manufac.	Construc.	Transp. y Comunic.	Comercio, Restaurant. y Hoteles	Servicios Sociales y Comunes	Otras Ramas
<b>Total 1989<sup>1</sup></b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Estatal	12,00	1,48	9,64	15,51	0,99	36,74	0,00
Empresarial	20,90	38,29	44,29	40,25	7,05	12,57	48,44
Semiempresarial	11,02	20,49	10,02	15,77	6,59	11,35	7,19
Familiar	53,41	39,74	36,05	28,47	85,37	28,53	44,37
Doméstico	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00
<b>Total 1992<sup>1</sup></b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Estatal	14,57	2,26	5,34	11,85	0,33	59,55	13,38
Empresarial	19,23	19,67	53,13	33,52	9,07	13,39	20,76
Semiempresarial	20,23	32,19	25,00	34,20	10,35	6,51	35,84
Familiar	43,89	45,88	16,53	20,44	80,26	9,97	30,02
Doméstico	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00
<b>Total 1995<sup>1</sup></b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Estatal	9,62	0,00	4,86	6,81	0,00	61,31	2,43
Empresarial	15,39	19,27	21,71	53,75	8,02	5,11	11,03
Semiempresarial	16,76	20,40	34,28	24,84	9,08	8,28	37,58
Familiar	56,77	60,33	39,15	14,60	82,90	14,77	48,96
Doméstico	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00
<b>Total 2000<sup>2</sup></b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Estatal	9,72	-	-	1,67	-	87,95	-
Empresarial	19,64	26,26	19,06	42,54	5,26	9,79	-
Semiempresarial	19,76	29,15	36,28	30,77	14,49	2,26	-
Familiar	49,48	44,59	44,66	25,02	80,25	-	-
Doméstico	1,39	-	-	-	-	-	-

Fuentes:

1-Arze; Maita (1999).

2-Rossell; Rojas (2001).

**Gráfico 4 (condensado) – El Alto: población ocupada por sector formal/informal 1989-2000 (en porcentaje)**



Fuentes: Arze; Maita (1999); Rojas; Rossell (2002)  
Adaptación del autor

En el mismo sentido, Escóbar agrega que

los pequeños comerciantes combinan la forma estable de ubicación de sus puestos de venta con formas de ubicación nómada, sea a través de la venta ambulatoria, sea a través de su participación en ferias barriales que les permitan un mayor acceso a la clientela, con todos los costos adicionales (transporte) y riesgos que ello supone (conflictos con otros vendedores y con las autoridades municipales) (Escóbar, 1990, p. 68).

En todo caso, es importante resaltar que las **familias alteñas** y los **cuentapropistas** concentrados en la **manufactura** y en el **comercio minorista** son los protagonistas del mundo laboral de la metrópoli aymara. En algunos casos, dichas unidades

familiares, “que son la mayoría del sector, ni siquiera pueden darle trabajo a los hijos o a la mujer, ahora se han convertido en talleres unipersonales” (Larrazábal, 1990, p. 34).

**Cuadro 8 - El Alto: Población ocupada por rama de actividad según categoría ocupacional 1989 – 2000 (en porcentaje columna)**

	Total	Manuf.	Construcción	Transp., almac. y Comunic.	Comercio, Rest. y Hoteles	Servicios Comunales y sociales	Otras ramas
<b>Total 1989</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Obrero</b>	12,1	27,2	52,1	4,7	0,6	9,4	12,8
<b>Empleado</b>	32,1	33,0	11,9	65,9	14,0	52,1	37,4
<b>Trabajador Familiar no rem.</b>	3,0	5,4	2,7	0,0	4,7	0,7	0,0
<b>Patrón, Empleador o Socio</b>	0,6	1,2	0,0	2,2	0,0	0,8	0,0
<b>Profesional Independiente</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
<b>Trabajador Por Cuenta Propia</b>	49,4	33,2	33,4	27,3	80,6	26,6	44,4
<b>Empleado del Hogar</b>	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0
<b>Total 1995</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Obrero</b>	15,2	29,4	39,2	4,4	3,1	10,6	24,0
<b>Empleado</b>	21,8	5,2	1,9	70,8	11,0	64,9	21,0
<b>Trabajador Familiar no rem.</b>	16,9	22,4	6,1	2,9	24,3	1,0	18,1
<b>Patrón Empleador o Socio</b>	6,0	6,3	20,0	10,2	3,7	1,2	6,6
<b>Trabajador Por Cuenta Propia</b>	38,7	36,7	32,7	11,7	57,9	12,6	30,3
<b>Empleado del Hogar</b>	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0
<b>Total 2000</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Obrero</b>	21,8	39,5	41,3	48,4	4,7	5,2	11,6
<b>Empleado</b>	20,5	6,2	3,3	11,6	11,5	68,5	36,3
<b>Trabajador Familiar no rem.</b>	8,9	10,3	3,3	0,0	15,3	0,9	16,1
<b>Patrón Empleador o Socio</b>	6,4	9,7	10,8	15,0	3,5	1,4	0,0
<b>Profesional Independiente</b>	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7
<b>Trabajador Por Cuenta Propia</b>	40,6	34,3	41,3	25,0	65,0	14,1	34,3
<b>Empleado del Hogar</b>	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0

Fuente: Rojas; Guaygua (2001)

Adaptación del autor

Para ello, influyen tanto las medidas de la NPE, a partir de 1985, como el contrabando. Los talleres unipersonales copan buena parte de las distintas ramas de actividad analizadas (Cuadro 8).

**Cuadro 9 – Principales Mercados Zonales de El Alto**

<b>N°</b>	<b>Nombre del mercado</b>	<b>Ubicación</b>
1	Santos Mamani	Zona 16 de Julio
2	Sagrado Corazón de Jesús	Zona 12 de Octubre
3	Tiwanacu	Villa Dolores
4	Satélite	Ciudad Satélite
5	Central Villa Dolores	Villa Dolores
6	Bartolina Sisa	Zona Tupac Katari
7	Río Seco	Zona Río Seco (lotes y servicios)
8	1° de Mayo	Zona 1° de Mayo
9	Alto Lima	Zona Alto Lima
10	25 de Julio	Zona Santiago II
11	Ballivián	Villa Ballivián
12	Nuevos Horizontes	Zona Nuevos Horizontes
13	Amor de Cobre	Zona Pacajes
14	Bolívar	Villa Bolívar
15	Santa Rosa	Villa Tejada
16	San José	Ciudad Satélite
17	Villa Adela	Villa Adela
18	Progreso	Zona 12 de Octubre

**Fuente: extraído integralmente de Diagnóstico; PDM 2007-2011- GMEA**

El ciclo productivo de las actividades cuentapropistas se reproduce en las mismas condiciones iniciales debido, en parte, al papel nefasto de los intermediarios mayoristas, ya que el trabajador por cuenta propia (TCP) en general compra en pequeñas cantidades varias veces al mes. El conjunto de estrategias de parte de cuentapropistas conlleva elevados grados de explotación o autoexplotación del trabajo e intensificación de las jornadas laborales, provocando un “constante deterioro de las condiciones sociales de producción en

estos establecimientos, así como de la calidad de vida de los productores directos y sus familias” (Casanovas, Escóbar, 1988, p. 9).<sup>68</sup>

Los mercados y ferias zonales entre semana y los fines de semana en El Alto son abundantes. Además de la ya conocida Feria 16 de Julio – la más grande y expresiva de todas – las demás ferias y también los mercados zonales suelen estar organizados en asociaciones y federaciones de gremialistas minoristas (Cuadros 9 y 10).

**Cuadro 10 – Principales Ferias de El Alto**

N°	Nombre del mercado	Ubicación
1	Feria 6 de Agosto	Zona Tahuantinsuyo
2	Feria Senkata	Zona Senkata
3	Feria 16 de Julio	Zona 16 de Julio
4	Feria Ballivián	Villa Ballivián
5	Feria La Paz	Av. La Paz
6	Feria Río Seco	Río Seco
7	Feria de la zona Brasil	Río Seco
8	Feria Ex tranca Río Seco	Ex tranca Río Seco
9	Feria Alto Lima	Alto Lima-Av. Adrián Castillo
10	Feria Corazón de Jesús	Distrito 2
11	Feria Santiago Segundo	Distrito 2
12	Feria Pacajes	Caluyo Distrito 3
13	Feria 15 de Febrero	Ingenio UV 4 Distrito 5
14	Feria San Luís Pampa	Distrito 3
15	Feria Romero Pampa	Distrito 3
16	Feria 24 de Junio	24 de Junio
17	Feria Ex tranca	Bolívar F Distrito 3
18	Feria El Carmen	Distrito 4
19	Feria Sajra Khato	Distrito 5

**Fuente: extraído integralmente de Diagnóstico; PDM 2007-2011- GMEA**

El Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) identificó 293 asociaciones de comerciantes el año 2000. La zona norte de la metrópoli andina cuenta con 152 y la sur con

<sup>68</sup> Aunque el estudio de Casanovas y Escóbar se refiera a La Paz, consideramos que son extensibles las características de los TCP a El Alto, por su vecindad y similitud en lo que respecta a condiciones de llegada del migrante rural y dimensiones del sector informal urbano. Obviamente, los números del mercado laboral paceño no han sido considerados.

141.<sup>69</sup> Cerca de un 80% de los miembros de asociaciones son mujeres, incluyendo cargos directivos en federaciones y en la confederación, especialmente en El Alto (Cuadro 11).

**Cuadro 11 – El Alto: Distribución de organizaciones de comerciantes minoristas según especialidad de venta y tipo de puesto de venta**

<b>Criterios</b>	<b>El Alto</b>
Productos Agropecuarios	27
Textiles, prendas de vestir	8
Abarrotes	9
Productos diversos	52
Alimentos elaborados	19
s/d	17
<b>Total</b>	<b>132</b>
Local establecimiento	4
Puesto fijo	43
Ambulante	6
Ferial	62
s/d	17
<b>Total</b>	<b>132</b>

**Fuente: Rojas; Fernández (1992)**

Al contar con entrevistas realizadas a las Asociaciones 30 de Enero y 20 de Julio, Luna apunta las primeras actividades laborales urbanas realizadas tanto por migrantes rurales como minoristas ciudadanos: voceadores del transporte colectivo, choferes del sector de transporte, TCPs, lustrabotas, además de empleos en el servicio doméstico, por lo que concluye que la eventualidad ha sido una característica recurrente en sus trayectorias

<sup>69</sup> En el caso alteño, la misma asociación o gremio local puede gestionar el mercado y la feria. En otros casos, los mercados y ferias pueden tener gestiones independientes. Muchos comerciantes minoristas alteños suelen hacer parte de más de una organización. Lo hacen para poder participar de las ferias que ocurren entre semana. En todo caso, la disposición de las tiendas tanto en mercados como en ferias obedece a las circunscripciones asociativas o gremiales.

laborales (Luna, 2007, p. 56). Las jornadas laborales interminables, la eventualidad, los contratos verbales sin derechos laborales garantizados y bajos salarios son algunos elementos que influyen en los casos analizados de los y las trabajadoras que llegan al comercio ambulante cuentapropista provenientes de la condición de empleados. Luna señala que la actividad es transitoria entre jóvenes, mientras estudian, y definidas entre los mayores. De esta forma, aunque tengan que pagar el sentaje diario<sup>70</sup>, muchos trabajadores optan por el comercio con la ayuda de parientes, paisanos o amigos por su carácter autónomo.

La presente investigación se limitaría demasiado si no tomáramos en cuenta la feminización del mundo del trabajo alteño. La mujer en las calles alteñas trabajando como comerciantes minoristas son más evidentes que las que se mantienen en talleres de confección a puertas cerradas. En palabras de Sandoval,

el rol de la mujer más bien se profundiza en la economía informal de la ciudad, particularmente en el sector de servicios y comercio. Hay feminización de las calles de la ciudad, incluso en la construcción civil, haciendo zanjas, en actividades que inicialmente no estaban destinadas a la mujer. Algo se ve también en los transportes, hay mujeres voceadoras que están con sus hijos.<sup>71</sup>

Escóbar nos indica que la fuerza de trabajo femenina en las ciudades del eje boliviano ha triplicado en el periodo 1976-91, mientras que la masculina ha duplicado. “Uno de cada 2 ocupados en el sector familiar, y 1 de cada 4, en el sector semiempresarial, es una mujer” (Escóbar, 1993, p. 10). La encuesta realizada por Antezana en 1988 mencionada anteriormente ya indicaba que las jefas de hogar se concentraban en actividades del comercio o servicios personales en más de un 60%. Ello ratifica la tesis de que el binomio mujer-trabajo precario es un rasgo ineludible del universo laboral contemporáneo de la metrópoli aymara desde hace al menos 25 años. Las mujeres

ahora se constituyen en actrices centrales de una fuerza de trabajo compuesta cada vez más, precisamente, por categorías “marginales” de trabajadores (auto-empleados, temporarios, trabajadores a domicilio, y toda forma de trabajadores casuales, desprotegidos por el Estado y las leyes) (Loayza, 1997, p. 14).

---

<sup>70</sup> Especie de impuesto para mantener el puesto de venta callejero.

<sup>71</sup> Entrevista a Godofredo Sandoval, La Paz, oct. 2009.

Loayza, quien desarrolló un estudio sobre la mujer aymara urbana en los mercados de El Alto y La Paz, sostiene que la participación femenina activa no es algo novedoso, pero que ha sido incentivada por los ajustes estructurales. “Al parecer, los cambios en el contexto económico han creado una situación en la que las mujeres que estaban trabajando antes (no empezaron a trabajar recién ni a causa de los cambios) ahora trabajan más” (Loayza, 1997, p. 134-35). Al ajuste estructural habría que agregarle la crisis en el campo como factor que ha provocado la feminización del mercado de trabajo.

A inicios de los años noventa, las trabajadoras alteñas se concentraban en el comercio y servicios, sin dejar de estar presentes en la rama manufacturera. Hacia la vuelta de siglo, han estado más presentes en actividades manufactureras productivas (Rojas; Guaygua, 2001, p. 36). Si en la comunidad rural se valoriza el trabajo del varón, en la ciudad es el trabajo productivo de la mujer el que se ha priorizado al lado del varón, justamente porque es la mujer quien ha construido nuevas capacidades de vinculación con el mercado, además de reforzar lo organizativo en El Alto, dándole su particularidad. En todo caso, son mayoritariamente trabajadoras eventuales que actúan como cuentapropistas o familiares no remuneradas en el comercio (de puesto fijo o ambulante) (Cuadro 12).

**Cuadro 12–El Alto: estructura de la población ocupada por categoría, según sexo 2000**

<b>Categoría Ocupacional</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Hombres (% fila)</b>	<b>Mujeres (% fila)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Hombres (% columna)</b>	<b>Mujeres (% columna)</b>
<b>Total 2000</b>	<b>100,00</b>	<b>57,59</b>	<b>42,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Obrero	100,00	87,65	12,35	21,8	33,2	6,3
Empleado	100,00	62,50	37,50	20,5	22,3	18,1
Trabajador Familiar (no remunerado)	100,00	30,40	69,60	8,9	4,7	14,6
Patrón, Empleador o Socio	100,00	89,74	10,26	6,4	10,0	1,5
TCP	100,00	41,39	58,61	40,6	29,2	56,1
Empleado del Hogar	100,00	11,76	88,24	1,4	0,3	2,9

**Fuente: Rojas; Guaygua (2001)**  
**Adaptación del autor**

Además de trabajar más horas y en más de un mercado en el mismo día, las trabajadoras alteñas han estado desempeñando más de un oficio simultáneamente: son igualmente **proletarias multioficio, pluriactivas**. En la dinámica laboral post-85, el varón despedido da lugar a la mujer jefa de hogar que a veces es su propia empleadora. Loayza señala que las transferencias de responsabilidades del Estado para el hogar han pesado más sobre las espaldas de la mujer aymara urbana. Además, “en general es más aceptado que las mujeres desarrollen tareas que pueden considerarse como extensiones de sus roles domésticos; también es más adecuado que ellas se sacrifiquen más” (Varios, 1988, p. 215).

En relación a la participación de la mujer alteña en cadenas productivas locales, Andia destaca que “la tradición andina privilegia la organización económica familiar y el desarrollo de destrezas femeninas como el tejido, facilitando su ingreso en el sector del comercio y actualmente, con más fuerza en formas de subcontratación” (Andia, 2004, p. 16). La autora complementa el dato: las alteñas casadas se ocupan informalmente en el propio domicilio, retirándose de empleos permanentes y engrosando el trabajo precario, eventual y flexible. Basada en el Censo de 1992, la autora apunta características de la mujer alteña: 21% son jefes de hogar, comprenden un 75% del total de analfabetos y un 68% de la población que nunca acudió a una escuela. Como rasgo esencial, son mujeres migrantes y aymaras.

Otro estudio esencial para comprender mejor el papel realizado por la mujer alteña en el mundo del trabajo es el de Silvia Rivera a mediados de los años noventa. La antropóloga boliviana analiza la articulación entre relaciones de género y dominación colonial en La Paz y El Alto entre mujeres trabajadoras por cuenta propia que acceden al microcrédito. La metodología de la autora incluyó la selección de mercados y/o ferias, totalizando un universo de investigación de casi 30 mil unidades económicas familiares y unipersonales conducidas por mujeres.

Rivera identifica “negocios que se mueven en el nivel de la infrasubsistencia”, al tiempo que observa límites de precariedad de la fuerza de trabajo y prolongación de la jornada de trabajo históricamente inéditos entre las mujeres alteñas. En general, se trata de migrantes de primera a tercera generación que mantienen el vínculo campo-ciudad, sometidas al mismo ciclo laboral descrito anteriormente. La autora caracteriza a los programas de ajuste económico y de créditos internacionales como resquicios coloniales de

nuestro tiempo y ratifica su hipótesis inicial: el acceso al crédito explica la segmentación/estratificación entre mujeres alteñas cuentapropistas.

Otra faceta de la mujer alteña, vinculada con el mudo laboral, es la creación o extensión de redes sociales, ya sea basadas en el parentesco o paisanaje, destinadas a sanar necesidades del entorno barrial o más íntimas, relacionadas con la salud, educación o alimentación. De esta manera, la trabajadora también se hace presente en actividades no mercantiles fuera del hogar vinculadas a la reproducción de la fuerza de trabajo. No siempre evidente, el involucramiento en redes sociales les genera triples o cuádruples jornadas.

De hecho, de los miembros familiares, las mujeres son las que más participan en organizaciones sociales. Rivera nos indica que “una amplia red rural-urbana de parientes y paisanos brinda el contexto de operación para negocios frecuentemente administrados por mujeres” (Rivera Cusicanqui, 1996, p. 281), volviéndolas jefas de hogar en muchos casos. En la misma línea, Samanamud (2002) apunta que hay casos en que la inversión de roles de género implica que muchos varones sean operarios de sus mujeres por la extensión y variedad de redes sociales en que éstas se involucran, aunque no deja de existir la centralidad del varón en otros casos.

Dada la importancia de la población joven en El Alto, además de su marcada participación política callejera durante el ciclo rebelde (2000-2005), es imprescindible detenernos en su universo laboral. 60 de cada 100 alteños tiene menos de 25 años y se concentran en la manufactura, más que en el comercio y servicios (Rojas; Guaygua, 2001, p. 18). Los jóvenes con menos de 20 años son mayoritariamente trabajadores familiares o aprendices no remunerados, mientras que los mayores de 20 años en general trabajan como obreros, empleados (trabajadores no manuales) o TCPs. En unidades semiempresariales y familiares informales (Cuadro 13), los jóvenes alteños están sometidos a elevados grados de paternalismo, incluyendo malos tratos, intimidación física y acoso sexual, además de sobreexplotación familiar: “la condición de niño o de joven quizá resulte propicia para ejercer mayor poder por parte de padrinos o parientes, más aún si los niños o jóvenes quedan “a cargo” de ellos y requieren aprender un oficio” (Rossell; Rojas, 2002, p. 25).

**Cuadro 13 – El Alto: población ocupada por sector del mercado de trabajo, según sexo y grupos de edad 2000 (en porcentaje)**

	<b>Total</b>	<b>Hasta 14 años</b>	<b>15-19 años</b>	<b>20-24 años</b>	<b>25 y más años</b>
<b>Total</b>	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Estatal</b>	9,7	-	-	6,5	11,3
<b>Empresarial</b>	19,6	-	8,2	28,8	19,2
<b>Semiempresarial</b>	19,8	17,8	23,3	27,1	18,1
<b>Familiar</b>	49,5	82,2	61,6	35,4	50,5
<b>Doméstico</b>	1,4	-	6,9	2,2	0,8

Fuente: Rossell; Rojas (2002)

Ya es sabido que los jóvenes, juntamente con las mujeres, son los que más han sido afectados por la reestructuración productiva. Ello se refleja en el alto nivel de desempleo abierto; los ocupados aceptan las “nuevas reglas del juego” a veces sin ni siquiera sentir los cambios sucedidos por no haber participado del mercado de trabajo cuando el registro formal daba derechos laborales y perspectivas de futuro familiar (Cuadro 14).

**Cuadro 14 – El Alto: tasas de desempleo abierto según sexo y grupos de edad 2000 (en porcentaje)**

	<b>Total</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
<b>Total</b>	4,1	3,3	5,1
<b>Hasta 14 años</b>	12,1	14,4	9,1
<b>15 - 19 años</b>	11,0	5,7	14,9
<b>20 - 24 años</b>	5,7	4,1	8,2
<b>25 y más años</b>	3,0	2,7	3,4

Fuente: Rossell; Rojas (2002); CEDLA (2000)

Independientemente de la cuestión de género y/o edad, volvemos a insistir en la **precariedad, flexibilidad y eventualidad** en cuanto elementos dominantes en el mundo del trabajo alteño. El subempleo - ya sea entendido como resultado del aumento de las jornadas laborales sin aumento de los ingresos (Eguino, 1993) o como “aquella situación donde las horas de trabajo semanal son inferiores al tiempo establecido y fundamentalmente cuando el ingreso es claramente menor al salario mínimo legalmente establecido” (Rojas; Guaygua, 2001, p. 24), nos revela que la aparente reducción del desempleo abierto divulgada por las cifras del INE esconde la precarización del trabajo.

Si tomamos en cuenta el periodo 1989-1995 en la ciudad de El Alto, el promedio del subempleo alcanza un 82,13% de los trabajadores ocupados en la metrópoli aymara

(Arze; Maita, 1999, p. 69). En el mismo sentido, si adoptamos la distinción de Rojas y Guaygua entre trabajo no precario - aquél donde los trabajadores gozan de derechos laborales -, precario – donde los trabajadores experimentan la pérdida de derechos – y precario extremo – que incluye la pérdida total de condiciones laborales adecuadas, tenemos cifras alarmantes entre obreros de la manufactura, comerciantes y prestadores de servicios en general hacia el año 2000 (Cuadro 15).

Algunas similitudes de la configuración productiva contemporánea de El Alto con el proceso de transición de las manufacturas al sistema propiamente fabril vivido por Inglaterra a fines del siglo XVIII son visibles. En sus análisis de los *workshops* ingleses, Marx da cuenta de la existencia de una suerte de **industria domiciliaria dispersa** en el patio trasero de la gran industria que emplea crecientemente a mujeres y niños.

**Cuadro 15 - El Alto: población ocupada asalariada por rama de actividad, sector del mercado de trabajo y categoría ocupacional, según grado de precariedad laboral 2000 (porcentaje fila)**

	Total			
	Total	No Precario	Precario	Precario Extremo
<b>Total 2000</b>	<b>100.0</b>	<b>30.3</b>	<b>54.6</b>	<b>15.1</b>
Manufactura	100.0	22.7	50.9	26.3
Construcción	100.0	5.6	90.7	3.7
Transportes	100.0	1.4	95.8	2.8
Comercio	100.0	6.2	60.1	33.7
Servicios Soc. y Comunales	100.0	66.8	24.9	8.3
Otras Ramas	100.0	41.4	51.7	6.9
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>30.3</b>	<b>54.6</b>	<b>15.1</b>
Estatad	100.0	75.6	20.2	4.2
Empresarial	100.0	27.5	60.9	11.6
Semiempres	100.0	1.8	70.4	27.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>30.3</b>	<b>54.6</b>	<b>15.1</b>
Obrero	100.0	13.5	71.1	15.4
Empleado	100.0	48.2	37.1	14.8

Fuente: Rojas; Guaygua (2001).

Dice Marx:

se aplica esto no sólo en toda *la producción combinada y en gran escala*, se emplee o no maquinaria, sino también a la llamada *industria domiciliaria*, ya se la practique en las viviendas de los obreros o en talleres pequeños. Esta llamada industria domiciliaria, la de nuestros días, no tiene en común, salvo el nombre, con la industria domiciliaria al estilo antiguo, que suponía un artesanado urbano independiente, una economía campesina autónoma y ante todo *un hogar donde residía la familia trabajadora*. Actualmente, esa industria se ha convertido en el *departamento exterior de la fábrica, de la manufactura o de la gran tienda*. Además de los obreros de las fábricas y manufacturas y de los artesanos, a los que concentra espacialmente en grandes masas y comanda de manera directa, el capital mueve, por medio de hilos invisibles, a otro ejército: el de los obreros a domicilio, dispersos por las grandes ciudades y la campaña (Marx, 1979, p. 562).

Marx describe el grado de explotación de la llamada industria domiciliaria que ocupa diminutos cuartos precarios, además de la dispersión obrera y la inestabilidad que dificultaban la organización obrera y la resistencia. En el caso de las mujeres que empleaban y trabajaban con su propia familia en el domicilio, Marx sugiere que las condiciones eran aún peores. Respecto a la dinámica industrial de ese entonces en el país europeo, nuestro autor señala la amplia dispersión de **obreros a domicilio** suministrados por la gran industria de insumos y productos semielaborados a los cuales se paga el mínimo necesario. Agrega que

en la esfera de la *industria domiciliaria*, de por sí absolutamente irregular y por entero dependiente, en cuanto a la materia prima y a las órdenes, del humor del capitalista – a quien no contiene aquí ningún miramiento con respecto a la valorización de edificios, máquinas, etc., y que no arriesga nada más que el pellejo de los propios obreros –, en esa esfera, pues, se cría sistemáticamente un ejército industrial de reserva, siempre disponible, diezmado durante un aparte del año bajo una coyunda laboral inhumana y degradado durante la otra por la carencia de trabajo (Marx, 1979, p. 583).

Según lo que vimos en el apartado sobre el mundo del trabajo de El Alto, Marx podría referirse a la región norte de la ciudad, de concentración manufacturera, donde se destacan los barrios 16 de Julio, Río Seco, Villa Ingenio y Ballivián, guetos de migrantes campesinos aymaras y exmineros donde la autoexplotación, la explotación familiar y la dependencia directa de las decisiones de la gran industria conviven diariamente lado a lado. Son “talleres que funcionan en cuartitos de adobe sin una gota de sol y de luz, eso es siglo

XIX. Entran a las seis de la mañana, un cortecito de doce a una y hasta las seis de la tarde. Eso pasa incluso en los talleres de confección de zapatos para las cholas”<sup>72</sup>.

Así como en los albores de la gran industria de Inglaterra, en los talleres productivos alteños prevalece el pago por pieza, por tarea, el llamado y ya mencionado pago a destajo. Se trata de una forma de pago asociada a la subcontratación y que permite prolongar la jornada laboral, reducir el salario y aumentar significativamente la intensidad productiva, articulando de esa forma la generación de plusvalía absoluta y relativa que es transferida a la gran industria.

La articulación entre plusvalía absoluta, asociada a la subsunción formal, y plusvalía relativa, asociada a la subsunción real, es una característica apuntada por Marx a fines del siglo XVIII que actualmente es revitalizada por el nuevo patrón de acumulación neoliberal y flexible en Bolivia, con reflejos directos en el mundo laboral de El Alto. De hecho, la histórica presencia de actividades artesanales y de confección en Bolivia que no se encuentran organizadas de manera específicamente capitalista, anteriormente a la reestructuración productiva pues, permite que incluso lógicas vinculadas con la economía de *ayllus* sean refuncionalizadas en beneficio del gran capital.

Finalmente, para lo que nos interesa respecto a la llamada informalidad o trabajo precario en El Alto, consideramos adecuado agruparlo en las siguientes categorías, en orden de relevancia:

- a) unidades familiares en el comercio o en pequeños talleres productivos;
- b) cuentapropistas (TCPs) que en general no perciben salarios, sino ingresos, ya sea en comercio (mujeres), servicios o pequeñas manufacturas;
- c) titulares y empleados (contratados temporalmente o asalariados sin contrato, sin beneficios salariales e inestables) de unidades semiempresariales productivas, en el comercio o servicios con pocos miembros (menos de diez);
- d) trabajadores del servicio doméstico asalariados;
- e) aprendices de talleres productivos no remunerados o eventualmente asalariados.

---

<sup>72</sup> Entrevista a Godofredo Sandoval, La Paz, oct. 2009.

Y para facilitar la sistematización de la información hasta aquí presentada, definimos como **rasgos generales del mundo del trabajo alteño** los nueve siguientes elementos en orden de relevancia:

- a) la precariedad, flexibilidad y eventualidad (si se quiere la informalidad), que cruzan todas ramas de actividad, categorías ocupacionales y sectores del mercado de trabajo seguida de la pérdida de importancia y relevancia del trabajo asalariado formal con prestaciones sociales (regido por la Ley General del Trabajo);
- b) la familia nuclear (padre, madre, hijos) o la familias ampliada (entornos de padrinaje, compadrazgo y paisanaje) en cuanto a organización socio-económica central se refiere;
- c) el trabajador y la trabajadora alteña es mayoritariamente cuentapropista, trabajador familiar o familiar no remunerado;
- d) el crecimiento constante de la participación laboral femenina, joven y de familiares no remunerados (hijos e hijas);
- e) las actividades del comercio minorista copadas por la mujer, ya sea en el comercio ambulante, venta en puestos fijos o en el comercio establecido;
- f) la inactividad permanente da lugar a la inactividad temporal, lo que lleva a la disminución del desempleo abierto, puesto que no puede darse el lujo de la desocupación;
- g) el abastecimiento de fracciones precarizadas de la clase trabajadora por el sector familiar a través del comercio de productos básicos y agropecuarios;
- h) el uso de tecnología y maquinaria rudimentarias en los talleres familiares o semiempresariales;
- i) la histórica presencia de actividades artesanales, de servicios y del comercio minorista permeadas por rasgos de sociabilidad andina rural.

### **3.4. La Comuna Alteña de 2003 vista desde el mundo del trabajo**

Una vez analizado el mercado laboral alteño, consideramos apropiado complementar algunos comentarios acerca de una de las mayores batallas llevadas a cabo en el altiplano

de Bolivia y, dicho sea de paso, la más grande lucha sociopolítica luego de la reestructuración productiva en el país. Tuvo lugar precisamente en la combativa El Alto el octubre de 2003 y se le ha denominado la “Guerra del Gas”. Aquí nos referiremos a ella haciendo mención a la Comuna Alteña por las características que se abordarán enseguida. De esta manera, ¿cómo está presente el trabajo en la lucha altiplánica de inicios de siglo? ¿Quiénes son los comunarios alteños de 2003 y qué relación mantienen con los combativos mineros de antaño? ¿Por qué la Comuna Alteña no pervivió más allá de sus demandas centrales?

Además de las juntas de vecinos de El Alto, compuestas de trabajadores aymaras precarizados – comerciantes, choferes, artesanos, cuentapropistas, amas de casa y jóvenes suburbanos – también se hicieron presentes el gremio de panaderos de la región de La Paz, los cocaleros del Chapare y el movimiento minero y fabril vinculado con la COB. Distintas organizaciones convergieron y formaron un movimiento sociopolítico multiforme y territorialmente asentado en El Alto. Durán confirma la existencia de una propaganda o generación de conciencia social en Octubre 2003: “ese ha sido el sentido de la lucha, las personas se apropiaron de información. Señoras de *pollera*<sup>73</sup> solían explicar con números y cifras porqué no se debía vender el gas a través de Chile”<sup>74</sup>. De las organizaciones involucradas y luego de veintiún años desde la última gran movilización en contra de la dictadura militar, las juntas de vecinos de El Alto sirvieron de referencia durante la formación de la Comuna Alteña, relegando a segundo plano, incluso organizaciones sindicales y gremiales combativas, a saber, la propia COB, la Central Obrera Regional de El Alto (COR), la Federación de Fabriles y la Federación de Gremiales.

En la lucha por la legitimidad en la representación de los trabajadores, las organizaciones tradicionales rechazaron su apoyo a las juntas vecinales – coordinadas a principio por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) – en la declaración del primer paro a inicios de octubre. Ante ello, han sido los propios vecinos los que protagonizaron la protesta paralelamente al sindicalismo obrero. Durante el conflicto de 2003, conocido como la Guerra del Gas, Jaime Solares, entonces Secretario General de la COB, convocó a los trabajadores a la toma del poder juntamente con los militares nacionalistas para que

---

<sup>73</sup> Falda compuesta de varias telas típica de la mujer aymara del campo y la migrante residente en la ciudad.

<sup>74</sup> Entrevista a Mario Duran Chuquimia, El Alto, dic. 2006.

cogobernaran la COB y las FFAA. Además de eso, el dirigente propuso que cada asamblea estuviera subordinada a las respectivas centrales sindicales locales.

Sin embargo, sus llamados no fueron escuchados. ¿Por qué no? Creemos que las respuestas deben ser buscadas: a) en el alejamiento de la COB de las clases trabajadoras que ha transformado el órgano central en el órgano burocrático por excelencia del mundo obrero y b) en la reestructuración productiva sufrida por Bolivia a partir de los años 80's, la cual fragmentó el proletariado minero-industrial que le servía de base a la central obrera. Los partidos políticos a su vez, independiente de la orientación política, se mantuvieron distantes del combate en las calles alteñas.

A lo largo del periodo de enfrentamientos con las FFAA – entre los días 8 y 17 de octubre – no hubo actividad comercial, bancaria o laboral en El Alto, lo mismo que en algunos sectores de La Paz. En otras palabras, la movilización de centenas de trabajadores y trabajadoras indígenas precarizados logró inmovilizar dos de las mayores ciudades bolivianas, con más de dos millones de habitantes juntas:

los gremiales han paralizado la ciudad. Y cuando quieren la paralizan. Cuando se articulan con los campesinos, la ciudad se queda cercada. Y además se organizan por turnos. Te toca hoy a ti y en la mañana tienes que estar aquí. Es una rotación. En 2003 fue así. Si se paralizan los gremiales más transporte, no se mueve El Alto.<sup>75</sup>

A partir del día 11 de octubre, el gobierno de Sánchez de Lozada (Goni) oficializó la estrategia de contrainsurgencia en la ciudad, con el objetivo de garantizar el orden público, resguardar la democracia liberal y principalmente abastecer la capital boliviana con combustible y alimentos. Los comunarios alteños contestaron en forma de organización político-militar. Grupos de trabajadores precarios han formado brigadas y barricadas en distintos puntos de la ciudad para enfrentar al ejército.

El 12 de octubre, en Villa Ingenio, barrio de exmineros y residentes del campo, más de cien soldados despistaron a los bloqueos en las principales avenidas y surgieron por calles secundarias disparando contra residencias familiares. La masacre dejó un saldo de 25 muertos, incluyendo a ancianos, mujeres y niños. El día siguiente, una marcha de 100 mil comunarios se dirigió a La Paz. Al acercarse a la Plaza Murillo, donde está el palacio

---

<sup>75</sup> Entrevista a Godofredo Sandoval, La Paz, oct. 2009.

presidencial, fueron obligados a retroceder bajo riesgo de muerte. Apace, Secretaria de Juventud de la FEJUVE en ese entonces, relata:

cuando llegamos a la Plaza San Francisco, creamos una especie de cerco alrededor de la Plaza Murillo para tomar el Palacio Quemado [palacio presidencial]. Para nuestra sorpresa, había tres tanques de guerra ubicados en la plaza estratégicamente en las esquinas. Quisimos ocupar la plaza, pero nos dispararon. No era gas lacrimógeno. La intención era matarnos.<sup>76</sup>

La lucha de clases se expresó de forma cruda en las calles de la región sur de La Paz. Los trabajadores indígenas ocuparon toda la región donde se concentra la burguesía paceña y nacional, además de los empleados de la cooperación internacional (ONG's y fundaciones básicamente). Los moradores de esos barrios permanecieron cerrados en sus casas y departamentos durante gran parte de la jornada de lucha. La marcha del 16 y 17 de octubre reunieron más de 300 mil y 400 mil personas respectivamente. Mientras marchaban hacia el palacio presidencial, algunos de ellos en formación militar, se anunció oficialmente la carta de renuncia de Goni. El saldo final de la Guerra del Gas fue de más de setenta muertos, cuatrocientos heridos, torturados o desaparecidos y más de mil personas en huelga de hambre.

Durante esos días, los consejos y asambleas de calle se convirtieron en la mayor instancia decisoria. Los dirigentes de la FEJUVE y COR, las principales organizaciones políticas de la ciudad, no fueron tomadas en cuenta por los comunarios y además se les prohibió la negociación con el gobierno a su nombre. De la formación y desarrollo de la Comuna Alteña han participado tanto fabriles y mineros estatales y privados (coperativizados) como obreros de talleres domiciliarios. Tenemos, por lo tanto, la fuerza de trabajo subsumida real y formalmente al capital. Igualmente han participado campesinos aymaras, parcialmente subordinados al proceso mercantil regional y/o nacional, comerciantes ambulantes y artesanos que migraron a El Alto, además de los trabajadores cuentapropistas y contrabandistas nativos.

El movimiento social de El Alto debe ser visto desde el mundo del trabajo porque las movilizaciones tienen que ver con el trabajo que es informal, de los comerciantes y los servicios. También tienen que ver con el consumo, los servicios de agua, alcantarillado, etc. Tienen que ver con educación, salud. Y lo cultural para mí es la energía que está presente en todas esas movilizaciones. El sector informal es la base de las

---

<sup>76</sup> Entrevista a Monica Apace, Viacha, dic. 2006.

movilizaciones. El movimiento gremial, que aglutina todos esos movimientos, de personas, de familias que están insertas en actividades de sobrevivencia, competencia, en fin, constituye uno de los pilares del movimiento social. Cuando hay movilización, no sólo son las juntas de vecinos, son los gremiales que van como una masa prolongada. Es una visión debilitada el que se movilizan solamente por factores identitarios. Hay una base material que provoca las movilizaciones.<sup>77</sup>

Sin el vanguardismo propio de la izquierda vinculada al movimiento obrero-minero fruto de 1952, la lucha de octubre pudo desarrollar cierta sociabilidad andina propia del campo con menos restricciones durante los enfrentamientos con el Estado. Lejos de visiones idílicas, la lucha concreta de proletarios regidos por asambleas comunitarias de barrio ha comprobado la capacidad de hacer cumplir demandas de alcance nacional. De hecho,

los barrios, las juntas vecinales se convirtieron en cuarteles generales. Y ahí por ejemplo se aplicó el *ayllu* porque ahí se implantaron gobiernos rotativos, gobiernos barriales. Los presidentes trabajaban de forma circular. Con esa tecnología de lucha no se podía de ninguna manera derrotarlos.<sup>78</sup>

Delgado destaca algunos elementos comunitarios puestos en marcha durante el conflicto: el sistema *ayni* de cooperación mutua, el sistema de cargos o de rotatividad de servicios prestados, el *athapi* o alimentación en comunidad, la *tumpa* – visitas que se hacen de casa en casa o barrio en barrio – y otras trivialidades como son las técnicas específicas para almacenamiento de alimentos por medio de la sequedad. Sandoval nuevamente nos revela que

en términos de movilización, en El Alto están los comités de vigilancia, las asociaciones de padres de familia y sobretodo las juntas de vecinos. Si no hay movilización, hay sanciones. Eso está en la base de lo comunitario. Toda la gente se moviliza, incluso sectores más estables. El criterio aquí es el criterio de solidaridad y reciprocidad. Esa es la base de la gestión social de la ciudad de El Alto.<sup>79</sup>

Duran a su vez pone el énfasis en la ausencia del carácter de clase de la FEJUVE-El Alto, lo que, en última instancia, reflejó los límites de la lucha alteña. Al involucrarse en

---

<sup>77</sup> Entrevista a Godofredo Sandoval, La Paz, oct. 2009.

<sup>78</sup> Entrevista a Abraham Delgado, El Alto, dic. 2006.

<sup>79</sup> Entrevista a Godofredo Sandoval, La Paz, oct. 2009.

temáticas a nivel nacional, esta organización lo hace sin rumbo político definido. Dice Durán:

el no ser partido, el no ser sindicato, el no tener ideología propia, el razonar desde las zonas, desde los vecinos implica pues que también se tiene que tropezar. ¿Cuál es la característica principal de una junta vecinal? Pedir por un hábitat mejor [...] ¿cómo analizas el carácter de clase en una junta vecinal? En una zona cualquier de El Alto conviven un microempresario con sus cinco operarios y otro que se dedica a vender comida en las calles. Pero ambos comparten una necesidad: que el hábitat sea mejor, que la calle ya no sea de tierra, que sea de piedra, que haya una red social [...] entonces no puedes hacer una lectura de clase con tu vecino.<sup>80</sup>

En relación a las debilidades de las juntas vecinales alteñas, Rojas complementa:

los límites de las juntas de vecinos: primero haberse reconocido más como organizaciones vecinales y no como organizaciones de trabajadores porque esa mirada desde el trabajo, el aporte del trabajo productivo, el aporte de la fuerza de trabajo, que genera valor como tal, podría haber posibilitado quizá un norte político más claro. Faltó entender que la lucha de vecinos era una lucha de clases. Estábamos enfrentando no a un gobierno únicamente, sino a empresarios, aquellos que estaban controlando el poder político. Faltó entender que eran grupos explotados por el capital. Porque si bien eran independientes, estaban subordinados a esa estructura de poder.<sup>81</sup>

A raíz de demandas locales y fragmentadas, la Comuna Alteña evidencia que la lucha contra el capital transnacional – representado por el consorcio energético del proyecto Pacific LNG que hubiera sido beneficiado con la exportación de gas natural por Chile – pudo dar lugar a una experiencia de lucha proletaria y autónoma en el segundo mayor centro urbano de Bolivia. La lucha de los comunarios alteños en contra de las transnacionales de hidrocarburos es producto del cambio en el patrón de acumulación oriundo de 1952. Los grupos transnacionales, juntamente con grupos empresariales mineros, industriales y agroindustriales que se han beneficiado de la reestructuración productiva promovida por el Estado, han enfrentado la resistencia de la creciente masa de trabajadores productivos a destajo dispersos en ciudades como El Alto, además de los y las comerciantes minoristas. Nos dice nuevamente Rojas:

---

<sup>80</sup> Entrevista a Mario Duran, El Alto, dic. 2006.

<sup>81</sup> Entrevista a Bruno Rojas, La Paz, oct. 2009.

particularmente el 2003 sí podemos establecer una relación estrecha entre lo que significa el mundo del trabajo y lo que sucedió a raíz de esa resistencia. ¿Por qué esta relación? Primero por la composición socio-económica de El Alto. El trabajo obrero tradicional es menor, pero no menos importante. Está principalmente el trabajo informal, y como trabajadores informales que son la mayoría, hijos de trabajadores informales, amigos, vecinos, parientes que han estado vinculados a las unidades familiares, que son la base del trabajo informal. Llegaron a formar grupos de resistencia armada con capacidad organizativa y de respuesta.<sup>82</sup>

En una ciudad con más de un millón de habitantes y que concentra gran parte de las industrias que antes se ubicaban en La Paz, además del comercio minorista de todo el altiplano boliviano, la Comuna Alteña refleja la composición heterogénea de las clases trabajadoras de ese país. En todo caso, la Comuna Alteña – entendida como la organización territorial proletaria y popular aymara que ocupó El Alto durante octubre de 2003 – ha sido la herramienta organizativa por la cual las clases trabajadoras se expresaron como vecinos proletarizados en términos de territorio y ya no en términos de relaciones productivas directamente. Además de frenar parcialmente las políticas neoliberales implantadas a partir de 1985, el ciclo rebelde boliviano, cuyo auge ha sido justamente la Guerra del Gas, ha permitido la apertura de un nuevo debate acerca de la disputa del poder en el país y ha llevado a las calles del altiplano boliviano temas políticos que parecían olvidados, tales como

la relación gobierno-sociedad, la desconcentración-dispersión del poder del estado, la desprivatización y gestión social de los bienes comunes, la posibilidad de construir equivalencias políticas que permitan inventar formas más ciertas de igualdad (Gutiérrez, 2008, p. 267).

El gobierno de Evo Morales, que todavía hoy día mantiene importante base de apoyo entre organizaciones sociales, no ha tenido flexibilidad para volver a aumentar impuestos o implementar medidas que provocaran elevación de los precios de la canasta básica o de los combustibles después del 2003.<sup>83</sup> Por otro lado, nos deparamos con la dificultad de la permanencia de la forma-comuna en el tiempo y el espacio. De hecho, las

---

<sup>82</sup> Idem.

<sup>83</sup> La mayor comprobación de esto ha sido el llamado Gasolinazo del mes de diciembre de 2010 en El Alto en contra del aumento abusivo del precio de los combustibles.

barreras posteriormente impuestas por la dinámica del Estado burgués no han podido ser superadas por la Comuna Alteña, es decir, la organización alteña no ha generado estructuras de autogestión con posibilidades de proyectarse en dimensiones macrosociales más allá del Estado. Vale decir que el movimiento no demandaba un cambio en el sistema; por el contrario, pretendía que el gas no fuera vendido por Chile y que el Estado gestionara su exploración y comercialización.

Además de lo anterior, han sido respetadas las reglas de la sucesión presidencial y la estructura de la Cámara de Diputados y Senadores siguió siendo la misma durante 2004. Ese año, Carlos Mesa se aprovechó de la ausencia de proyecto político que fuera común a los comunarios en lucha y neutralizó la fuerza de las movilizaciones de 2003 a través de la realización de un referéndum manipulado acerca del destino del gas y la Ley de Desmonopolización de Partidos, que permitió a partir de entonces la candidatura de organizaciones ciudadanas en elecciones locales, regionales o federales. La promulgación de dicha ley ha fragmentado las organizaciones sociales, muchas de las cuales han participado de la Guerra del Gas, una vez que sus dirigentes se atomizaron en distintas agrupaciones político-electorales.

Por tal motivo, los momentos posteriores a la experiencia de El Alto han sido marcados por el retorno del parlamentarismo burgués, la sucesión del vicepresidente Carlos Mesa y, dos años más tarde, la cristalización del Movimiento al Socialismo (MAS) no solo en el gobierno, sino además su hegemonía en las principales organizaciones sociales de Bolivia, incluyendo a la FEJUVE y la CSUTCB. Esto nos lleva a reflexionar acerca de la praxis de formas no específicamente estatales ni partidarias de organización en contextos poco institucionalizados y todavía permeados por sociabilidades no capitalistas, como es el caso de las formas socioeconómicas andinas, justamente las que suelen desatar sus potencialidades en la forma-comuna.

No coincidimos con cierto discurso el cual se limita a decir que las relaciones étnicas promueven la división de las clases trabajadoras. En contextos como el de Bolivia, el indígena se confunde con el proletario urbano. En este caso, el discurso étnico, en lugar de fragmentar, cohesiona y articula las clases explotadas. La importancia de las formas de organización territoriales y la tradición de lucha campesina durante el conflicto y el cotidiano alteño es evidente. Sin embargo, es también evidente que la falta de unidad del

vecino o indígena en torno a su condición de proletario ha definido el rumbo político de la lucha. Nos confirma Chuquimia: “hay detonantes de la Agenda de Octubre: la demanda del respeto a la dignidad de la gente, pero ¿qué lleva a reflexionar sobre este punto? Es básicamente el tema de la economía. El discurso resuelve el problema de la identidad, resuelve el problema de la diversidad”.<sup>84</sup>

La ausencia de un programa político más o menos común o de un proyecto político más o menos articulado entre los comunarios impuso límites que la lucha solamente hubiera podido superar caso vislumbrara algo más que la nacionalización del gas, si superara cierta visión tan fuertemente arraigada en la izquierda latinoamericana según la cual la propiedad del Estado es sinónimo de propiedad colectiva. En otros momentos, la multiforme y heterogénea lucha del proletariado indio de Bolivia no ha sido obstáculo para conquistas históricas importantes – véase los logros de la Revolución Nacional de 1952. En este caso, ha habido una dirección política clara. Después de una dura voltereta estructural-productiva, la “dispersión política” de la contundente lucha de 2003 al parecer estuvo relacionada con la dispersión territorial del proletariado de El Alto. En este caso, la ausencia de un rumbo político claro, más allá de las demandas puntuales, permitió la cristalización de un gobierno que ha logrado neutralizar y/o cooptar la radicalidad anterior, aunque de rostro indio.

Los abordajes que se refieren a “espacios auténticamente deliberativos” (Gutiérrez, 2007, p. 270) o “microgobiernos barriales” (Mamani, 2005, p. 83), hablan con otras palabras de la Comuna Alteña, compuesta de trabajadores aymaras precarizados, productivos o no, territorialmente organizados para la lucha. Si asumimos que la precariedad de las condiciones de trabajo impuesta por la gran industria en su compleja red de capilares es un elemento común entre los alteños, la distinción entre obrero fabril y no fabril tiene cada vez menos fundamento. Así es que el proletariado aymara de El Alto, fuerza motriz de la Comuna Alteña, ya no puede ser reducido al trabajador productivo de antaño. No por principio político o capricho izquierdista, sino por el cambio sucedido en la base técnica productiva aunado al desmantelamiento de la COB.

---

<sup>84</sup> Entrevista a José Luis Chuquimia, El Alto, oct. 2009.

## **Consideraciones finales**

Rechazamos la crisis de la sociedad del trabajo o el fin del trabajo. Nos apoyamos en las tesis que postulan más bien la crisis del trabajo estable seguida del aumento del desempleo estructural o el empleo precario. En concordancia con los autores aquí trabajados, la sociedad del fin del trabajo (concreto) no pasa de especulación, así como lo es la idea de desproletarización, una vez que el número de asalariados ha aumentado. En su lugar, se llevó a cabo en toda región la reestructuración productiva, entendida como el cambio en la base técnica y organizativa del trabajo, propiciadora del cambio en el patrón de acumulación capitalista hacia la flexibilidad.

Ahora bien, en los umbrales del siglo XXI, la gran industria se ha fragmentado. Si seguimos manteniendo la concepción ampliada de clase obrera y trabajo productivo en conformidad con la extensión de las relaciones propiamente capitalistas hacia fuera del universo fabril, estaremos también asumiendo que el alcance de la subsunción real del trabajo en el capital se ha ampliado. Así es que la clásica contradicción entre trabajo y capital ha ido aumentando su presencia en ámbitos sociales familiares, vecinales y/o comunitarios, con base en la producción material y cada vez más inmaterial de productos y servicios. Aún dentro de la fábrica, hemos acompañado cómo igualmente las prácticas de involucramiento subjetivo del toyotismo - aplicado en mayor o menor grado en América Latina, hibridado desde luego con la producción masiva característica del fordismo y dinámicas laborales rurales - han propiciado el avance de la subsunción real hacia la capacidad de organización del obrero.

En el seno de la industria, la creación de empleos ha sido precaria e informal, los cuales son caracterizados por la tercerización. El mundo del trabajo clásico, entendido como aquél que contrapone el trabajador estable, con plan de carrera laboral y vacaciones pagadas, al gran capitalista, todavía es un espacio clave. Sin embargo, el obrero insertado en esas condiciones convive cada vez más con una masa de obreros precarizados, eventuales e inestables. En términos no correspondientes a los latinoamericanos, los obreros fabriles expulsados de la industria no solo por los ajustes estructurales consecutivos, sino por la propia maquinaria industrial, han sido absorbidos por la pequeña manufactura, el sector de servicios y el comercio.

Asumida la noción ampliada de lo obrero, ¿es entonces posible plantear la centralidad obrera sin el vanguardismo tradicional que ha marcado el movimiento obrero del siglo XX? ¿Es posible teórica y políticamente plantear la centralidad obrera en términos de la centralidad de la clase-que-vive-del-trabajo en su sentido genérico? Hemos desarrollado el presente trabajo en dicho sentido y modestamente creemos aportar en ello. Nos basamos en la ampliación de la caracterización obrera-productiva a sectores tradicionalmente no considerados como tales, así como sectores novedosos generados por la creciente intelectualización del trabajo.

El fenómeno es más claro en el caso de los trabajadores productivos unipersonales, las unidades productivas familiares o las micros y medianas empresas productivas que integran redes de subcontratación bajo el patrón de acumulación flexible. Nos referimos a las unidades productivas tercerizadas, quarterizadas, quinterizadas, etc., que valorizan directamente el capital, aun fuera de la fábrica: a la industria domiciliar moderna, en palabras de Marx. En el caso de los trabajadores de servicios, aunque asalariados, el panorama suele ser poco claro. Sostenemos que estos trabajadores deben ser considerados productivos siempre y cuando sean ellos parte del trabajador colectivo, es decir, el trabajador que coadyuva directa o indirectamente a la producción industrial desde distintos sectores que integran a la industria moderna, aún cuando se trata de la industria de servicios, cuya producción y consumo suceden a la vez.

La transformación de sectores anteriormente improductivos en sectores productivos es parte misma de la lógica del capital y el desarrollo capitalista. Además, con la profunda imbricación del trabajo productivo e improductivo, es cada vez más difícil precisar las fronteras del uno y el otro. Los mismos argumentos son válidos para el trabajador asalariado en el comercio. Estos cambios han estado desarrollándose bajo la reestructuración productiva a escala planetaria, a diferencia de que el sector de servicios en los países capitalistas centrales pueden ser considerados modernos en comparación con los mismos sectores de Latinoamérica.

La expansión contemporánea de la subsunción real nos exige, por lo tanto, otro abordaje de la noción de centralidad obrera con vistas a considerar la variedad del trabajo asalariado. Dicho en otras palabras, creemos que la centralidad obrera hoy por hoy debe ser abordada en su dimensión abarcadora en correspondencia con lo que anteriormente hemos

sostenido para clase obrera y trabajo productivo; la centralidad obrera sigue vigente, siempre y cuando por ella asumimos la noción ampliada de clase obrera y tomamos en cuenta la variopinta disposición sectorial que caracteriza el trabajo vivo bajo el capitalismo contemporáneo. De esta manera, creemos darle sustancia histórica al acervo conceptual marxista. Afirmar la centralidad obrera en términos ampliados es lo mismo que asumir la imposibilidad de cualquier lucha sin su vinculación con el mundo del trabajo, ya sea directamente *en* el mundo del trabajo o no.

Al abordar la centralidad obrera, tanto Antunes como Sotelo parten de la dispersión laboral seguida de su precarización y su integración a la industria bajo esos moldes. Parten, por consiguiente, del periodo posterior a la reestructuración productiva.<sup>85</sup> Zavaleta, a su vez, no lo hace partiendo de la precarización del trabajo, como es destacado por los primeros autores, sino a partir de la propia historicidad de las clases trabajadoras bolivianas, expresada en la acumulación en el seno de la clase, e impactadas por lo que denomina irradiación minera. En ambos casos, con puntos de partida y periodos distintos, todos ellos confluyen en el abordaje amplio de lo obrero, más allá de los sectores tradicionalmente productivos.

La “nueva morfología del trabajo”, en palabras de Antunes, ha creado y recreado otros escenarios, en gran parte revividos de siglos pasados cuando la gran industria todavía se conformaba. La resignificación de la centralidad obrera demanda, por lo tanto, otra lectura teórico-política por parte de las propias organizaciones obreras tradicionales, ancladas en partidos y sindicatos. Es necesario tener en mente que la versión cerrada de centralidad obrera, justamente aquélla que determinaba de antemano quién o quiénes estaban aptos para enfrentar al capital de acuerdo a su posición estructural en el proceso productivo, acabó desfavoreciendo la lucha de la propia clase obrera.

\*

Ahora bien, elegimos el mercado laboral de El Alto para analizar la crisis del sindicalismo obrero porque ha sido precisamente el centro proletario altiplánico luego del

---

<sup>85</sup> No podemos dejar a un lado la prioridad que le da Antunes a los países altamente industrializados y sus sectores de servicios en los textos aquí trabajados. El autor sí toma en cuenta la descentralización/fragmentación productiva, pero en contextos de países avanzados. Creemos que sus argumentos en general son válidos para lo que nos interesa, pero Antunes no alcanza a teorizar sobre las empresas familiares y/o semiempresariales, el bajo nivel de industrialización y la vinculación de la economía urbana con la economía rural, entre otros aspectos que son peculiares a América Latina y Bolivia.

cambio estructural, refugio laboral de exmineros, así como de aymaras y quéchuas del campo. Tenemos que a la disminución en el número de operadores fabriles y mineros, le sigue el aumento del trabajo asalariado precario en talleres manufactureros familiares y en los servicios. Por tal motivo, en este caso conviene no defender abiertamente la crisis de la sociedad del trabajo abstracto, sino la crisis del trabajo estable tal y cual lo conocimos de mediados del siglo XX en adelante. La contracción de la clase obrera industrial de El Alto es, por lo tanto, relativa. Aunque sin comprobación empírica, creemos poder extender el mismo escenario a toda Bolivia.

A la proletarización del indígena en las minas de estaño y al despojo sufrido por aymaras y quéchuas del campo en el marco de la formación de la industria de Bolivia a fines del XIX e inicios del siglo XX – en ambos casos bajo la división social del trabajo y la maquinaria - les siguió, décadas más tarde, su expulsión del territorio meramente fabril y su retorno al trabajo domiciliario o callejero. La organización flexible le ha posibilitado al capital reproducirse en escala domiciliar al mismo tiempo que fragmenta las clases trabajadoras espacialmente. De los talleres de oficio a la fábrica, y de la fábrica a los talleres subcontratados, tenemos un cambio en la organización del trabajo; la diferencia respecto a los albores de la industrialización es que en los tiempos actuales todo el proceso se encuentra bajo control y gestión sistemática de la gran industria por medio de la figura del subcontratista.

En la metrópoli aymara se encuentran industrias de alimentos lácteos, bebidas en general, plástico, cemento y metalúrgicas, pero lo grueso está representado por la fabricación de tejidos. Ante la descentralización fabril alteña, muchas empresas optaron por reducir el tamaño de sus plantas al extender sus vínculos con pequeñas unidades familiares productivas. Lo que hay de nuevo, por lo tanto, es la combinación de procesos productivos a gran escala con otros procesos menores y más flexibles, o sea, la combinación de plusvalía relativa y absoluta. Lo que se repite, tanto en el periodo anterior a la gran industria como hoy en día, es la intensidad del trabajo. Aunque la maquinaria domiciliar sea rústica, las jornadas de trabajo en la rama de confecciones pueden llegar a 17 horas diarias en altas temporadas de exportación. En épocas ordinarias, se observa el aumento numérico tanto de asalariados como de trabajadores por cuenta propia que trabajan más de

60 horas semanales, siempre en conformidad con lo establecido en las estrategias empresariales de tal o cual grupo capitalista.

En este sentido, el mundo del trabajo está íntimamente permeado por lo familiar, el compadrazgo y el padrinazgo. En el marco del trabajo familiar, las presiones que serían ejercidas por el gerente, el supervisor o el encargado sobre la intensidad de trabajo requerida, se convierten en una suerte de autopresión, y si se quiere, autoexplotación, explotación de los familiares, compadres y/o padrinos. Por otro lado, el trabajo familiar igualmente opera como amortiguador del desempleo abierto y sirve de cobija a los residentes recién llegados del campo que se alojan en casa de parientes y de familias del mismo origen rural. Esto es lo que sucede cotidianamente en El Alto.

Entre los autores trabajados, Marx en el inicio, y Braverman posteriormente, se destaca el papel clave de la subcontratación. Ellos indican que en las primeras fábricas de los países centrales, el capitalista compraba una cantidad definida de trabajo bajo moldes de subcontratación o maquila que incluían el pago por pieza. En ese entonces, el trabajo era llevado a casa o más bien, cuando ejecutado en minas o fábricas, les eran asignadas máquinas a los trabajadores expertos, quienes se encargaban de contratar familiares y conocidos. Este sistema perduró pasada la mitad del siglo XIX en dichos países. En El Alto, este escenario se reproduce con muchas similitudes, aunadas a las peculiaridades de la dinámica del maestro-aprendiz.

El sistema de pago a destajo, implícito en la subcontratación de familias ampliadas productivas, ameniza la crisis del tiempo de trabajo en el capitalismo contemporáneo, es decir, le da oxígeno a la creciente dificultad de autovalorización del capital por medio de la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario. En el sistema de pago por pieza, tenemos la complicidad del propio trabajador en su autoexplotación y la ampliación de las jornadas de trabajo de manera casi incontrolada; aquí tenemos el recrudescimiento de las técnicas de extracción de plusvalía absoluta. Nuevamente, a diferencia de los sistemas de subcontratación anteriores, que contaban con producción irregular y pérdidas de materiales, además de lentitud y falta de uniformidad, actualmente la producción micro-dispersa se encuentra bajo requerimientos industriales.

Además, en El Alto es ineludible la importancia de la incorporación de la familia a la generación de la masa de plusvalor. Por lo tanto, el capital industrial de El Alto se

beneficia de dos elementos: el que muchas familias alteñas salidas del campo vienen de un contexto productivo familiar en sus parcelas comunitarias y el que sus obreros subcontractados sean originarios de un sistema artesanal; lo cual significa que son trabajadores y trabajadoras con cierta cualificación, especialmente requerida en los casos de confecciones exportadas a grandes cadenas comerciales de los países vecinos, en procesos industriales modernos. En estos casos, el proceso de trabajo específico de esos obreros constituye plusvalía absoluta, pero sus cualificaciones artesanales se incluyen en procesos de plusvalía relativa; el proceso productivo se vuelve todavía más perverso si tomamos en cuenta que estos obreros son remunerados conforme a la plusvalía absoluta, pero están inmersos en procesos de plusvalía relativa.

En la metrópoli aymara, estas familias por veces se nuclean y por otras se amplían, volviéndose el núcleo reproductor del capital de la ciudad: tanto la manufactura como el comercio se desarrollan de manera concentrada en las unidades familiares en el periodo analizado (fines de la década de 1970 a 2003). Observando el número de microempresas del sector de prendas de vestir y calzado de El Alto (el sector productivo más importante de la ciudad) ante el número ínfimo de grandes empresas del sector y tomando en cuenta el carácter exportador a gran escala de la ciudad a países como Perú (vía Desaguadero), Argentina (vía La Quiaca), así como Chile y Brasil, tenemos ahí un cuadro bastante ejemplar de la red que opera en los pequeños talleres a puertas cerradas que creemos puede ser extendido a otros escenarios laborales de otras ciudades productivas de Bolivia y América Latina.

Igualmente con base en los datos empíricos de esta ciudad, podemos sostener que los sectores poblacionales más afectados por la ola neoliberal y sus consecuencias han sido las mujeres y los jóvenes alteños. En este sentido, al trabajo de la mujer alteña, protagonista laboral de la ciudad, se le agrega su tradicional trabajo reproductivo doméstico. Si nos referimos al proletario multifuncional, son especialmente las mujeres alteñas, concentradas en el comercio callejero, las que mantienen triples o cuádruples jornadas laborales. En el segundo caso, observamos que más de la mitad de los jóvenes hasta los diecinueve años se ubican en el trabajo familiar, ya sea por falta de oportunidades fuera de ello, o para ayudar en el mantenimiento de la familia.

En términos de ubicación productiva, el trabajador precario e informal de El Alto es productivo cuando se ubica en la pequeña manufactura; igualmente podemos considerar productivo al proletariado urbano en servicios de transporte (de cargas), almacenamiento y comunicación, siempre y cuando estén al servicio de la industria. Son, por lo tanto, parte de la noción marxista de trabajador colectivo. Por otra parte, los trabajadores de la construcción civil (El Alto es una ciudad en permanente construcción), hoteles y restaurants, son trabajadores indirectamente productivos porque apenas son potencialmente generadores de plusvalor para la reproducción de capital.

Con el quiebre de las conquistas laborales del siglo XX, la proliferación del trabajo cuentapropista es una constante en la ciudad. La dinámica del cuentapropista productivo (en talleres unipersonales) oculta la subsunción cada vez más real de su propio trabajo al gran capital, mucho más si tomamos en cuenta que el trabajador autónomo se ve forzado a asumir la lógica capitalista. Aún más: este trabajador o trabajadora en general no se reconoce como obrero entre otras cosas por la interiorización del perfil de pequeño empresario. La subsunción capitalista no tiene tanto alcance en el caso de los cuentapropistas del comercio, en general son mujeres que venden productos básicos y agropecuarios, y que pueden ser consideradas trabajadoras improductivas, una vez que no generan plusvalor y no se encuentran bajo relaciones salariales; perciben ingresos más bien. El obrero aymara, del cual poco se ha hablado en estudios recientes sobre los movimientos sociales en Bolivia, ahí se encuentra.

Cuando se trata del trabajo inmaterial - vinculado con el alto desarrollo de la ciencia y tecnología, así como con el empleo de la microelectrónica computacional y la creciente independencia del trabajo vivo – podemos afirmar que en El Alto se observa en su lugar un proletariado precario y una maquinaria rudimentaria en la manufactura. En los servicios, predominan actividades como puestos de refacciones de autos (metal-mecánica), reparación de equipos electrónicos y muebles, carpintería y aserraderos. Todas estas ramas están relacionadas con el bajo desarrollo industrial. Por consiguiente, sostenemos que el trabajo inmaterial de El Alto no es algo a destacarse en su escenario laboral. Por el contrario, no así en la gran industria, cuyos cambios tecnológicos devenidos del ajuste estructural han exigido más control intelectual a los trabajadores cualificados.

\*

Aquí ya se ha mencionado el *modus operandi* de la COB, que desde sus principios nunca se restringió a los obreros mineros o fabriles, a pesar de priorizarlos en las inúmeras luchas políticas a lo largo del siglo XX. La máxima entidad obrera boliviana, por lo tanto, ha rebasado históricamente lo que se ha entendido por obreros productivos. Y lo anterior es a causa misma de la heterogeneidad de las clases trabajadoras en Bolivia; es decir, del abigarramiento en la interioridad de la clase obrera misma, así como del carácter popular de la central. La COB fue fruto del movimiento obrero de, por lo menos, tres décadas anteriores, cuando las organizaciones obreras se organizaban por oficio y por territorio, no por centro de trabajo. La dinámica organizativa por centros de trabajo fue adoptada justamente porque las empresas mineras y las fábricas pasaron a concentrar gran número de obreros en el mismo local. La matriz histórica de 1952 le dio continuidad y agudizó ese eje organizativo.

Ahora bien, la matriz del 52 se ha desestructurado por medio del Decreto 21060 y los demás, promotores del vaciamiento de las minas y las fábricas a mediados de los años ochenta. Creemos que la crisis sindical obrera ha sido resultado tanto de elementos objetivos como de elementos organizativos. A lo largo de los más de veinticinco años pasados, la central obrera no ha podido acompañar los cambios sufridos en términos de las estrategias empresariales de acumulación capitalista adoptadas y, por ende, los cambios en la disposición y ubicación del trabajo vivo. Aunque sigue siendo la más grande referencia en el movimiento obrero boliviano, la COB no ha podido convertir a las transnacionales en interlocutor válido y blanco de sus protestas. Es cierto que el Estado boliviano, bajo el gobierno de Evo Morales, nacionalizó el sector telefónico y el eléctrico capitalizados en los años noventa, así como el sector de hidrocarburos (en el caso del gas se trató de su nacionalización a medias). Sin embargo, no ha pasado lo mismo con el sector minero. Es más, actualmente, la COB posee en sus filas mineros de empresas privadas, en menor grado de la minería chica organizada en cooperativas, y en mayor grado de la minería mediana.

En este caso, la COB se encuentra todavía atrapada en la política del nacionalismo revolucionario; mantiene su foco en el Estado; mantiene cierta visión estadocéntrica del poder, cuando el propio Estado ya no es estructuralmente capaz de atender sus demandas, dada la ola privatizadora que sufrió hace más de dos décadas. Sus demandas todavía giran alrededor del retorno de los beneficios socio-laborales conquistados a fierro y fuego durante

el siglo XX. En suma a lo anterior, la conformación vertical de la central obrera, con los mineros a la cabeza, ya no corresponde a la estructuración de la industria transnacional en redes subcontratistas dispersas, muchas veces horizontales. En concordancia con la noción ampliada de clase obrera, creemos en la necesidad de la formulación de una nueva matriz, en alianza con organizaciones vecinales y gremiales ya existentes, no para subordinarlas como ha sido hasta el momento, sino para impulsar su vocación asociativa y canalizarla hacia luchas de alcance extralocales. Y lo que consideramos más urgente: la incorporación de los pequeños productores en torno a organizaciones obreras.

Atendiendo a la historia del movimiento obrero en el altiplano, cuyas victorias nunca han sido conquistadas sólo por mineros, y dada la incorporación de exmineros al trabajo precario, la centralidad minera dentro de la COB tiene que dar lugar a la centralidad obrera entendida de manera ampliada. Al basarnos en lo comentado hasta aquí en ese trabajo, actualmente no hay en el sindicalismo prácticas consolidadas hacia la articulación de la diversidad obrera. Tampoco hay tendencias contrarias a la formación de cúpulas sindicales. Dada la desconcentración fabril y la extensión de la industria domiciliaria dispersa, habría que recuperar la organización por zona o territorio en el caso de la masa obrera fuera de la fábrica; habría que recuperar por lo tanto la historia de las organizaciones obreras anteriores al cobismo.

Creemos que ha existido cierta “ceguera sindical” hacia el alcance de la centralidad obrera en los días actuales. La desconsideración de las nuevas modalidades de valorización del valor bajo el modelo de niveles de subcontratación ha implicado la desincorporación efectiva – no subordinada - del obrero domiciliario, el trabajador y la trabajadora en el sector de servicios que opera en los bordes de la gran industria, el migrante aymara residente – o entonces aquel que va-y-viene sirviendo de bisagra entre la ciudad y el campo -, las centenas de gremios de minoristas y artesanos que laboran en el comercio, en fin, de todos aquellos que en última instancia coadyuvan a la reproducción ampliada del capital de forma muy localizada.

Consecuentemente, pensamos que las nuevas formas de acumulación capitalista y organización del trabajo vivo por el capital demandan otras formas de lucha obrera anticapitalista. Al patrón de acumulación anclado en el Estado fruto del nacionalismo revolucionario, que predominó en Bolivia entre 1952 y 1985, le correspondió la

organización obrera basada en el sindicato paraestatal de trabajadores estables. El patrón de acumulación flexible anclado en transnacionales delgadas, que dispensan la masa obrera antes concentrada, exige organizaciones obreras de distinto tipo. La desorientación y la desarticulación actual del sindicalismo obrero tiene que ver no solo con los ajustes impuestos mediante decretos, sino con las debilidades de su autoconocimiento en virtud de las mutaciones recientes de las clases trabajadoras.

La crisis de la sociedad del trabajo estable en el altiplano boliviano es reflejo directo de la crisis de la forma de organización del trabajo abstracto, aquí representado por el sindicalismo cobista burocrático. A diferencia de la experiencia de otros sindicalismos latinoamericanos, la lucha de la central no se ha limitado a la reducción de la jornada laboral o el aumento salarial. Además de su autonomía en relación con partidos políticos, la COB misma se hizo cogobierno al menos en dos ocasiones (1952 y 1971). Aún así, se trató siempre de la lucha *en* el trabajo y *del* trabajo abstracto contra el capital; no de la lucha *en contra* del trabajo abstracto mismo. La ceguera apuntada anteriormente hacia la incorporación efectiva de otras formas de trabajo abstracto a las filas obreras, aquí se despliega en la “ceguera sindical” hacia la dualidad del trabajo, es decir, hacia la lucha que se debe entablar contra el trabajo asalariado en sí. En esos términos, la lucha sindical anticapitalista debe poner en tela de juicio el trabajo en la forma que se presenta bajo el capitalismo, y no adecuarse a él.

Señalamos otro elemento importante para pensar luchas *en contra* del trabajo: precisamente en el altiplano boliviano el trabajo abstracto no subsume completamente el trabajo útil-concreto en virtud de la resistencia de lo que aquí hemos denominado economía étnica. En El Alto, a título de ejemplo, la pérdida tendencial de los vínculos comunitarios del campo es seguida por el reforzamiento de los vínculos vecinales: en ambos casos, la familia es la base aglutinadora. De modo que el dar la espalda a la lógica comunitaria es como tratar de ignorar lo ineludible en esa región específica del país. Aunque tarde, la propia COB entró en diálogo con sectores comunitaristas a fines de los años setenta, pasando a considerar en parte la sociabilidad del indígena aymara o quéchua del campo.

El ciclo rebelde, con auge en la Comuna Alteña de 2003 en El Alto, ha estado marcado por luchas por los recursos naturales que han ocurrido *fuera* del mundo del trabajo, no obstante hayan sido luchas *del* trabajo abstracto en toda su variedad. A la

Comuna Alteña no se le puede considerar una lucha *en contra* del trabajo abstracto porque ni siquiera ha estado vinculada directamente con el mundo del trabajo. Su carácter de comuna estuvo más bien relacionado con el territorio ocupado, de la misma forma como sucedió con las propias luchas sindicales en el pasado. La importancia de la ocupación territorial dentro del movimiento obrero, articulada a la paralización de la producción, ha sido la estrategia para transformar la “geografía en poder”, según Zavaleta. Si somos honestos con la Comuna Alteña, vemos que su territorialidad, caracterizada por la dispersión de juntas vecinales de trabajadores precarizados sin mando central, corresponde actualmente a la territorialidad dispersa del obrero sin orientación sindical u otra organización obrera.

Si consideramos que la lucha callejera en Bolivia es un fenómeno de larga fecha, ante la crisis del sindicalismo obrero, entonces esta peculiaridad gana tonos todavía más profundos. No podía ser distinto: la creciente burocratización/institucionalización de la COB ha echado a perder la dirección sindical de antaño, principalmente cuando a movimientos autónomos se refiere. Por lo tanto, para las organizaciones de representación obrera en Bolivia (no nos referimos solamente al sindicato), constituye un desafío histórico, de aquí en adelante, recuperar el sentido de clase en movimientos autónomos en base a la noción ampliada de lo obrero, lo cual significa asumir como propio el embate contra el trabajo en su forma enajenada.

## Listado de Cuadros

**Cuadro 1** – Pertenencia a un sindicato según la ciudad de residencia

**Cuadro 2** – Empresas públicas capitalizadas

**Cuadro 3** – Abordajes de la informalidad o del trabajo precario en Bolivia

**Cuadro 4** - La Paz: Distribución de la PEA por sectores 1976-1989 (en porcentaje)

**Cuadro 5** – El Alto: tamaño de las empresas productivas según rubros de actividad (2003)

**Cuadro 6** – El Alto: Rasgos generales de la producción alteña en textiles, artesanía y joyería

**Cuadro 7** – El Alto: estructura de la población ocupada por sector del mercado de trabajo, según rama de actividad 1989-2000 (estructura porcentual columna)

**Cuadro 8** - El Alto: Población ocupada por rama de actividad según categoría ocupacional 1989 – 2000 (en porcentaje columna)

**Cuadro 9** – Principales Mercados Zonales de El Alto

**Cuadro 10** – Principales Ferias de El Alto

**Cuadro 11** – El Alto: Distribución de organizaciones de comerciantes minoristas según especialidad de venta y tipo de puesto de venta

**Cuadro 12** – El Alto: estructura de la población ocupada por categoría, según sexo 2000

**Cuadro 13** – El Alto: población ocupada por sector del mercado de trabajo, según sexo y grupos de edad 2000 (en porcentaje)

**Cuadro 14** – El Alto: tasas de desempleo abierto según sexo y grupos de edad 2000 (en porcentaje)

**Cuadro 15** - El Alto: población ocupada asalariada por rama de actividad, sector del mercado de trabajo y categoría ocupacional, según grado de precariedad laboral 2000 (porcentaje fila)

## Listado de Gráficos

**Gráfico 1** - Crecimiento poblacional de El Alto y La Paz en el siglo XX (en miles)

**Gráfico 2** – El flujo andino rural y urbano en El Alto

**Gráfico 3** – El Alto: categoría ocupacional de la PEA 1989-2001 (en porcentaje)

**Gráfico 4 (condensado)** – El Alto: población ocupada por sector formal/informal 1989-2000 (en porcentaje)

## Listado de Figuras

**Figura 1** – El Alto - Modelo general de subcontratación (confecciones)

## Bibliografía

Albó, Xavier. Achacachi: medio siglo de lucha campesina, **Cuaderno de Investigación**, n. 19, La Paz, CIPCA, 1979.

\_\_\_\_\_; Tomás Greaves; Godofredo Sandoval. Chukiyawu: la cara aymara de La Paz, vol. I, **Cuadernos de Investigación**, n. 20, La Paz, CIPCA, 1981.

\_\_\_\_\_; Tomás Greaves; Godofredo Sandoval. Chukiyawu: la cara aymara de La Paz, vol. II, **Cuadernos de Investigación**, n. 22, La Paz, CIPCA, 1982.

\_\_\_\_\_; Tomás Greaves; Godofredo Sandoval. Chukiyawu: la cara aymara de La Paz, vol. III, **Cuadernos de Investigación**, n. 24, La Paz, CIPCA, 1983.

\_\_\_\_\_; Tomás Greaves; Godofredo Sandoval. Chukiyawu: la cara aymara de La Paz, vol. IV, **Cuadernos de Investigación**, n. 29, La Paz, CIPCA, 1987.

\_\_\_\_\_. El Alto, esa ciudad única, **Cuarto Intermedio**, n. 81, Cochabamba, nov. 2006. pp. 65-90.

Andia Fagalde, Elizabeth. Participación de la mujer en actividades de maquila y subcontratación en la ciudad de El Alto: estudios de caso en textiles, artesanía y joyería, **Cuadernos de Trabajo**, n. 9, La Paz, Red de Mujeres y Economía, 2004.

Andrade, Everaldo de Oliveira. **A revolução boliviana**. São Paulo: Ed UNESP, 2007.

Antezana, Mauricio. El Alto desde El Alto, **Documentos de análisis**, n. 5, La Paz, SURPO-UNITAS, 1988.

\_\_\_\_\_. **El Alto desde El Alto II. Ciudad en emergencia**. La Paz: SURPO-UNITAS, 1993.

Antunes, Ricardo. **¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo**. Biblioteca latinoamericana de Servicio Social. São Paulo: Cortez, 2001.

\_\_\_\_\_. **Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo**. Buenos Aires: Herramienta; Taller de Estudios Laborales, 2005.

\_\_\_\_\_. Afinal, quem é a classe trabalhadora hoje?, **Revista da Rede de Estudos do Trabalho**, Ano II, n. 3, 2008a.

\_\_\_\_\_. Trabajo y valor: anotaciones críticas sobre la obra reciente de André Gorz, **Estudios Latinoamericanos**, nueva época, n. 21, enero-junio 2008b

Anze, Rosario. **Construyendo una identidad en zonas de El Alto Sur**. La Paz: Ed. CEBIAE, 1995.

- Archondo, Rafael. **Compadres al micrófono**. La Paz: HISBOL, 1991
- Arze, Carlos. Análisis subsectoriales: producción de chamarras de cuero y tela en las ciudades de La Paz y El Alto, **Documentos de Trabajo**, n. 12, La Paz, CEDLA, 1997.
- Arze, Carlos. **Crisis del sindicalismo boliviano. Consideraciones sobre sus determinantes materiales y su ideología**. La Paz: CEDLA, 2000.
- Arze, Carlos; Félix Maita Pérez. **Empleo y Condiciones Laborales en la ciudad de El Alto. Análisis y Dossier Estadístico. 1989-1992-1995**. La Paz: CEDLA, 1999.
- Bajo Tierra Ediciones. **Pensar las autonomías**. México: Sísifo Ediciones; Bajo Tierra, 2011.
- Baldivia, José (org.). Sector informal y movimiento obrero, **Temas Laborales**, n. 2, La Paz, Centro de Estudios del Trabajo, 1987.
- Baptista, Mariano. **Breve historia contemporánea de Bolivia**. México: FCE, 1996.
- Béjar, Héctor. Reflexiones sobre el sector informal, **Nueva Sociedad**, n. 90, Caracas, julio-agosto 1987.
- Braverman, Harry. **Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el siglo XX**. 7ª ed. México: Ed. Nuestro Tiempo, 1984.
- Bueno, Eramis; Ivonne Farah; Beatriz Nápoli. **El mundo de la informalidad: una nueva incursión**. La Paz: IDIS/UMSA, 1994.
- Carnero, Guillermo. **El indio y la revolución**. Lima: Ed. Prensa Peruana, 1979.
- Casanovas, Roberto; Silvia Escóbar. **Los trabajadores por cuenta propia en La Paz. Funcionamiento de las unidades económicas, situación laboral e ingresos**. La Paz: CEDLA, 1988.
- CEDLA. **El sector informal urbano en Bolivia**. 2ª ed. La Paz: CEDLA, 1988.
- Cortés, Fernando. La metamorfosis de los marginales: la polémica sobre el sector informal en América Latina. EN: de la Garza Toledo, Enrique (coord.) **Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo**. México, DF: FCE, Colmex, FLACSO, UAM, 2000.
- Cotle, Patricia; Carmen Beatriz Ruiz. La violenta vida cotidiana. EN: Albó, Xavier; Raúl Barrios (coords.). **Violencias encubiertas en Bolivia**. La Paz: CIPCA, Ed. Aruwiwiri, 1993.

de la Garza Toledo, Enrique. Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo. EN: Enrique de La Garza Toledo y Julio César Neffa. **El Futuro del Trabajo. El Trabajo del futuro**. Buenos Aires: CLACSO, 2001.

\_\_\_\_\_. (coord.). **Tratado latinoamericano de sociología del trabajo**. México, DF: Colmex; FLACSO; UAM; FCE, 2003.

de Soto, Hernando. **El Otro Sendero. La Revolución Informal**. México: Ed. Diana, 1987.

de Sousa, Fernando Ponte. Uma Sociologia do Trabalho sem o trabalho?, **Revista de Ciências Humanas**, vol. 10, n. 14, Florianópolis, sep. 1993.

Eguino, Huáscar. La subutilización de la fuerza de trabajo, sus características y comportamiento en el marco del ajuste estructural, **Serie Avances de Investigación**, n. 8, La Paz, CEDLA, 1993.

Escóbar, Silvia; Hernando Larrazábal Córdova. **Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad**. La Paz: CEDLA, 1989.

\_\_\_\_\_. **Crisis, política económica y dinámica de los sectores semiempresarial y familiar. La Paz – Cochabamba – Santa Cruz (1985 – 1989)**. La Paz: CEDLA, 1990.

\_\_\_\_\_. Mujer y trabajo en pequeñas unidades económicas. Reflexiones sobre la Situación Actual y Perspectivas, **Serie Avances de Investigación**, n. 2. La Paz, CEDLA, 1993.  
**Estrategia social municipal El Alto**. 2ª ed. El Alto: Gobierno Municipal de El Alto, 1997.

Fernández, Johnny. **Los alteños no se suman, se “multiplican”**. Inédito, 2007.

Fernández Espejo, Javier. Estrategias de Movilidad social en el municipio de El Alto. **El Alto: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 2001**.

García, Álvaro. **Reproletarización. Nueva clase obrera y desarrollo del capital industrial en Bolivia (1952-1998). El caso de La Paz y El Alto**. La Paz: Muela del Diablo Editores, 1999.

\_\_\_\_\_. **La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana (1950-1999)**. La Paz: Muela del Diablo Editores, 2001.

\_\_\_\_\_. **Sociología de los movimientos sociales en Bolivia**. La Paz: Oxfam; Diakonia, 2004.

Garfias, Sandra; Hubert Mazurek. **El Alto, desde una perspectiva poblacional**. La Paz: CODEPO - IRD , 2005.

Gorz, André. **Adiós al proletariado. Más allá del socialismo**. Barcelona: El Viejo Topo; Ediciones 2001, 1981.

Grebe, Horst. El excedente sin acumulación. La génesis de la crisis económica actual, in: Zavaleta, René (comp.). **Bolivia, hoy**. México: Siglo XXI, 1983.

\_\_\_\_\_. Los ciclos del desarrollo boliviano. Principales tendencias y cambios del siglo XX, in: Núñez del Prado, José. **Bolivia hacia el siglo XXI**. La Paz: CIDES-UMSA, 1999.

Gutiérrez, Raquel. **Levantamiento y movilización indígena y popular en Bolivia desde la perspectiva de la emancipación (200-2005)**. Tesis de Doctorado. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, 2008.

Harris, Olivia. **Economía étnica**. La Paz: HISBOL, 1987.

Hugo, Carlos. El Alto, la conquista de la ciudadanía, **Cuarto Intermedio**, n. 81, Cochabamba, nov. 2006. pp. 47-63.

Hurtado, Javier. **El Katarismo**. La Paz: HISBOL, 1986.

Larrazábal, Hernando. Diagnóstico socio-económico: funcionamiento de los talleres artesanales, **Serie Artesanía, participación y cambio**, n. 2, Unidad de Estudios Urbanos, La Paz, CEDLA, 1990.

\_\_\_\_\_. El proceso de desproletarización en Bolivia y los nuevos desafíos para el movimiento popular. En: Eróstegui, Rodolfo. **El movimiento sindical hacia el año 2000**. La Paz: ILDIS, 1990.

\_\_\_\_\_; Gary Montaña. Empleo y salarios en el marco del ajuste estructural. **Serie Avances de Investigación**, n. 3. La Paz: CEDLA, 1993

Lazarte, Jorge. **Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (Historia de la C.O.B. 1952-1987)**. La Paz: Offset Boliviana Edobol, 1989.

Lehm, Zulema; Silvia Rivera. **Los artesanos libertarios y la ética del trabajo**. La Paz: Taller de Historia Oral Andina (THOA), 1988.

Loayza, Natasha. **El trabajo de las mujeres en el mundo global. Paradojas y promesas. Mujeres aymara urbanas en los mercados de La Paz y El Alto**. El Alto: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 1997.

Lora, Guillermo. **Historia del movimiento obrero boliviano (1923-1933). Tomo III**. La Paz; Cochabamba: Los amigos del Libro, 1970.

\_\_\_\_\_. **El proletariado en el proceso político (1952-1980)**. La Paz: Ediciones Masas, 1980.

\_\_\_\_\_. La clase obrera después de 1952. EN: Zavaleta, René (org.). **Bolivia, hoy**. México, DF: Siglo XXI, 1987. 2ª ed.

Luna Acevedo, Hector. **Trayectorias sociales, laborales de comerciantes ambulantes de las asociaciones 30 de enero y 20 de julio de la ciudad de El Alto**. Tesis de grado. Universidad Mayor de San Andrés, 2007.

Mamani, Pablo. **Microgobiernos barriales. Levantamiento de la ciudad de El Alto (octubre 2003)**. El Alto: CADES; La Paz: IDIS – UMSA, 2005.

\_\_\_\_\_; Gustavo Cruz. Katarismo-Indianismo desde el Qollasuyu. Historia, tesis y luchas sociales de hoy. EN: Ahora es cuando? Bolivia: cambios y contradicciones. México: Ed. Pez en el árbol, 2011.

Mansilla, H.C. F.; Carlos Toranzo. **Economía informal y narcotráfico**. La Paz: ILDIS, 1991.

Marini, Ruy Mauro. **El concepto de trabajo productivo. Nota metodológica**. Disponible en: [http://www.marini-escritos.unam.mx/023\\_trabajo\\_productivo\\_es.htm](http://www.marini-escritos.unam.mx/023_trabajo_productivo_es.htm)

Marx, Karl. **El Capital, tomo I, vol. II**. 7ª ed. México: Siglo XXI, 1979.

\_\_\_\_\_. **El Capital, tomo I, vol. III**. 5ª ed. México: Siglo XXI, 1979.

\_\_\_\_\_. **El Capital, libro I, capítulo IV (inédito)**. 9ª ed. México: Siglo XXI, 1981.

\_\_\_\_\_. **La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización (Extractos del Manuscrito 1861-1863)**. Selección y traducción de Bolívar Echeverría. México: Itaca, 2005.

\_\_\_\_\_. **El Capital, tomo I, vol. I**. 28ª ed. México: Siglo XXI, 2008.

Miranda, Bruno. **Comunitarismo, autonomía indígena e movimiento autônomo: as lutas sociais de El Alto e Chiapas**. Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Sociais. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Disponible en: <http://www.lastro.ufsc.br/tccbruno.zip>.

\_\_\_\_\_; Taiguara Oliveira. **Tramas da exploração: a migração boliviana em São Paulo**, Passa Palavra, 07 nov. 2010. Disponible en: <http://passapalavra.info/?p=31342>

\_\_\_\_\_. Por uma aliança operário-camponesa: dilemas históricos do sindicalismo andino boliviano, **Revista História e Luta de Classes**, n. 12, Paraná, sep. 2011. pp. 50-56.

Montero, Lourdes. **Los nuevos mundos del trabajo. El empleo asalariado en Bolivia**. La Paz: CEDLA, 2003.

Orellana, Lorgio. **La clase obrera: su determinación económico-social y su mistificación**. La Paz: PROMEC-UMSS; Plural Editores, 2003.

\_\_\_\_\_. **Poder y acumulación de capital en el sector de hidrocarburos durante el gobierno del MAS.** Inédito. Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE-UMSS.

OXFAM; Red Hábitat. **Diagnóstico 2000 distrito 5. Proyecto de Fortalecimiento de la Participación y Organización Vecinal en el Distrito 5 de la ciudad de El Alto.** El Alto: OXFAM GB/Red Hábitat, 2000.

Palma, Diego. La informalidad, lo popular y el cambio social, **Cuadernos Desco**, n. 8. Lima, DESCO, 1987

Patzi, Félix. **Insurgencia y sumisión. Movimientos sociales y indígenas.** 2ª ed. ampliada (1983-2007). La Paz: Ed. Yachaywasi, 2007.

Peredo, Elizabeth. **Recoveras de los Andes. Una aproximación a la chola de mercado.** 2ª ed. La Paz: Fundación Solón, 2001.

Pereira, René. **Para escuchar las voces de la calle: el comercio en vía pública en La Paz.** La Paz: Fundación PIEB; GMLP; FAM, 2009.

Pericón Rivera, Rosario. **Análisis del proceso de acumulación de capital en Bolivia (1970-1984).** Tesis de licenciatura presentada al Curso de Posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES/UMSA, La Paz, 1989.

Portes, Alejandro. Lauren A. Benton. Desarrollo industrial y absorción laboral: una reinterpretación, **Estudios Sociológicos**, vol. V, n. 13, México DF, COLMEX, 1987.

\_\_\_\_\_; La informalidad como parte integral de la economía moderna y no como indicador de atraso: una respuesta a Klein y Tokman, **Estudios Sociológicos**, vol. VII, n. 20, México DF, COLMEX, 1989.

Programa de Promoción de los Derechos Laborales (Prodel). **Encuesta sobre Conocimientos de los Derechos Laborales en Bolivia. Análisis de los resultados estadísticos de las ciudades de La Paz y El Alto.** La Paz: Ed. Garza Azul, 2001

Quispe, Felipe. **Tupak Katari vive y vuelve...carajo.** 4ª ed. La Paz: Ediciones Pachakuti, 2007.

Rivera, Silvia. **Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia 1900-1980.** La Paz: HISBOL; CSUTCB, 1984.

\_\_\_\_\_. Trabajo de mujeres. Explotación capitalista y opresión colonial entre las migrantes aymaras de La Paz y El Alto, Bolivia. EN: Rivera, Silvia (comp.). **Ser mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia postcolonial de los años 90.** La Paz: Subsecretaría de Asuntos de Género, 1996.

Rodríguez, Gustavo. **El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros. Siglos XIX-XX.** La Paz: ILDIS, 1991.

Rodríguez, Huascar. **La choledad antiestatal : el anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano: 1912-1965.** 1ª ed. Buenos Aires: Libros de Anarres, 2010.

Rojas, Bruno. Las organizaciones artesanales. **Serie Artesanía, participación y cambio**, n. 3. Unidad de Estudios Urbanos. La Paz, CEDLA, 1989.

\_\_\_\_\_; Silvia Fernández. **La fuerza de lo cotidiano: situación actual de las organizaciones del comercio minorista en la ciudad de La Paz y El Alto.** Documento de trabajo. La Paz: CEDLA, 1992.

\_\_\_\_\_. Artesanos y comerciantes minoristas en la democracia boliviana. En: Rojas, Bruno; José Baldivia. **Obreros y gremiales en el proceso democrático.** La Paz: Fundación Milenio, 1995a.

\_\_\_\_\_. **Artesanos y comerciantes minoristas en la democracia boliviana.** La Paz: CEDLA, 1995b.

\_\_\_\_\_; Germán Guaygua. **El empleo en tiempos de crisis. Cambios en los mercados de trabajo y en la calidad del empleo en la ciudad de El Alto.** La Paz: CEDLA, 2001.

\_\_\_\_\_; Pablo Rossell. **Competitividad, acumulación y empleo: Estudio de caso en el ramo de confecciones.** La Paz: CEDLA, 2001.

\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. **Destino incierto. Esperanzas e realidades laborales de la juventud alteña.** La Paz: CEDLA, 2002.

Rossell, Pablo. **Diagnostico socioeconómico de El Alto: Distritos 5 y 6.** La Paz: CEDLA, 1999.

\_\_\_\_\_. **Identificación de Vocaciones Productivas de El Alto: Distritos 5 y 6.** La Paz: CEDLA, 1999.

\_\_\_\_\_; Bruno Rojas. **Ser Productor en El Alto. Una aproximación a la dinámica productiva y el desarrollo local en El Alto.** La Paz: CEDLA, 2000.

Samanamud, Jiovanny (coord.). **La configuración de las redes sociales en la dinámica económica y laboral. Estudio de los confeccionistas en tela de El Alto.** La Paz: PIEB, 2002.

Sandoval, Godofredo; Fernanda Sostres. **La ciudad prometida. Pobladores y organizaciones sociales de El Alto.** La Paz: ILDIS, 1989.

Sotelo Valencio, Adrián. **El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y fractura social en la década de 2000.** México, DF: Plaza y Valdés, 2007.

\_\_\_\_\_. **Crisis capitalista y desmedida del valor. Un enfoque desde los Grundrisse.** México, DF: Ed. Itaca; UNAM, 2010.

Svampa, Maristella; Pablo Stefanoni. **Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales.** 1ª ed. Buenos Aires: El Colectivo; CLACSO, 2007.

Tapia, Luis. Movimientos sociales, movimiento societal y los no lugares de la política. IN: Varios. **Democratizaciones plebeyas.** La Paz: Muela del Diablo, 2002a.

\_\_\_\_\_. **La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta.** La Paz: Muela del Diablo, 2002b.

Ticona, Esteban. **Organización y liderazgo aymara. La experiencia indígena en la política boliviana (1979-1996).** La Paz: Universidad de la Cordillera; Agruco, 2000.

\_\_\_\_\_. El *Thaki* entre los Aimara y los Quechua o la Democracia en los Gobiernos Comunales. EN: Ticona Esteban (comp.). **Los Andes desde los Andes.** La Paz: Ediciones Yachaywasi, 2003.

Tokman, Víctor. El imperativo de actuar. El sector informal Hoy, **Nueva Sociedad**, n. 90, Venezuela, julio-agosto 1987.

Toranzo, Carlos. La desproletarización e “informalización” y sus efectos sobre el movimiento popular. In: Toranzo, Carlos; Mario Arrieta. **Nueva derecha y desproletarización en Bolivia.** La Paz: UNITAS; ILDIS, 1989.

Valenzuela, José **¿Qué es un patrón de acumulación?** México: UNAM, 1990.

van Lindert, Paul; Otto Verkoren (comps.). Movilidad intra-urbana y autoconstrucción en la ciudad de La Paz, Bolivia. La Zona de 16 de Julio en El Alto de La Paz, **Serie Estudios Urbanos**, n. 9, La Paz, CERES, 1983.

Varias. **Polleras libertarias. Federación Obrera Femenina 1927-1965.** La Paz: Tahimapu; HISBOL, 1989.

Varios. **El fantasma insomne. Pensando el presente desde el Manifiesto comunista.** La Paz: Muela del Diablo Editores, 1999.

Vários. **Imperio, multitud y sociedad abigarrada.** La Paz: Muela del Diablo Editores; Comuna; CLACSO; Vicepresidencia de la República, 2008.

Varios. La economía informal, **Cuaderno 14 del Foro Económico**, La Paz, ILDIS, 1986.

Varios. **Las armas de la utopía. Marxismo: provocaciones heréticas.** La Paz: Punto Cero Ediciones, 1996.

Villegas, Carlos; Alvaro Aguirre Badani. **Excedente y acumulación en Bolivia: 1980-1987**. La Paz: CEDLA, 1989.

\_\_\_\_\_. Perspectivas de la economía boliviana en el siglo XXI, in: Núñez del Prado, José. **Bolivia hacia el siglo XXI**. La Paz: CIDES-UMSA, 1999.

Zavaleta, René. Las masas en noviembre. EN: Zavaleta, René (comp.). **Bolivia, hoy**. México: Siglo XXI, 1983.

\_\_\_\_\_. Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia. EN: Zavaleta, René (org.). **Bolivia, hoy**. México, DF: Siglo XXI, 1987. 2ª ed.

\_\_\_\_\_. **50 años de historia**. La Paz; Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1998.

\_\_\_\_\_. **La autodeterminación de las masas**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; CLACSO, 2009.

Zibéchi, Raúl. Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos, **OSAL**, año IV, n. 10, jan-abril 2003.

\_\_\_\_\_. **Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales**. La Paz: Textos Rebeldes, 2006.

## **Documentos**

II Parte Tesis Políticas. Tesis Política de la F.D.U.T.C.L.P. “Tupak Katari” aprobada en el IV Congreso, enero 1986.

Reinaga, Fausto. Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, La Paz-Bolivia, 1970.

Manifiesto de Tiwanacu, La Paz, 30 de julio de 1973.

## **Entrevistas**

Entrevista a Abraham Delgado, miembro de la organización Jóvenes de Octubre. El Alto, 20 dic. 2006.

Entrevista a Benigno Arce Cusicanqui, periodista do Canal 15 de El Alto. El Alto, 14 dic. 2006.

Entrevista a Bernardo Villasante, Secretário de Relaciones da COR – El Alto. El Alto, 14 dic. 2006.

Entrevista a Doña Adora, moradora da Villa Ingenio de El Alto. El Alto, 19 dic. 2006.

Entrevista a Javier Limache Oyepaco, Secretario de Relaciones de FEJUVE – El Alto y Representante del Distrito 4 de El Alto. El Alto, 14 dic. 2006.

Entrevista a Juan Limbert Surco Callejas, Secretario de Educación y Cultura de COR – El Alto. El Alto, 14 dic. 2006.

Entrevista a Mario Duran, investigador independiente y vicepresidente de la Junta de Vecinos “Artesanos III - 27 de Mayo” de la región de Río Seco de El Alto. El Alto, 19 dic. 2006.

Entrevista a Monica Apaca, Secretaria de Juventud de FEJUVE, periodo 2002-2004. Viacha, 20 dic. 2006.

Entrevista a Pablo Mamani Ramírez, Director de la Cátedra de Sociología de la UPEA y Docente de la UMSA. La Paz, 22 dic. 2006.

Entrevista a Tomas Kelka Castillo, herido de 2003 y morador de la Zona Villa Concepción de El Alto. El Alto, 18 dic. 2006.

Entrevista a Simón Yampara, profesor e investigador de la UPEA. El Alto, oct. 2009.

Entrevista a Godofredo Sandoval, Director del PIEB e investigador. La Paz, oct. 2009.

Entrevista a Bruno Rojas, investigador del CEDLA. La Paz, oct. 2009.

Entrevista a Mauricio Antezana Villegas, coordinador del proyecto “Feria a la inversa” y autor de “El Alto desde El Alto” y “El Alto desde El Alto II”, La Paz, oct. 2009.

Entrevista a Juana Cabrera, Representante de la Asamblea Permanente de DDHH de la COR-ElAlto y dirigente gremial. El Alto, oct. 2009.

Entrevista a Jaime Durán Chuquimia, investigador y escritor independiente. La Paz, oct. 2009.

Entrevista a Jhonny Fernández, periodista alteño e investigador independiente. El Alto, oct. 2009.

Entrevista a Macario Tola, Jefe de la Bancada de La Paz – MAS-IPSP. La Paz, oct. 2009.

Entrevista a José Luis Chuquimia, Asesor General de la H. Alcaldía de El Alto. El Alto, oct. 2009.